NUEVO MAPA DE ACTORES EN BOLIVIA

Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)

Jan Souverein • José Luis Exeni Rodríguez
Coordinadores

Nuevo mapa de actores en Bolivia

Crisis, polarización e incertidumbre
(2019-2020)

Nuevo mapa de actores en Bolivia

Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)

Coordinadores:
Jan Souverein
José Luis Exeni Rodríguez

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

Souverein, Jan y Exeni Rodríguez, José Luis (coords.)

Nuevo mapa de actores en Bolivia: Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020); introducción por Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez – La Paz: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bolivia, 2020.

xvi; 352 p. il. ; 23 cm – (FES Bolivia)

ISBN 978-9917-30-007-6 (edición impresa)

1. Ciencias políticas – Bolivia; 2. Crisis política (octubre y noviembre, 2019) – Bolivia; 3. Ensayos I. Souverein, Jan y José Luis Exeni Rodríguez (coords.) II. Souverein, Jan y José Luis Exeni Rodríguez, presentación III. Salazar, Alejandro, ilustraciones IV. FES Bolivia, ed.

1.ª edición, La Paz: FES Bolivia, diciembre de 2020
300 ejemplares

© FES Bolivia

Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bolivia
Av. Hernando Siles, n.° 5998, esq. calle 14 (Obrajes)
Teléfonos: (591-2) 2750005, Fax: (591-2) 2750090
Casilla 12960, La Paz, Bolivia
www.fes-bolivia.org; e-mail: info(at)fes.bolivia.org

Edición y gestión editorial: Víctor Orduna Sánchez
Diseño y diagramación: Óscar Claros Troche
Ilustraciones de cubierta e interiores: Alejandro Salazar

Depósito legal: 4-1-1975-20

Imprenta: Plural editores
Impreso en Bolivia

Las opiniones contenidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de las y los autores y no necesariamente representan la postura institucional de la FES.

Este libro se publica bajo licencia Creative Commons:
Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Esta licencia permite descargar y compartir esta obra siempre y cuando se atribuya la autoría y fuente de manera adecuada. No se permite, sin embargo, cambiar de forma alguna los contenidos ni crear obras derivadas o hacer un uso comercial.

Índice

Presentación VII

Introducción
Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez IX

i. El MAS-IPSP ante un nuevo contexto político: De "partido de gobierno" a "instrumento político" de las organizaciones populares
Fernando Mayorga 1

ii. La crisis del sistema de representación política: Los partidos opositores al MAS en el interregno post y preelectoral (2019-2020)
María Teresa Zegada 35

iii. Oposición no partidaria al MAS-IPSP: Antes, durante y después de la crisis de octubre-noviembre
Yuri F. Tórrez 77

iv. Las élites económicas en la Bolivia contemporánea
Jonas Wolff 139

v. La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019
Fernando Molina y Susana Bejarano 165

vi. Motín policial de 2019: Tensiones irresueltas y reconfiguración político-institucional en Bolivia
Gabriela Reyes Rodas 201

vii. Incidencia de actores y factores externos en Bolivia: Recomposición geopolítica regional en el escenario postelectoral
Gustavo Fernández 241

viii. ¿Política laica o plurirreligiosa? Actores confesionales y partidos en la política boliviana contemporánea
Eduardo Paz Gonzales 259

ix. La reconfiguración del espacio político en Internet durante la crisis política de finales de 2019
Eliana Quiroz y Wilmer Machaca 307

Las y los autores 347

Presentación

Con la premisa de que el diálogo plural y la deliberación informada son principios fundamentales en y para la democracia, tenemos el gusto de presentar este libro colectivo, construido a once voces, como un insumo para situar y analizar en el presente a los actores estratégicos en Bolivia.

Nuestra pretensión, en clave exploratoria, es trazar una suerte de "nuevo mapa", bajo el supuesto de que los principales actores se reconfiguraron, unos más que otros, en la coyuntura crítica del proceso político boliviano durante el último año en el país. Consideramos que es una labor analítica tan necesaria como útil.

El libro reúne nueve ensayos, que se ocupan de nueve actores estratégicos (en un sentido amplio del término). El resultado de conjunto nos permite disponer de una visión amplia y actual acerca del desempeño de tales actores. Ello, a su vez, nutre el debate plural acerca de la crisis político-institucional del año 2019, sus narrativas y su trayectoria.

Agradecemos a las y los autores de los textos que, con mucho compromiso y competencia, desde sus miradas propias, elaboraron estos ensayos y permitieron un valioso intercambio de comentarios sobre ellos para la presente publicación. Nuestro reconocimiento también para el artista Alejandro Salazar por el diseño de la cubierta y de las ilustraciones de interiores.

Confiamos en que este libro será una fuente importante de consulta y de discusión, tanto en el campo político-mediático como en la reflexión académica. Y esperamos en especial que contribuya a generar espacios de reflexión y debate acerca de cada uno de los nueve actores que aborda.

Queda en sus manos para la lectura y el ejercicio crítico, siempre bienvenidos y saludables.

FES Bolivia

Introducción

Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez[1]

Ya es un lugar común sostener que Bolivia afronta una severa "crisis múltiple". Se hace referencia así a la convergencia de tres crisis: i) político-institucional, ii) sanitaria y iii) socioeconómica. A ello se añade el dato de una persistente polarización política, con riesgo de violencia, que ha acompañado el largo ciclo electoral en el país. Y también una sensación de pesimismo e incertidumbre acerca de la situación y el rumbo del país. Tal escenario, de suyo complejo y opaco, se ha atenuado en el presente desde la exitosa conclusión de las elecciones generales de octubre de 2020 y la conformación de un nuevo gobierno con la legitimidad democrática de las urnas.

Los hechos de octubre y noviembre de 2019, con sus antecedentes y tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, marcaron una coyuntura crítica en Bolivia. Persiste el debate, al parecer irreconciliable, entre diferentes lecturas e interpretaciones al respecto. Hay quienes concentran la mirada en la denuncia de "fraude", seguido de 21 días de "rebelión ciudadana". Otros sostienen la versión del "golpe de Estado", que resultó en un "gobierno de facto". Y están quienes plantean otras visiones menos bipolares desde los territorios (como El Alto, por ejemplo) y las subjetividades.

---

1 Director y coordinador de proyectos de la FES Bolivia, respectivamente.

Más allá de esta polarización política y discursiva, que tiene expresiones radicales en el campo político, sus operadores mediáticos y las redes sociales digitales, es necesario explorar el posicionamiento, las narrativas y el desempeño de los actores estratégicos. ¿Cómo se situaron y procedieron diferentes sujetos antes y durante la crisis del año pasado? ¿Qué papel tuvieron en el curso y desenlace de los hechos? ¿Cómo se reconfiguraron, si acaso, en torno al gobierno transitorio? ¿Cuáles fueron sus demandas e interpelaciones, con qué intereses y recursos de poder? ¿En qué horizonte?

Varias interrogantes y cuestiones de análisis y debate surgen a la hora de pensar en esta suerte de "mapa de actores". No es un desafío menor. En especial porque no hablamos de actores homogéneos, ni necesariamente uniformes, en sus decisiones y acciones. La propia denominación "actores estratégicos" expresa complejidad para su caracterización y evaluación. Y cada actor en sí mismo suele expresar fracciones y disputas internas. Más todavía en situaciones de crisis con márgenes de contingencia. El trazado del mapa, pues, por definición, será siempre provisional. Al igual que sus cambios.

¿Cuáles son los actores que configuran hoy el nuevo mapa en Bolivia? En el diseño de esta iniciativa identificamos aquellos que, en nuestro criterio, sin ser exhaustivos, tuvieron/tienen un lugar relevante: el nuevamente gobernante MAS-IPSP, las organizaciones políticas de oposición, la llamada oposición no partidaria, las élites empresariales y económicas, el campo mediático, la Policía Nacional, los actores externos, las iglesias y las redes sociales digitales. Por diversas razones no están incluidos algunos otros como las Fuerzas Armadas, la Central Obrera Boliviana, las universidades. Queda como asignatura pendiente.

Una vez identificados los actores, nos propusimos como FES reunir a un conjunto plural y selecto de estudiosos del proceso político boliviano a fin de que, desde sus diversos saberes y disciplinas, contribuyan con diferentes retazos

al tejido de este nuevo mapa. Asumimos como período de referencia la crisis del último trimestre del 2019, así como el devenir de la gestión 2020, incluida la pandemia del Covid-19. Claro que hay antecedentes, unos en calidad de hito (el referendo del 21 de febrero de 2016), otros en condición de proceso político y algunos más bien como tensiones irresueltas de la historia larga.

El resultado, luego de valiosos espacios de diálogo y reflexión, es este libro colectivo de ensayos. De más está decir que, si bien en conjunto hay una mirada plural, cada uno de los textos expresa una visión particular –es decir, discutible– sobre el actor abordado. Será necesario, por tanto, con base en este y otros insumos que se han ido produciendo y difundiendo, alentar el debate público sin exclusiones y con la presencia de los propios protagonistas. Como Fundación Friedrich Ebert asumimos ese compromiso bajo el principio de que la deliberación informada es imprescindible en democracia.

De hecho, este nuevo mapa de actores deberá examinarse, y ser objeto de actualización, a la luz del ciclo político resultante de las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, así como de los comicios subnacionales a realizarse en marzo de 2021 (con los cuales se cierra un largo y conflictivo ciclo electoral en Bolivia). Y es que los diferentes sujetos, por naturaleza, más allá de las estructuras y de las instituciones, se mueven, se reconfiguran, posicionan con arreglo a las circunstancias, su temporalidad, sus mutaciones. Hay pues materia exploratoria, y tarea analítica, para rato.

Nueve actores

Como ha quedado dicho, el presente libro está compuesto por nueve capítulos que se ocupan de igual número de actores estratégicos en el proceso político-institucional en Bolivia. En conjunto, desde diferentes miradas, estos textos delinean una suerte de mapa de actores considerando su desempeño en la crisis de octubre y noviembre de 2019, así como su posicionamiento y/o reconfiguración en torno al gobierno

provisorio resultante de la dimisión del expresidente Evo Morales. Todos ellos fueron escritos y revisados entre mayo y septiembre de este año, por lo cual deben situarse antes del proceso electoral y del actual gobierno del MAS-IPSP, bajo la presidencia de Luis Arce.

En el capítulo I, Fernando Mayorga analiza y evalúa el comportamiento, la dinámica interna y la adaptación del MAS-IPSP ante el nuevo escenario político. Lo hace considerando cinco momentos decisivos entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020. El autor explora esa búsqueda contingente y las dificultades para la adopción de un nuevo modelo decisional. Y en el horizonte de las elecciones generales 2020, aborda el proceso de transición interna en clave de "retorno a sus orígenes", esto es, de "partido de gobierno" a "instrumento político" de las organizaciones populares (MAS como IPSP).

En el segundo capítulo, en un marco de crisis de representación política, María Teresa Zegada analiza el desempeño de los partidos políticos opositores al MAS "en el interregno post y preelectoral 2019-2020". Para tal efecto plantea algunos antecedentes de los comicios 2019, su carácter fallido y sus consecuencias. Y desarrolla los roles y percepciones de los principales líderes opositores en el momento del conflicto postelectoral. Sobre esa base, aborda la trama política hacia los comicios generales 2020 y hace una radiografía de las principales candidaturas opositoras. La autora concluye su texto con una valoración del "desfile de esqueletos andantes en la pasarela de la representación".

El capítulo III, elaborado por Yuri F. Tórrez, traza el mapa de actores no partidarios contrarios al MAS-IPSP. Así, el autor se ocupa de entidades cívicas (Comité Pro Santa Cruz y Comité Cívico Potosinista), instituciones (Conade y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia), organizaciones no gubernamentales (Fundación Jubileo y Cáritas-Bolivia), organizaciones ciudadanas y sectoriales críticas al MAS-IPSP (plataformas ciudadanas, Adepcoca

y Colegio Médico de Bolivia) y grupos de choque (Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala). En cada caso trata su desempeño, posicionamientos y narrativas en la crisis del 2019 y en torno al Gobierno provisorio.

En el capítulo IV, Jonas Wolff aborda el reposicionamiento político de las élites económicas bolivianas en tres períodos: la última fase del gobierno del expresidente Evo Morales, la crisis de octubre y noviembre de 2019, y el contexto posterior del gobierno de Áñez. El texto centra su enfoque en las representaciones institucionales más importantes del empresariado (asociaciones y cámaras clave). El autor basa el análisis en sus investigaciones previas sobre el tema, la revisión de la cobertura mediática, comunicados oficiales de las asociaciones empresariales y algunas entrevistas con especialistas. Por último, identifica varias cualidades y particularidades de distintos segmentos del empresariado boliviano.

En el capítulo V, Fernando Molina y Susana Bejarano analizan la transformación del campo mediático en el país, atravesado de múltiples luchas y tensiones (unas propias, otras determinadas por el campo político). Para el efecto, recuerdan cómo era –y cómo estaba– el campo mediático en vísperas de la "contrarrevolución restauradora de fines de 2019"; luego, describen al nuevo bloque de poder surgido de la convulsión política; a continuación, examinan la reacción de los distintos agentes mediáticos a estos cambios; y, para concluir, señalan efectos perdurables de la tormenta política en el campo mediático. El estudio se realiza con base en ejemplos documentados provenientes de la prensa escrita.

El capítulo VI, a cargo de Gabriela Reyes Rodas, se ocupa de la Policía Nacional en el marco de las tensiones irresueltas y la reconfiguración del campo político-institucional en el país. En la primera parte sitúa a la institución Verde Olivo durante el gobierno del MAS-IPSP. Luego analiza su actuación corporativa –motín incluido– durante la crisis del año 2019, mediante un detallado repaso cronológico de los hechos.

Seguidamente analiza el posicionamiento policial durante el Gobierno de transición y la pandemia del Covid-19. Por último, ensaya una mirada al futuro en el escenario de la crisis institucional de la Policía y el desafío de su reforma estructural.

En el capítulo VII, Gustavo Fernández analiza la incidencia de actores y factores externos en Bolivia, en el marco de la recomposición geopolítica regional. Para ello, describe brevemente su punto de vista sobre la incidencia de los factores externos en Bolivia, en los acontecimientos políticos y sociales del último trimestre del año 2019. Y luego identifica con precisión los actores y circunstancias que influirán en la inserción externa del país, en el futuro próximo. La reflexión del autor dialoga con el contexto regional y global. Su texto concluye con un apunte sobre la política exterior del gobierno de Jeanine Áñez y algunas previsiones en este campo en Bolivia en el marco del proceso electoral 2020.

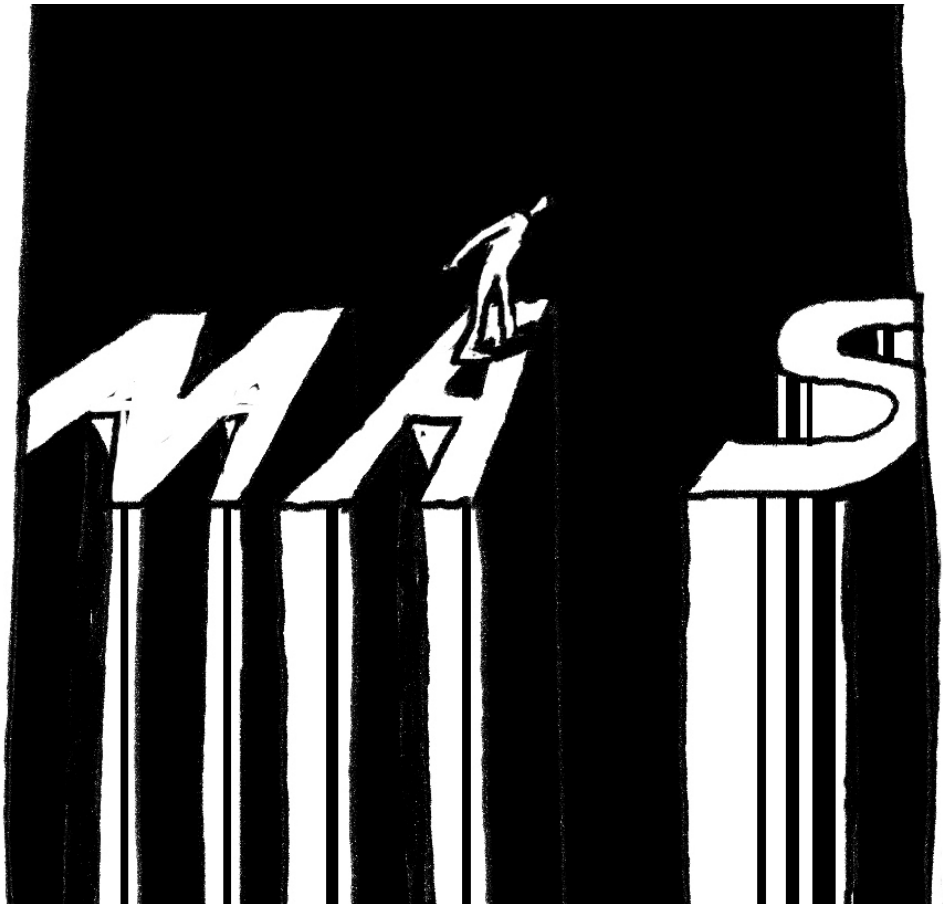
En el capítulo VIII, Eduardo Paz Gonzales examina la naturaleza y desempeño de los actores confesionales y partidos en la política boliviana contemporánea. En ese horizonte, analiza cómo se situaron las iglesias en relación al gobierno de Evo Morales y luego en el gobierno transitorio de Áñez. Explora los recursos, discursos y narrativas de estos actores para intervenir en el escenario político pre y postelecciones 2019. En ese recorrido discute aspectos vinculados al Estado laico, la agenda de derechos y su rechazo por las organizaciones religiosas, el devenir y proyección política de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas, y las formas en que los partidos políticos se apropian de la religión en sus agendas políticas.

Por último, cerrando el libro, el capítulo IX, a cargo de Eliana Quiroz y Wilmer Machaca, aborda la reconfiguración del espacio político en Internet durante la crisis política de finales de 2019. La premisa es que Internet, y de manera más específica las redes sociales, son un nuevo campo de lucha política. Así, los autores analizan su desempeño antes de la

crisis política, durante su desarrollo en torno a las elecciones 2019 y en el gobierno de transición. Documentan también el uso político y la reconfiguración de actores y dinámicas políticas en Twitter, Facebook y WhatsApp. Y concluyen con una reflexión sobre desinformación y *fake news* en la crisis política del país.

Queda entonces a su consideración, lectoras y lectores, este mapa de actores estratégicos confeccionado a varias manos, con diferentes miradas/posturas, para abonar la reflexión sobre los hechos de octubre y noviembre del año 2019, su devenir en un contexto de crisis y polarización, y su desempeño en el proceso político boliviano. Estamos seguros que *Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020)* será un libro de referencia para la necesaria conversación pública en democracia.

Diciembre de 2020


MAS

I

El MAS-IPSP ante un nuevo contexto político: De "partido de gobierno" a "instrumento político" de las organizaciones populares

Fernando Mayorga

En este artículo evaluamos el comportamiento del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) después de la derrota sufrida con el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019 y en su andar a las elecciones generales de octubre de 2020. Este análisis pretende auscultar la respuesta de esta organización al nuevo escenario político y tiene como punto de partida el desmontaje de un modelo de toma de decisiones que durante varios años dependió de la centralidad de Evo Morales por su papel coetáneo como presidente del Estado, jefe del partido y líder de las organizaciones sindicales.[1] La severa derrota política del MAS-IPSP y la ausencia de Evo Morales, asilado en el extranjero, provocaron un escenario adverso para esta fuerza política. Su adaptación al nuevo escenario político fue gradual y estuvo matizada por tensiones internas; no obstante, esas contradicciones también expresaron la búsqueda contingente de un nuevo modelo decisional para su

1 Al respecto, véase mi libro *Mandato y contingencia. El estilo de gobierno de Evo Morales*, publicado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS) en octubre de 2019. La segunda edición salió en agosto de 2020 en Argentina con el auspicio de la FES y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La versión digital está disponible en: https://t.co/vV6hbAErnS?amp=1

funcionamiento con miras a las elecciones generales. La idea de nuevo modelo decisional se refiere a la rearticulación de su estructura organizativa –esa compleja relación entre partido y organizaciones sindicales y comunitarias– y a la redefinición de los roles de los actores relevantes en la definición de estrategias y la adopción de respuestas tácticas. En política, en general, el tiempo es un recurso escaso y, en este caso, se convirtió en una severa restricción para el reacomodo del MAS-IPSP a las nuevas condiciones políticas puesto que, súbitamente, se convirtió en una fuerza opositora y estuvo bajo el asedio del gobierno de Áñez con represión militar y policial, y persecución legal a sus dirigentes y candidatos; en esas circunstancias adversas encaró el proceso electoral que, de manera imprevista, fue interrumpido durante varios meses debido a la pandemia del coronavirus.

Nuestra pesquisa sobre la búsqueda de un nuevo modelo decisional parte de dos premisas. En primer lugar, las contradicciones y disputas internas en el MAS-IPSP son un reflejo de su desconcierto ante la derrota de 2019 y también una demostración de la vigencia de una lógica deliberativa en sus filas para la definición de posturas tácticas y líneas estratégicas. En segundo lugar, el MAS-IPSP está en un proceso de transición que puede entenderse como una suerte de retorno a sus orígenes, es decir, está mutando de "partido de gobierno" a "instrumento político" de las organizaciones sindicales –su raíz constitutiva: MAS como IPSP– para encarar las elecciones generales de 2020.

Para evaluar la dinámica interna en el MAS-IPSP y su adaptación al nuevo contexto político seleccionamos *cinco momentos decisivos* que dan cuenta de esa búsqueda contingente y las dificultades para la adopción de un nuevo modelo decisional:

1. Momento de rearticulación y renovación: Ampliado nacional en Cochabamba (7 de diciembre de 2019).

2. Momento de disputa y deliberación en la selección del binomio presidencial: Ampliados en Bolivia y reuniones en Buenos Aires (enero de 2020).
3. Momento de unidad y recuperación de capacidad de iniciativa política (30 de abril de 2020).
4. Momento de divergencias: Postergación de elecciones, bloqueo de caminos y aprobación legislativa de nueva fecha (3 al 14 de agosto de 2020).
5. Momento de reafirmación de la unidad: Inicio de campaña con mayor protagonismo del binomio presidencial (31 de agosto a 14 de septiembre de 2020).

De manera previa, presentamos las características del modelo decisional vigente durante tres gestiones gubernamentales de Evo Morales (2006-2019) y el comportamiento del MAS-IPSP durante la crisis postelectoral.

Estilo de gobierno de Evo Morales

El MAS-IPSP era una coalición de gobierno conformada por el partido y las organizaciones agrupadas en el Pacto de Unidad[2] y la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que agrupaba, además, a las federaciones de mineros, fabriles, cooperativistas y gremiales, y en algunos momentos a la Central Obrera Boliviana (COB). El presidente comandaba esa coalición coordinando acciones con los dirigentes de las organizaciones sociales, la bancada parlamentaria y el gabinete de ministros en reuniones de carácter semanal o quincenal. Evo Morales mantenía relaciones radiales con

2 Integrado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS).

esos diversos espacios y grupos de consulta y coordinación. El gobierno tuvo un centro decisional circunscrito a la figura presidencial y solamente el vicepresidente Álvaro García Linera ocupó un lugar privilegiado en las disposiciones de Evo Morales. Sin embargo, García Linera no tenía un vínculo orgánico con el partido ni con las organizaciones sociales, tampoco la mayoría de los ministros que, sin embargo, fueron designados como responsables de la campaña electoral en los departamentos por encima de los dirigentes del partido y de las organizaciones sindicales. Este esquema organizativo no fue eficaz en la campaña del referendo de 2016 ni en las elecciones de 2019 y, menos aún, para responder a la crisis política postelectoral.

En la coyuntura crítica de octubre y noviembre de 2019, las acciones del MAS-IPSP denotaron la ausencia de una estrategia para afrontar el conflicto que se desató desde la noche de las elecciones. La postura de Carlos Mesa reclamando la segunda vuelta fue contrarrestada con un cauto discurso de espera del cómputo final que, supuestamente, confirmaría la victoria de Evo Morales en primera ronda, merced al voto rural. El voto campesino-indígena fue reivindicado con una apelación a la igualdad ciudadana pero no tuvo efecto persuasivo porque el discurso opositor estaba articulado en torno a una consigna eficaz ("Mi voto se respeta") que expresaba el rechazo al supuesto fraude que fue utilizado por la oposición para deslegitimar los resultados de los comicios. Ante ese cuestionamiento, el MAS-IPSP optó por la vía institucional pidiendo la realización de una auditoría electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la verificación de los resultados; sin embargo, este procedimiento fue rechazado por Comunidad Ciudadana (CC), la segunda fuerza más votada, lo que provocó que el sistema de partidos quede al margen del proceso político decisional. Más adelante, cuando la OEA presentó un informe preliminar sugiriendo la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones, el gobierno no tuvo otra opción que asumir

esa directriz convocando a un diálogo a las principales fuerzas políticas. Ese llamado también fue rechazado porque las vías institucionales estaban clausuradas. Las posibilidades de negociación se diluyeron porque el gobierno no seleccionó a un interlocutor en el campo opositor, el cual estaba bajo una disputa de liderazgo entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se definió a favor del dirigente cívico puesto que esgrimía consignas rupturistas.

De esta manera, el conflicto se definió en las calles a favor de la oposición, que promovió una protesta territorial con una consigna eficaz que le permitió ampliar su interpelación anti reeleccionista. Tres días después de los comicios se iniciaron bloqueos en varias ciudades, sobre todo en zonas residenciales y de clase media a convocatoria de varios comités cívicos. Las reacciones del oficialismo estuvieron signadas por el menosprecio al alcance y carácter de la protesta citadina. Varias declaraciones de Evo Morales denotaron esa percepción cuando señaló, por ejemplo, que los universitarios protestaban por notas o porque recibían dinero, que la suspensión de los partidos de la liga de fútbol profesional era perjudicial o que sus seguidores darían lecciones sobre bloqueos. Posteriormente, anunció una determinación de la Conalcam para convocar a "movilización permanente y "cerco a las ciudades" con el objetivo de debilitar las protestas opositoras (*El Diario*, 27 de octubre de 2019). Esa declaración dañó aún más la imagen del presidente y activó el clivaje campo/ciudad provocando la ampliación y cohesión de la protesta urbana ante la existencia de un "enemigo" percibido, además, con prejuicios racistas. Este elemento fue decisivo para justificar acciones violentas de grupos irregulares contra los seguidores del MAS-IPSP porque en varias ciudades se produjo una especie de histeria colectiva ante una supuesta "invasión" campesina. De manera coincidente, Evo Morales descartó un diálogo con la oposición, en particular con Carlos Mesa, a quien acusaba de ser parte del complot contra el

gobierno. Así, tres semanas después de los comicios y con varias ciudades paralizadas, el gobierno discurría entre la defensa de su victoria en las urnas y la impotencia frente a las protestas opositoras que se incrementaron hasta concluir en el golpe de Estado. Aunque el MAS-IPSP había vencido en los comicios, ese apoyo en las urnas no se tradujo en acciones de movilización capaces de contener la protesta opositora porque la defensa del gobierno fue asumida solamente por las organizaciones campesinas y obreras. La capacidad de acción hegemónica del MAS-IPSP llegó a su fin porque en los últimos años había perdido en la disputa discursiva por el sentido de la democracia.

Desde la realización del referendo constitucional de 2016, el MAS-IPSP enfrentó el reto de mantener la democracia como uno de los ejes de su discurso, una noción de democracia vinculada a la ampliación de la participación y la inclusión social. La reacción frente a su derrota en el referendo constitucional fue el inicio de una disputa por el sentido de la democracia al apostar por la postulación de Evo Morales mediante otras vías legales desoyendo el veredicto de las urnas. A partir de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio curso a la habilitación de Evo Morales, las protestas opositoras por el "respeto al 21F" se enlazaron con la defensa de valores democráticos tales como alternancia, pluralismo y vigencia del Estado de derecho. Frente a esta postura, el MAS-IPSP resaltó la equivalencia entre democracia y justicia, sustentada en la estabilidad y el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Para el MAS-IPSP, la democracia era sinónimo de igualdad y los aspectos institucionales eran secundarios frente a los logros sociales y económicos del modelo estatal. Por su parte, la oposición invocaba la libertad y el respeto a la Constitución y, para ese fin, esgrimió la antinomia dictadura/democracia con el propósito de rechazar la reelección de Evo Morales.

La interpelación opositora se fue ampliando en el transcurso del conflicto logrando la adhesión de diversos segmentos sociales a una "lucha por la libertad" y el MAS-IPSP no tuvo capacidad para contrarrestar esa consigna en la opinión pública ni para aplacar las protestas en las calles. El gobierno optó por convocar a concentraciones pacíficas de sus adherentes y evitó dar órdenes para que las fuerzas policiales actúen contra los bloqueadores en las ciudades. Una escalada decisiva en el conflicto se produjo a principios de noviembre, cuando la Policía se amotinó –un hecho planificado por sectores de la oposición, como se supo después– y, luego, el comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) "recomendó" la renuncia del presidente en consonancia con la OEA que había sugerido la anulación de las elecciones dando pábulo a las denuncias de fraude de la oposición. A ese pedido se sumó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, revelando la desarticulación de la Conalcam y el desbande en el partido de gobierno, cuyas autoridades –casi medio centenar– fueron obligadas a renunciar mediante secuestros y amenazas de muerte por parte de grupos irregulares. El golpe de Estado se consumó con la renuncia forzada de Evo Morales y Álvaro García Linera y su salida a México, la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina y el despliegue de la represión militar y policial para acallar las protestas populares.

Derrota política y rearticulación de la base social

En esas condiciones, el MAS-IPSP encaró un complejo proceso de adaptación a las nuevas condiciones del escenario político. Para evaluar dicho proceso analizamos *cinco momentos decisivos* que muestran los ires y venires en la búsqueda de una nueva metodología de funcionamiento organizativo y de accionar político.

1) Momento de rearticulación y renovación: Ampliado nacional en Cochabamba (7 de diciembre de 2019)

Después de la posesión de Áñez, el gobierno actuó de manera represiva en varios frentes con consecuencias fatales, como las masacres en Huayllani y Senkata. La política institucional se diluyó esos días porque la bancada masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estaba bajo amenaza y el partido en una situación de virtual clandestinidad. En estas circunstancias, las organizaciones populares se convirtieron en los actores de la protesta y en los interlocutores del gobierno que, entre el 24 y 25 de noviembre de 2019, organizó una reunión decisiva con dirigentes de la COB, del Pacto de Unidad y de varios distritos de El Alto con la finalidad de lograr su estabilidad. Este diálogo tuvo la mediación del enviado especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y participaron representantes de la Unión Europea (UE) y de la Iglesia católica, así como algunas exautoridades del gobierno de Evo Morales.

Después de un tenso y largo debate se firmó un "acuerdo por la pacificación", entre cuyos puntos destacaban el repliegue de las FFAA, la designación de vocales del TSE y la convocatoria inmediata a elecciones generales. También la aprobación de una Ley de garantías que permitiera el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. La Ley de convocatoria a elecciones fue aprobada por la ALP y promulgada enseguida; sin embargo, la presidenta interina se negó a promulgar la Ley de garantías, aprobada el 11 de enero de 2020 por el Senado, quedando ésta en suspenso tras ser remitida por el Ejecutivo en consulta al TCP.

En esa ocasión se puso de manifiesto la existencia de posturas relativamente divergentes puesto que varias organizaciones sindicales no asistieron al diálogo con el gobierno y emitieron un documento con otros lineamientos, aunque apoyaron el "acuerdo de pacificación" y determinaron un cuarto intermedio en sus movilizaciones de protesta. Estas organizaciones se reunieron el 26 de noviembre en

un Ampliado Nacional de las Organizaciones Sociales en Resistencia al Golpe de Estado en Bolivia que, no por casualidad, se realizó en Lauca Ñ (Shinahota, Chapare). El anfitrión fue Andrónico Rodríguez, vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien no participó en la reunión con el gobierno –pese a que un ministro anunció que tenía garantías y que se encontraba en La Paz– y, más bien, visitó la zona de Senkata en solidaridad con los familiares de las víctimas de la masacre.

En el evento de Lauca Ñ participaron la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, el Distrito 8 de la Junta de Vecinos de El Alto, la Federación Sindical Interculturales Productores Agroforestales de El Chore y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Esas organizaciones ratificaron su "apoyo moral y material" a Evo Morales, a quien seguían considerando "presidente del Estado Plurinacional de Bolivia". También demandaron la renuncia de la "presidenta golpista", exigieron la liberación de los presos políticos y un desagravio público a la wiphala. También exigieron la derogación de un decreto que liberaba de responsabilidad penal a las FFAA y a la Policía Nacional. Finalmente, y ésta fue una decisión crucial, plantearon la necesidad de la convocatoria a un ampliado nacional del MAS-IPSP en un plazo "no mayor a cinco días".

Ese evento se realizó dos semanas después en Cochabamba. Fue el primer acto público y la primera reunión colectiva del MAS-IPSP después del golpe de Estado y marcó un punto de inflexión porque se produjo la reagrupación de sus diversas fuerzas integrantes. El 7 de diciembre se desarrolló el Ampliado Nacional Extraordinario con la presencia de dirigentes de las direcciones nacional, departamentales y regionales del partido, así como de las organizaciones de la Conalcam y del Pacto de Unidad, y algunos asambleístas

nacionales. Evo Morales fue vitoreado por los asistentes cuando emitió un mensaje telefónico de desde Buenos Aires y Andrónico Rodríguez fue recibido con una ovación porque se había constituido en el referente de la resistencia al gobierno. Se vertieron críticas a ministros, asambleístas, candidatos y dirigentes, pero se impuso el criterio de la unidad. En ese ambiente, el secretario ejecutivo de la COB pidió disculpas por haberse sumado al pedido de renuncia planteado por las FFAA en noviembre.

Las resoluciones de ese ampliado expresaron tanto los términos del "acuerdo por la pacificación" como las resoluciones de Lauca Ñ, esto es, convocatoria a elecciones generales y lucha contra el gobierno. Esa doble postura era una de las expresiones de las tensiones internas en el MAS-IPSP. Así, por un lado, resolvieron "exigir a la ALP el instaurar juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez (presidenta autoproclamada) e interpelación a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, miembros del Alto Mando Militar y Policía Nacional, por la comisión de los delitos de lesa humanidad; genocidio, tortura, racismo y discriminación, persecución penal y política indiscriminada al pueblo boliviano". Y, por otro, "exigir a la ALP, la celeridad sobre el nombramiento de vocales del TSE [y] la inmediata aprobación de la Ley de Garantías Constitucionales". También se designó a Evo Morales como jefe nacional de campaña y se determinó que en las próximas elecciones no se aceptarían candidatos "invitados", acusados de deslealtad; una crítica que se extendió a los exministros, así como a algunos senadores y diputados.

Ese ampliado también tomó una determinación importante en términos orgánicos porque se ratificó al Pacto de Unidad como la única instancia de dirección y coordinación, y se decidió la extinción de la Conalcam. Es preciso recordar que el Pacto de Unidad está conformado por organizaciones campesinas e indígenas y fue un actor

decisivo desde principios del 2000, sobre todo, durante el proceso constituyente; en cambio, la Conalcam fue creada en 2007 para aglutinar a otros sectores sociales –como obreros, fabriles, cooperativistas y gremiales– en respaldo al gobierno y, luego, se constituyó en una supraorganización que formaba parte de las instancias que Evo Morales consultaba de manera permanente para tomar decisiones estratégicas. Las críticas en el ampliado se concentraron en cuestionar el carácter cupular de la Conalcam y su inacción durante la crisis postelectoral. En cierta medida, esta decisión expresa una suerte de retorno al origen del partido como "instrumento político" de las organizaciones sindicales.

Reunión de dirigentes del Pacto de Unidad y miembros de la ALP

Otro hecho importante se produjo al día siguiente puesto que se llevó a cabo una reunión reservada entre varios dirigentes del Pacto de Unidad, convocados por Andrónico Rodríguez, y cuatro asambleístas, entre ellas Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado. Esa reunión tuvo la finalidad de coordinar acciones y, sobre todo, despejar dudas y suspicacias entre la bancada y la dirigencia. Fue el primer evento de esta naturaleza después del golpe de Estado y sirvió para realizar una evaluación crítica de los acontecimientos, reagrupar el Pacto de Unidad y establecer líneas de acción conjuntas.

La postura de la bancada

Eva Copa, elegida presidenta del Senado el 14 de noviembre de 2019, no participó en el Ampliado Nacional ni en esa reunión reservada, hecho que denotó las divergencias internas en la bancada del MAS-IPSP. Copa era criticada por asumir posturas moderadas respecto al gobierno, empero seguía las determinaciones del "acuerdo de pacificación", como la aprobación de la ley para la realización de nuevas elecciones que implicaba validar la anulación de los comicios

de octubre de 2019 y considerar un asunto pendiente: la aceptación o rechazo de las cartas de renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, cuyo mandato constitucional fenecía, legalmente, el 22 de enero de 2020.

Finalmente, las cartas de renuncia fueron consideradas en una sesión realizada el 19 de enero de 2020; sesión que puso en evidencia las divergencias en la bancada del MAS-IPSP puesto que se produjeron altercados entre los asambleístas que aprobaron y los que rechazaron las renuncias. Sin embargo, en otros temas la bancada actuó de manera relativamente unitaria en consonancia con las resoluciones del Ampliado Nacional del MAS-IPSP. Así ocurrió con la censura al ministro de Defensa, Luis Fernando López, que no asistió a un acto de interpelación por las masacres en noviembre de 2019. Ese acto político era importante puesto que la Constitución establece que si la censura es aprobada por dos tercios de la ALP se produce la destitución automática del ministro en cuestión. Sin embargo, la presidenta interina procedió, dos días después, a posesionar de nueva cuenta al mismo ministro, en una señal de pugna con la ALP.

En suma, hubo coincidencias y altercados en la bancada del MAS-IPSP por diferencias de posición en torno a diversos tópicos debido a la inexistencia de una directriz nítida. Por ese motivo, como veremos más adelante, el procedimiento asumido para la aprobación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, a fines de abril, expresó un cambio, no solamente en la conducta de la bancada sino en el funcionamiento del MAS-IPSP. Previamente, éste tuvo que enfrentar el desafío de salir indemne del proceso de selección del binomio presidencial.

2) Momento de disputa y deliberación en la selección del binomio presidencial: Ampliados en Bolivia y reuniones en Buenos Aires (enero de 2020)

El 6 de enero de 2020, el TSE aprobó el calendario electoral fijando el 3 de mayo como día de los comicios y la inscripción

de candidatos para el 2 y 3 de febrero. Este hecho modificó, lógicamente, el accionar del MAS-IPSP que se concentró en la selección del binomio, un tema complejo puesto que debía reemplazar a Evo Morales, inhabilitado como candidato presidencial.

Con anterioridad, a fines de diciembre de 2020, Evo Morales había convocado a una asamblea con dirigentes del partido y de las organizaciones sociales en Buenos Aires. En esa ocasión se decidió llamar a un ampliado nacional a realizarse en enero, en esa ciudad, para definir el binomio electoral. A partir de entonces se produjo una superposición de procedimientos y ámbitos en el proceso decisional: ampliados en Bolivia y reuniones en Buenos Aires. Esta superposición puede entenderse como la combinación entre una lógica deliberativa –afín a la democracia interna que rige en el sindicalismo campesino y en las comunidades indígenas– y una lógica decisionista de carácter personal concentrada en Evo Morales. Esta combinación de lógicas también puede comprenderse como una manifestación de democracia interna puesto que no se impuso ninguna de las instancias y la definición del binomio fue resultado de un acuerdo motivado por el riesgo de la división ante la falta de consenso.

El proceso de selección de candidatos se inició con la postulación de un binomio conformado por David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, que fue aprobado en un ampliado nacional del Pacto de Unidad y del MAS-IPSP. Este evento se llevó a cabo el 11 de enero en Huanuni y contó con la participación de la CSUTCB, la CNMCIOB-BS, la CSCIB, la CIDOB, el Conamaq, y delegaciones de nueve departamentos que debatieron las resoluciones de ampliados realizados en sus regiones.

Sin embargo, Evo Morales convocó a otra reunión para el 19 de enero en Buenos Aires con la finalidad de definir el binomio poniendo en cuestión las determinaciones del evento

de Huanuni: "Estamos convocando a una reunión de alto nivel del MAS, con dirigentes principales de distintos sectores del Pacto de Unidad [para] decidir quién es el candidato a presidente y vicepresidente" (*Los Tiempos*, 20 de diciembre de 2019). En una modalidad inusual, cuatro personas, en calidad de precandidatos, firmaron un compromiso de acatamiento de las decisiones de la reunión de Buenos Aires: Luis Arce, David Choquehuanca, Diego Pary –exministros– y Andrónico Rodríguez, quien no viajó al evento porque tenía una acusación por sedición que le impedía salir del país.

La nominación recayó en Luis Arce como candidato presidencial acompañado de David Choquehuanca para vicepresidente. En cambio, Andrónico Rodríguez sería inscrito como postulante a senador por Cochabamba. Varios dirigentes –y algunos asambleístas del ala "conciliadora"– manifestaron su molestia porque no se respetó la decisión mayoritaria y pidieron que se convoque a un ampliado de emergencia en Bolivia. Antes de la realización de ese evento, fue decisiva la postura de Andrónico Rodríguez quien declaró que respetaba la determinación de Evo Morales, pese a contar con el respaldo del Pacto de Unidad para su candidatura.

En estas circunstancias, el 23 de enero se realizó un ampliado de emergencia del Pacto de Unidad en El Alto que, finalmente –y después de un amplio debate–, resolvió aceptar el binomio elegido por Evo Morales en Argentina. El candidato vicepresidencial, David Choquehuanca, persuadió a los delegados con un extenso discurso que culminó con un llamado a la unidad para vencer en las elecciones sin dejar de cuestionar el decisionismo de Evo Morales: "Por eso he dicho, por la unidad de nuestro instrumento, por la unidad de los aymaras, obreros y campesinos del pueblo boliviano. No nos van a entender [desde Argentina], nosotros entenderemos desde aquí [Bolivia]. Participaremos, hermanos, en las elecciones" (*Correo del Sur*, 24 de enero de 2020).

Era de conocimiento común que Evo Morales optó, desde un principio, por Luis Arce como candidato presidencial porque consideraba que la defensa del modelo económico debía ser un tema central de la campaña y el exministro de Economía y Finanzas Públicas era una figura capaz de interpelar a las clases medias. También se conocía que vetó a Choquehuanca –entre otras razones, porque el excanciller no gozaba de su confianza y tuvo una relación conflictiva con Álvaro García Linera durante varios años– aunque resultaba evidente que no podía desconocer el apoyo de las organizaciones campesinas-indígenas de La Paz que postulaban a un candidato aymara. Por eso relegó a Andrónico Rodríguez de la candidatura vicepresidencial y aceptó a David Choquehuanca, aunque eso implicaba desoír la resolución del ampliado de Huanuni.

La decisión de Evo Morales fue determinante pero no pudo obviar enteramente las determinaciones de los ampliados y los ampliados cuestionaron su posición, pero aceptaron su propuesta. En ambos casos primó el criterio de la unidad. Sin embargo, este proceso de selección puso en evidencia un estilo decisional que denota la existencia de varias posiciones y, por ende, contradicciones internas. Por ejemplo, en ocasión de la conmemoración del 22 de enero de 2020, fecha de la fundación del Estado Plurinacional, hubo sugerencias –desde Buenos Aires– para que se realicen protestas pidiendo la renuncia de Áñez pero finalmente se impuso el criterio (local) de realizar un acto pacífico de celebración en Cochabamba. Por su parte, Evo Morales dio un discurso al estilo de sus mensajes presidenciales de antaño en un acto masivo realizado en un estadio de fútbol en Buenos Aires.

Otro hecho que denota esas tensiones fue la postulación de Evo Morales como asambleísta. Al principio solicitó ser candidato a diputado uninominal, sin embargo, esa idea no fue aceptada por los sindicatos de la circunscripción

respectiva porque ya habían designado a un candidato local. Otra opción era el Senado, pero hubo una discusión respecto a quién iba a ocupar el primer lugar en la lista por Cochabamba puesto que ese sitio le correspondía, por consecuencia lógica, a Andrónico Rodríguez, relegado de la candidatura vicepresidencial e inscrito, finalmente, como candidato a tercer senador. Al fin, se impuso el criterio de Evo Morales que terminó encabezando la lista de senadores por Cochabamba para asegurar su elección bajo el criterio de que requería tener algún grado de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, más adelante fue inhabilitado por el TSE y, ante ese hecho, también se produjo una diferencia de posturas puesto que el MAS-IPSP presentó una demanda para la revisión de esa decisión y, paralelamente, se discutió el nombre de su reemplazante. Algunos dirigentes consideraban que la presencia de Evo Morales como candidato perjudicaba la campaña del MAS-IPSP, pero esa observación no tuvo resonancia en Buenos Aires. En general, la influencia de Evo Morales en la selección de candidatos fue menos decisiva que en el pasado. Antes dirimía cuando existían divergencias en las organizaciones respecto a los candidatos a diputaciones uninominales o bien definía la lista de postulantes en circunscripciones urbanas con base en sugerencias del partido o de las organizaciones. En esta ocasión, la dinámica local fue más importante y, en cierta medida, la aceptación del binomio propuesto por Evo Morales implicó un acuerdo tácito respecto a que las listas de diputados y senadores serían confeccionadas por las organizaciones sociales de manera autónoma; asimismo, la eliminación de la figura de candidatos "invitados" otorgó mayor margen de decisión a los dirigentes departamentales del partido.

Por otra parte, las declaraciones de Evo Morales en entrevistas periodísticas y sus mensajes en Twitter provocan, en algunas circunstancias, un debate público que resulta perjudicial para el MAS-IPSP; por ejemplo, cuando señaló,

a mediados de enero de 2020, que "si volvería [a Bolivia], o alguien vuelva, hay que organizar… milicias armadas del pueblo" (*Opinión*, 12 de enero de 2020). Aunque su declaración fue distorsionada, tuvo que retractarse; no obstante, esa declaración reavivó la polarización política con consecuencias negativas para la campaña electoral del MAS-IPSP. Su presencia en las redes sociales es llamativa, no obstante su protagonismo inhibe la imagen del candidato presidencial y condiciona el discurso de su partido.

Durante el mes de marzo, la campaña electoral discurría bajo esas características y con cierto grado de desorganización, en cierta medida debido al temor a las acciones represivas del gobierno y a la persecución legal. Así aconteció con una reunión nacional de candidatos y dirigentes que no superó el 50% de la asistencia prevista. En estas circunstancias surgió un hecho imprevisto –la pandemia del coronavirus– que modificó de manera sustantiva el escenario político y provocó la postergación de las elecciones generales programadas, inicialmente, para el 3 de mayo. El gobierno decretó una cuarentena obligatoria en la segunda quincena de marzo bajo un modelo de gestión de la crisis sanitaria caracterizado por la secutirización, con protagonismo de militares y policías, el agravamiento de la persecución legal a miembros del MAS-IPSP y una represión selectiva en sus bolsones electorales, en particular en El Alto y Cochabamba. Se produjo una concentración del poder en la figura presidencial y la centralización de las decisiones en el gobierno nacional que, además, aprovechó el contexto para realizar campaña a favor de Áñez –quien había anunciado su candidatura el 24 de enero de 2020– mientras que el resto de los partidos tuvieron que subordinar sus discursos y acciones a la situación provocada por la crisis sanitaria que, entre otras cosas, desplazó el tema electoral de la agenda pública.

La respuesta del MAS-IPSP al nuevo contexto fue ambigua o tuvo una doble faz. Ciertos dirigentes, en consonancia

con algunas sugerencias provenientes de Buenos Aires, sugirieron que se convoque a protestas contra el gobierno en rechazo a la cuarentena por sus consecuencias negativas para los sectores populares; en cambio, otros dirigentes, sobre todo del trópico cochabambino, al mando de Andrónico Rodríguez, realizaron acciones de solidaridad repartiendo víveres a sectores populares en distintas regiones del país bajo la consigna "solo el pueblo salva al pueblo". La respuesta gubernamental fue más represión y persecución, aunque esos actos de solidaridad fueron recibidos positivamente en la opinión pública. En torno a este hecho también se pusieron de manifiesto divergencias internas puesto que, por un lado, los dirigentes sindicales coordinaron esas acciones con autoridades municipales en varios departamentos y, por otro, algunos voceros del partido plantearon, sin éxito, que algunos municipios bajo el control del MAS-IPSP se declaren "libres de virus" para debilitar el uso instrumental de la crisis sanitaria por parte del gobierno. Asimismo, a mediados de abril, Eva Copa sugirió la realización de una "Cumbre integral por una Bolivia solidaria" para debatir las medidas que debían adoptarse después del levantamiento de la cuarentena; sin embargo, su llamado no tuvo receptividad en las filas de su partido: ningún dirigente se pronunció al respecto.

Por su parte, el candidato presidencial del MAS-IPSP adoptó una conducta propositiva y sugirió varias medidas, en particular económicas, para paliar los efectos negativos de la cuarentena, algunas de las cuales fueron asumidas por el gobierno que, sin embargo, lo acusó de promover acciones de desacato contra la cuarentena. Una reacción motivada porque Luis Arce, en todas las encuestas, ocupaba el primer lugar en la intención de voto. Adicionalmente, desde el inicio de la cuarentena, sobre todo en las últimas semanas de abril, disminuyó la presencia de Evo Morales en las redes sociales, un hecho que favoreció el protagonismo de Luis Arce y sus propuestas respecto a la crisis sanitaria.

En estas circunstancias, y ante la cercanía del 3 de mayo –fecha de las elecciones postergadas de facto–, la ALP tenía que considerar una propuesta de nuevo calendario electoral presentada por el TSE que planteaba un rango de entre junio y septiembre para la realización de los comicios. La decisión de la bancada masista fue aprobar una ley que estableció un límite de 90 días, a partir del 3 de mayo, para la realización de los comicios. Esa decisión expresa un nuevo comportamiento en el MAS-IPSP puesto que fue una acción que puso en evidencia, por primera vez, un comportamiento compacto en sus filas en torno a una línea estratégica.

3) Momento de unidad y recuperación de capacidad de iniciativa política (30 de abril de 2020)

El 30 de abril de 2020, el MAS-IPSP actuó de manera cohesionada en torno a la aprobación y promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020 denotando un comportamiento distinto al que había asumido desde noviembre del año pasado. Esa determinación fue acompañada con una acción "en las calles" mediante una convocatoria a un "petardazo" y un "cacerolazo" en varias ciudades, bajo la consigna de "Elecciones, ya". Ese acto fue convocado por el partido pero también por personas o grupos que apoyan al MAS-IPSP o son críticos del gobierno de Áñez. Casualmente, esa noche era la víspera del 1 de mayo, una fecha emblemática puesto que, el 1 de mayo de 2006 Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos, una de las medidas más importantes de su gestión gubernamental.

Por su parte, Evo Morales, con una presencia cada vez más esporádica en las redes sociales, hizo declaraciones moderadas respecto a la ley destacando que se definía un plazo para las elecciones con el objetivo de "recuperar la democracia": "El pueblo ha perdido el miedo al gobierno de facto… ahora hay una rebelión" (*La Razón*, 1 de mayo de 2020). Paralelamente, Morales retomó una práctica habitual en el

ejercicio de su liderazgo cuando ocupaba la presidencia, esto es, el contacto directo, en este caso telefónico, con dirigentes de diverso rango para rearticular la red organizacional que forjó en sus visitas constantes a los municipios y comunidades mediante el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Morales tiene un conocimiento minucioso de la trama organizativa y del perfil de los dirigentes en cada región con quienes estableció una relación personalizada y, esos días, empezó a utilizar esas redes de comunicación. En el caso específico de la labor de la bancada, existen algunos testimonios que dan cuenta de que una directriz planteada por Evo Morales a una asambleísta fue, horas después, reforzada por dirigentes de diversas regiones y de distinto nivel que se comunicaban telefónicamente con los y las asambleístas reiterando los argumentos del líder.

Esa iniciativa individual que puso en movimiento a la dirigencia sindical se combinó con acciones de carácter orgánico. Así, entre los factores que explican el comportamiento unitario de la mayoría de la bancada del MAS-IPSP en la sesión del 30 de abril de 2020 sobresale el accionar del Pacto de Unidad el cual, a través de algunos dirigentes, presionó a los asambleístas, sobre todo a los diputados uninominales, mediante cartas que fijaron esa línea de conducta. Este hecho marca una diferencia en la metodología partidista puesto que ya no se trataba de resoluciones de ampliados que debían ser acatadas, sino que se desplegaron varias acciones directas para incidir en el comportamiento de la bancada. A esos hechos se sumó otra situación inédita: las reuniones del candidato presidencial con la bancada y con los presidentes de Cámaras para planificar la sesión. Éste es un hecho importante puesto que se trató de la primera aproximación entre Luis Arce y los asambleístas para establecer una tarea de coordinación. Otro dato significativo fue la reacción inmediata de los asambleístas del MAS-IPSP a las observaciones a la ley presentadas por la presidenta

interina apenas nueve minutos después de su aprobación por la ALP. De manera inmediata se reinstaló la sesión congresal para rechazar las observaciones y promulgar la ley en cuestión denotando una disciplina partidaria inédita. En suma, este momento muestra la supeditación de los diversos actores internos del MAS-IPSP a una determinación estratégica referida al proceso electoral.

La aprobación y promulgación de esa ley fue la primera iniciativa del MAS-IPSP desde el inicio de la cuarentena. Con ese acto modificó el escenario político y obligó a sus rivales a readecuar sus estrategias, hasta entonces subordinadas a las iniciativas del gobierno. El oficialismo optó por demandar la inconstitucionalidad de la ley, Carlos Mesa salió a la palestra a pedir que se convoque a una "cumbre nacional" y Luis Fernando Camacho comunicó que cada noche iría a rezar a una rotonda en Santa Cruz.

Este acontecimiento proporcionó ciertos indicios acerca de una nueva metodología para la toma de decisiones en el MAS-IPSP que, hasta entonces, se caracterizaba por la coexistencia de diversas lógicas que se traducían en contradicciones internas. En cierta medida, el itinerario del MAS-IPSP mostraba una progresiva adaptación a las condiciones del contexto político debido a su fortaleza organizativa, en particular del Pacto de Unidad. Sin embargo, la decisión del TSE de postergar las elecciones puso en cuestión este recorrido y sacó a relucir, otra vez, las contradicciones en el seno del MAS-IPSP.

4) Momento de divergencias: Postergación de elecciones, bloqueo de caminos y aprobación legislativa de nueva fecha (3 al 14 de agosto de 2020)

Después de la aprobación y promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales a fines de abril, el MAS mostró cierta flexibilidad puesto que el día inicialmente propuesto para los comicios –primer domingo de agosto– fue

sustituido por el 6 de septiembre. Esa postura fue precedida de un mensaje de Evo Morales por Twitter que señaló que la primera semana de agosto no era inamovible. Después de mucho tiempo, el líder del MAS recuperó un estilo de acción política que le dio réditos electorales a su partido, esto es, la adopción de una postura moderada.

Esta decisión fue la segunda iniciativa política del MAS en este período y, de nueva cuenta, obligó a sus rivales a que reformularan sus estrategias. De esta manera, los partidos políticos tuvieron que asumir una posición al respecto y el resultado fue un acuerdo entre los actores estratégicos del proceso electoral: MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos. Ellos aceptaron la propuesta del TSE que había planteado un rango para la realización de los comicios de entre la primera semana de junio y la primera de septiembre. El acuerdo suscrito en el TSE fue importante porque se trató del primer arreglo político sobre procedimientos y calendario electoral y porque esa entidad recuperó credibilidad institucional.

El proceso electoral parecía encaminarse institucionalmente y sin mayor conflictividad, sin embargo, el oficialismo retrocedió en su decisión y optó por poner trabas a la promulgación de la ley que definía la realización de los comicios en el primer domingo de septiembre. La presidenta interina hizo conocer esa decisión mediante una carta que anunciaba su rechazo a la promulgación de la ley sustentándose en un criterio falaz, puesto que le pidió a la ALP que incluya el informe epidemiológico que respaldaba la convocatoria para esa fecha. La falacia era obvia puesto que ese informe era responsabilidad del Órgano Ejecutivo. Después, de manera más prosaica, Áñez declaró que "postergar (las elecciones) un mes o dos meses no le va a ser daño a nadie", sin embargo, también afirmó que iba a acatar todo lo establezca el tribunal electoral "porque también nosotros queremos elecciones". Una ambigüedad aparente puesto que varias acciones del gobierno estaban dirigidas a impedir que

las elecciones se llevaran a cabo en septiembre. Paralelamente, fuerzas más radicales, como Creemos, pedían una nueva convocatoria y la proscripción electoral del MAS-IPSP. En el trasfondo de estas conductas estaban las encuestas que daban el primer lugar a Luis Arce. Como resultado de esas presiones, el TSE tomó la decisión de postergar los comicios hasta el 18 de octubre sin consultar con los actores políticos y obviando a la ALP. Y en este trance, Carlos Mesa apoyó la fecha de octubre con el mismo ahínco que la de septiembre, es decir, sin tomar ninguna iniciativa y reiterando sus críticas al gobierno y a Evo Morales –con más énfasis– como parte de su proselitismo.

La decisión unilateral del TSE provocó una cierta parálisis en el MAS-IPSP. Su reacción inicial fue solicitar que la postergación sea formalizada mediante una ley, empero el organismo electoral desoyó esa solicitud. Al mismo tiempo, el gobierno transitorio esgrimió el argumento de que en octubre se daría un "pico de contagio" confirmando las sospechas sobre sus intenciones de prorroguismo con la finalidad de conseguir mejores condiciones electorales para Áñez.

La incertidumbre respecto a la fecha de elecciones, habida cuenta que podía ser modificada por el TSE de manera discrecional, provocó la protesta de los sectores populares sindicalizados que, si bien conforman la base electoral del MAS, actúan con cierto grado de autonomía respecto del partido. Así, el 4 de agosto, en un cabildo convocado por la COB en la ciudad de El Alto –y con la asistencia de la CNMCIOB-BS, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Tupac Katari" y otras organizaciones juveniles y vecinales– se decidió una huelga general indefinida con bloqueo de caminos, con la consigna de que el TSE mantuviera el 6 de septiembre como fecha de las elecciones. Es decir, la medida no fue asumida en un ampliado nacional del Pacto de Unidad, hasta entonces la instancia decisiva para adoptar determinaciones cruciales. Otra muestra de

dispersión fue la declaración de Leonardo Loza, dirigente de las federaciones de productores de hoja de coca del trópico, que dio un "ultimátum" de 48 horas al TSE para que se "retracte", una declaración que difícilmente pudo ser vertida sin la conformidad de Evo Morales[3] quien, por su parte, el 7 de agosto publicó el siguiente tuit: "Se gesta un nuevo golpe de Estado en #Bolivia... Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare". Es decir, no existía una línea discursiva con un objetivo nítido, un hecho que se puso de manifiesto en el desarrollo de la movilización.

A medida que pasaron los días y se sumaban más organizaciones al bloqueo de caminos –varios grupos actuaron al margen de la convocatoria sindical y se movilizaron como "autoconvocados"– la protesta se radicalizó y algunos sectores demandaron la renuncia de Áñez. Ese accionar perjudicó al MAS porque el gobierno, apelando una falsa dicotomía (salud o elecciones), propagó una campaña contra el MAS acusándolo de propiciar los bloqueos que impedían el abastecimiento de oxígeno a los hospitales. En ese contexto, el TSE y la COB se reunieron para conciliar criterios mediante un Acta de Entendimiento, pero ninguno cedió en su postura respecto a la fecha de los comicios aunque, poco después, los dirigentes retrocedieron en su posición y anunciaron que aceptarían otro día excepto aquel definido por el TSE. En el ínterin algunos dirigentes del Pacto de Unidad plantearon a la dirigencia de la COB que acepte el 18 de octubre y, aunque inicialmente aceptaron esa moción, no suscribieron dicha acta. Asumir esa decisión hubiera resuelto el conflicto con anticipación evitando el despliegue

3 Unas semanas después este dirigente fue designado para sustituir de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba.

de la campaña gubernamental y mediática contra el MAS y la agudización de divergencias entre dirigentes y asambleístas que fueron creciendo a medida que se instalaban nuevos puntos de bloqueo con posturas más radicales y, en muchos casos, dirigidas por grupos "autoconvocados" e, inclusive, bajo la conducción de detractores de Evo Morales, como Felipe Quispe, quien tuvo un notable protagonismo por sus declaraciones contra el gobierno y apoyando el pedido de renuncia de la presidenta interina.

En esa coyuntura crítica, el MAS-IPSP perdió iniciativa política y las protestas pusieron en evidencia el carácter complejo de las relaciones entre el partido y las organizaciones sociales puesto que no se vislumbró una estrategia común y los hechos siguieron un curso confuso. Además, los bloqueos tuvieron un costo negativo para el binomio del MAS-IPSP puesto que las protestas dieron pábulo a que sus adversarios esgriman otra vez un furibundo discurso antimasista para ahuyentar al votante moderado, aquel que era imprescindible para confirmar la victoria de Luis Arce.

En esas circunstancias, en una entrevista radial el 9 de agosto, Evo Morales propuso la aceptación del 18 de octubre en sentido contrario a las demandas de la movilización: "Hay dos caminos, o fuera Áñez o elecciones. Las elecciones estarían garantizadas de acuerdo con los movimientos sociales porque [la fecha] es impostergable y definitiva e inamovible, además de eso blindada con una ley y con garantes". De esa manera coincidió con los candidatos del binomio presidencial que habían declarado que esa solución era apropiada. De esa manera, la ley que ratificaba la fecha de los comicios fue aprobada por la bancada mayoritaria del MAS-IPSP, mientras seguía en curso el bloqueo de caminos.

Evo Morales asumió otra vez una postura moderada, pero lo hizo a destiempo puesto que la aprobación congresal de la ley no fue inmediatamente aceptada por los dirigentes sindicales quienes, recién un día después y con señales de

disconformidad, anunciaron un "cuarto intermedio" en las protestas. Y lo hicieron criticando a los asambleístas, a los exministros que forman parte del entorno de Evo Morales y al propio líder del partido.

Si bien la movilización popular provocó la confirmación de una fecha definitiva para los comicios y eliminó el riesgo de una nueva postergación, puso en evidencia un comportamiento disperso en el MAS-IPSP y en el propio Pacto de Unidad, en contraste con su conducta en los meses previos. De nueva cuenta salió a relucir la ausencia de un modelo decisional en consonancia con una línea estratégica puesto que la aceptación de la fecha propuesta por el TSE pudo darse una semana antes logrando el objetivo de consolidar una fecha de elecciones pero sin los costos negativos ante la opinión pública y sin agudizar las divergencias internas. Una vez resuelta esa coyuntura crítica con la definición de la fecha de elecciones, el MAS ingresó a una nueva etapa marcada por el inicio formal de la campaña electoral con mayor protagonismo del binomio y la disminución de la incidencia de Evo Morales.

5) Momento de reafirmación de la unidad: Inicio de campaña con mayor protagonismo del binomio presidencial (31 de agosto a 14 de septiembre)

El binomio presidencial estuvo ausente de la escena política durante el conflicto por razones obvias puesto que sus adversarios intentaron establecer la idea de que los bloqueos eran autoría del MAS-IPSP para dañar su imagen. Después del levantamiento de los bloqueos, los dirigentes del Pacto de Unidad resolvieron sus divergencias y retomaron la tarea de fortalecer algunas federaciones con conflictos internos, un objetivo que había sido adoptado en un ampliado realizado en julio, en Lauca Ñ, antes de la adopción de las medidas de protesta que, como vimos, no fueron resultado de una acción coordinada.

El inicio de la campaña electoral coincidió con una arremetida contra Evo Morales, quien fue acusado de "terrorismo y delitos de lesa humanidad" ante un tribunal internacional y, también, por estupro y pedofilia mediante una campaña mediática que incluyó la presentación de documentos falsos y la victimización de una joven. Evo Morales no se manifestó respecto a estas denuncias y varios asambleístas y dirigentes, así como Luis Arce y David Choquehuanca, señalaron que era un asunto de índole personal que debía ser aclarado mediante una investigación judicial. Ahora bien, esa campaña contra Evo Morales pasó a segundo plano cuando se ratificó su inhabilitación como candidato a senador por Cochabamba, un tema convertido en objetivo crucial por sus detractores. El dictamen fue aceptado por Evo Morales y sus seguidores guardaron silencio ante una decisión que resultaba favorable para la estrategia electoral del MAS-IPSP, considerando el rechazo que genera la figura de Evo Morales en amplios sectores de la población urbana. Una situación problemática, sin duda, puesto que Evo Morales era jefe de campaña y, en la medida que fue elegido en el ampliado de diciembre de 2019, no podía ser sustituido por otra instancia. Nadie planteó esa posibilidad pero es evidente que ese rol del líder no resultaba beneficioso para la estrategia electoral del MAS-IPSP.

Un día antes de la ratificación de la inhabilitación de Evo Morales, el 6 de septiembre de 2020, se produjo el lanzamiento oficial de la campaña electoral mediante Facebook Live y el jefe de campaña no tuvo protagonismo alguno (apenas fue mencionado por el candidato presidencial). En los meses anteriores, Evo Morales participaba en diversos eventos de su partido mediante plataformas digitales o llamadas telefónicas pero, a medida que pasó el tiempo, su participación se limitó a entrevistas dominicales en Radio Kawsachun Coca y mensajes en su cuenta de Twitter.

Es decir, la figura del líder ya no ocupaba un lugar central en el discurso proselitista del MAS-IPSP, su rol como jefe

de campaña fue nominal y su fuerza simbólica se debilitó, así como su capacidad decisoria, y de manera paulatina las referencias a su figura destacan más su aporte histórico al proceso de cambio que por su aporte a la estrategia electoral. Los actos proselitistas del MAS-IPSP retomaron su estilo asentado en la movilización territorial pese a las restricciones impuestas por la pandemia; un estilo que depende de la fortaleza orgánica del Pacto de Unidad reagrupado después de las disonancias en sus filas durante la protesta de agosto. Paralelamente, la bancada legislativa del MAS afianzó su rol fiscalizador y Eva Copa, con un fuerte capital político forjado en el ejercicio de la presidencia del Senado, se unió a los actos proselitistas de su partido. Es decir, existe una nítida convergencia hacia una acción cohesionada entre las organizaciones sociales, la bancada parlamentaria y el partido con una diferencia notable respecto al pasado inmediato: el centro de la campaña es ocupado por el binomio y la presencia de Evo Morales tiende a ser marginal, excepto cuando sus declaraciones en la prensa o sus mensajes por las redes sociales provocan reacciones negativas para la estrategia electoral del MAS porque alientan los discursos antimasistas. Un ejemplo fue su mensaje anunciando que si el MAS-IPSP resultaba vencedor en las elecciones regresaría al país al día siguiente. Una consigna cuya importancia política fue relativizada por Luis Arce quien señaló que Evo Morales tenía derecho a retornar para defenderse de las acusaciones en su contra; asimismo, Eva Copa declaró que ese tema era secundario en las preocupaciones de la campaña de su partido. Adicionalmente, David Choquehuanca declaró que, en caso de asumir el gobierno, el MAS-IPSP debería prescindir del "entorno de Evo Morales" y remarcó: "Nosotros vamos a gobernar escuchando al pueblo, y el pueblo nos pide en las reuniones que el entorno ya no va a volver" (*Página Siete*, 21 de septiembre de 2020).

En suma, en el transcurso de nueve meses se ha producido un desplazamiento en el eje decisorio del MAS-IPSP no

tanto como resultado de un acuerdo concertado sino como consecuencia de una serie de vicisitudes que terminaron desplazando, en algunas ocasiones, a Evo Morales o mitigando el efecto de sus determinaciones que antaño eran decisivas. En esa medida, es posible afirmar que el modelo decisional del MAS-IPSP ya no depende de la centralidad de su líder histórico puesto que su liderazgo se fue debilitando en el transcurso del tiempo, debido a que ya no dispone de los recursos de poder que le otorgaba el ejercicio de la presidencia, en razón de su ausencia del país y también porque las directrices, desde Buenos Aires, perdieron influencia a medida que la campaña electoral puso en el centro de la escena al binomio presidencial. Paradójicamente, algunas declaraciones públicas de Evo Morales tienen un efecto negativo en la campaña de su partido puesto que incitan a la movilización de las fuerzas rivales que siguen encuadradas en un discurso anacrónico que se sintetiza en una consigna: "Evitar el retorno del dictador". En la medida en que sus mensajes no tengan un efecto perturbador en el discurso proselitista del MAS-IPSP, se afirmarán las posibilidades de victoria de Luis Arce y David Choquehuanca.

Proceso decisional interno y campaña electoral

El MAS-IPSP está en búsqueda de una nueva metodología para tomar decisiones, habida cuenta que el modelo de antaño no es eficaz ni legítimo en la actualidad. Seleccionamos cinco momentos decisivos para dar cuenta de un andar complejo que se puso de manifiesto, en primera instancia, en la rearticulación orgánica de su base social popular; en segundo lugar, en la existencia de tensiones internas en torno a la selección del binomio presidencial que redefinieron las relaciones entre Evo Morales y las organizaciones sociales; en tercer lugar, a través de una convergencia general y una conducta cohesionada de los diversos actores de esta fuerza política en torno a un objetivo común que se manifestó en la

recuperación de iniciativa política; en cuarto lugar, en una discordancia en el accionar de las organizaciones sociales, de la bancada legislativa y del líder durante los bloqueos; y, finalmente, en la rearticulación del conjunto de actores en torno a la campaña electoral con mayor protagonismo del binomio y una disminución de la incidencia de Evo Morales.

No existe un actor que sea el referente excluyente y el portavoz único de las posiciones del MAS-IPSP. La ausencia de Evo Morales, asilado en Argentina, convirtió a Buenos Aires en un ámbito decisorio pero sus directrices no fueron aceptadas de manera lineal por los dirigentes de las organizaciones sociales. Varias acciones reflejaron nítidamente esta situación puesto que algunos actores –cercanos a Evo Morales en Buenos Aires– plantearon, a principios de este año, enfrentar al gobierno interino con movilizaciones de protesta y pedidos de renuncia de Áñez, además de cuestionar al nuevo TSE y denunciar un supuesto fraude en marcha; en cambio, otros actores –locales– optaron por la vía de las negociaciones para frenar la represión gubernamental o por la resistencia pacífica y la rearticulación organizativa con fines electorales. Algo similar ocurrió en agosto, aunque de manera inversa, con un accionar autónomo de las organizaciones sociales y una aceptación tardía y a regañadientes de una directriz de Evo Morales que planteó la aceptación de la fecha de elecciones mientras que la protesta exigía la renuncia de Áñez.

El MAS-IPSP ha vuelto a tener como su base primordial de apoyo a las organizaciones campesinas e indígenas, un rasgo de su momento fundacional a fines del siglo pasado. La importancia del Pacto de Unidad se puso de manifiesto en el proceso de definición del binomio presidencial. En un ampliado nacional aprobó una fórmula que expresaba su composición rural e indígena, en cambio, Evo Morales planteó un binomio distinto que combinaba lo urbano y rural –un representante de la clase media y un indígena–. Ante esta contradicción, el Pacto de Unidad rechazó las

determinaciones asumidas en Buenos Aires, sin embargo, en otro ampliado nacional, y después de un largo y tenso debate, aceptó el binomio aprobado en Buenos Aires. Es decir, en un ampliado se redefinió la estructura orgánica en torno al Pacto de Unidad y en otro se puso en cuestión el decisionismo del líder, mostrando la importancia de la deliberación democrática en su funcionamiento.

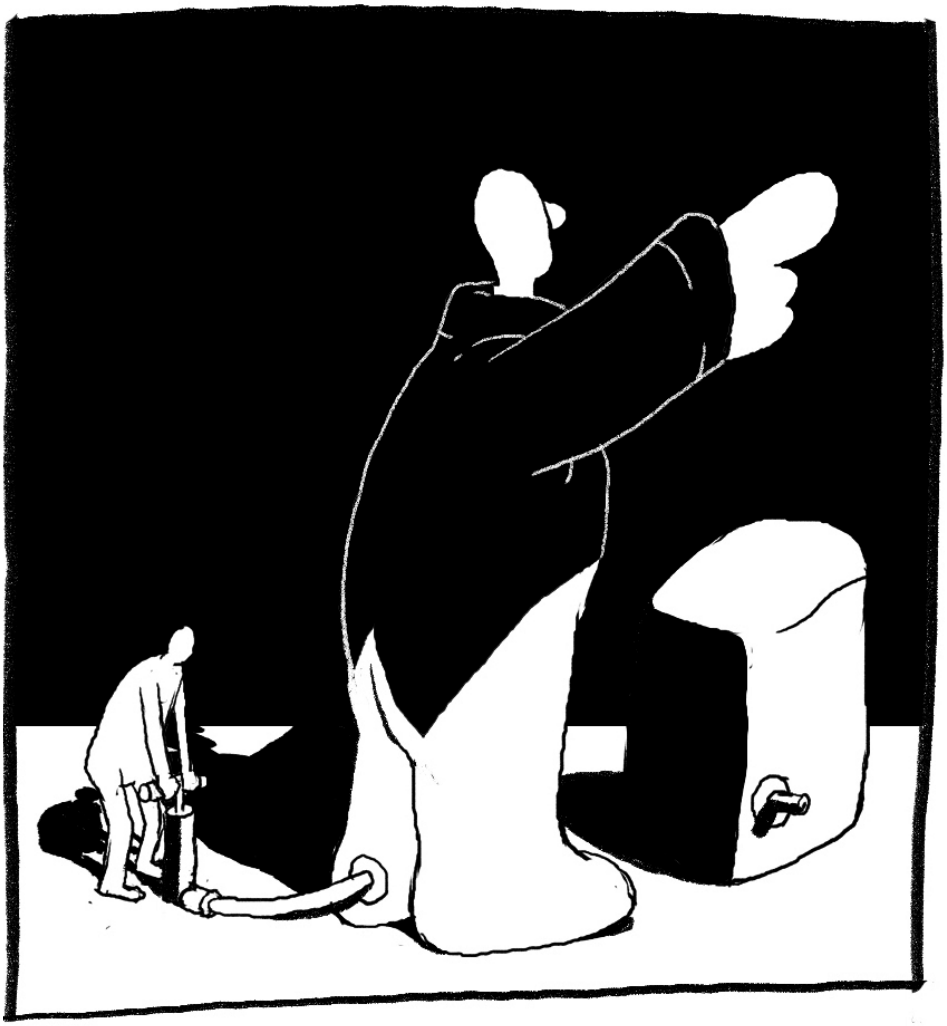
Las prácticas deliberativas no son novedosas en el MAS-IPSP; al contrario, son constitutivas de su origen y no son excluyentes con la existencia de un liderazgo. La aparición de la figura de Andrónico Rodríguez en reemplazo –temporal– de Evo Morales condensa esos rasgos porque este joven dirigente –que cumplió 30 años el 11 de noviembre de 2019, un día después del golpe de Estado– asumió tácitamente la conducción del Pacto de Unidad y participó, desde entonces, en múltiples eventos y ampliados regionales y tiene una notable convocatoria entre los sectores juveniles. Este dirigente no disputa el sitio de Evo Morales pero se perfila como un sucesor por su peso en la red de organizaciones aglutinadas en el Pacto de Unidad. Es candidato a senador por Cochabamba, pero antes y durante la campaña electoral ha sido invitado a participar en actos de proselitismo en diversas regiones del país porque se ha constituido en un referente nacional de la identidad renovada del MAS-IPSP, la cual apuesta a la continuidad del proceso de cambio en las nuevas circunstancias políticas. Algo análogo sucede con Eva Copa, quien participa en diversos actos proselitistas del partido, no solamente en El Alto, en una demostración de los efectos internos de su labor al mando del Senado. Es decir, en esta fase de su historia, el MAS-IPSP muestra señales de una *renovación de liderazgo* merced a la vitalidad de las organizaciones campesinas e indígenas y al desempeño de la bancada legislativa, aunque éste es un tema que, en la actualidad, no forma parte del debate interno y su decurso dependerá de las vicisitudes del proceso político.

Actualmente no existe un centro decisional en el MAS-IPSP y, si formalmente Evo Morales tenía la última palabra, su incidencia ha disminuido con el paso del tiempo. Esta situación se explica, en cierta medida, por las campañas gubernamentales mediáticas desatadas en su contra por parte de sus rivales, pero también por su silencio ante las denuncias sobre su conducta personal. Su nombramiento como jefe de campaña y los viajes de dirigentes a Buenos Aires denotaban la centralidad de su liderazgo, empero algunas de sus decisiones fueron cuestionadas, criticadas o matizadas en el momento de su aceptación y/o ejecución. Esas tendencias relativamente centrífugas se mitigaron a fines de abril por un comportamiento convergente en torno a la aprobación de la ley relativa a la fecha de los comicios. Algo que no ocurrió en agosto en torno a un tema similar. Esta incongruencia hace difícil establecer que se haya configurado un nuevo modelo decisional con un actor central, como acontecía en el pasado.

En el trecho final de la campaña electoral las tensiones internas se han mitigado porque el papel del binomio es más decisivo. Sin embargo, se mantiene la fisura entre exautoridades gubernamentales, algunas con asiento en Buenos Aires, y dirigentes de las organizaciones sociales. Se trata de una fisura que salió a relucir claramente en el conflicto de agosto con las críticas de una dirigente del Pacto de Unidad a las exautoridades de "clase media", así como con la advertencia del candidato vicepresidencial de que, en caso de victoria en octubre, el "entorno de Evo Morales" no será tomado en cuenta. Es evidente que las organizaciones sociales serán el hueso de la campaña y se fortalecerá su nexo con el binomio. Queda la incógnita del rol de Evo Morales, jefe de campaña y líder del MAS, pero, cada vez más, reconocido por su legado histórico (y, cada vez menos, por su protagonismo actual).

En suma, después de una grave derrota y ante un contexto político adverso, el MAS-IPSP encaró un proceso de

adaptación que puede entenderse, también, como un retorno a sus orígenes puesto que las organizaciones del Pacto de Unidad asumieron la conducción de la resistencia al gobierno y fueron protagonistas en la definición del binomio, así como son el baluarte de las masivas movilizaciones proselitistas en todo el país ratificando su condición de fuerza política nacional, la única con arraigo social popular, estructura orgánica y presencia territorial. Es decir, el MAS-IPSP volvió a ser un "instrumento político" de las organizaciones sindicales. Y aunque persiste el peso de su líder, Evo Morales ya no domina de manera exclusiva el proceso decisional.



II

La crisis del sistema de representación política: Los partidos opositores al MAS en el interregno post y preelectoral (2019-2020)

María Teresa Zegada C.

El escenario preelectoral de 2020 se ha visto ensombrecido por los efectos del Covid-19 propagado por el mundo. Si bien se ha producido una pausa en las actividades político-electorales hasta la definición de una nueva fecha de elección que se ha ido postergando sucesivamente por las urgencias sanitarias, los factores en conflicto permanecen y tienden a agravarse en la medida en que algunos candidatos ejercen presión para apresurar la elección, mientras otros consideran oportuno esperar que las condiciones de salud mejoren para garantizar la vida de los ciudadanos. Estos desacuerdos, que parecen un simple detalle procedimental, expresan, sin embargo, una acumulación de tensiones políticas directamente relacionadas con la disputa instalada en el país desde hace algunos años que pretende resolverse por la vía del voto.

La fallida elección de octubre pasado, así como la que se avecina, visibilizan un sistema de partidos fracturado y la carencia de estructuras organizativas sólidas y partidos programáticos. Esta crisis política se explica, entre otras razones, porque el Movimiento al Socialismo (MAS), durante los 14 años en el poder, buscó consolidar un sistema de partido predominante ejerciendo el monopolio legítimo de la violencia simbólica, sostenido en sus sucesivas victorias electorales e invalidando a sus posibles oponentes nacionales.

En todo caso, aún no está claro si se trata de una crisis del modelo estatal implantado con la llegada del MAS al gobierno en 2006 y con la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, o se trata solamente el agotamiento de un estilo de gestión que adoptó el gobierno en los últimos años, y que fue erosionando su legitimidad. Aunque no es el objeto del presente ensayo responder a este cuestionamiento, el análisis de los actores políticos, sus discursos y posicionamientos en la actual coyuntura dan cuenta de este trasfondo.

Elecciones generales de 2019: Antecedentes necesarios

El primer antecedente de la situación actual de crisis política que no se puede ignorar, es la insistencia del MAS en repostular a Evo Morales como candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva, para lo cual acudió a varias estrategias; la primera fue modificar la CPE mediante un referéndum realizado el 21 de febrero de 2016, cuyos resultados no fueron favorables para el MAS pues rechazaron una posible repostulación. El 21F constituye un punto de inflexión para la política boliviana porque revela el principio del fin del sistema de dominación ejercido por el gobierno de Evo Morales e instala una polarización política entre los sectores afines al MAS que apoyaban el continuismo de Morales y quienes, desde la oposición, exigieron, sin tregua, el respeto a los resultados de la votación y la defensa de la democracia y la institucionalidad, que permaneció hasta la renuncia del expresidente.

La derrota del MAS en el Referéndum del 21F obligó a ese partido a acudir a otras estrategias para consolidar la repostulación del entonces presidente, recurriendo a una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyo veredicto a favor de Morales se conoció, mediante la Sentencia

Constitucional 0084/2017, de 28 de noviembre de 2017, días antes de la renovación de las autoridades judiciales. Dicha sentencia habilitaba al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida. Finalmente, la candidatura de Morales fue sellada prácticamente un año antes de la elección general de 2019, con la realización de elecciones primarias internas, cerradas, obligatorias y simultáneas, propiciadas justamente por los asambleístas del MAS en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas. Si bien las elecciones primarias se realizaron en enero de 2019, a fines de noviembre de 2018 concluyó el plazo para las postulaciones.

Un dato relevante que proviene de dicha experiencia de elecciones primarias –y que resulta relevante para el presente ensayo– se refiere a los registros de militantes con que contaba cada organización política en ese momento. De acuerdo a la información del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en octubre de 2018, la militancia nacional inscrita en el MAS alcanzaba a un total de 991.092 inscritos, es decir el 57,7% de la militancia total registrada, seguida por el frente 21F (que agrupaba, principalmente, al Movimiento Demócrata Social, MDS), el cual contaba con 292.490 militantes (17% del total); mientras los demás partidos estaban por debajo de los 100.000 militantes y no trascendían el 6% del total de militantes inscritos. Este dato revela la crisis de participación política en los partidos, excepto el MAS, cuya estructura política basada en las organizaciones sindicales –principalmente campesinas– le permite un anclaje territorial amplio. Por otra parte, los resultados de las primarias, realizadas el 27 de enero de 2019, fueron irrelevantes porque en cada organización política se presentó un solo binomio para la votación interna de sus militantes (binomios que, por razones obvias, resultaron ganadores). No obstante, de acuerdo a la ley, este resultado era vinculante con respecto a las elecciones generales de

octubre de 2019, pues ése era el objetivo que se propuso el entonces partido de gobierno.

Ahora bien, de cara al proceso electoral de octubre de 2019, desde el momento de la convocatoria formal realizada en junio, se pudieron percibir una serie de irregularidades y situaciones confusas generadas por la actuación parcializada del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A continuación, repasaremos las más relevantes. En primer lugar, las denuncias de empadronamiento irregular en Riberalta (Beni) y los pedidos de anulación del padrón en ocho municipios de Pando –por el delito denominado como "acarreo de votantes"– no fueron debidamente atendidos por el TSE. En segundo lugar, la falta de pronunciamiento sobre denuncias contra el candidato Evo Morales por hacer campaña y pedir el voto ciudadano vulnerando las normas; o las quejas respecto a que el MAS obligaba a funcionarios públicos a asistir a las proclamaciones del presidente-candidato, el uso irregular del avión presidencial y el helicóptero para hacer campañas, los gastos en transmisiones directas de entrega de obras, entre otros. En tercer lugar, las denuncias sobre la existencia de cédulas de identidad duplicadas o triplicadas que correspondían a personas fallecidas o que no vivían en Bolivia. Finalmente, los datos alarmantes sobre el crecimiento desmesurado del padrón electoral en ciertos territorios dentro y fuera del país, denunciados en su momento ante la opinión pública.

Por otra parte, se pusieron en evidencia las contradicciones y pugnas internas entre las máximas autoridades del TSE, denotando su inconsistencia respecto a decisiones preelectorales importantes de diversa índole, así como el alejamiento de más de 30 funcionarios de puestos clave de esta entidad y del Servicio de Registro Cívico (SERECI), encargados de identificación y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pocas semanas antes de la elección.

Estos hechos agravaron la desconfianza de la oposición, de la opinión pública y de la ciudadanía en relación al organismo electoral, situación que se reflejaba, por una parte, en encuestas –por ejemplo, según Mercados y Muestras, el 69% de la población afirmaba que habría "fraude electoral"[1]– así como, por otra, en reiteradas protestas ciudadanas convocadas por los cívicos, por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y las plataformas ciudadanas que exigían la renuncia de los vocales del TSE y el respeto al voto del 21F. Por último, la desconfianza hacia el proceso electoral se hizo también evidente en la creación de entidades paralelas de control ciudadano del voto para el día de la elección.

En relación con las campañas políticas, se percibió la ausencia de debate y propuestas programáticas. Mientras el MAS se centraba en destacar las virtudes de la gestión de gobierno y ofrecía continuismo y estabilidad, los partidos opositores, con escasa capacidad propositiva destacaban los aciertos o errores del gobierno. En realidad, el debate político de fondo que marcó esta elección plebiscitaria fue la polaridad entre continuismo de Morales versus la necesidad de un cambio. Un hecho que afectó negativamente al entonces partido en el poder fue el incendio intempestivo, semanas antes de la elección, de los bosques amazónicos de la Chiquitania con consecuencias devastadoras para el ecosistema y para los pueblos indígenas. De manera generalizada, se responsabilizó al gobierno por esta situación debido a que el presidente Evo Morales había promulgado una ley, en 2016, que autorizaba desmontes en predios agrícolas, y meses antes de la elección, se había emitido un decreto supremo que autorizaba y

1 En agosto de 2019, la empresa Mercados y Muestras publicó una encuesta según la cual el 69% de los encuestados percibía que habría fraude electoral. Más adelante, otra encuesta difundida por Radio Erbol, establecía que el 87% de los encuestados confiaba poco o nada en el OEP.

legalizaba las "quemas controladas", lo cual fue calificado por ambientalistas e indígenas como "genocidio ecológico".

La elección fallida de octubre y sus consecuencias

La jornada electoral fue pacífica, con las dificultades propias de cualquier proceso electoral nacional. Los problemas comenzaron, sin embargo, cuando, a las 19:40 de la noche, súbitamente, se suspendió la emisión del TREP al 83,76% de avance del conteo.[2] En ese momento, Evo Morales llegaba al 45,28% de los votos y Carlos Mesa al 38,16% con lo cual la tendencia apuntaba a una segunda vuelta electoral. Por su parte, los datos difundidos por una empresa de conteo rápido autorizada por el OEP (VíaCiencia) informaban que, al 100% del recuento, Morales alcanzaba el 43,9% mientras que Mesa obtenía el 39,4%, lo que confirmaba una segunda vuelta, coincidiendo, además, con los resultados difundidos por Tu Voto Cuenta.

Cuadro 1. Comparación del TREP con otras empresas autorizadas para el conteo de voto

Organizaciones políticas	TREP (al 83,76%, 20/10/19)	TREP (al 95,30%, 21/10/19)	Tu Voto Cuenta (al 100%)	VíaCiencia (al 100%)
Comunidad Ciudadana (CC)	38,16%	36,72%	38,6%	39,4%
Frente para la Victoria (FPV)	0,38%	0,39%	0,4%	0,3%
Movimiento Tercer Sistema (MTS)	1,26%	1,26%	1,2%	1,2%

(Continúa en la siguiente página)

2 El sistema consistía en el envío por celular de fotos de las actas desde distintos recintos electorales al TSE, a través de una aplicación. La empresa contratada para prestar este servicio fue Neotec, dirigida por Marcel Guzmán de Rojas.

Organizaciones políticas	TREP (al 83,76%, 20/10/19)	TREP (al 95,30%, 21/10/19)	Tu Voto Cuenta (al 100%)	VíaCiencia (al 100%)
Unidad Cívica Solidaridad (UCS)	0,41%	0,42%	0,6%	0,5%
Movimiento al Socialismo (MAS - IPSP)	45,28%	46,86%	44,1%	43,9%
Bolivia Dice No 21F	4,41%	4,21%	5%	4,5%
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	8,77%	8,79%	8,6%	8,7%
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)	0,68%	0,69%	0,8%	0,8%
Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-BOL)	0,64%	0,65%	0,7%	0,7%

Fuente: Elaboración propia con base en la Publicación de Resultados de las Elecciones Generales 2019 de la OEP, imágenes del SIMOBOL del 20, 21 y 22 de octubre de 2019 para el caso de la TREP (las mismas hoy se encuentran borradas en las redes), reporte de VíaCiencia de la Red Unitel y del Informe de Tu Voto Cuenta, al 100% del recuento.

Ante la irregularidad de la suspensión intempestiva del TREP, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) reaccionó esa misma noche cuestionando esta decisión, al tiempo que, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el presidente Morales se declaraba ganador asumiendo a su favor los votos del área rural. Por su parte, Carlos Mesa emitía un video en el que advertía que no permitiría la manipulación de los resultados y exigiendo segunda vuelta. Al día siguiente, la MOE ratificó oficialmente su pronunciamiento mediante un comunicado de prensa. El candidato presidencial por CC convocó a una movilización pacífica en defensa del voto. Del mismo modo reaccionaron inmediatamente las organizaciones de la sociedad civil como los comités

cívicos, las plataformas, el Conade y otros ciudadanos que, espontáneamente, acudieron a las marchas y vigilias a las puertas de todos los Tribunales Electorales Departamentales (TED), así como a la sede del TSE en La Paz. En varios casos, estas protestas derivaron en la quema de las instalaciones de los TED y en la destrucción de valiosa documentación.

El cambio de timón en la votación registrada en el TREP fue justificado por el partido de gobierno señalando que se trataba de la llegada tardía de información del voto rural; sin embargo, días después (30 de octubre) el exvicepresidente del TSE, Antonio Costas, aseguró a la prensa que no fue el voto rural el que faltaba escrutar la noche de la suspensión del TREP, pues el cómputo publicado era representativo del total nacional. En los días siguientes a la elección, las denuncias de irregularidades comenzaron a inundar los medios de comunicación y las redes sociales, difundiéndose, por ejemplo, la aparición de papeletas fuera de los recintos electorales y la preexistencia de papeletas marcadas. Por otra parte, varios estudios de técnicos y profesionales ciudadanos explicaban los mecanismos que se habrían utilizado para la manipulación informática antes, durante y después de la votación.

El 23 de octubre se creó una Coordinadora en Defensa de la Democracia y se inició un paro indefinido nacional promovido por las entidades cívicas y plataformas del país exigiendo segunda vuelta. El mismo día en que se masificaron las movilizaciones, Evo Morales denunció una conspiración y un golpe de Estado de la derecha con apoyo internacional. En ese contexto, pidió a la OEA que realice una auditoría de la elección y culpabilizó a Mesa por los enfrentamientos y la violencia. Con el transcurso de los días, la movilización ciudadana y los bloqueos con "pititas"[3] se fueron masificando

3 Esta nominación proviene del expresidente Morales quien, ante la presión social, comenzó a ridiculizar públicamente las formas

con la participación de estudiantes universitarios, vecinos, sectores populares urbanos, grupos de mujeres, y otros; asimismo, se intensificaron los enfrentamientos con sectores afines al MAS, como la Conalcam, los sindicatos campesinos, las "bartolinas" y un sector de los "ponchos rojos", entre los principales, que salieron a manifestarse en defensa del presidente.

Cuatro días después de la elección (24 de octubre), el TSE anunció que, concluido el cómputo oficial, Evo Morales resultaba vencedor en primera vuelta con el 47,08%, CC obtenía el 36,52%, PDC (Chi Hyun Chung) el 8,78%, y Bolivia Dijo No (Óscar Ortiz) el 4,24%. El resto quedaban con alrededor del 1% de los votos. Sin embargo, los datos electorales oficiales del OEP dejaron una sombra de duda por el contexto de cuestionamientos señalados e intensificaron la indignación y la ola de protestas. La agitación social se expandía al mismo tiempo que comenzaba el "cerco" a las ciudades instruido por el entonces presidente Morales. Se produjeron enfrentamientos violentos a favor y en contra del presidente. Algunos sectores indígenas articulados en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) denunciaron los actos de represión por parte del gobierno, y los mineros de Porco, los fabriles y otros sectores populares se sumaron a la revuelta contra Evo Morales. Los cívicos del Sur endurecieron sus demandas exigiendo la expulsión del presidente y la realización de nuevas elecciones, del mismo modo que el Comité Cívico Popular de Cochabamba. De ahí en más, se produjo un desplazamiento discursivo

---

de manifestación de los ciudadanos movilizados en su contra. En este sentido, en una concentración en Cochabamba señaló: "Me he sorprendido, ahora dos, tres personas amarrando 'pititas', poniendo 'llantitas', qué paro es ese (...) Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas a ellos para que aprendan" (*Página Siete*, 24/10/2019).

generalizado de la demanda de segunda vuelta hacia la renuncia de Morales y de los vocales del TSE, y la anulación de las elecciones.

La dinámica del conflicto no se detuvo y las denuncias sobre las irregularidades en el proceso de elección continuaron: entre otras, las de las empresas contratadas por el OEP como Neotec –encargada del servicio de mantenimiento y soporte técnico para el TREP– y Ethical Hacking –a cargo de la supervisión y auditoría del proceso–. Ambas ratificaron que hubo irregularidades. Al mismo tiempo, exdirigentes de la COB convocaron al desacato sindical contra el fraude electoral y en defensa de la democracia; cooperativistas mineros de base rebasaron a sus dirigentes y pidieron la anulación de elecciones, y la nación Qhara Qhara le exigió al presidente que deje de hablar a nombre de los indígenas.

En medio de la tensión, un cabildo cívico en Santa Cruz le otorgó al presidente del Estado 48 horas para que renuncie. Esta iniciativa dio lugar a un viaje del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, a la sede de gobierno con una carta para entregársela personalmente a Evo Morales y pedirle su renuncia. Paralelamente, se agravaron los enfrenamientos con el saldo de muertos y heridos en distintos lugares del país. Unos días antes de la renuncia de Morales, se precipitó un motín policial y dimitieron varias autoridades afines al MAS a nivel nacional y subnacional (algunos debido a las agresiones de que fueron objeto ellos y sus familias por parte de los sectores movilizados).

El día de la renuncia de Evo Morales (10 de noviembre) fue aún más intenso. En la madrugada se difundió públicamente el informe de la OEA en que se confirmaban irregularidades en la elección.[4] También, ese mismo día, se produjeron

4 El día 10 de noviembre a las 5:10 h de la madrugada, Luis Almagro, secretario general de la OEA, escribe en su cuenta de Twitter que el Informe preliminar de la auditoria de la OEA

graves enfrentamientos en la zona de Vila Vila (carretera Oruro-La Paz), cuando mineros cooperativistas que se dirigían en caravana a la sede de gobierno fueron agredidos y emboscados con armas de fuego por campesinos afines al MAS. El presidente Morales primero convocó al diálogo y horas más tarde anunció la necesidad de nuevas elecciones con nuevo TSE. En ese contexto, se produjo la renuncia de la presidenta del OEP, María Eugenia Choque. Por su parte, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, emitió un pronunciamiento en el que le pedía a Evo Morales que renuncie a la presidencia para pacificar el país. Por último, las Fuerzas Armadas, representadas por su comandante general, Williams Kaliman, le "sugirieron" a Evo Morales que renuncie, a través del siguiente comunicado:

> Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y luego de analizar la situación interna, sugerimos al presidente que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación. Pedimos al pueblo boliviano detener la violencia para no manchar con sangre y dolor a nuestras familias.

A las 16:01 h Evo Morales abordaba el avión presidencial desde la sede de gobierno hacia Chimoré (Chapare). Minutos más tarde, el comandante de la Policía, Yuri Calderón,

---

determina la nulidad de las elecciones por fraude electoral, pues se detectó manipulación del TREP, falsificación de firmas y otras irregularidades, por lo que piden nuevas elecciones y nuevo OEP. Más adelante, en una parte destacada del informe de la OEA se señala que "resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta... El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables". Pasados algunos meses, sin embargo, surgieron algunas investigaciones externas que refutaron este informe, lo cual reavivó la polémica sobre el fraude electoral.

también pedía la renuncia de Morales. A las 16:50 h se conoció públicamente, a nivel nacional, la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El desenlace posterior de los hechos es conocido. Se produce el abandono del país por parte del presidente Morales y la solicitud de asilo político en México junto a su grupo de colaboradores; la renuncia de las principales autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pertenecientes al MAS; y un proceso de negociación para la sucesión presidencial por abandono de funciones que recae en la senadora Jeanine Áñez, con lo cual se inicia el mandato constitucional de un gobierno transitorio que tenía la clara finalidad de pacificar el país, convocar a nuevas elecciones y garantizar la elección de un nuevo OEP. En ese interregno de diálogo y negociación intervinieron actores políticos, dirigentes sociales, la comunidad internacional y la Iglesia. Más adelante este acuerdo fue sellado en la ALP y se procedió a la promulgación de la Ley de convocatoria a nuevas elecciones y a la renovación total de autoridades del TSE.

Roles y percepciones de líderes opositores al MAS durante el conflicto postelectoral[5]

El momento político postelectoral (octubre y noviembre de 2019) es revelador de la profunda crisis de las instituciones políticas de la democracia boliviana. Por una parte, del Órgano Electoral de entonces; por otra, de la debacle del gobierno del MAS que se precipita con las irregularidades y el fraude electoral

5 Para el presente ensayo se realizó una revisión hemerográfica de la coyuntura, un seguimiento a las cuentas de Twitter de los candidatos opositores, y entrevistas (llevadas a cabo entre el 3 y el 5 de mayo de 2020) a representantes de las cuatro organizaciones políticas opositoras más relevantes del sistema: Comunidad Ciudadana, Juntos, Creemos y Libre 21. La identidad de los entrevistados se mantiene en reserva.

perpetrado en octubre. Al mismo tiempo, se evidencia la gran debilidad de los partidos opositores frente a una sociedad que reacciona espontáneamente y se convierte en protagonista de un estallido social de 21 días, logrando desbaratar el tablero de la elección.

Para los fines del presente trabajo, interesa poner atención en las percepciones y el rol que jugaron los principales líderes opositores en el momento del conflicto.

Carlos Mesa fue el principal candidato opositor y, por tanto, se constituía en el factor gravitante para definir una segunda vuelta electoral. Los discursos emitidos en su cuenta de Twitter durante el periodo del conflicto muestran, al principio, un gran protagonismo, en particular cuando exige el respeto a voto y defiende la segunda vuelta electoral. No obstante, cuando se produce un giro discursivo en la coyuntura exigiendo la anulación de las elecciones y la convocatoria a nuevos comicios, Mesa sale del centro del escenario y se suma a las movilizaciones sociales, y adquiere un estado crítico cuando sectores movilizados comienzan a esgrimir el discurso antipolítico: "Ni Evo ni Mesa".

Desde la noche misma de la elección, Carlos Mesa expresó su desconfianza en el TSE. Frente a la intempestiva suspensión del TREP, escribió: "Vamos a ganar esta elección y espero que se reconozcan los resultados", y advirtió que no permitiría que se trate de manipular el resultado, exigiendo la inmediata reanudación del recuento. Al día siguiente convocó a la ciudadanía a "defender la segunda vuelta electoral". Se refería a este episodio como el "segundo robo" del voto, aludiendo al antecedente del 21F. El momento de mayor efervescencia discursiva se produjo cuando, ante las amenazas del MAS, declaró: "O voy preso o voy a la presidencia" (28/10/2019). Más adelante, su discurso asume un matiz ambiguo: "Se puede anular la primera vuelta o hacerse balotaje, pero siempre que Evo Morales no prolongue su mandato más allá del 22 de enero" (29/10/2019). Otra ambigüedad en el discurso de

este candidato se registró cuando cuestionó la auditoría de la OEA argumentando que fue pactada unilateralmente entre esa entidad y el MAS.

Más adelante, Mesa se sumó al giro discursivo de la dinámica social proponiendo "nuevas elecciones y un nuevo OEP" (4/11/2019). Sobre este giro discursivo, el entrevistado de Libre 21 para este trabajo afirma: "Mesa nos ha fallado, él debía haber insistido en ir a la segunda vuelta y no pedir la anulación de las elecciones, otra sería la historia, él sería hoy presidente", y asegura que la OEA hubiera apoyado esta moción.

Un hecho que mantuvo en alerta a Mesa fue la permanente acusación de Morales de ser el responsable de generar violencia y confrontación en el país. En varias ocasiones ratificó que sus convocatorias a la movilización social eran pacíficas y que respetaban el marco de la democracia. La confrontación con el gobierno también se visibilizó cuando Morales, horas antes de su renuncia, invitó a un diálogo a los opositores, el cual fue rechazado, enfáticamente, por Mesa: "No tengo nada que negociar con Evo Morales", dijo.

Por otra parte, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) refutó, desde el principio y con contundencia, la narrativa del golpe de Estado de Morales: "En Bolivia no hubo golpe de Estado, hubo fraude electoral", afirmó (11/11/2019). En el momento del vacío de poder, propuso una salida constitucional y concertada para lo cual solicitó garantías a fin de que los asambleístas del MAS puedan concurrir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), llamando a las Fuerzas Armadas a preservar el orden y la pacificación en todo el país. Finalmente, ante la posesión de la nueva presidenta, Mesa expresó su apoyo aclarando que no formaba parte del gobierno y que ratificaba su participación en los próximos comicios: "Espero tener un resultado que me recupere [*sic*] del robo del que fui víctima", señaló (3/12/2019).

Luis Fernando Camacho, por su parte, es un líder regional cruceño que surge al calor del conflicto: "Le tocó estar a la cabeza de lo que se puede denominar una insurrección pacífica", afirma un representante de esta alianza (entrevista a representante de Creemos). Para Camacho, el enemigo principal en el primer momento del conflicto era el TSE, y luego orientó sus críticas al entonces presidente Morales a quien presionó de manera personal y pública para que renuncie. Así, el momento culminante de su liderazgo fue su entrada al Palacio de Gobierno con una carta de renuncia en una mano y una Biblia en la otra para exigir a Morales que se retire del poder. Estos hechos concitaron la atención de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales, construyendo una imagen simbólica de "heroísmo épico" fuertemente imbuida de elementos religiosos desplegados por él mismo: "Les aseguro que Dios me va a traer con la carta firmada y estaremos de rodillas, dándole gracias a Dios. Solo les pido aguantar un poco más", declaró Camacho en el cabildo cívico de Santa Cruz previo a su partida a la sede de gobierno.

Su presencia política se visibilizó antes de la elección, durante su actuación como líder cívico en las protestas por el 21F y más adelante, durante los incendios de la Chiquitanía. El día de la elección declaraba en su cuenta de Twitter: "Hoy se va el MAS y vuelve la democracia a Bolivia… Dios bendiga a los bolivianos!" (20/10/2019). Ante la suspensión del TREP y las señales de irregularidades –momento clave para el desenlace de la elección– decretó paro cívico indefinido junto a otros sectores como el Conade, unificando la resistencia social. Desde el principio, rechazó la auditoría de la OEA y pidió la anulación de las elecciones: "No vamos a aceptar ninguna auditoría, queremos que se anulen las elecciones", dijo (29/10/2019).

Los discursos de Evo Morales menospreciando la movilización ciudadana, convocando a sus sectores a salir

a defender su triunfo electoral y amenazando a los opositores de una conspiración generaron reacciones discursivas. El 31 de octubre, mediante un tuit, Camacho declaró: "Hemos vuelto a la época de la dictadura militar sólo que ahora la lideran tiranos vestidos de azul, que buscan sangre de su pueblo. No nos van a amedrentar, más bien, nos están alimentando la esperanza!". Su discurso también se dirigía a los miembros del TSE exigiendo su renuncia. Y concluía: "No estamos derrocando un gobierno, estamos liberando una nación" (1/11/2019).

Por otro lado, en medio del conflicto Camacho había estrechado vínculos con Marco Antonio Pumari, el joven presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) con quien posteriormente generaría una alianza política para participar en las elecciones de 2020. La opinión de Camacho respecto de la presidenta Áñez fue experimentando un cambio discursivo gradual; si bien manifestó su apoyo cuando ésta asumió la presidencia transitoria, luego expresó su rechazo a la decisión de convertirse en candidata, calificándola como "moralmente pobre".

Por su parte, *Jorge Tuto Quiroga* reaparece en el escenario político sobre todo en el momento del desenlace del conflicto, es decir durante y después de la renuncia de Morales. Quiroga intervino de manera personal en la salida de Morales de Bolivia y en la sucesión presidencial mediante contactos políticos nacionales e internacionales previos. "Actuó por convicción propia con la democracia", afirma el entrevistado de Libre 21. Interpeló a la OEA desde el momento en que se realizaba la auditoría y cuando se difundieron los datos oficiales del OEP, y le pidió explícitamente que se desconozcan los resultados (24/10/2019). Posteriormente, el mismo Quiroga asumió públicamente que intervino para que Evo Morales abandonara Bolivia: "Nunca pensé hacer gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia", afirmó (12/11/2019). A través de Twitter, el expresidente de

Bolivia lanzaba, permanentemente, duras críticas contra Morales y su gobierno, acusándolo de corrupción, narcotráfico y de mentir a los bolivianos. Tildaba a Morales de "tirano", "ladrón", "mitómano", "tóxico", "fraudulento". También criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al expresidente del Brasil, Lula da Silva, al chavismo en general, al líder de Podemos, el español Pablo Iglesias, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, y a otros aliados internacionales de Evo Morales. Por otra parte, Tuto ha insistido, reiteradamente, en que las razones del conflicto fueron el fraude electoral, la crisis social, la huida de Evo Morales y su doble discurso.

Una vez instaurado el gobierno transitorio, la presidenta Áñez nombró a Jorge Quiroga como delegado presidencial (vocero) ante a comunidad internacional para la defensa de la democracia boliviana, cargo que asumió de manera personal y sin apoyo económico –aclara el entrevistado de Libre 21 consultado para este trabajo–. Si bien Tuto Quiroga fue quien acompañó, junto a otros operadores, a la presidenta Áñez y le dio apoyo durante los primeros meses de su gobierno, más adelante la criticó por lanzar su candidatura y utilizar su gestión como "trampolín político". No obstante, es pertinente aclarar que, días después, él mismo se postuló como candidato para la próxima elección de manera separada de las otras organizaciones políticas que concurrían a los comicios.

Óscar Ortiz, por otra parte, fue candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2019 por la Alianza Bolivia Dice No y representó a uno de los partidos más importantes de la oposición (denominado Demócratas), registrando un bajo desempeño electoral, inclusive en Santa Cruz, donde reside su mayor fortaleza partidaria. Cuando se desencadenó el conflicto, Ortiz apoyó la segunda vuelta –porque "ésa fue la decisión del pueblo", según declaró–, al mismo tiempo que exigió a la presidencia del TSE que respete la decisión del soberano. "Condeno y rechazo estas manipulaciones

en el Tribunal Supremo Electoral, el futuro de Bolivia lo debemos decidir mediante el voto y no en un cuarto oscuro del Tribunal", escribió en su cuenta Twitter el 22 de octubre. Un día después tuiteó: "La desconfianza de la población hacia un órgano sumiso al gobierno y la falta de transparencia durante el proceso nos hacen pensar en el fraude electoral" (23/10/2020). Por otra parte, censuró de manera reiterada la actitud del expresidente: "Los bloqueos convocados por Evo Morales son un cerco y secuestro definitivo de la democracia boliviana. Un presidente que llama a los ciudadanos a cercar a otros ciudadanos traiciona al pueblo boliviano. ¡Resistencia pacífica, activa y democrática!" (28/10/2020). Posteriormente, se sumó a la exigencia de nuevas elecciones. Al igual que Mesa, rechazó la convocatoria de Morales al diálogo realizada horas antes de su renuncia, porque le parecía incoherente con sus acciones.

Finalmente, Ortiz mostró su apoyo incondicional a la presidenta transitoria: "Dios bendiga e ilumine a la nueva presidenta de Bolivia" (13/10/2020) e informó, desde el Senado, sobre las acciones legales realizadas: "Finaliza en la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley para la Realización de las Elecciones Nacionales. Aprobada en ambas cámaras. La transición democrática de Bolivia avanza hacia la reconstrucción de una democracia plena y la recuperación de la paz social. ¡Vamos Bolivia!" (24/11/2019). También expresó su apoyo militante a la decisión de la presidenta de participar como candidata: "#Juntos para seguir avanzando en la reconciliación y la paz de Bolivia. Con la incorporación de Unidad Nacional y la conformación del Binomio @JeanineAnez - @SDoriaMedina, le ofrecemos a Bolivia la seguridad de una alternativa democrática que gane las próximas elecciones" (1/2/2020). "Jeanine Áñez es la única candidata que puede vencer al MAS", declaró días después.

Por su parte, la entonces senadora *Jeanine Áñez* participó activamente durante el conflicto postelectoral inundando

su cuenta Twitter con discursos enardecidos contra el TSE y contra Evo Morales: "El único dueño de la democracia es el 'soberano', dice la Pdta. del TSE. Qué cinismo, señora, respetaron la voluntad del soberano el 21F????", replica Áñez. En el momento de suspensión del TREP, tuiteó: "TSE, son una vergüenza!!! Qué les hizo parar el conteo rápido??? Cretinos serviles, pero el pueblo les cobrará tanta lealtad con el poder!!! #FueraServiles!!!" (21/10/2019). También se enfrentó con la OEA: "Oigan OEA!! Por qué no nos respondieron si era un derecho humano la reelección indefinida en Bolivia?", y continuó: "No sean alcahuetes, OEA".

Sus tuits eran aún más agresivos cuando se refería al expresidente Morales: "Presidente Morales, reconozca la segunda vuelta y no genere violencia en el país!!!". En medio de los enfrentamientos, la ahora presidenta escribía: "Gente hipócrita, matan por poder y se atreven a lamentar los bloqueos! Se olvidan que Morales bloqueaba cuando le daba la gana!" (5/11/2019). Por otra parte, apoyó al líder cruceño Fernando Camacho en su emprendimiento de exigir la renuncia de Morales. El día de su viaje a La Paz carta en mano, Áñez escribió: "Terror a Camacho!" (1/11/2019).

Los ataques de Áñez a Morales fueron permanentes y de tono agresivo: "Lo único claro es que al MAS no le importa que mueran bolivianos, la cosa es por ahora seguir mintiendo con un cuarto mandato, luego con el cinismo que los caracteriza, será reelección indefinida! Fraude y todo, como ahora!" (8/11/2019). Durante el ataque de sectores afines al MAS a la caravana de mineros potosinos que se dirigía a La Paz, Áñez escribió: "Francotiradores en los cerros!!! Evo Morales no hay pacificación con balas!!! Asesino!!! #SOSPOTOSÍ!!!" (10/11/2019). Finalmente, respecto al abandono del expresidente y su exilio en México, la exsenadora dijo en CNN: "No se atrevía a responderle al país (…) Ahora está en México queriendo verse como una víctima y queriendo engañar al mundo".

Una vez investida como presidenta transitoria, Áñez asumió el desafío de pacificar el país y garantizar un nuevo OEP y nuevas elecciones; sin embargo, a fines de enero de 2020 anunció su postulación como candidata a la presidencia, complicando la gestión política del gobierno.

En suma, los actuales candidatos más importantes opositores al MAS jugaron un rol protagónico durante y después del conflicto postelectoral. Este hecho revela la estrecha conexión política que existe entre la anterior elección y la próxima, de la que se espera sea un escenario de resolución pacífica de esta disputa política.

La trama política hacia las elecciones de 2020

Las ocho organizaciones políticas y alianzas habilitadas, inicialmente, para terciar en las elecciones del 3 de mayo de 2020 fueron las siguientes:

1. El MAS, con Luis Arce Catacora como candidato a la presidencia y David Choquehuanca a la vicepresidencia (Evo Morales figuraba como candidato a senador por Cochabamba, pero fue depurado de las listas);
2. La Alianza Juntos, conformada por el Movimiento Demócrata Social (MDS) y tres agrupaciones ciudadanas –Soberanía y Libertad (SOL.bo), liderada por Luis Revilla, UNIR de Víctor Hugo Zamora y Todos, agrupación dirigida por Adrián Oliva–, postulando a Jeanine Áñez a la presidencia y a Samuel Doria Medina a la vicepresidencia (aunque Unidad Nacional, UN, no logró registrarse en la alianza con Demócratas);
3. Por su parte, Comunidad Ciudadana (CC) participó con la misma fórmula anterior: Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Amparada bajo la sigla del FRI, esta agrupación selló una alianza con Chuquisaca

Somos Todos y Primero la Gente, liderada por Rodrigo Paz Pereira;

4. Tuto Quiroga, por su parte, se presentó como candidato a la presidencia con su histórica compañera, Tomasa Yarhui. Con el respaldo del MNR y conformando el frente Libre 21, se alió con la agrupación ciudadana Movimiento por la Soberanía (MPS);
5. El PDC y la UCS inscribieron la candidatura de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el frente Creemos;
6. PAN-BOL hizo una alianza con los cooperativistas mineros e inscribió como candidato del partido a la presidencia a uno de sus dirigentes, Feliciano Mamani;
7. Por su parte, el Frente para la Victoria decidió, esta vez, llevar como candidato presidencial a Chi Hyun Chung, quien había participado con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la elección de 2019;
8. Finalmente, Acción Democrática Nacionalista (ADN) postuló como candidata presidencial a María de la Cruz Bayá, realizando un cambio en su binomio a último momento.

Cabe señalar, por último, que el Movimiento Tercer Sistema, encabezado por Félix Patzi, gobernador del departamento de La Paz, decidió no participar en estos comicios.

Una radiografía de las características de los frentes habilitados muestra que solo dos contaron con candidatos que provienen de trayectorias internas en las organizaciones políticas: el MAS –con Luis Arce Catacora, exministro de Economía del gobierno de Evo Morales–, y la Alianza Juntos, con la candidatura de Jeanine Áñez, militante orgánica del Movimiento Demócrata Social y exsenadora por ese partido. El resto de los candidatos presidenciales (seis) fueron

invitados externos aliados a siglas políticas preexistentes, habiendo participado en política en otros marcos partidarios. No obstante, esto no desmerece las trayectorias político-partidarias de varios de ellos que ejercieron como autoridades nacionales. Esta situación, en todo caso, agrava la debilidad de las estructuras internas de los partidos actuales y sus posibilidades de construcción institucional.

Después de los episodios críticos de octubre y noviembre del año pasado, las elecciones de 2020 son percibidas de distintas maneras por los candidatos opositores al MAS. En el caso de CC, los comicios son vistos, según sus seguidores, como "una segunda vuelta", por lo que decidieron mantener sus principales lineamientos, así como el binomio original; determinación que significó una limitación a la hora de negociar con otros frentes. Sin embargo, algunos factores políticos variaron a medida que las elecciones se aproximaban; quienes acompañaron a Mesa en octubre (SOL.bo y Todos) lo abandonaron y Doria Medina le quitó el respaldo que le había dado. Según nuestro entrevistado (entrevista a representante de CC), esto se debe a intereses personales o a un cambio en la visión política. Por su parte, CC se abrió a conversar con varias candidaturas –incluso con la presidenta Áñez–, pero las negociaciones no prosperaron, por lo que sellaron su alianza con agrupaciones ciudadanas distintas (entrevista a representante de CC). Sin duda, las distancias entre opositores se ahondaron cuando Áñez decidió ser candidata. Al respecto, Mesa afirmó: "Comete una gran equivocación" (25/1/2020).

Por otra parte, la estructura básica de la propuesta electoral de CC para 2019 se mantuvo con miras a las elecciones de 2020. Su plan de gobierno propuso dar respuesta a los problemas urgentes del país, a partir de reformas democráticas, una economía sostenible, comunidades inteligentes y una sociedad justa. En el plano económico, planteó "abandonar el péndulo que unas veces nos conduce al estatismo y otras al liberalismo...", ubicándose en un centro democrático que,

de acuerdo a nuestro entrevistado, no implicaba una base social definida o corporativa, sino, más bien, una apelación a una ciudadanía conformada por sectores medios urbanos aglutinados alrededor de propuestas globales como la defensa de la democracia, los derechos, el medio ambiente; sectores de clase media urbana a los que Mesa interpela con la apelación a un "gobierno de ciudadanos".

En el caso de Fernando Camacho, su tránsito del protagonismo social al ámbito electoral fue rápido e inesperado, porque –según el entrevistado de Creemos– su candidatura no fue pensada en el momento de la "insurrección" pero luego, "el poder es como la mayoría de las cosas, cuando pasa frente tuyo, o lo atrapas o se va a ir", justifica el entrevistado. Como líder cívico, Camacho había acumulado rápidamente fuerza social y simbólica por lo que decidieron lanzarlo a la presidencia, a pesar de que él mismo había afirmado, semanas antes, a través de un tuit: "No soy candidato ni lo seré! Me da asco ver los intereses personales por encima de una nación" (1/11/2019). Su distancia con respecto de la actividad política parecía clara; desde su posición como líder cívico, lanzaba duras críticas a los políticos: "Se aplazó la oposición y es el pueblo que ahora recupera la esperanza por sí solo!", afirmó. O cuando aludió a Mesa durante las movilizaciones: "Que los políticos hagan su parte y nosotros haremos la nuestra".

La construcción de la imagen de Camacho es muy particular, pues está fuertemente marcada por el discurso religioso y cívico. El día de la renuncia de Morales señaló: "Querido pueblo boliviano, la victoria de nuestra Bolivia ya está cerca y tendremos mucho tiempo para festejar cuando recuperemos la democracia. Pero ahora, enfoquemos el paro cívico usando todas nuestras fuerzas y nuestras oraciones para cumplir nuestro objetivo" (10/11/2019). Respecto a sus propuestas electorales, la alianza Creemos construye un plan de gobierno denominado "Creer para crear": "Creemos en los bolivianos, creemos una mejor Bolivia", dice el documento.

Este plan propone eliminar la reelección de autoridades en el Órgano Ejecutivo y el monopolio de la representación política. El principal objetivo de Creemos es "el no retorno al pasado", añade el entrevistado de ese frente. La campaña de Camacho utiliza, reiteradamente, símbolos religiosos, cánticos y rezos, frases como: "Confía en Dios y no en tu propia inteligencia", o "si pones a Dios primero, nada es imposible". Sus seguidores corroboran que "Camacho será bendecido, porque el señor ha derramado su amor".[6]

Camacho admitió sus intenciones políticas después de la renuncia de Morales, dejó la presidencia del Comité Pro Santa Cruz afirmando: "Lo tengo que abandonar por otro anhelo aún más fuerte: ser presidente de la República de Bolivia" (20/11/2019). De ahí en adelante construyó su candidatura personal y en un controvertido proceso de negociación logró una alianza con Marco Pumari, presidente de Comcipo, para llevarlo como candidato a la vicepresidencia. Asimismo, con el fin de obtener personería jurídica selló un acuerdo con el PDC, y más adelante con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) (recordemos que en las elecciones de 2019 el PDC había postulado la candidatura de Chi Hyun Chung y UCS apoyó a Víctor Hugo Cárdenas, denotando estos cambios la fragilidad partidaria de la que hablábamos). El entrevistado de Creemos destaca que la alianza con la agrupación ciudadana Camino democrático para el cambio y el apoyo público de distintos exlíderes regionales de peso, como Leopoldo Fernández en Pando, Mario Cossío en Tarija y Manfred Reyes Villa en Cochabamba, le otorgó a Camacho un perfil nacional. Los acuerdos con los partidos fueron rápidos y sin conflictos, señala el entrevistado, y relata que también habían dialogado con ADN, pero no llegaron a buen término. Del mismo modo,

6 El TSE aclaró que se prohíbe el uso de símbolos religiosos como propaganda electoral, en cumplimiento con el art. 119 de la Ley del Régimen Electoral (LRE).

lograron un acuerdo con la agrupación regional Santa Cruz Somos Todos, del alcalde Percy Fernández, aunque ésta no trascendió.

En cambio, la postulación a las elecciones de 2020 fue, para la presidenta Jeanine Áñez, la manera de proyectar su gestión transitoria hacia un mandato constitucional, a pesar de que antes había manifestado la decisión de no ser candidata. A principios de diciembre de 2019, el flamante ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmaba: "El gobierno no va a apoyar a ningún candidato (…) lo único que quiere este gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos y tener elecciones limpias y transparentes".

La decisión de ser candidata se conoce a fines de enero de 2020: "…hemos logrado construir una gran alianza porque queremos continuar con el trabajo que hemos venido realizando. ¡Muchas gracias por todo el apoyo, podemos hacerlo juntos!". Pocas semanas después se anunció la candidatura de Samuel Doria Medina a la vicepresidencia, como acompañante de fórmula de Áñez. La Alianza Juntos presentó un plan de gobierno denominado "Igualdad de oportunidades, unidad para la democracia, la reconciliación, la justicia social y el crecimiento con estabilidad". El documento establece ideas generales en distintos ámbitos para promover el desarrollo, recuperar la institucionalidad y reestructurar las empresas públicas.

Por su parte, Tuto Quiroga sorprende con la decisión de lanzar su candidatura a mediados de enero e inscribe el binomio de Libre 21, convocando a la unidad étnica, de género y de lo urbano con lo rural. El entrevistado de Libre 21 afirma que Tuto fue un personaje clave en la sucesión presidencial y apoyó la gestión del gobierno transitorio, pero que, por razones principistas, se alejó en el momento en que la presidenta Áñez decidió ser candidata. Recuerda que, durante las discusiones de la Asamblea Constituyente, concretamente en las sesiones de Oruro, la agrupación Podemos, liderada

por Tuto Quiroga, había insistido en eliminar la figura del presidente-candidato, precisamente para evitar lo que sucedió con la presidenta en ejercicio.

La candidatura de Tuto Quiroga encontró en el MNR un aliado idóneo para el "préstamo" de la personería jurídica, pues este partido ya había respaldado a Tuto en las elecciones de 2014. A esta alianza se sumaron dirigentes conocidos, como Lino Villca (líder indígena originario de La Asunta, La Paz), asumiendo la candidatura a senador, por medio de una alianza con su agrupación Movimiento para la Soberanía. Según el entrevistado de Libre 21, esta corriente política tiene la firme intención, a futuro, de construir un partido político. Tuto denominó a su propuesta "Bolivia corazón verde digital 2020-2025" y basa buena parte del contenido en el desarrollo tecnológico e industrial de la explotación del litio, proponiendo convertir a los bolivianos –mediante el "plan pitita"– en accionistas de las empresas, así como la anulación definitiva de la reelección presidencial.

Las propuestas de los candidatos mencionadas previamente provienen de los documentos presentados al TSE, pues las campañas políticas apenas habían comenzado cuando fueron abruptamente interrumpidas por la emergencia de la crisis sanitaria. En todo caso, en términos políticos, más que ideológicos, el tablero electoral para las elecciones del 2020 ubica al MAS en uno de los extremos –conformando un bloque con sus sectores afiliados y leales al "proceso de cambio"– mientras que, en el otro extremo, se sitúan opciones conservadoras como Creemos, Libre 21 y Juntos, mientas que, en un difuso centro político, se sitúa CC. Si bien las tendencias electorales se repiten pronosticando al MAS como ganador y a CC como segundo, las distancias son variables de acuerdo a las distintas encuestas autorizadas.[7]

---

7 La primera encuesta electoral fue realizada por Ciesmori y se publicó el 18 de febrero en *Página Siete*. Mostraba que los

Como se puede ver, nuevamente la fractura MAS vs "anti-MAS" predominó en el mapa político de cara a los comicios de 2020, agravada por las tensiones que se generaron en distintos lugares del país a raíz de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria, las medidas de cuarentena y, sobre todo, debido a las discordancias sobre la fecha de realización de las elecciones.

La oposición se presentó a esta elección aún más fragmentada, a pesar de que, como relatan algunos entrevistados, se hicieron intentos por consolidar alianzas. El acto más concreto de intento de unidad fue propiciado por Camacho cuando, en febrero, decidió dejar su candidatura "en blanco" y, a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz, congregó a todos los candidatos opositores. Si bien al acto asistieron todos (18/2/2020), en sus alocuciones reafirmaron, con distintos argumentos, la pertinencia de participar de manera separada.

El contexto político entre la anterior elección general y la de 2020 varió. En primer lugar porque, a diferencia de lo ocurrido en los anteriores comicios, en 2020 se cuenta con un Órgano Electoral legítimo, producto de un acuerdo parlamentario de las fuerzas políticas, lo cual también ha significado un claro viraje en la opinión pública.[8]

---

candidatos favoritos eran Luis Arce, con una intención de voto del 31,6%, seguido por Carlos Mesa, con el 17,1%, y en tercer lugar Jeanine Áñez con el 16,5%. Por otra parte, en julio se publican dos encuestas autorizadas: la de IPSOS y la de Mercados y Muestras. La primera se aplicó solo a ciudades capitales y El Alto, y en ella Arce y Mesa empataban con alrededor de un 26%, mientas que Áñez apenas alcanza el 14%. En la segunda, que tuvo una cobertura nacional urbano-rural, Arce ocupaba el primer lugar con el 24%, seguido por Mesa (20%) y, en tercer lugar, Áñez (16%).

8 Un estudio Delphi (método de comunicación estructurada) difundido el 30 de abril de 2020 y realizado a líderes de opinión nacional con el patrocinio de la Friedrich-Ebert-Stiftung

La comunidad internacional ha mostrado su respaldo al TSE y ha asegurado que seguirá apoyando la transparencia electoral garantizando misiones de observadores. En segundo lugar, porque el ambiente electoral ha estado fuertemente afectado por los conflictos y fisuras sociales de octubre y noviembre, y se agravó por la expansión de la pandemia, las medidas del gobierno transitorio como la cuarentena obligatoria y la politización de la gestión –a favor y en contra– de Áñez, que añadieron una alta dosis de incertidumbre a la situación.

En tercer lugar, si bien el eje de la polarización política no varió, cambiaron algunos actores, con la presencia de Arce, Camacho y Áñez, como candidaturas novedosas, entre las opciones con mayor posibilidad de acceder al poder. La ausencia de Evo Morales también es un dato importante, ya que constituía, en sí mismo, un factor de tensión. Sin embargo, la presencia de Morales en el escenario electoral sigue siendo contundente.

El Covid-19 y las esperadas elecciones nacionales

El gobierno transitorio de Áñez reaccionó, de inmediato, ante la aparición de los primeros casos de coronavirus en Bolivia. Así, el 21 de marzo de 2019 aplicó una rigurosa cuarentena invocando al patriotismo de los bolivianos, decisión que permitió, inicialmente, contener una rápida expansión. Posteriormente, se planificó un retorno dinámico y escalonado a las actividades laborales, con consecuencias que aún se desconocen.

Sin embargo, los efectos colaterales de la pandemia son devastadores para la economía debido, además, a la

---

(FES) y de la representación de Naciones Unidas, da cuenta de la recuperación de confianza en el TSE. Así, el 52% de los entrevistados indicó que no cree que haya fraude en los próximos comicios, frente a un 17% que opinó lo contrario.

caída de los precios de los hidrocarburos y el gas. Según datos del Banco Mundial (BM), se prevé que la economía boliviana sufra una contracción del 5,9% del PIB, mientras que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) estima una caída del 5,4%. Por otra parte, la paralización de la actividad económica ha afectado, sobre todo, a los sectores más vulnerables (recordemos que en Bolivia alrededor del 70% del empleo es por cuenta propia y depende de la dinámica cotidiana de generación de recursos). Además, se han visibilizado las grandes limitaciones de un sistema de salud heredado que presenta grandes deficiencias para enfrentar la pandemia.

Por otra parte, el gobierno ha tomado algunas medidas sociales para paliar temporalmente los efectos económicos de la crisis, como la inyección de Bs 3.476 millones a la economía con la compra de bonos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el préstamo, por "emergencia sanitaria", de $us 1.000 millones (alrededor de Bs 7.000 millones) que emitió el Banco Central de Bolivia (BCB), a finales de marzo. Luego, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito concesional de $us 320 millones y al BM para acceder a otros recursos, así como también recibió algunas donaciones internacionales.

Asimismo, el gobierno estableció medidas como la suspensión del corte de servicios básicos, la postergación de los cobros de cuotas de capital de créditos bancarios y de algunos impuestos, así como la emisión de bonos a la población que significan entre Bs 3.000 y 3.500 millones (el Bono Canasta Familiar y el Bono Universal, entre otros). Sin embargo, varias de estas iniciativas fueron motivo de controversia por la presión del MAS desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De cualquier manera, se prevé que el impacto de la crisis será muy profundo. Al principio, la población apoyó la gestión de salud del gobierno. De acuerdo a la encuesta de Ciesmori, publicada en abril, el 63,4% de

los encuestados aprobaba la gestión del Covid-19 por parte de la presidenta Áñez. Sin embargo, el alargamiento de la cuarentena, el previsible colapso del sistema de salud pública y las denuncias de corrupción vinculadas con autoridades del gobierno han deteriorado progresivamente la imagen del gobierno, lo cual se refleja en las encuestas de julio.

En todo caso, la cuestión pendiente que generó mayores tensiones políticas fue la fecha de realización de las elecciones generales, previstas, en primera instancia, para el 3 de mayo, pero postergadas en razón de la pandemia. Inicialmente, se desencadenó una ola de presión para la realización inmediata de las elecciones, sobre todo por parte del MAS y, en menor medida, por parte de otras fuerzas opositoras como CC. Los sectores afines al MAS protagonizaron oleadas de violencia en algunos lugares del país, movilizaciones y acciones de desacato a la cuarentena, enfrentamientos con fuerzas del orden, mediante la convocatoria a cacerolazos, lanzamiento de petardos o bloqueos de caminos para expresar su rechazo al gobierno y exigir elecciones inmediatas. Estas protestas se entremezclaron con otras perpetradas por distintos sectores sociales, como comerciantes y transportistas, que se movilizaron exigiendo suspender la cuarentena y volver a sus actividades económicas. En el caso del MAS, sin embargo, las demandas tienen una deriva política con la demanda de elecciones inmediatas.

Por su parte, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y Jeanine Áñez optaron por priorizar los criterios sanitarios y postergar los comicios. En medio de esta permanente pugna entre órganos del Estado, la ALP –integrada mayoritariamente por representantes del MAS– aprobó, el 30 de abril de 2020, una ley para que el TSE fije la fecha de los comicios en los siguientes 90 días, vale decir, hasta el 2 de agosto de 2020. No obstante, ante la incertidumbre respecto a la situación de la expansión de la pandemia y el rechazo de varias organizaciones políticas, el TSE propició un acuerdo político

con los principales candidatos en competencia y acordó la fecha de elecciones para el 6 de septiembre. Sin embargo, ante el agravamiento de la situación sanitaria, en julio, el TSE decidió una nueva postergación, trasladando la realización de las elecciones al 18 de octubre. Esta decisión contó con el respaldo de distintas fuerzas políticas.

En este contexto, las críticas a la candidatura de Áñez se multiplicaron y varias voces, políticas y sociales, le solicitaron, públicamente, que decline su postulación y que deje de utilizar la gestión de la pandemia como arma de campaña.

Finalmente, cabe hacer notar que existe la certeza entre los entrevistados de las organizaciones políticas opositoras al MAS de que la próxima elección, si bien puede otorgar legitimidad al futuro gobierno, no resolverá la profunda crisis por la que atraviesa el país, pues ésta afecta la institucionalidad, la economía y expone fracturas sociales irresueltas. El entrevistado de CC insiste en la necesidad de un "gran acuerdo nacional" pre y postelectoral, pues hay tareas estructurales urgentes que resolver. De acuerdo a este entrevistado, en el campo institucional existe la premura de cambiar las leyes y reglamentos electorales –como la Ley de Organizaciones Políticas, entre otras–, subsanar la prórroga de mandato de autoridades legislativas nacionales y subnacionales, así como establecer claramente los límites de un gobierno transitorio. Por otra parte –continúa el entrevistado–, habrá que enfrentar las rupturas regionales entre Oriente y Occidente y, por supuesto, buscar estrategias para resolver la recesión económica: "Después de las elecciones ninguno podrá gobernar solo", concluye. De hecho, cabe considerar que cualquier futuro acuerdo político deberá contemplar al MAS y las principales fuerzas opositoras.

Uno de los mayores riesgos políticos inmediatos, por otra parte, es un posible desconocimiento de los resultados electorales sean estos cuales fueren. El 72% de los líderes de opinión consultados, de acuerdo al estudio Delphi citado

más arriba, creen que se pueden generar hechos de violencia y enfrentamiento en torno a los resultados de las elecciones.

Un desfile de esqueletos andantes en la pasarela de la representación

¿Hacia dónde va el sistema de representación política en Bolivia? ¿Cuál es el futuro de la democracia? Estas preguntas rondan las reflexiones y discusiones en torno al rol de los partidos políticos y la democracia en las últimas décadas, no sólo en Bolivia sino también en América Latina. En el caso de Bolivia, esta larga coyuntura de crisis "en dos tiempos" ha revelado algunos elementos de análisis sobre la situación de los partidos, en particular de los opositores al MAS, que se arrastra por más de dos décadas y que no se ha podido remontar. Las consecuencias han sido la pérdida de confianza ciudadana, la escasa capacidad de articular alternativas unificadas y la baja convocatoria social. Con el tiempo, los viejos partidos se han ido convirtiendo en siglas vacías; una suerte de cascarones que acogen a personalidades externas para no perder vigencia legal; mientras que los nuevos no terminan de desarrollar un espacio identitario y de representación social que les permita proyectarse a mediano y largo plazo.

En opinión del entrevistado de Juntos, "los partidos políticos tienen que buscar cauces para el relacionamiento social, porque la confianza pasa por la cercanía, por el historial político y por la certeza de las cosas que dices y haces". Este entrevistado añade que, durante el último tiempo, "la desconfianza en la política se ha acrecentado, que el MAS y el propio Evo han ayudado a profundizar, por ello la gente no cree y tiene una incertidumbre grande en relación con las organizaciones políticas más allá del formato con que se presenten". Desde su larga experiencia política, el entrevistado concluye que la democracia interna, la representación efectiva y una gestión pública transparente son tres preocupaciones

centrales que no deben pasar por alto las organizaciones políticas actuales.

Por otra parte, el alejamiento de la población respecto a la política tiene relación con la actuación de los partidos opositores al MAS durante la denominada "democracia pactada",[9] usada recurrentemente por el mismo MAS para desacreditar al sistema de partidos tradicionales. En su momento, estos partidos fueron cuestionados por la corrupción en la gestión pública, la ineficiencia, la administración endogámica de la gobernabilidad, así como por su relación instrumental con las organizaciones y corporaciones. Estos *habitus* de la política partidaria no son exclusivos del país, sino que se registran patrones de comportamiento comunes en la región. Existe, por otra parte, una amplia bibliografía, así como diversas propuestas académicas y políticas, para recuperar la institucionalidad, la eficiencia y el "deber ser" de los partidos; iniciativas que, sin embargo, en todos estos años no han prosperado y no han sido debidamente atendidas por los partidos.

Es preciso anotar que una de las características del campo político boliviano –imprescindible para comprender el rol, en cierto modo marginal, de los partidos– es la presencia gravitante de la sociedad civil en el ámbito de las decisiones y, en particular, en el desenlace de situaciones críticas, en las que las que la sociedad cobró un protagonismo decisivo, como en la Revolución de 1952, en la recuperación de la democracia o en las transformaciones de inicios de siglo. En general, el éxito de los partidos en Bolivia está atado a

9 Durante las décadas de los años ochenta y noventa, una práctica frecuente de los partidos con representación parlamentaria fue la denominada "democracia pactada", que en su origen respondía a la ausencia de mayorías parlamentarias, lo cual obligaba a acuerdos político-partidarios. Estas prácticas fueron ampliamente cuestionadas por el uso instrumental y el pragmatismo en los acuerdos y coaliciones políticas.

su vinculación con organizaciones sindicales, gremiales o territoriales que los sustentan. En ese sentido, se entiende que el triunfo del MAS está ligado a su naturaleza sindical y corporativa, alejada de los formatos tradicionales de los partidos políticos.

El conflicto postelectoral 2019, nuevamente constituye una muestra de la presencia de la sociedad en el decurso de la política, esta vez mediante movimientos ciudadanos (en unos casos espontáneos, en otros a través de sus organizaciones) que toman las calles y se movilizan en reacción a la manipulación electoral perpetrada en el país, y que expresan una posición "antipolítica" o, más propiamente, "antipartidaria".

En ese sentido, a continuación identificaremos algunos de los factores críticos del comportamiento de los partidos que se arrastran a lo largo de la historia y obstaculizan su posible (re)invención.

El predominio del personalismo

La cultura política boliviana está fuertemente marcada por el caudillismo que se ha heredado de la memoria larga. En la historia política de Bolivia existe una rutinización del caudillo como el elemento de definición en la política intra y extrapartidaria que persiste desde la constitución de la República y hoy constituye un factor gravitante tanto para la vigencia de las organizaciones políticas como para las oportunidades de acceder al poder. En otras palabras, la población responde de mejor manera a la presencia de determinadas personalidades conocidas que a programas de gobierno o a la ideología particular de una organización.

El caso del MAS es emblemático por la invocación al "evismo", que se refiere, justamente, al peso simbólico del líder como factor de poder. En los hechos, "la multitud se organiza en torno al líder y no al revés" (entrevista a representante del MAS). De ahí la fuerte identificación del partido con su único e insustituible líder.

En la oposición política al MAS también se percibe, aunque de manera atenuada, una conducta personalista. En general, los partidos han surgido articulados a un jefe o líder, y cuando, por distintas razones, éste desaparece, la organización tiende a extinguirse o pierde peso político. Esto es lo que ha sucedido con partidos como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) respecto a Jaime Paz Zamora; Unidad Cívica Solidaridad (UCS) respecto a Max Fernández; y Conciencia de Patria (Condepa) respecto a Carlos Palenque, entre otros.

Esta conducta personalista se refleja hoy en la contienda electoral de candidatos más que de organizaciones y programas de gobierno. Y también se reproduce en liderazgos intermedios –como, por ejemplo, con los asambleístas electos que trabajan en procura de la acumulación personal de poder y del desarrollo de capitales políticos, simbólicos o sociales, buscando fortalecer su imagen personal ante el electorado–. No es de extrañar, en este sentido, que las cuentas personales de algunos líderes políticos en Facebook o Twitter tengan muchos más seguidores que las de las siglas partidarias a las que representan.

Lo cierto es que el crecimiento del personalismo es inversamente proporcional al fortalecimiento institucional de las organizaciones y, aunque los propios partidos están conscientes de esta realidad, parece ser un elemento que forma parte ineludible del ejercicio político y que no puede contrarrestarse con disposiciones normativas ni decisiones argumentativas. A ello hay que añadir una clara crisis de nuevos liderazgos que inhibe la renovación.

Alianzas inestables e hiperfragmentación

Desde la llegada de Evo Morales al poder, los partidos opositores han intentado rearticularse de diversas maneras, a través de la reinvención de sus siglas o de alianzas electorales que permitan hacer frente al MAS. No obstante, la votación

de la oposición se ha mantenido durante estos 14 años en alrededor del 25 al 30%. Al mismo tiempo, en estas últimas dos décadas se han creado algunas nuevas organizaciones partidarias como el Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional y, posteriormente, el Movimiento Demócrata Social, así como algunas pequeñas organizaciones (FPV, MTS y PAN-BOL, entre otras) que no logran despegar en la arena política.

La disgregación alcanzó niveles extremos con la actuación personal de varios parlamentarios opositores, quienes, perteneciendo a un mismo frente o alianza política, generaron discrepancias y decidieron asumir, de manera personal, la gestión parlamentaria, desligándose de las siglas a las que representaban y debilitando aún más las alianzas opositoras.

En el contexto de las elecciones generales de 2019, las organizaciones políticas no han tenido condiciones suficientes para repensarse y rearticularse, debido a la permanente presión ejercida por el MAS, pero también por problemas internos. Esta situación se replicó en el curso de las elecciones de 2020.

Una de las señales de disgregación de los partidos es el actual tráfico de siglas, que nuestros entrevistados denominan "mercado negro de siglas, donde [éstas] se compran y se venden" (Juntos), o "franquicias electorales donde las candidaturas rotan" (CC). Este fenómeno es el resultado del vaciamiento de la política y de una práctica de beneficio mutuo entre partidos y candidatos externos para habilitarse y sobrevivir. No olvidemos que el propio MAS consiguió su sigla en esta misma lógica en la década de los noventa, "prestándosela" de una organización política originalmente falangista. Este pragmatismo ha llegado al extremo de volverse "normal" a ojos de la sociedad, lamenta uno de nuestros entrevistados (Libre 21).

La relación entre partidos y candidatos a nivel nacional en el contexto actual se puede ilustrar de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro 2. Tipología de los partidos de acuerdo a la relación con sus candidatos

"Movimiento político" (partido de base sindical)	Partidos con estructura institucional y candidato propio	Siglas existentes con candidatos externos a la organización	Partidos sin trayectoria
MAS-IPSP	UN MDS	PDC UCS MNR ADN FPV FRI	PAN-BOL MTS

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, la mayoría de los partidos habilitados han buscado candidatos externos, lo cual debilita aún más las posibilidades anheladas de recuperación.

Dependencia de los poderes públicos

Uno de los temas reiterados por los entrevistados es el referido a la carencia de recursos económicos para el funcionamiento de la actividad partidaria, en particular en momentos electorales. En unos casos, los recursos provienen de liderazgos con solvencia propia, como sucede con Samuel Doria Medina; en otros, de relaciones de intercambio material con organizaciones, instituciones, corporaciones o personas con quienes establecen una negociación, o en muchos otros casos, del ejercicio de cargos públicos en el ámbito de la administración estatal nacional o subnacional.

El entrevistado de Juntos sostiene que un partido político requiere, irremediablemente, al menos, de tres condiciones: un líder, recursos económicos y organización (entrevista al representante de Juntos). Por estas razones se ha insistido en

la necesidad de contar con financiamiento público, porque éste garantiza un mínimo de equidad entre las organizaciones en competencia, autonomía e independencia respecto de poderes fácticos externos, y la posibilidad real fiscalizar la administración financiera de estas entidades de derecho público.[10]

Crisis de militancia y vaciamiento ideológico

Otro de los aspectos nodales de la crisis de los partidos es la virtual ausencia de militantes que, como dijimos anteriormente, se visibilizó en el registro para las elecciones primarias de 2019. La militancia ha mudado desde el militante heroico del siglo pasado, hacia el militante indiferente o pragmático. Hoy, los militantes se adhieren a los partidos motivados por expectativas personales, por tanto, se podría afirmar que, en general, la militancia se caracteriza por la provisionalidad, la volatilidad y la carencia de compromisos de largo plazo.

Esta crisis de militancia está asociada, además, al vaciamiento ideológico que tiene que ver con los signos de la época. Los grandes metarrelatos y las utopías propias de la modernidad han sido sustituidos por la dinámica de los discursos y preocupaciones de la vida cotidiana que los partidos buscan recoger para lograr réditos electorales: "No es como antes que había que bajar línea, ahora hay que recoger

10 En la actual Ley de Organizaciones Políticas (LOP) se ha establecido una modalidad de financiamiento mixto: por un lado, financiamiento privado y, en el caso del financiamiento público, subvenciones indirectas en periodos electorales (art. 73) para el acceso a propaganda en medios de comunicación, y formación y capacitación a los dirigentes en etapas no electorales. Por ahora, dicho financiamiento público está suspendido por decisión de las propias organizaciones políticas en acuerdo con el OEP, dada la crisis por la que atraviesa el país.

lo que lo que el ciudadano piensa, o anhela" (entrevista con el representante de Creemos).

En consecuencia, retomando la preocupación sobre la representación política y sus derroteros podríamos afirmar que, en la actualidad, los ciudadanos han tomado la bandera política por cuenta propia, desestimando los canales de mediación partidaria. Desde hace unos años, las organizaciones sociales y sindicales, y los ciudadanos, desde distintos lugares discursivos, han expresado su desafección y desconfianza en los partidos tomando distancia, aunque, al mismo tiempo, no se puede prescindir de su existencia.

El entrevistado de Juntos se refiere, justamente, al 21 de febrero de 2016 como un momento emblemático en que se produce una relación de "doble vínculo" entre la sociedad movilizada y los partidos políticos. Hubo un rechazo explícito a la presencia de los partidos y éstos tuvieron que actuar de forma encubierta, tal y como relata el entrevistado: "Durante el episodio del referéndum decidimos ocultarnos porque la situación lo exigía", sin embargo, continúa: "Nosotros fuimos los que les dimos a los ciudadanos la estrategia, hicimos control electoral y pusimos recursos económicos para frenar al MAS en el referéndum".

Durante el conflicto postelectoral de octubre de 2019 se percibió también esta tensión. Si bien en un primer momento se produce una fuerte imbricación entre ciudadanos y partidos opositores al MAS, mediante la creación de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, y se ve a candidatos como Mesa ovacionados por la población en cabildos y movilizaciones, el idilio resulta corto, pues muy pronto se hace evidente el desencanto y el alejamiento de las plataformas ciudadanas y de los cívicos y su rechazo a los candidatos: "Ni Evo, ni Mesa". No obstante, paradójicamente, semanas después, muchos de los activistas cívicos, como Camacho y Pumari, terminaron en la palestra político-electoral o se incorporaron a las listas de los partidos a los cuales en su momento rechazaban.

Estos factores nos llevan a pensar en la necesidad de recrear la representación política bajo nuevos formatos, exigencias y maneras de participar de la sociedad, pues la insistencia en fortalecer a partidos casi inexistentes ha resultado un camino infructuoso.

La democracia representativa está basada en estructuras de mediación; "no hay democracia sin partidos" es una máxima a la que se suman académicos, políticos y ciudadanos en el marco de las democracias modernas, aunque, al mismo tiempo, se reconoce que los partidos se han limitado, cada vez más, a funciones meramente electoralistas y de gestión pública.

Es preciso tomar en cuenta –como sostiene el entrevistado de CC– que, si bien existen estructuras de representación formales, exigidas por el sistema institucional, en realidad es preciso tomar en cuenta que, en la práctica política, rige la informalidad. Desde el punto de vista de este entrevistado, ninguna de las organizaciones existentes es, propiamente, un partido político democrático, moderno e institucionalizado, porque en ellos prevalece un conjunto de prácticas personalistas, prebendales y clientelares, y porque se han convertido "en estructuras de mediación de intereses particulares, no generales" (entrevista a representante de CC). "Hay evidencias empíricas de que la gente no quiere pertenecer a un partido político", continúa el entrevistado, lo cual abre las puertas a opciones caudillistas o populistas que generan tensión con el andamiaje institucional de la democracia.

La insistencia normativa para crear instancias con estructuras institucionales sólidas, programas de gobierno coherentes y democracia interna parece haberse agotado. Es preciso asumir que, hoy, el sistema político es cambiante y está regido por la informalidad, la fragmentación, el personalismo exacerbado, la volatilidad de los discursos y la ausencia de compromisos disciplinarios; por ello, es preciso

acercar los debates académicos y las propuestas de reforma a esta realidad y no al revés. Si la representación política es concebida como "el espejo" de la sociedad, es preciso partir de esa realidad sociológica heterogénea y diversa para ser reinventada en el mundo institucional de la política. De hecho, la (re)construcción de un sistema de partidos u otro conformado por expresiones con capacidad de representación demandará un proceso de largo aliento y de la capacidad de desarrollar nuevos perfiles ideológicos, programáticos y organizativos adecuados a las improntas de la cambiante dinámica social.

NO

III

Oposición no partidaria al MAS-IPSP: Antes, durante y después de la crisis de octubre-noviembre

Yuri F. Tórrez

Después de 14 años ejerciendo la presidencia de Bolivia, el 10 de noviembre del 2019, Evo Morales renunciaba a su cargo. Esta renuncia fue precipitada por una movilización de sectores cívicos, partidarios y organizaciones de la sociedad después de las elecciones del 20 de octubre del 2019, arguyendo el discurso del fraude electoral atribuido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), conjuntamente con el gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Esas movilizaciones de los actores opositores no partidarios contra el gobierno del MAS-IPSP se han convertido en un factor insoslayable para comprender los acontecimientos políticos de octubre y noviembre del 2019. Así, la madeja de acontecimientos políticos –antes, durante y después de la crisis política– propició la emergencia de distintas instituciones u organizaciones de variado cuño que, en su globalidad, configuraron un entramado abigarrado de actores sociales, los cuales, a manera sectorial/corporativa y luego de manera articulada, fueron protagonistas de las movilizaciones contra el MAS-IPSP y, particularmente, contra el liderazgo político de Evo Morales.

Ahora bien, el punto crítico fue la decisión del MAS-IPSP de postular a una nueva elección al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, a pesar de la limitación

constitucional. En rigor, en el Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 para la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para habilitar una vez más al presidente y al vicepresidente como candidatos, ganó la opción del No (51,3%) con una pequeña diferencia con relación al Sí (48,7%). Sin embargo, a pesar de estos resultados, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a fines de noviembre del 2017, avaló la postulación de Morales y García Linera con el argumento de "declarar la aplicación preferente" de los "derechos políticos" por encima de los artículos de la Constitución que limitan el número de veces que una autoridad puede ser reelecta. Esta habilitación del binomio Morales-García Linera marcó un punto de inflexión que generó las condiciones subjetivas y políticas para la irrupción de distintos actores venidos de la sociedad civil en el campo político boliviano, derivando esto en las consiguientes movilizaciones sociales.

En este sentido, para avanzar en un nuevo mapa de actores de las organizaciones/instituciones no partidarias anti-MAS, en este documento analizaremos las siguientes: las cívicas –Comité Pro Santa Cruz (CPSC) y Comité Cívico Potosino (Comcipo)–; las instituciones –Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)–; las Organizaciones No Gubernamentales –Fundación Jubileo y Cáritas-Bolivia–; otras organizaciones civiles críticas al MAS-IPSP –plataformas ciudadanas, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas y el Colegio Médico Bolivia–; y, finalmente, los grupos de choque –Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y Resistencia Juvenil Cochala (RJC)–.

A partir de estas consideraciones, el presente análisis se orientará en función de las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el desempeño de los actores de la oposición no partidaria al MAS-IPSP en la crisis de octubre-noviembre 2019? ¿Cuáles fueron los actores relevantes y con qué narrativas? ¿Cómo se posicionaron los diferentes actores de la oposición no

partidaria anti-MAS tras la renuncia de Evo Morales y en el actual gobierno transitorio de Jeanine Áñez? ¿Cuál es el nuevo mapa de actores de oposición no partidaria al MAS-IPSP en el actual contexto electoral, y cómo éstos se proyectan en el escenario postelectoral, dependiendo de quién pueda ganar los próximos comicios generales? ¿Cómo se (re)articulan los actores no partidarios con los principales partidos y alianzas de la oposición antiMAS (y, en el caso del MAS-IPSP, en particular, las organizaciones críticas y disidentes)? ¿Cuáles son las narrativas, intereses y demandas predominantes hoy en el bloque de la oposición no partidaria al MAS-IPSP? ¿Con qué recursos cuentan estas para conseguir esas demandas y alcanzar sus intereses? Y, finalmente, ¿qué tipo de relaciones tienen los actores relevantes de la oposición no partidaria al MAS-IPSP con el gobierno de transición?

Movimientos cívicos

Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSC)

Desde el 30 de octubre de 1950, fecha de su fundación, el Comité Pro Santa Cruz (CPSC) –institución aglutinadora de sectores cívicos cruceños, con predominancia de los sectores agroindustriales– fue, quizás, el actor paradigmático opositor gestado desde el seno de la sociedad que desplegó, desde la primera gestión de gobierno del MAS-IPSP, una estrategia de movilización confrontacional. Así, por ejemplo, en el contexto del debate de la Asamblea Constituyente, el CPSC articuló a los comités cívicos de Beni, Pando y Tarija para conformar un bloque regional cívico conocido como "Media Luna" que polarizó el ambiente político, por la vía del discurso del proyecto estatal de las autonomías departamentales, antípoda del proyecto del Estado Plurinacional, impulsado desde el gobierno de Morales y el Pacto de Unidad.

En esta línea, la movilización de los sectores cívicos contó con sendos cabildos, destacando, en diciembre de 2006, el que se denominaría –por su concurrencia– como "Cabildo del millón". Ahora bien, esta polarización sociopolítica fue

zanjada con la aprobación de la nueva Carta Magna que constitucionalizaba el Estado Plurinacional e incorporaba, a la vez, las autonomías departamentales (junto con las autonomías indígenas). En lo político se hizo evidente la hegemonía del MAS-IPSP y uno de sus efectos colaterales fue el repliegue del CPSC.

La decisión del MAS-IPSP de postular, por cuarta vez, al binomio Morales-García Linera, inicialmente mediante un Referéndum Constitucional y, después, amparándose en una sentencia del TCP, provocó el retorno de las movilizaciones protagonizadas por los cívicos cruceños. A partir de estas movilizaciones opositoras a una nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el CPSC logró articular a instituciones cívicas de otros departamentos y a las plataformas ciudadanas que emergieron, muchas de ellas, en el contexto de la convocatoria al Referéndum Constitucional (febrero, 2016). Por otra parte, el cambio de la directiva en el CPSC, a raíz de la posesión de Luis Fernando Camacho, otorgó más dinámica al ente cívico y, a la vez, una mayor virulencia en sus acciones dirigidas a frenar la candidatura de Morales a las elecciones del 20 de octubre del 2019.

A mediados de agosto de 2019, la Chiquitania cruceña sufrió un incendio atroz. En el contexto de la batalla política de cara a las elecciones del 20 de octubre, esta emergencia medioambiental se erigió en otro campo de confrontación entre el ente cívico cruceño y el gobierno de Morales. Para Hugo Moldiz, vocero del MAS, "el bloque opositor aprovechaba el tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz –que en su cabildo del 4 de octubre levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfaba producto de un supuesto fraude electoral" (2020: 96).

Por otra parte, la suspensión inesperada, por parte del TSE, del conteo rápido de los resultados electorales, la noche del domingo de elecciones (20 de octubre), fue

el argumento para que los dirigentes cívicos esgriman la narrativa del fraude que se había estado fraguando varios meses antes de las elecciones. El 22 de octubre, a convocatoria de la directiva del CPSC, se reunieron en Santa Cruz varios comités cívicos y plataformas ciudadanas. Después de una evaluación, asumieron la decisión de llevar adelante un paro indefinido nacional en protesta contra los resultados del Tribunal Electoral que apuntaban a la reelección de Evo Morales (*Los Tiempos*, 22/10/2019), exigiendo confirmar el balotaje y amenazando con desconocer a Evo Morales (Infobae, 22/10/2019). A la larga, ese paro cívico –que duró 21 días– se constituyó en la punta del iceberg que culminaría con la renuncia de Morales a la presidencia de Bolivia.

De la primera demanda por una segunda vuelta electoral, el discurso cívico se transformó en un "pedido de nuevas elecciones" (*Página Siete*, 30/10/2019). En rigor, la dinámica de las movilizaciones, en virtud a su poder de convocatoria, se fue expandiendo hacia varias ciudades del país. En este contexto, el 30 de octubre se produjo, en la localidad de Montero (Santa Cruz), un enfrentamiento entre activistas cívicos y simpatizantes del MAS-IPSP con el saldo trágico de tres muertos. El CPSC se declaró en duelo. El 2 de noviembre, el presidente cívico, Luis Fernando Camacho, en un cabildo multitudinario y en presencia de otros líderes cívicos de diferentes departamentos de Bolivia, afirmó: "Estamos derrocando un gobierno, estamos liberando una nación" (*Página Siete*, 3/11/2019). Ese sábado de Todos Santos, en medio de una plaza abarrotada por miles de personas, a los pies del Cristo Redentor, Camacho dio un ultimátum al presidente de Bolivia, llamándolo "tirano" y diciéndole que tenía "48 horas para renunciar". A los dos días, el 4 de noviembre, en otro cabildo masivo, Camacho anunció, imbuido de un aura religiosa, que viajaría a La Paz para entregarle, personalmente, a Evo Morales, su carta de renuncia. A estas alturas de la movilización, el discurso cívico

apuntaba ya no a una segunda vuelta o a nuevas elecciones, sino a la renuncia de Morales.

En ese cabildo, Camacho se dirigió a los policías, prometiéndoles que "con un nuevo gobierno ellos estarían mejor pagados" (*Página Siete*, 5/11/2019). El viernes 8 de noviembre, en Cochabamba, los policías se amotinaron, acción que luego se fue replicando por todo el país. Este motín policial fue la punta de lanza para la caída de Evo Morales. Posteriormente, el propio Camacho reconoció que su padre había negociado, previamente –junto con el luego ministro de Defensa, Luis Fernando López–, para que militares y policías "no salieran a reprimir en las movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales" (*Correo del Sur*, 28/12/2019). El domingo 10 de noviembre, un par de horas después de la renuncia de Evo Morales, el entonces líder cívico cruceño, "con el apoyo y protección de la Policía y las Fuerzas Armadas", ingresó al *hall* Palacio de Gobierno, extendió la bandera de Bolivia en el suelo y puso sobre ella, una Biblia (Cordero, 2019: 8).

Dos días después, el 12 de noviembre, Camacho apareció en el balcón del Palacio Quemado, junto a Jeanine Áñez –la senadora que se autoproclamó presidenta de Bolivia– levantado una Biblia enorme y posando para la primera foto presidencial. La presencia de Camacho en esa fotografía fue la culminación de una estrategia conspirativa para derrocar a Evo Morales (Moldiz, 2020).

Luego de la ruptura constitucional, Camacho –asumiendo ser el artífice de la caída de Morales– influyó en la conformación del gabinete de Áñez. En rigor, en el primer gabinete ministerial sobresalían tres ministros alineados a la dirigencia cívica cruceña: Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, Luis Fernando López, ministro de Defensa y Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación. En otras palabras, una parte del gabinete político se adscribía entonces a la línea "camachista". Posteriormente, Justiniano

y Lizárraga renunciarían a sus cargos, coincidiendo con la ruptura política de Camacho con la presidenta Áñez.

A fines de noviembre de 2019, Camacho presenta su carta de renuncia al CPSC[1] para postularse como candidato presidencial. A partir de ese momento, la entidad cívica cruceña con un nuevo directorio a cargo, se repliega del escenario público. En febrero del 2020, después de un silencio de tres meses, el nuevo directorio de la entidad cívica cruceña reapareció amenazando con un paro definitivo si el nuevo TSE habilitaba la candidatura de Evo Morales como primer senador por Cochabamba. Finalmente, por cuestiones legales, el expresidente fue inhabilitado. En febrero, a raíz de que las encuestas daban como favorito al candidato presidencial del MAS-IPSP –inclusive, como probable ganador en primera vuelta–, la entidad cívica reunió a todos los candidatos opositores al partido de Morales con el propósito de lograr una sola candidatura que finalmente no se dio (o, por lo menos, que quedó en suspenso hasta abril, en función de las tendencias electorales). No obstante, debido a la cuarentena sanitaria, ninguna reunión se llevó a cabo con posterioridad.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, la dirigencia cívica cruceña solo se manifestó al principio de la cuarentena, manifestando su preocupación por que la población cruceña estaba confundida por una norma municipal para contener la propagación del coronavirus (*Página Siete*, 18/3/2020). Mientras tanto, a fines de julio, el departamento de Santa Cruz se ubicaba en primer lugar en la pandemia, con 17.877 infectados y 412 fallecidos. Esta crisis sanitaria se produjo, además, en medio de una

1 En su carta de renuncia, Camacho dice: "Presidir esta institución es un sueño de toda la vida. Quien me conoce desde chico sabe lo que trabajé para eso y anhelé tener esta oportunidad, pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte: ser presidente de la República de Bolivia y poder, desde ahí, servir con todas mis fuerzas para ver a mi Patria próspera, unida y libre…" (*Los Tiempos*, 29/11/2019).

descoordinación entre la Gobernación de Santa Cruz y el gobierno de Jeanine Áñez. Después, en junio del 2020, el ente cívico cruceño volvió a la escena política abanderando una nueva convocatoria a elecciones y, luego, sumándose a las voces favorables a la proscripción del MAS-IPSP.[2]

En síntesis, según lo expuesto se reafirma la capacidad del CPSC para articular a casi toda la institucionalidad cruceña (más de 23 entidades), así como a gran parte de su población. Por este rasgo, esta institución cívica se ha autoasumido como el "gobierno moral" de los cruceños. Las disputas entre el CPSC y el gobierno del MAS –autocalificado como socialista– se pusieron en evidencia desde la primera gestión de Evo Morales (2006-2009). Posteriormente, en el contexto de la decisión gubernamental de alentar la postulación, una vez más, del binomio Morales-García Linera, se reactivaron las protestas del ente cívico en contra del MAS-IPSP. En este contexto, el CPSC se erigió en un actor estratégico para liderar la cruzada en nombre de la "democracia" contra la repostulación de los entonces gobernantes del MAS-IPSP.

En este afán, el CPSC articuló –y no solo subordinó– a los demás comités cívicos del país y a las plataformas ciudadanas en torno a su liderazgo, sino también a los partidos políticos, como fue el caso de Comunidad Ciudadana (CC), que postuló a Carlos Mesa a la presidencia de Bolivia. Esta estrategia le sirvió al CPSC para socavar, por la vía de una cruzada movilizada, la legitimidad democrática de Evo Morales, inclusive con una acción conspirativa que desembocó en la caída política de Morales. No obstante, el accionar del

2 El 20 de julio del 2020, el OEP recibió la demanda de anulación de la personaría jurídica del MAS-IPSP, presentada por la alianza Creemos. Dicha demanda –a la cual se sumaron con comunicaciones separadas otras fuerzas electorales– sostiene que Luis Arce, candidato presidencial del MAS-IPSP, se refirió públicamente una encuesta de intención de voto (algo prohibido, según la normativa electoral, para los candidatos y dirigentes políticos).

CPSC en el periodo *postevo* reveló su propósito de anular al MAS-IPSP del espectro electoral, que se escondía detrás de sus movilizaciones. Por ello, la reaparición de Morales en el escenario político es un hecho inquietante para el CPSC. Al parecer, para el ente cívico, la presencia del expresidente en su discurso es un elemento indispensable para su vigencia en el campo político boliviano.

Comité Cívico Potosinista (Comcipo)

Los últimos cinco años, una de las instituciones de mayor movilización e incidencia en interpelar al gobierno del MAS-IPSP fue el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), núcleo institucional que aglutina a las principales instituciones de la sociedad civil de Potosí, especialmente urbanas. A partir de una primera movilización enarbolando demandas departamentales (como la construcción de un aeropuerto local, entre otras) –que en su momento no fueron respondidas favorablemente por el gobierno del MAS-IPSP, provocándose una ruptura– Comcipo se fue constituyendo en un actor con una importante capacidad de movilización.[3] Primero, durante la gestión de Jhonny Llally y, luego, a la cabeza de Marco Antonio Pumari, el protagonismo de este ente cívico fue de permanente oposición al gobierno de Evo Morales.

El capital político acumulado por esta institución le permitió erigirse en una entidad cívica opositora del gobierno del MAS-IPSP. En septiembre del 2016, Comcipo planteó la posibilidad de federalizar Bolivia, aunque esta propuesta se fue diluyendo. Otro momento político importante para

3 Otra movilización destacada de Comcipo fue la que promovió, en septiembre de 2015, en rechazo de la aprobación del Estatuto Autonómico departamental, impulsado por la Asamblea Legislativa Departamental, predominantemente alineada al MAS-IPSP. La campaña por el No, impulsada por la dirigencia cívica potosinista, finalmente logró su objetivo, imponiéndose el rechazo en el Referéndum del 20 de septiembre de 2015.

su aparición en la escena pública fue la protesta contra la repostulación presidencial y vicepresidencial. La entidad cívica potosina se adhirió a la cruzada movilizadora a favor del respeto del voto del 21 de febrero del 2016.[4]

Por otra parte, el conflicto en torno al litio, poco antes de las elecciones de octubre del 2019, se constituye, seguramente, en una de las principales movilizaciones protagonizadas por Comcipo en contra el gobierno de Evo Morales. Ciertamente, el litio es un recurso nacional estratégico para el desarrollo del país. Este conflicto, por su relevancia, catapultó el liderazgo del líder del ente cívico, Marco Antonio Pumari, dándole proyección nacional (incluso –en su momento– como posible candidato presidencial).[5]

---

4 El 21 de febrero del 2018, fecha conmemorativa del Referéndum Constitucional, fue el momento en que Comcipo reapareció en las calles potosinas. Esta manifestación fue parte de las medidas adoptadas por la Coordinadora Nacional de Defensa de las Libertades Democráticas (CNDLD) en rechazo de la sentencia 0084/2017 del TCP que habilitó la repostulación indefinida del presidente, Evo Morales Ayma, el vicepresidente Álvaro García Linera y los funcionarios electos. Asimismo, el 1 de agosto del 2018 Comcipo protagonizó otra movilización en defensa de los resultados del Referéndum Constitucional. A un día de la celebración de la independencia patria, a celebrarse el 6 de agosto de 2018 en Potosí, Comcipo recibió a varios activistas contrarios a la repostulación presidencial que participaron del desfile cívico con la consigna "Bolivia dijo No".

5 El conflicto entre Comcipo y el gobierno del MAS-IPSP se agudizó a inicios del 2019 cuando el ente cívico paralizó Potosí por 48 horas. Luego, a mediados del mes de julio del 2019, el entonces presidente del ente cívico, Marco Pumari, alertaba que la explotación de litio en Bolivia "no tiene rumbo" y denunciaba que se estaban enajenando los recursos del departamento a una trasnacional. El 15 de junio del 2019 Comcipo protagonizó el primer paro cívico demandando más regalías para Potosí por la explotación del litio y en defensa de los recursos naturales. Quizás, gracias a este discurso nacionalista asociado al rechazo de la enajenación de los recursos, esta institución consolidó su principal interpelación hacia el gobierno de Evo Morales. Entre el 1 y el 2

El 16 de octubre, una asamblea de Comcipo, junto con el Consejo Consultivo sobre el litio, ratificó las movilizaciones permanentes y el paro indefinido, con el embanderamiento de la insignia potosina en todas las instituciones y domicilios como símbolo de la movilización, y se "ratificó el voto castigo contra Evo Morales y Álvaro García Linera" (*El Potosí*, 16/10/2019). Estas movilizaciones, a solo cuatro días de las elecciones nacionales, se constituían en un indicador inequívoco del cariz político-electoral que había adquirido el conflicto. Además, este paro, de mediados de octubre, coincidió con los cabildos convocados por el Comité Pro Santa Cruz (CPSC), movilizaciones tildadas por el entonces presidente Morales de intentonas de golpe de Estado.[6]

Este cariz político asumido por Comcipo fue una constante a lo largo de las movilizaciones realizadas por este ente cívico, además de su articulación con los otros entes cívicos del país, especialmente el CPSC, en la lucha para impedir, inicialmente, que Morales y García Linera participen en las elecciones y, luego, para que el MAS-IPSP no logre la

---

de agosto de 2019, Comcipo llevó a cabo un paro cívico a raíz de su demanda en torno al litio. En esos días, el presidente cívico potosino lanzó una advertencia al presidente Morales: "Sea o no sea año electoral, si Evo Morales quiere el voto de los potosinos deberá atender al departamento. Si Evo Morales quiere un año electoral tranquilo, deberá atender al departamento de Potosí". Entonces, a partir de junio del 2019, las movilizaciones en torno al litio organizadas por este ente cívico fueron incrementándose. Ya en 2020, en la primera semana de octubre, a días de las elecciones, Comcipo volvió a sus movilizaciones con una huelga de hambre de sus principales dirigentes demandando la abrogación del Decreto Supremo 3738 que establecía la alianza entre Yacimientos del Litio de Bolivia (YLB) y la empresa alemana Acisa para la industrialización de la salmuera residual del Salar de Uyuni.

6 "Algunos grupos qué están diciendo: si gana Evo vamos a desconocer (su triunfo), si gana Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado", declaró el mandatario (*La Época*, 12/10/2019).

victoria en los comicios del 20 de octubre del 2019. El 3 de agosto del 2019, en una concentración de dirigentes cívicos en la ciudad de Santa Cruz, Pumari pidió la renuncia del candidato Óscar Ortiz para favorecer así el voto útil a Mesa (*El Potosí*, 16/10/2019).

Con su demanda por el litio suspendida temporalmente, el 20 de octubre de 2019, día de las elecciones generales, Potosí registró protestas frente del Tribunal Electoral Departamental por supuestos actos de fraude en los resultados, especialmente en la capital potosina. El dirigente cívico, Pumari, "había adelantado que había hechos irregulares, algo que confirmó mediante la grabación de un video donde se observa una gran cantidad de maletas electorales en lo que sería un domicilio particular" (*El Deber*, 21/10/2019). Sin embargo, después, esta denuncia fue aclarada (Agencia Fides, 21/10/2019).

Luego de las elecciones, las protestas en los nueve departamentos del país fueron *in crecendo*, denunciando fraude del Órgano Electoral Plurinacional y del gobierno del MAS-IPSP en los comicios generales. Las protestas surgieron luego de que el TSE al final de la jornada electoral difundiera información preliminar que abría la posibilidad de una segunda vuelta entre Morales y Mesa; sin embargo, tras casi un día de suspensión del sistema de transmisión rápida de resultados, el TSE reanudó la difusión de datos preliminares, dando como ganador a Morales en primera vuelta. Potosí fue parte de las protestas a raíz de estos resultados oficiales. El 30 de octubre, Pumari decía: "…por decisión de los cabildos, la demanda de la población es exigir nuevas elecciones generales y rechazar la auditoría acordada entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA)" (Agencia Fides, 30/10/2019).

Así, el discurso del fraude se fue posicionando en el imaginario social, convirtiéndose en el eje articulador de las posteriores movilizaciones cívicas. El 22 de octubre, el ente cívico cruceño convocó a una reunión nacional de comités cívicos para coordinar la estrategia de movilización

de protesta contra el dizque fraude electoral aparentemente orquestado por el gobierno del MAS-IPSP, conjuntamente con el TSE. En esa ocasión, el entonces presidente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, elogió a Pumari, solicitando un aplauso para él: "Antes de empezar quisiera pedirle, a mi amigo y compañero de lucha, Marco Pumari, presidente cívico de Potosí, que nos acompañe, este valiente hombre" (Erbol, 22/10/2019).

Como parte de la estrategia para tratar de neutralizar el conflicto en curso, el gobierno abrogó el polémico Decreto Supremo 3738 de concesión de los yacimientos de litio; sin embargo, esta medida no fue suficiente para frenar la movilización, por lo menos, en Potosí.[7] Comcipo, en el curso del conflicto de octubre y noviembre estuvo muy activo coordinando con las otras entidades cívicas hasta lograr la renuncia del presidente.

El 10 de noviembre de 2019, la ciudad de Potosí se vio envuelta en una ola de violencia con la toma de rehenes y quema de casas de parlamentarios y políticos del MAS-IPSP, como estrategia de presión para la renuncia del presidente Morales, que finalmente ocurriría la tarde de esa jornada. Una nota periodística señalaba: "Los dirigentes cívicos y el comité de movilizaciones de Comcipo fueron rebasados por las turbas e incluso se vieron obligados a suspender la marcha de ayer por la tarde" (*El Potosí*, 11/11/2019). Así se consumó el golpe de Estado en contra de Evo Morales que algunos intelectuales asocian a la cuestión de la explotación del litio (Flores, 2019; Pedregal, 2019; Moldiz, 2020).

Como resultado de la ruptura constitucional, Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia. La posición de Comcipo fue

---

7 "Tan solo dos días después Pumari se reunía con Camacho en un acto público. Y, ante la lectura que el vicepresidente Álvaro García Linera había hecho de dos versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento para responder a las críticas del empresario cruceño, en un gesto servil Pumari reivindicaba que 'Camacho les ha hecho leer la Biblia a los herejes'" (Pedregal, 2019).

establecer una agenda de puntos para una reunión con Áñez y uno de los puntos neurálgicos fue solicitar una auditoría sobre la cuestión del litio. En este sentido, el 18 de diciembre de 2019 acordaron con el nuevo gobierno la conformación de 12 comisiones. No obstante, a finales de enero de 2020, esta institución cívica –en un contexto de denuncias por las relaciones entre su principal asesor y empresas chilenas interesadas en la explotación del litio– anunciaba oficialmente su apoyo a la presidenta Áñez con el argumento de que sus demandas iban a ser tomadas electoralmente. Según el vicepresidente del ente cívico, Nelson Gutiérrez, sus demandas tenían como base ideológica hacer respetar al departamento de Potosí ante cualquier gobierno, por lo que no descartaron volver a las movilizaciones en caso de no ser atendidos (Agencia Fides, 27/1/2020). Es decir, dieron un giro en su accionar político-electoral que se había caracterizado por el cuestionamiento permanente del gobierno anterior.

Mientras tanto, varias plataformas ciudadanas potosinas acusaron a Comcipo de cuoteo de "pegas" en el gobierno de Áñez.[8] Con la aparición de la demanda boliviana contra Chile por las aguas del Silala, y la política contradictoria del gobierno de Áñez sobre este tema, Comcipo se declaró, a principios de marzo del 2020, en estado de emergencia y se habló de una reunión pactada con las autoridades gubernamentales, la misma no se llevó a cabo por la presencia del coronavirus en Bolivia. Entretanto, su máximo dirigente, Marco Antonio Pumari, después de idas y venidas, y de acusaciones mutuas con el expresidente cívico cruceñista, Luis Fernando Camacho, aceptó, con la anuencia de Comcipo, la invitación como su

8 "El dirigente Teodosio Mamani identificó que algunos lograron colocar gente en el Servicio de Impuestos Nacionales, Agencia Estatal de Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)" (Erbol, 12/1/2020).

acompañante vicepresidencial para las elecciones nacionales postergadas hasta el 18 de octubre de 2020.

Por otra parte, varias organizaciones populares se organizaban comunitariamente para resolver el problema de abastecimiento por la cuarentena a raíz de la presencia del Covid-19 en Bolivia. En Potosí, se registraban 19 infectados y Comcipo solo se limitó a sugerir el "encapsulamiento" de las zonas o cuadras donde fueron identificados los casos (*El Potosí*, 28/3/2020). Quizás, estas declaraciones condensan el carácter instrumental de esta entidad cívica potosina. Mientras tanto, ante la ausencia del ente cívico, los vecinos en la ciudad, en medio de la pandemia, se autoconvocaron saliendo a sus balcones y a sus ventanas con cacerolas, petardos y banderas potosinas para reclamar al gobierno de Áñez mejores condiciones sanitarias a fin de atender a los pacientes con coronavirus.

Como se puede advertir, Comcipo inició sus acciones enarbolando demandas regionales, luego se desplazó hacia interpelaciones discursivas asociadas, fundamentalmente, al rechazo político a la nueva postulación de Evo Morales. Aunque, como en el caso del litio, estas interpelaciones hayan sido nacionalistas, su utilidad tuvo fines estrictamente político-electorales. Quizás, este ente cívico potosinista logró imbricar sus demandas locales con cuestionamientos de cariz político a nivel nacional, pero en el decurso de los acontecimientos supeditó las demandas regionales al cálculo estrictamente político de sus dirigentes, desnaturalizando sus propios fines cívicos y reivindicativos.

Instituciones

Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)

En el contexto de la sentencia constitucional que habilitó a Evo Morales y a Álvaro García Linera a la repostulación, a pesar de los resultados del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 y de una coyuntura conflictiva marcada por el debate sobre el Nuevo Código del Sistema Penal (NCSP),

en enero del 2018 surgió el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Esta denominación es una evocación simbólica de la sigla de aquel Conade surgido a principios de los años ochenta para bregar contra la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Inicialmente, la agenda de lucha de este nuevo Conade estaba diseñada para oponerse al NCSP y hacer prevalecer los resultados del Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016, con el argumento que Bolivia vivía "una dictadura de guante blanco".[9] De acuerdo a su conformación inicial, el Conade emergió "por la evidente vulneración a los derechos humanos en Bolivia, la vulneración de la voluntad popular, la democracia y la misma Constitución Política del Estado" (*Los Tiempos*, 25/2/2018).

Al principio, el Conade surge a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) dirigida por Guido Mitma, que articuló a personalidades públicas e instituciones de la sociedad civil, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su rector, Waldo Albarracín; la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (CONDECOB), liderado por el exmagistrado Gualberto Cusi; la Fundación Jubileo, Cáritas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz y la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Lo que resalta de esta composición es, por un lado, su raigambre popular, y, por otro, la participación de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Las primeras acciones del Conade apuntaron a presionar al gobierno para que abrogue la Ley del NCSP. En medio de

---

9 Declaración de Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB, quien afirmó que Bolivia vive una "dictadura de guante blanco" y que ésta se diferencia de las anteriores porque los militares están en sus cuarteles y los tanques no están en la calle" (*Página Siete*, 21/1/2017).

un amplio rechazo al nuevo Código y de movilizaciones de diverso tipo, incluido un cacelorazo, el gobierno procedió con la abrogación. Con esta decisión gubernamental, Guido Mitma, de la COB, se desmarcó del Conade: "Una vez abrogado el Código del Sistema Penal ya no tiene sentido el Conade, porque ese era el motivo por el cual nos unimos para luchar y no otro y ahora debe disolverse". Mientras tanto, la cabeza de la APDHB, Amparo Carvajal, dijo: "Las movilizaciones continuarán, desde el principio nuestra meta fue la defensa de la democracia" (*El Deber*, 23/1/2017).

Desde el momento de la derogación del NCSP, las energías del Conade –es decir, su despliegue movilizador y su dispositivo discursivo– se orientaron al respeto del veredicto del Referéndum Constitucional del 21 de febrero en nombre de la "democracia". Otra estrategia asumida fue la vía jurídica, con el propósito de revertir el fallo que habilitó la reelección indefinida, para lo que presentaron una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese marco, el Conade, junto con varios comités cívicos y plataformas ciudadanas, fueron protagonistas –a modo de celebrar los dos años del Referéndum Constitucional, el 21 de febrero del 2018– de una jornada de movilizaciones, en la que también el gobierno de Evo Morales convocó a sus simpatizantes. Ciertamente, fue una jornada tensa e inclusive marcada por actos de violencia.[10]

Una de las estrategias utilizadas por el Conade en su campaña para la pauperización de la imagen presidencial de Evo Morales fue la consigna del respeto del voto del Referéndum Constitucional, enfocándose en dos flancos: el interno y el externo. Con relación al primero, después del desmarque de la COB, el Conade logró mantener la cohesión interna del resto de organizaciones que aglutinaba y, en

10 La prensa informó que el hijo del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, habría sido golpeado por la Policía (*Página Siete*, 22/1/2017).

relación al flanco externo, consiguió articularse con otras organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas. Así, el 15 de febrero del 2018, tres días antes de las movilizaciones a un año del Referéndum del 21F, el Conade selló una alianza con sectores cívicos y plataformas ciudadanas. Una de las implicaciones de esta estrategia fue subordinarse a las directrices emanadas por el CPSC para la cruzada en contra la nueva postulación de Morales a la presidencia. Así, por ejemplo, el Conade actuó con entusiasmo en las concentraciones masivas de protesta por el 21F, tanto el año 2018 como, sobre todo, el 2019 (año electoral), en las que participaron varios sectores sociales opositores al gobierno del MAS-IPSP. Al respecto, en la atmósfera de la movilización convocada para el 21 de febrero del 2019 prevalecía la consigna "Democracia sí, dictadura no" (lema en recuerdo del referéndum) entre banderas del 21-F y otras de Bolivia y de algunos partidos políticos.

Al acercarse a las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, el despliegue de la movilización del Conade se intensificó y, además, se "politizó electoralmente". Así, a diferencia de las protestas del 21F del 2018, en las movilizaciones del año siguiente, varios candidatos presidenciales opositores al MAS-IPSP se mimetizaron. En julio del 2019, los representantes del Conade y otras plataformas opositoras se reunieron para acordar la "hoja de ruta" contra la reelección de Morales, anunciando como primer paso "un paro nacional de todas las organizaciones de la sociedad civil".

El 21 de agosto del 2019, el Conade organizó, en coordinación con varios entes cívicos, un paro a nivel nacional. La movilización no tuvo el éxito esperado, entre otras cosas, porque el CPSC decidió no participar de la protesta para concentrarse en ayudar a contener la propagación del fuego en la Chiquitania. A diez días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 10 de octubre del 2019, a modo de evocar la fecha de la reconquista de la democracia en Bolivia (en

1985), el Conade se adhirió a la movilización organizada por el ente cívico, para ser parte de un cabildo nacional que se realizó a lo largo del país. En La Paz, las organizaciones que integraban el Conade –Adepcoca, UMSA y APDHB– protagonizaron un cabildo en protesta contra la participación electoral del binomio Morales-García Linera, en el que los manifestantes lucían poleras con la inscripción "Bolivia dijo No" o alusivas a la quema de los bosques cruceños ("Salvemos a la Chiquitania") y arengaban consignas que luego, en las movilizaciones de fines de octubre e inicios de noviembre, serían muy recurrentes (*Página Siete*, 11/10/2019).

Las resoluciones de este cabildo organizado en La Paz fueron "voto castigo" para los candidatos "ilegales" (Evo Morales y Álvaro García Linera) y juicio de responsabilidades en contra del entonces presidente de Bolivia. Inclusive, al día siguiente del cabildo presentaron estas resoluciones al TSE.

Dos días después de las elecciones, con el discurso del "fraude electoral", los dirigentes del Conade se reunieron con otras organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas, al llamado del CPSC, para delinear la estrategia de movilización y resistencia. La principal resolución de ese cónclave fue ir al paro cívico, que inicialmente planteó segunda vuelta, luego nuevas elecciones y, finalmente, exigió la renuncia del presidente. Los primeros días del conflicto, el Conade fue parte activa de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, cuyo líder más visible era Carlos Mesa, candidato presidencial de CC, a quien el conteo oficial otorgaba el segundo lugar en las elecciones con una diferencia de diez puntos respecto al primero.

El 26 de octubre esta coordinadora llamó a la ciudadanía a la "desobediencia civil" y, un día después, el Conade dio un viraje discursivo: dejó de lado la segunda vuelta por su inviabilidad y alegó la existencia de delitos electorales para solicitar nuevas elecciones. El 29 de octubre, el Conade presentó ante la Fiscalía de La Paz un recurso de acción de libertad contra los comandantes policiales por permitir el

uso de dinamita por parte de grupos afines al MAS-IPSP en las movilizaciones callejeras (*Página Siete*, 30/10/2019). Por otra parte, el 6 de noviembre presentó supuestas pruebas que demostrarían un fraude en las elecciones nacionales de octubre, las mismas que también fueron presentadas por este ente cívico, el 8 y 9 de noviembre, ante las Fuerzas Armadas.

El 10 de noviembre renunció a la presidencia Evo Morales y, en horas de la noche, se produjeron diversos actos de vandalismo, como la quema de la vivienda de Waldo Albarracín. Al día siguiente, el Conade "convocó a los vecinos a formar comités de defensa de la democracia para ayudar a la Policía a cumplir sus tareas de seguridad ante la ola de ataques y saqueos de grupos de masistas en las diferentes zonas de la ciudad de La Paz y de toda Bolivia" (*Página Siete*, 11/10/2019).

La llegada al poder de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre, como presidenta transitoria, a través de su designación en un hemiciclo parlamentario casi vacío, y las posteriores masacres de campesinos en Sacaba (Cochabamba) y de vecinos en Senkata (El Alto) abrió un nuevo escenario político. Waldo Albarracín fue acusado de participar en la conspiración que derivó en el golpe de Estado y según él mismo confesó en una entrevista radial posterior, líderes políticos se reunieron el 11 de noviembre para buscar al sustituto de Morales a través de un blindaje constitucional.

A raíz de los hechos violentos y de las vulneraciones a los derechos humanos ocurridos antes y después de la renuncia presidencial de Morales, se hizo presente en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para investigar y emitir un informe. En este contexto, el Conade, a pesar de estar integrado por varios activistas de derechos humanos, nunca se pronunció en relación a las masacres. Sin embargo, esta entidad sí envió una carta dirigida a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, para justificar su proceder en las movilizaciones que precipitaron la renuncia de Evo Morales, descartando,

por otra parte, que se hubiera tratado de un golpe de Estado.[11] Tras un silencio de casi tres meses desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en febrero de 2020, el Conade convocó a una concentración para conmemorar los cuatro años del 21F. Por otra parte, ante la inhabilitación, por parte del TSE, de la candidatura de Morales a la primera senaduría por Cochabamba de cara a las elecciones generales inicialmente programadas para el 3 de mayo de 2020, un miembro del Conade, Manuel Morales, calificó como "justa" esa decisión alegando que el exmandatario "pone y puso en vilo a la democracia en el país" (*Página Siete*, 11/10/2019).

En síntesis, el Conade emergió en la escena pública a raíz de la decisión del MAS-IPSP de postular de nuevo a Evo Morales y Álvaro García Linera, primero por la vía de un Referéndum Constitucional y, luego, recurriendo a una sentencia constitucional. Ahora bien, a diferencia de otras organizaciones o plataformas ciudadanas, los integrantes del Conade y de Jubileo o Cáritas provenían, en su mayoría, del campo popular, de la defensa de los derechos humanos y de organizaciones indígenas o campesinas –como es el caso de Adepcoca–, por lo que pudieron enfrentarse a Evo Morales abanderando la defensa de "democracia".

En consecuencia, esta disputa del Conade contra el MAS-IPSP se planteó, inicialmente, en el campo de la propia

11 Una parte sobresaliente de la misiva dice: "Las acciones que hemos desarrollado provienen de la resistencia democrática del pueblo boliviano y se orientaron hacia las acciones de la desobediencia civil democrática, mediante la movilización masiva y pacífica de la población boliviana que fue capaz de enfrentar la represión del Estado boliviano, poner en evidencia el fraude electoral cometido y generar una situación que terminó con la renuncia de Evo Morales y sus principales colaboradores. En este contexto de 'vacío de poder', fue evidente la condición de asilado en México de Evo Morales, con lo cual, se procedió a una sucesión constitucional, aclarada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que generó un gobierno constitucional de transición. No hubo un Golpe de Estado" (fuente: http://patriainsurgente.nuevaradio.org/?p=1187).

izquierda. Ahora bien, ese enfrentamiento ideológico se fue diluyendo luego para convertirse en una disputa que se reducía a la consigna "Bolivia dijo No", lo cual le permitió a esta entidad articularse con otras instituciones que pueden considerarse, desde un punto de vista ideológico, diametralmente opuestas. Más aún, el Conade se subordinó al trazado de la estrategia política planteada por la entidad cívica cruceña para perforar la legitimidad de Evo Morales, hasta conseguir su renuncia el 10 de noviembre de 2019. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones opositoras al MAS-IPSP, no hay evidencia –por lo menos hasta donde se conoce públicamente– de la presencia de miembros del Conade en el gobierno transitorio, por lo que se puede descartar que razones prebendales hayan estado detrás de sus acciones contra Evo Morales. Al parecer, la lucha del Conade estuvo motivada, más bien, por un resarcimiento ideológico e inclusive, por desagravios personales con el gobierno del MAS-IPSP y, particularmente, con el exmandatario.

Quizás, la negación por parte del Conade de la existencia de un golpe de Estado y de varias masacres en Bolivia, perpetradas por el gobierno de Áñez, significó el último gesto discursivo casi forzado de esta entidad para achacarle la responsabilidad a su "chivo expiatorio", Evo Morales, por el decurso de los acontecimientos políticos.

A fines de mayo del 2020 el Conade reapareció públicamente, en un contexto en el que los sectores contrarios al MAS-IPSP debatían en torno a una posible reforma del sistema electoral boliviano. El Conade proponía, por su parte, la igualdad del voto entre el área rural y al área urbana, sosteniendo que la Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos asignaba arbitrariamente los escaños atentando contra los derechos de la mayoría y, por lo tanto, favoreciendo, supuestamente, al MAS-IPSP. En este sentido, la propuesta del Conade de que "un voto urbano sea igual a un voto rural" fue considerada muy polémica, porque atentaría "directamente contra la democracia intercultural

de los pueblos indígenas y, con la idea de concentrar escaños en las ciudades, marginar aún más el área rural de lo que se encuentra ahora" (Guarachi, 2020).

Finalmente, en una coyuntura electoral marcada por expansión de la epidemia del coronavirus –y por la difusión de encuestas que pronosticaban una importante ventaja electoral para el MAS-IPSP–, el TSE postergó las elecciones, primero para el 6 de septiembre y, después, como fecha definitiva ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el 18 de octubre. Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que las sucesivas acciones del Conade solo ratifican su posicionamiento opositor hacia el partido de Evo Morales.

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)

La APDHB surge en la clandestinidad más absoluta, en una parroquia de La Paz, en tiempos de la dictadura del general Hugo Banzer, en noviembre de 1976. Desde entonces, esta institución se caracterizó por su defensa de los derechos humanos en diferentes gobiernos. El padre jesuita Federico Aguiló fue su primer presidente.

Ahora bien, desde la década de los años ochenta, cuando Evo Morales ejercía sus derechos sindicales como dirigente de los productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba –y en esa condición encaró luchas para evitar las políticas de erradicación por parte de los diferentes gobiernos bolivianos, sufriendo por ello persecución política– la APDHB fue una de las organizaciones que denunció la situación política del Chapare.

Por otra parte, Evo Morales nombró a un expresidente de la APDH como ministro de Gobierno, ministerio caracterizado, históricamente, por su faceta represiva. En ese marco, la relación era hasta entonces fluida, inclusive, el 9 de abril de 2007, el presidente de la APDHB, Guillermo Vilela, rechazó "el informe del Departamento de Estado norteamericano que indica que en Bolivia se violan los derechos humanos".

Según este activista, los pequeños errores no opacaban los avances en derechos humanos durante los primeros 14 meses de gestión del presidente Morales.[12] No obstante, esa relación inicialmente estrecha entre el otrora dirigente campesino defendido por la APDHB fue, poco a poco, dando un viraje. Así, por ejemplo, al año de la posesión de Morales, la Asamblea expresó su preocupación en relación a varios escándalos por tráfico de influencias que sacudían al gobierno. Seguramente que el momento crítico de inflexión en esa relación fluida entre el gobierno y la Asamblea fueron los hechos de intervención policial perpetrados en la localidad de Chaparina, en septiembre del 2011, en contra de los indígenas movilizados de tierras bajas para evitar que el gobierno de Morales construya una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Esa intervención policial a la marcha indígena provocó que la APDHB se enfrentara con el gobierno, promoviendo una campaña de denuncias permanentes e, incluso, demandas ante instancias internacionales de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Otro episodio que tensionó las relaciones entre Asamblea y gobierno fue la intervención policial, el 20 de enero del 2014, a la sede departamental de esta organización de defensa de los derechos humanos, tomando como pretexto las disputas internas por el control de esta institución. Sobre este incidente, la entonces presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, sostuvo: "…es la primera vez en democracia que la Policía toma la sede de la Asamblea Departamental de Derechos Humanos de La Paz bajo el pretexto de evitar la violencia por un conflicto interno en esa institución".[13] Es probable que el gobierno de Evo Morales asumiera la decisión de ejercer control sobre esta institución. Posteriormente, a

12 https://rebelion.org/la-asamblea-permanente-de-los-derechos-humanos-de-bolivia-rechaza-el-informe-de-eeuu-sobre-el-pais/.

13 http://www.servindi.org/actualidad/99433

los dos años de este intento de toma, el 18 de enero del 2016, activistas de la APDHB denunciaron haber sido hostigados por grupos de choque vinculados al MAS-IPSP. Este clima de tensión se intensificó con el nombramiento de Amparo Carvajal, activista histórica en la lucha por los derechos humanos, como presidenta de la Asamblea.

El 24 de agosto del 2018, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, sindicó a la presidenta de la APDHB de promocionar a organizaciones criminales, por salir en defensa del respeto de los derechos humanos de los cocaleros de los Yungas (La Paz) que rechazaban la erradicación forzosa y que sufrieron violentas intervenciones en La Asunta (*Los Tiempos*, 2/9/2018). Por su parte, el presidente Evo Morales, días después, aseveró categóricamente: "La derecha proimperialista usa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y se oculta en el Opus Dei de la Iglesia católica para atacar el proceso de cambio con campaña de mentiras y falsas denuncias" (*Los Tiempos*, 2/9/2018). Estas declaraciones fueron asumidas, por parte de Amnistía Internacional, como acusaciones reiteradas contra los miembros de la APDH, a través de un informe que señala:

> El hostigamiento contra miembros de la APDH y su directora han continuado. En diciembre de 2018, el gobierno identificó a 43 personas, incluida la directora de la APDH, como promotoras de 'violencia y racismo' durante las protestas del 6 de diciembre de 2018 contra la posibilidad de un nuevo mandato presidencial de Evo Morales.[14]

En rigor, las fricciones entre la APDHB y el gobierno del MAS-IPSP se agudizaron a partir de la decisión gubernamental de postular, una vez más, a Evo Morales y Álvaro García

14 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AMR1804852019SPANISH.pdf.

Linera como candidatos presidenciales del MAS-IPSP para los comicios de octubre del 2019.

Ahora bien, la institución protectora de los derechos humanos inicialmente realizó pronunciamientos aislados sobre la repostulación, sobre todo por el irrespeto al resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016. Posteriormente, sin embargo, esta institución se articuló con el Conade. Por lo tanto, el accionar institucional de la APDHB en la cruzada contra una nueva postulación del binomio Morales-García Linera se tiene que comprender en el marco del accionar del Conade (véase, más arriba, el acápite referido al Conade).

Cuando se produjeron las movilizaciones de los sectores de clase media, tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, en contra el presidente Morales, el 8 de noviembre, Amparo Carvajal, presidenta de la APDH, al unísono con otros sectores cívicos, solicitó la renuncia a Evo Morales, aclarándole "que es el pueblo boliviano que pide que renuncie a su cargo y no solo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho" (Agencia Fides, 9/11/2019). Posteriormente, cuando vino el quiebre constitucional con la renuncia a la presidencia por parte de Morales y la asunción de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, ante la represión a campesinos en Sacaba y El Alto –y, a pesar, de las manifestaciones de instituciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional[15]–, Carvajal llamó a la reflexión a "aquellos activistas" que estaban denunciando los actos sangrientos del gobierno de Áñez, pidiendo "descubrir quienes han sido los verdaderos responsables de la violencia y de las muertes en el país", y acusando a Evo Morales de ser responsable de

15 Incluso la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Argentina presentó en ese país una denuncia contra la mandataria boliviana, Jeanine Áñez, por delitos de "genocidio" y "crímenes de lesa humanidad" y por haber propiciado un supuesto "golpe de Estado" contra Evo Morales" (Radio Panamericana, 18/12/2019).

los hechos de violencia y de la muerte (Radio Panamericana, 29/11/2019).

Después de aquellas declaraciones públicas, a fines de noviembre del 2019, la presidenta de la APDHB se replegó a un silencio que ha mantenido en el curso del gobierno de Jeanine Áñez. Por el contrario, el representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca Apaza, denunció, a casi cuatro meses de la masacre en Senkata, que las muertes seguían "impunes y olvidadas" (*Tiempo Argentino*, 19/3/2020).

Después de la renuncia presidencial de Evo Morales, la acción de la APDH desapareció del escenario público. Esto puede ser leído, del mismo modo que sucede con otros actores sociales opositores al gobierno del MAS-IPSP, como un repliegue en sus movilizaciones que, a lo largo de los últimos años, cobraron sentido por la oposición al gobierno de Evo Morales. La APDHB no reapareció ni siquiera en los días de la pandemia que derivaron en medidas de excepción dictadas por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, aunque esto implicó, entre otras medidas, la militarización del país y la comisión de arbitrariedades, por ejemplo, contra los migrantes bolivianos varados en la frontera de Chile, a quienes no se les permitió el retorno al país, dejándolos en una situación de completa vulnerabilidad. Sobre este caso, solo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitió un comunicado llamando a la solidaridad.[16]

16 El referido comunicado señalaba: "Pedimos a la población evitar actos de discriminación contra la dignidad de nuestros hermanos, pedir a las Autoridades Municipales y de la Gobernación su colaboración en el traslado a sus respectivos domicilios, y en el caso de que tengan sus domicilios en provincias, sean alojados momentáneamente en una casa de acogida, dependiente de la Gobernación o del Municipio respectivo. Apelamos a la solidaridad entre hermanos bolivianos" (*El Día*, 17/4/2020).

Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Fundación Jubileo

Según su página institucional, la Fundación Jubileo "es una institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos. Desarrolla procesos de investigación, información y formación sociopolítica, que buscan construir capacidades para la incidencia política, abierta a la sociedad civil, a las estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional". Entonces, el quehacer de esta institución confesional se orienta a incidir en el ámbito de la política. Ciertamente, su papel en el tiempo precedente a la renuncia de Evo Morales fue protagónico.

La Fundación Jubileo se caracterizó por ser una entidad dedicada a la investigación académica sobre temas asociados, particularmente, a la economía y al aparato productivo. Desde allí se planteó constantemente sus críticas al gobierno de Evo Morales en temas relacionados a la transparencia, el gasto público, el crecimiento económico (señalando que la administración de Morales promovía una bonanza ilusoria).[17] Así, esta entidad se caracterizó por un rasgo académico más propenso al análisis económico en busca de "incidencia política", sobre todo en el ámbito de la opinión pública.

La Fundación Jubileo no estuvo exenta de la tensión entre el gobierno del MAS-IPSP y determinadas ONG, como sucedió con Cáritas-Bolivia. El 2 de agosto del 2017 se produjo un incidente con el viceministerio de Autonomías, Hugo Siles, a propósito de un Taller del Pacto Fiscal organizado por la

17 Por ejemplo, en una nota periodística la Fundación Jubileo advertía que "al país se le acabó la bonanza económica por la que atravesó en los últimos años debido a la caída del precio del petróleo y la baja cotización de los minerales. En el documento de análisis del Presupuesto General del Estado 2015 denominado 'Presupuesto al final de la bonanza y la necesidad del pacto fiscal', la institución asegura que 'la época del superávit fiscal ha finalizado'" (Erbol, 6/5/2015).

Fundación Jubileo en la ciudad de Cochabamba. Siles tildó de "ilegal" ese taller porque, según afirmó, la jurisdicción de la personería jurídica de Jubileo solo era para Cochabamba. Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación, aclaró que ésta tenía jurisdicción nacional. El propio viceministro Siles reconoció que con Jubileo "hubo desencuentros" debido a algunas publicaciones sobre el Pacto Fiscal que, en su criterio, eran "tendenciosas y no utiliza[ban] información oficial" (Unitas, 2018: 23). En todo caso, este incidente reveló las fricciones entre esta fundación y el gobierno de Evo Morales. Estas refriegas, en la mayoría de los casos, estaban sustentadas en estudios económicos realizados por esta entidad confesional.

A finales del año 2018, la Fundación Jubileo se articuló al Conade. En esta condición participó en una conferencia de prensa, el 6 de diciembre, convocando a "la desobediencia civil de manera pacífica", como una manera de expresar la indignación frente a lo que denominó una "arremetida antidemocrática y dictatorial de parte del Gobierno". En esa ocasión, Juan Carlos Núñez, director de Fundación, declaró: "…una dictadura no se trata sólo de sacar tanques y soldados, sino la destrucción de las instituciones del Estado". Y señaló que, "con la habilitación de Evo Morales como candidato, el último bastión de la institucionalidad, el TSE, fue destruido".[18]

Ahora bien, la Fundación Jubileo fue intensificando su cuestionamiento político al entonces partido gobernante a medida que se acercaban las elecciones. En diciembre del 2018, esta fundación advirtió sobre una estructura hegemónica política absoluta implantada desde el gobierno de Evo Morales. Una de las primeras acciones llevadas a cabo por esta fundación, conjuntamente con la UMSA, fue la elaboración, ejecución y difusión de dos encuestas electorales antes de los comicios. Estas encuestas se llevaron a cabo en el marco del programa Tu Voto Cuenta, pero no fueron

18 www.jubileobolivia.org.bo

validadas por el TSE porque no habrían cumplido con los requisitos que la normativa electoral exige. Asimismo, el TSE exigió conocer la fuente de financiamiento de dichas encuestas. Al respecto, Juan Carlos Núñez explicó que el financiamiento fue obtenido de países de la comunidad internacional (*Página Siete*, 27/9/2019). Al final, los datos de la primera encuesta no se difundieron y los de la segunda aparecieron en las redes sociales antes de que el TSE diera permiso. Los datos difundidos daban un 31% a Evo Morales y un 25% a Carlos Mesa; resultados que no coincidían con otras encuestadoras que otorgaban alrededor de un 38% de preferencia electoral al MAS-IPSP. Esta situación evidenció las intenciones políticas de ambas instituciones, solapadas a estos sondeos de percepción electoral avalados por la credibilidad de ambas instituciones. Asimismo, voceros del Conade anunciaron, a fines de septiembre, que, junto con la Fundación Jubileo y las universidades estatales, "se intentará sentar presencia en todas las mesas de votación del país" (Agencia ANF, 27/9/2019).

Después de las elecciones, tildadas de "fraudulentas", la Fundación Jubileo se articuló al Conade con el propósito de sumarse a las protestas de las movilizaciones de los sectores urbanos que buscaban la renuncia presidencial. El 10 de noviembre del 2019, Morales renunció a la presidencia. Luego, Jeanine Áñez se proclamó gobernante de Bolivia y, por efecto adyacente, a los tres días de la posesión se perpetraron las masacres de Sacaba y Senkata, con el pretexto de apaciguar las protestas sociales. No obstante, la Fundación Jubileo no se manifestó sobre estas masacres, a pesar de haber sido parte del encuentro para lograr la pacificación del país, tras los sucesos de Sacaba y Senkata.

Un mes después de la renuncia de Morales, en diciembre del 2019, la Fundación Jubileo difundió un estudio económico planteando, como principal conclusión, que el gobierno del MAS-IPSP "dejó una economía deteriorada". Tres meses después, en el contexto de la crisis sanitaria a raíz de la

presencia del Covid-19, esta fundación se manifestó elogiando las medidas sociales y económicas adoptadas por el gobierno de Áñez para encarar los efectos negativos producidos por la pandemia.

De cara al nuevo proceso eleccionario de 2020, la Fundación Jubileo nuevamente encaró la elaboración de encuestas de intención de voto (como ya hiciera en 2019).

En síntesis, el despliegue institucional de la Fundación Jubileo con relación al gobierno de Evo Morales estuvo marcado por un enfrentamiento sistemático que, a diferencia de otras agrupaciones sociales opositoras del MAS-IPSP, se caracterizó por su contenido académico. Es decir, sus diferentes estudios, sobre todo, económicos sirvieron como punta de lanza para su enfrentamiento contra el gobierno de Evo Morales.

Cáritas-Bolivia

Pastoral Social Cáritas, según su página web, "es una institución de la Iglesia católica, autosostenible, transparente y consolidada en su estructura interna, referente a nivel nacional en la animación y promoción del Desarrollo Humano Integral y el Cuidado de la Creación, que contribuye a forjar una sociedad digna, justa, inclusiva y solidaria". Bajo estos principios institucionales, Cáritas-Bolivia despliega sus actividades sociales que luego, como se explicará más adelante, se desplazaron hacia el campo político boliviano. Al respecto, Juan Carlos Velásquez Silvestre, responsable de formación e incidencia de la Pastoral Cáritas Boliviana dijo: "Pedir que la Iglesia no se meta en política en el sentido amplio es pedirle que mutile su misión en el mundo" (Infobae, 20/5/2019).

En este contexto, Cáritas-Bolivia participó activamente en el curso de la Asamblea Constituyente (2006-2007) apoyando las distintas propuestas constitucionales surgidas de las diferentes organizaciones. En el curso de la primera gestión del MAS-IPSP, la relación entre Cáritas y el gobierno no

tuvo mayores inconvenientes. Sin embargo, la ruptura sucedió a raíz de la intervención policial a la marcha de los indígenas de tierras bajas en el curso de la movilización para evitar la construcción carretera a través del TIPNIS. En ese contexto, la Pastoral Social Cáritas "pidió al gobierno respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y optar por la consulta previa para poder mitigar el conflicto generado por la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, además de dar con los responsables de la violenta intervención policial a la marcha indígena en cercanías de San Lorenzo Yucumo" (*Los Tiempos*, 27/9/2011). Quizás, este conflicto en torno al TIPNIS explica la posterior posición opositora asumida por Cáritas con relación al gobierno de Evo Morales.

Cáritas-Bolivia, a pesar de que es una institución de la Iglesia católica, fue catalogada por el gobierno de Morales como una ONG. En este sentido, el gobierno acusó a varias ONG de formar parte de una estrategia de "injerencia política" orquestada desde diferentes fundaciones europeas y norteamericanas, sobre todo, en el contexto del conflicto del TIPNIS, con el argumento principal de tratar de "dividir organizaciones indígenas" (Unitas, 2018: 23). En ese contexto, por ejemplo, el gobierno del MAS-IPSP expulsó a la ONG IBIS Dinamarca. En el caso específico de Cáritas-Bolivia, la investigadora Loreta Tellería detectó que ésta recibió una donación de la National Endowment for Democracy (NED) (2019: 34). La NED es conocida en la región por ser "una fundación privada para canalizar fondos y 'financiar' 'proyectos democráticos, desarrollar alianzas electorales' de oposición a los gobiernos que Washington considera 'insumisos'" (Calloni, 2013: 203).

Es por ello que el accionar de Cáritas, a la luz de estos roces, tenía dos flancos de enfrentamiento con el gobierno: uno por el lado de la Iglesia católica y el otro por el frente de las ONG. El momento de mayor visibilización de esta posición se registró en el contexto del Referéndum Constitucional para

habilitar a los entonces mandatarios, Morales y García Linera, a la repostulación. En este sentido, la acción de Cáritas ocurrió en el marco del pronunciamiento de la Iglesia católica "a favor de las manifestaciones que busquen defender lo que decidió el pueblo en el referéndum del 21 de febrero de 2016" (*El Día*, 16/2/2018). Posteriormente, Cáritas participó activamente en el paro cívico nacional del 21 de agosto del 2019, a pocos meses de los comicios presidenciales y parlamentarios, conjuntamente con otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil en protesta por la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial. Esta postura, además, era parte del posicionamiento de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Cáritas-Bolivia consideraba que el fallo constitucional que habilitó a Morales a candidatear de nuevo, desconociendo los resultados del Referéndum Constitucional, era "un retroceso para la democracia en el país" (*Página Siete*, 23/8/2019).

Luego vinieron las elecciones nacionales del 20 de octubre denunciadas como fraudulentas por los partidos políticos e instituciones sociales opositoras al liderazgo de Evo Morales, lo cual desencadenó una movilización de los sectores urbanos en las ciudades capitales para, finalmente, derivar en la renuncia de Morales a la presidencia. En este contexto, Cáritas-Bolivia se subordinó, en el curso del conflicto, a los lineamientos de la CEB que, antes de la renuncia, exigió el cese la violencia, pidiendo que se proceda con justica y argumentando que una "auditoría integral" podía pacificar el país.[19] Tras la renuncia de Morales y la designación de Áñez como presidenta, y luego de las masacres a los campesinos aliados del MAS-IPSP, Cáritas-Bolivia no se adhirió a ningún pedido de pacificación.

La asunción de Áñez como presidenta transitoria modificó las relaciones del Estado boliviano con

19 https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/bolivia-iglesia-gobierno-firman-convenio-promocion-humana.html.

Cáritas-Bolivia. La relación tensionada que mantuvo esta institución con el gobierno de Morales se desplazó a un acercamiento con el nuevo gobierno. Ese acercamiento se plasmó, por ejemplo, en "un convenio de cooperación para favorecer la promoción humana integral en las cárceles" (*ibid.*). Al parecer, en el periodo post Evo Morales, esta institución recobró su condición de "brazo social" de la Iglesia católica, abandonando el perfil político que había mostrado contra el anterior gobierno. Así, en el contexto de la crisis sanitaria a raíz de la presencia del coronavirus en Bolivia, esta institución católica se preocupó, entre otras cosas, de que "las autoridades centrales, departamentales y municipales [tomen] medidas de apoyo durante el tiempo de la cuarentena y hasta que la emergencia Covid-19 sea superada" (*ibid.*). Y, sobre todo, a raíz de la situación de precariedad que vivieron los emigrantes bolivianos que trabajan en el norte chileno y se quedaron varados en la frontera por la decisión del gobierno transitorio de no dejarlos ingresar a Bolivia, Cáritas-Bolivia difundió un comunicado en favor de los migrantes y refugiados, exhortando "a evitar que las personas en situación de movilidad humana sean expulsadas de los lugares donde tienen alojamiento temporal", y solicitando, asimismo, "medidas que resguarden su integridad física y salud, provisionando insumos de higiene personal y colectiva en las casas de acogida y alojamientos donde se encuentren, especialmente, por la cantidad de niños existentes y que incrementan el riesgo común" (*ibid.*).

En consecuencia, Cáritas-Bolivia recorre los mismos senderos que muchas de las organizaciones de la sociedad civil opositoras al gobierno de Evo Morales; vale decir, que de un enfrentamiento frontal se han desplazado, en el curso del gobierno transitorio de Áñez, hacia un repliegue o –como es el caso de esta institución confesional– han reasumido su viejo perfil, más social que político.

Organizaciones ciudadanas y sectoriales críticas al MAS-IPSP

Plataformas ciudadanas

La convocatoria a un Referéndum Constitucional por parte del gobierno del MAS-IPSP, en septiembre del 2015, para habilitar a una nueva postulación a Evo Morales y Álvaro García Linera en los comicios de octubre del 2020 fue el momento político apropiado para el surgimiento de las agrupaciones ciudadanas, luego denominadas plataformas ciudadanas.

La aparición de los partidos políticos opositores tradicionales, al inicio de la campaña del referéndum constitucional, fue vista por muchos sectores de la sociedad como un hecho funcional a la estrategia del oficialismo. Estos partidos políticos sabían que el referéndum era un momento decisivo para "deshacerse" de Evo Morales en su afán de continuidad en el poder. Sin embargo, también eran conscientes de que su imagen deteriorada ante la opinión pública era contraproducente para la campaña por el No. Es por ello que los políticos opositores se camuflaron con un discurso ciudadano que apelaba a la alternancia democrática. Así, empezaron a emerger en el espectro de la opinión pública las organizaciones o agrupaciones ciudadanas para alentar la opción del No en la campaña previa al referéndum.

Se identificaron dos tipos de agrupaciones ciudadanas: aquellas conformadas por políticos disidentes del MAS-IPSP que esgrimían el desvío ideológico del "proceso de cambio" y las llamadas plataformas ciudadanas –aparentemente independientes de cualquier estructura partidaria[20]–, cuyo

20 Entre esta últimas se puede mencionar a "Me comprometo con Bolivia" (compuesta, esencialmente, por jóvenes); "Bolivia dice No", que aglutinó a profesionales, artistas y exautoridades opuestos a la modificación de la Constitución y a la reelección de Evo Morales; y, finalmente, "Todos podemos ser presidente", agrupación convergente de profesionales, artistas y exautoridades de la ciudad de Santa Cruz adscritos a la campaña por el No.

eje discursivo estaba centrado en "el respeto al Estado de derecho" para evitar el continuismo de Evo Morales.

Hubo un importante despliegue movilizador de las agrupaciones ciudadanas en el desarrollo de la campaña contra la relección de Morales y García Linera que contribuyó al resultado final del Referéndum Constitucional, imponiéndose por un estrecho margen el No (51,3%) frente al Sí (48,7%). Estas agrupaciones ciudadanas fueron denominadas como "ciudadanía efectiva" y la participación de jóvenes en las áreas urbanas, sobre todo, a través las redes sociales, fue un factor clave para el resultado final del referéndum. Desde el punto de vista sociológico, esta estrecha victoria del No reveló el desencanto de los sectores medios urbanos –clase media– hacia el proyecto político del MAS-IPSP y, sobre todo, en relación al liderazgo político de Evo Morales. Las plataformas ciudadanas, por su parte, demostraron su capacidad de movilización e interpelación, especialmente, hacia los sectores urbanos. Estos antecedentes son insoslayables para entender el *modus operandi* de estas plataformas luego del referéndum, sobre todo cuando el MAS-IPSP, a pesar del veredicto del 21F, decide impulsar, por otra vía, la candidatura del binomio Morales-García Linera para los comicios presidenciales de octubre del 2019.

A pesar de la aceptación inicial de la derrota en las urnas, a los pocos meses del referéndum el oficialismo buscó otras opciones constitucionales para habilitar a Morales como candidato presidencial (Mayorga, 2019: 138). De allí, se deriva el comportamiento reactivo de la oposición, así como sus estrategias orientadas a desempolvar los argumentos vertidos antes del referéndum para oponerse al binomio Morales-García Linera, pero, esta vez, con un aditamento relevante: el respeto al voto asociado a la defensa de la democracia. En esta correlación de fuerzas, las plataformas ciudadanas opositoras a la relección presidencial, haciéndose eco del eje discursivo de la oposición partidaria, volvieron a aparecer en el espectro mediático y en las redes sociales, protagonizando

manifestaciones en contra de una nueva postulación de Morales en distintas ciudades del país.

Una fecha paradigmática para las agrupaciones ciudadanas fue el 21 de febrero del 2017, o sea, un año después de la verificación del Referéndum Constitucional. Esta fecha se convirtió en un momento celebratorio por parte de varias agrupaciones ciudadanas emergentes en el decurso de la campaña previa al referéndum. En Santa Cruz, la directiva del CPSC, conjuntamente con las plataformas Bolivia Dijo No, Sol Bolivia y Me Comprometo, organizaron varias actividades celebratorias por el aniversario, en una movilización ciudadana que fue leída como el "despertar del pueblo cruceño" (*El Deber*, 21/2/2017).

Asimismo, esa jornada permitió calibrar las fuerzas políticas –y simbólicas– en las calles (Tórrez, 2017). Unos alzaron la voz por el No en el referéndum, mientras que otros hicieron un llamado para arengar contra el mismo. Efectivamente, el oficialismo esgrimió el discurso de que la campaña del No fue parte de un complot tramado por dirigentes opositores al gobierno de Morales quienes, con el apoyo del gobierno norteamericano,[21] se ingeniaron un "caballo de Troya" (el denominado caso Zapata[22]), orquestando

---

21 La entonces ministra de Comunicación, Gisela López, aseveró: "El 21 de febrero (de 2016) se consolida la estrategia que se trama y diseña desde Estados Unidos y Washington para tumbar un referendo en el marco de la democracia, de la profundización de la democracia, que se estaba realizando en Bolivia" (https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/16/21f-dia-de-la-mentira-la-campana-que-promueve-la-reeleccion-de-evo-morales-como-presidente/).

22 El denominado Caso Zapata hace referencia a Gabriela Zapata, exgerente y empresaria, expareja del entonces presidente, Evo Morales. A dos semanas del Referéndum Constitucional se publicó una denuncia sobre un hijo entre el presidente y Zapata. Además, la denuncia estaba asociada a tráfico de influencias, pues, gracias a esta relación sentimental, Zapata habría obtenido licitaciones públicas a favor de la empresa chica CAMC, desde 2012 hasta 2016. El 23 de mayo de 2017, la justicia boliviana

una campaña mediática de desprestigio difundida por el llamado "Cartel de la mentira" (en alusión a un grupo de medios y periodistas opositores).

Otra fecha representativa aprovechada por las plataformas ciudadanas para protagonizar actos públicos con connotaciones simbólicas fue el 10 de octubre del 2017 (efemérides del restablecimiento de la democracia en Bolivia, en 1982). En esta ocasión, las plataformas ciudadanas cruceñas llevaron a cabo actos masivos en contra a las intenciones oficialistas de no reconocer el resultado del Referéndum Constitucional. Así, el despliegue de las plataformas ciudadanas, posterior al 21F, se caracterizó, sobre todo, por ser movilizaciones recordatorias y simbólicas. Estas protestas se reactivaron después de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó Morales y García Linera. Esta sentencia, además, se emitió en un contexto de debate y protestas por el Nuevo Código del Sistema Penal (NCSP), circunstancia que otorgó a las plataformas ciudadanas nuevas consignas para la movilización callejera.

En rigor, las protestas en contra del NCSP permitieron que las plataformas ciudadanas se articularan con otros sectores –como, por ejemplo, el Colegio Médico– movilizados en contra el gobierno del MAS-IPSP. La abrogación del NCSP por parte del gobierno de Evo Morales es un indicador inequívoco de la capacidad de influencia que habían adquirido estas plataformas en el espacio público boliviano. Entonces, esta bisagra temporal entre la sentencia de la TCP y la movilización de los galenos fue propicia para que las plataformas ciudadanas se erijan en un referente insoslayable para el activismo permanente en contra del gobierno del MAS-IPSP, particularmente en lo referido a la repostulación de los entonces mandatarios bolivianos. Ciertamente, el conflicto protagonizado por

---

condenó a diez de años de prisión a Gabriela Zapata, quien se encuentra cumpliendo su condena en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores (La Paz).

los médicos contra la aprobación del NCSP fortaleció al despliegue movilizador de las plataformas ciudadanas y su capacidad de influencia en las decisiones del propio gobierno. Pero, más allá de los efectos políticos institucionales de estas agrupaciones ciudadanas, su mayor incidencia fue como catalizador del malestar de determinados sectores citadinos acomodados.

La movilización de estas plataformas ciudadanas fue un *continuum*. En un primer momento se trató de movilizaciones simbólicas, para luego convertirse en movilizaciones activas. No obstante, al acercarse las elecciones presidenciales, en el curso del año 2019, el accionar de estas plataformas se fue subordinando al de otros actores estratégicos, como el caso del CPSC. Es importante destacar las alianzas de algunas plataformas ciudadanas articuladas con CC, de Carlos Mesa, y el vínculo de las más radicales con Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial de UCS.

Luego, en el curso de las movilizaciones postelectorales del 20 de octubre del 2019, la movilización de las plataformas se masificó y expandió a otras ciudades, abanderando el discurso "fuera Evo", incluso con arengas racistas. Este movimiento, predominantemente urbano y compuesto mayoritariamente por jóvenes, protagonizó movilizaciones a lo largo de octubre y noviembre, las cuales trataron de ser desacreditadas por el presidente Evo Morales usando el calificativo de "pititas" (en alusión a las pitas o cuerdas con las que se cortaba la circulación en las calles). Algunas plataformas estaban supeditadas a las directrices emanadas desde el ente cívico cruceño, mientras que otras se articularon al partido Demócratas y a la Gobernación de Santa Cruz. Luego de que Morales renunció a la presidencia, muchas plataformas ciudadanas desaparecieron del espectro público boliviano, aunque algunas como el movimiento #PititaTuitera siguieron vigentes en el espacio público. En relación al devenir de estas plataformas durante el desarrollo del gobierno

de Áñez, cabe rescatar la valoración que hace al respecto Fernando Mayorga (2020):

> El Gobierno [de Áñez] tampoco apela a la base social que se articuló en las ciudades mediante plataformas ciudadanas, sobre todo en zonas de clase media, y que tuvieron una fuerte capacidad movilizadora en octubre y noviembre del año pasado. Estos días no existen señales de su existencia denotando el carácter episódico e instrumental de un accionar motivado por objetivos políticos. No fueron impulsadas por la solidaridad ni el bien común, sino por el revanchismo y la polarización. Por eso, no se transformaron en capital social, algo que hubiera sido muy útil en estos días de pandemia.

Por otra parte, algunos grupos afines a estos colectivos hicieron guardia delante la residencia de la Embajada de México en La Paz para que evitar la salida de varias exautoridades del gobierno de Morales asilados en ese lugar y otras se movilizaron para que Carlos Romero, exministro de Gobierno de Morales, no salga en libertad de la penitenciaria de San Pedro en la ciudad de La Paz.

En definitiva, el advenimiento de estas plataformas ciudadanas se da en el contexto de la decisión gubernamental de encarar una nueva postulación del binomio Morales-García Linera para las elecciones presidenciales de octubre del 2020. Entonces, el discurso enarbolado por estas plataformas ciudadanas fue el de defensa de la "democracia", asociado al Estado de derecho. Además, grupos de plataformas ciudadanas se movilizaron en favor de una nueva convocatoria a elecciones, así como exigiendo el retiro de la personería jurídica del MAS. Por su composición social urbana, a diferencia de otras movilizaciones populares, son grupos esencialmente de clase media con un objetivo claro: desplazar a Evo Morales, presidente indígena, de la órbita del poder.

Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas (La Paz)

Adepcoca es una institución legal fundada el 20 de julio de 1983, con el objetivo de agrupar a todos los productores de coca de la región de los Yungas de La Paz, y defender la producción de coca originaria, ancestral y tradicional. Con ese objetivo, se articularon, históricamente, con los productores de hoja de coca del trópico cochabambino. Adepcoca representa a las tres provincias tradicionalmente productoras de coca del departamento de La Paz: Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, constituidas en 13 regionales.

Las diferencias entre el gobierno y los cocaleros de Yungas se remontan a la aprobación de la Ley General de la Coca, en 2017, rechazada por este sector porque no se incrementaron las hectáreas legales de producción reconocidas para el Chapare, así como los beneficios para esta región de la que provenía el presidente Morales. Efectivamente, aún con el rechazo de los cocaleros de los Yungas, el 8 de marzo de 2017 el presidente Morales promulgó la Ley General de la Coca mostrando el documento en alto; mientras en Palacio de Gobierno celebraban al ritmo de saya afroboliviana, la dirigencia yungueña pedía un referendo para establecer dónde se consume más la hoja ancestral (*Página Siete*, 28/8/2018). La promulgación de esta ley polémica fue el corolario de un conjunto de tensiones y enfrentamientos, inclusive violentos, por la intervención policial. Para los dirigentes yungueños, esta ley era discriminadora porque favorecía a los productores de la región del trópico cochabambino en desmedro de los Yungas. El nudo gordiano del conflicto estribaba en que esta ley legalizaba el cultivo de 22 mil hectáreas (ha) de hoja de coca en todo el país: 14.300 ha para La Paz y 7.700 ha para Cochabamba. Sin embargo, esta distribución no coincidía con los acuerdos previos, situación que provocó una ruptura entre Adepcoca y el gobierno.

En marzo del 2018, el conflicto se reactivó a raíz de que, en una multitudinaria asamblea en Coripata, un Comité

Ad Hoc se impuso, a la cabeza de Edgar Burgoa, para desconocer al dirigente contestatario al gobierno, Franklin Gutiérrez, procediendo a tomar por la fuerza la sede de Adepcoca en La Paz (*Página Siete*, 23/4/2018). El Comité fue denunciado por la dirigencia de tener afinidad con el MAS y por querer formar un directorio paralelo. Posteriormente, el Comité Ad Hoc impugnado entregó a los fundadores de Adepcoca la dirección de esta institución, para que, finalmente, se le devuelva al directorio de Gutiérrez la conducción de esta institución.

No obstante, el momento más crítico ocurrió el 24 de agosto de 2018 cuando se registró un enfrentamiento entre policías y comunarios de La Asunta. Según el Ministerio Gobierno, el conflicto obedeció a que Franklin Gutiérrez habría instigado a los cocaleros a la violencia organizando, supuestamente, grupos armados para emboscar y atacar a los uniformados con el lamentable resultado de un fallecido y siete heridos.

Además de este trágico saldo, el enfrentamiento determinó que, días después, Gutiérrez fuera acusado de instigación y detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro. A todas luces, este enfrentamiento supuso la ruptura definitiva entre Adepcoca y el gobierno de Morales, el cual llegó a calificar a la organización cocalera yungueña de "estructura violenta".[23] Del mismo modo, paralelamente, se produjo

23 El entonces viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, a raíz de un incidente donde murió un dirigente cocalero en el Trópico dijo: "Ese asesinato y otros hechos de violencia ocurridos en Yungas en los últimos meses deben ser investigados a profundidad, hasta dar con los responsables, hasta desmantelar cualquier estructura violenta que esté operando en esa región, y precisamente es que tenemos que referirnos a una estructura violenta que ha operado y sigue operando en los Yungas: hablamos de Adepcoca" (https://www.elperiodico-digital.com/2019/06/25/rada-califica-a-la-adepcoca-como-estructura-violenta).

el alineamiento de esta organización al campo opositor al MAS-IPSP. Posteriormente, Adepcoca denunció el hostigamiento por parte del gobierno de Evo Morales que se tradujo, entre otras cosas, en el intento de toma de su sede sindical, en la ocupación de las instalaciones del hospital cocalero de Adepcoca, así como de la planta de producción Bi-Mate pertenecientes a los productores de coca de los Yungas.

A raíz de estos hechos, se produjeron declaraciones de miembros del Conade para articular en su lucha a los productores de hoja de coca de los Yungas. Asimismo, mediante un comunicado, el Conade se declaró en estado de emergencia por los acontecimientos registrados en la localidad de Trinidad Pampa del municipio de Coripata (Nor Yunga, La Paz), por los enfrentamientos y la muerte de un cocalero, Miguel Coico, y por el allanamiento a las oficinas de Adepcoca en La Paz (Radio Fides, 24/6/2019).

A inicios de agosto del 2019, los dirigentes de Adepcoca manifestaron, públicamente, su predisposición de articulación al Conade. Sobre este acercamiento, el dirigente cocalero yungueño, Álex Quisbert, declaró lo siguiente: "Es buena la iniciativa reconsiderar algunos aspectos y replantear otros tomando en cuenta que este gobierno sólo ha hecho daño a los yungueños recriminándonos (…) Si va haber una movilización convocada por el Conade, como Adepcoca vamos a participar porque lo único que hemos pedido es el respeto a nuestra organización y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) y a la propia Ley 906 (General de la Coca) que el mismo gobierno está desconociendo" (*El Diario*, 3/8/2019).

Este vínculo viene desde fines de agosto del 2018, cuando el Conade manifestó, a través de un comunicado, su solidaridad con Adepcoca por la persecución política ejercida por el entonces gobierno del MAS-IPSP, solicitando, incluso, la renuncia del entonces Defensor del Pueblo por haberle quitado su rol de "independencia e imparcialidad" a esa institución y por su inclinación favorable al gobierno (aprovechando, además, para la defensa del 21F).

En el mes de agosto del 2019, Adepcoca se alía "formalmente" con el Conade en su confrontación con el gobierno de Evo Morales. El 10 de octubre el Comité convocó un cabildo que se llevó a cabo en La Paz y Cochabamba, simultáneamente. En esa movilización se esgrimía la defensa de la democracia, la libertad y la Madre Tierra. Entre sus resoluciones se exigía al gobierno de Evo Morales otorgar una amnistía general e irrestricta, de manera particular e inmediata, a Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa.

Después de los comicios del 20 de octubre, las fuerzas opositoras convocaron a manifestaciones, en principio, pidiendo segunda vuelta, luego nuevas elecciones y, finalmente, la renuncia de Morales. Adepcoca jugó un papel protagónico. Así, el 23 de octubre, al inicio de las movilizaciones, esta organización se sumó a las protestas que empezaron con una marcha y acabaron en enfrentamientos con la policía en la plaza Abaroa (La Paz), registrándose una gasificación y dos detenidos (*Página Siete*, 24/10/2019). El 7 noviembre, el presidente del CPSC, Luis Fernando Camacho, quien lideró las movilizaciones, fue recibido con guirnaldas de hoja de coca en el cabildo organizado por Adepcoca, de Yungas, en la zona de Villa Fátima (La Paz). Este hecho simbolizó esa relación que habría establecido la organización cocalera de los Yungas con las organizaciones sociales opositoras del gobierno del MAS-IPSP.

Esta alianza develó, al mismo tiempo, que las motivaciones que orientaron a muchas organizaciones sociales opositoras al gobierno del MAS-IPSP estaban vinculadas a intereses políticos traducidos, en muchos casos, en rencillas personales que, en ocasiones, derivaron en un abandono de los principios ideológicos. Posteriormente, Adepcoca se adhirió a las movilizaciones encabezadas por el CPSC y el Conade.

El 14 de diciembre, a los dos días de posesionada Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, uno de los efectos inmediatos fue la determinación judicial de disponer medidas sustitutivas para la liberación del dirigente cocalero yungueño Franklin

Gutiérrez, tras un año de cárcel en la prisión de San Pedro. Y el juicio en su contra, en los hechos, quedó suspendido.

Al inicio del gobierno de Áñez, Adepcoca emprendió algunas acciones fundamentalmente para zanjar "cosas pendientes" con el gobierno de Evo Morales. Así, por ejemplo, el 27 de diciembre del 2019 dirigentes de Adepcoca anunciaron que procesarían al expresidente Evo Morales y a dos de sus ministros –Carlos Romero, de Gobierno, y César Cocarico, de Desarrollo Productivo– por la persecución política a los dirigentes cocaleros yungueños y, sobre todo, por la represión y muerte de cocaleros en la zona de los Yungas (*Correo del Sur*, 29/12/2019). En este sentido, el 21 de enero del 2020, Adepcoca presentó una denuncia ante la Fiscalía contra César Cocarico y un grupo de dirigentes cocaleros yungueños por la conformación de una Adepcoca "paralela", así como por la ocupación del hospital de la asociación y por su uso como centro de acopio y comercialización de coca. Por otra parte, a principios de marzo del 2020, Elena Flores, presidenta de Adepcoca y partidaria del MAS, fue detenida, con orden judicial, por la toma y destrucción del centro de salud de la entidad cocalera en 2019. El abogado de Flores denunció que se trataba de una "detención con matices políticos" por haberse manipulado pruebas "con el objetivo de fundamentar la orden de su detención" (*El Potosí*, 21/1/2020).

Como se puede advertir, el enfrentamiento de Adepcoca con el gobierno del MAS-IPSP estuvo signado por la aprobación de la nueva Ley de Coca que desató los intereses de los sectores involucrados, sobre todo, por la cuestión de la distribución de las hectáreas reconocidas para la producción legal de la hoja de coca. Este hecho generó un distanciamiento entre los cocaleros y el gobierno de Evo Morales que, posteriormente, se tornó insalvable. Este distanciamiento provocó que Adepcoca se alineara con sectores sociales opositores del partido de Morales para encarar una lucha política que en el mes de noviembre tuvo el desenlace conocido. Durante ese enfrentamiento, la persecución política fue un rasgo común.

Es decir que, primero, el gobierno de Morales persiguió a los dirigentes de Adepcoca y, posteriormente, durante el gobierno de Áñez, los dirigentes cocaleros yungueños, aliados del MAS-IPSP, fueron sometidos a denuncias y apresamiento. Es el caso específico de la dirigente de Adepcoca, afín al MAS-IPSP, Elena Flores, acusada, en marzo del 2020, de estar involucrada en los hechos de violencia que terminaron con la destrucción y toma del hospital de esa asociación en la zona de Villa del Carmen de la ciudad de La Paz (*Página Siete*, 6/3/2020).

Colegio Médico de Bolivia

En un contexto sociopolítico desfavorable para el MAS-IPSP, a raíz del malestar provocado por el fallo constitucional que viabilizó la respostulación del binomio Morales-García Linera, la Asamblea Legislativa Plurinacional dio inicio, en el primer semestre de 2017, al debate para la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal (NCSP) (Mayorga, 2019: 141).

A pesar que este Código abarcaba muchos temas y estaba orientado a una transformación de la administración de la justicia en materia de derecho penal, los debates públicos en contra se restringieron a algunas cuestiones sensibles, como el aborto y los derechos sexuales. Desde un punto de vista sociopolítico, el debate del NCSP posibilitó la irrupción de un nuevo actor social: el Colegio Médico. A partir de ese momento y, posteriormente –hasta, inclusive, las elecciones nacionales del 2019– este ente gremial fue un actor social con incidencia e implicancia política. Inicialmente, la bandera de las movilizaciones de los médicos fue el artículo 205 del NCSP, pues, según los dirigentes de los médicos este significaba la "criminalización de su praxis médica" (*El Deber*, 31/11/2017). La movilización de médicos y trabajadores en salud empezó a fines de noviembre del 2017, de manera virulenta.[24]

---

24 El primer día de huelga se produjeron hechos de violencia: "Después de formar una cadena humana, los médicos quemaron

Ahora bien, este conflicto de los galenos bolivianos enfrentó, en sus inicios, la resistencia del ente cívico paceño que organizó una "contraprotesta" (*Página Siete*, 23/11/2017). No obstante, en el decurso de la movilización los galenos fueron articulando a otros sectores sociales, especialmente, a las plataformas ciudadanas opositoras a la reelección de Evo Morales. Así, a la movilización de los médicos se sumaron, por ejemplo, grupos confesionales: evangélicos, cristianos y católicos, que se oponían al nuevo código por cuestiones religiosas referidas, principalmente, a la legalización del aborto (contemplada en esta nueva norma). Pero, sobre todo, los grupos opositores a la reelección presidencial entendieron que esta coyuntura era propicia para vigorizar sus protestas contra el gobierno. El 27 de diciembre del 2017, la ALP aprobó por dos tercios la norma, "empero, las protestas, lejos de amainar, se incrementaron denotando cierta incapacidad gubernamental del manejo del conflicto" (Mayorga, 2019: 142). Esta presión de las protestas de los galenos y las plataformas ciudadanas hicieron que el gobierno del MAS-IPSP retrocediera, anunciando la abrogación de la norma el 21 de enero de 2019. Quizás, esta victoria de los médicos, en el contexto del debate del NCSP, confirmó que se trataba de un actor con una importante capacidad de confrontación al gobierno.

Otra cuestión que generó confrontación, a lo largo de 2019, entre el Colegio Médico y el gobierno de Evo Morales fue la implementación del Sistema Universal de Salud (SUS). Los médicos tenían un conjunto de argumentos[25] para oponerse

---

ayer sus mandiles blancos como una forma de protesta contra el 'abuso' y la 'imposición' de normas al sector" (*Página Siete*, 24/11/2017).

25 "Los médicos exigían cinco puntos de atención al Ministerio de Salud: institucionalización de los cargos de base, intermedios y jerárquicos; abrogación de la Ley 1189 de fortalecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS); incorporación de profesionales de salud a la Ley General del Trabajo;

a la implementación del SUS. Esta movilización alcanzó momento álgido en agosto de 2019, cuando los galenos decretaron un paro indefinido que se prolongó por 59 días; el mismo fue suspendido el 17 de octubre, a solo tres días de la celebración de las elecciones nacionales. Esta protesta fue percibida por el gobierno del MAS-IPSP como una "huelga política"[26] y, al mismo tiempo, los médicos consideraron el manejo de este conflicto como producto de la "politización".[27]

El Colegio Médico de Bolivia y sus instancias departamentales participaron activamente en varias movilizaciones organizadas por los entes cívicos o las plataformas ciudadanas para oponerse a la nueva postulación de Evo Morales. Esa participación se concretó, además, en el curso de las movilizaciones de octubre y de noviembre del 2019, con la presencia de los dirigentes de los médicos mimetizados en las movilizaciones que desencadenaron la renuncia de Evo Morales.

La asunción de Jeanine Áñez dio inicio a una nueva relación entre la entidad colegiada de los médicos y el gobierno, marcada por la asignación de cargos públicos a la dirigencia. Así, por ejemplo, Aníbal Cruz, expresidente del Colegio Médico, fue designado ministro de Salud. Igualmente,

---

declarar el sector como estratégico, y participación en la ley contra el cáncer" (http://datos-bo.com/Bolivia/Actualidad/Colegio-Mdico-va-al-paro-indefinido-desde-el-lunes).

26 Según una nota periodística, la entonces ministra de Salud, Gabriela Montaño, "lamentó en diálogo con la prensa la 'inflexibilidad' de los colegios médicos, a los que acusó de hacer política con el dolor de los más necesitados, que no tienen seguro o no pueden pagar consultas privadas" (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201909181088722724-medicos-bolivianos-endurecen-con-ayuno-su-larga-huelga-contra-el-gobierno/).

27 El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, aseveró que "la politización es un cáncer que terminará por eliminar al sistema de salud, ya que a ningún gobierno le interesó invertir en mejorar este servicio y solo disponer de él" (Agencia Fides, 8/9/2019).

Erwin Viruez, expresidente del Colegio Médico de Bolivia –quien liderizó el paro de los galenos por casi dos meses contra el gobierno de Evo Morales, suspendido tres días antes de las elecciones del 20 de octubre del 2019– fue designado como viceministro de Salud.

Sin embargo, estas autoridades duraron poco en sus cargos: a raíz del agravamiento de la epidemia del coronavirus, el ministro Cruz fue reemplazado el 8 de abril de 2020, entretanto que el viceministro Viruez renunció inmediatamente después, el 9 de abril. Su reemplazante fue Jorge Larrea, expresidente del Colegio Médico de La Paz, que encabezó diferentes movilizaciones cuestionadoras contra el gobierno de Evo Morales. La designación de Larrea fue calificada por el Comité Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (SIEMES) de La Paz como una "designación política", al considerar que Larrea no es experto en epidemiología, especialidad requerida debido a la crisis sanitaria (*El Deber*, 7/4/2020). Anteriormente, Larrea había sido designado por el gobierno de Áñez –en el contexto de una política orientada a centralizar la acción pública contra el coronavirus, calificada por algunos de "intervencionismo gubernamental"–, como coordinador gubernamental del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación de La Paz (*El Deber*, 7/4/2020).

Por otra parte, una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno de Áñez fue la expulsión de más de 200 médicos cubanos que trabajaban en Bolivia. El gobierno cubano denunció que esta expulsión fue parte de una campaña "anticubana de odio e instigación a la violencia" e, inclusive, la jefa de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, Yoandra Muro Valle, fue sometida a una injustificada retención. El Colegio Médico de La Paz no solo aplaudió esta decisión del gobierno transitorio de Áñez, sino que denunció que Evo Morales pagaba al gobierno cubano unos 4.000 dólares mensuales por cada médico cubano, señalando que los profesionales de la medicina bolivianos suelen cobrar entre

600 y 800 dólares mensuales (*Página Siete*, 27/11/2019). La presencia de médicos cubanos en Bolivia fue un tema de conflicto recurrente entre la entidad colegiada boliviana y el gobierno. Luego, en el contexto de la pandemia del Covid-19, el gobierno cubano –con experiencia internacional en este tipo de misiones– se ofreció a ayudar al país, empero, el gobierno transitorio rechazó esta ayuda con el argumento que "los médicos bolivianos tienen capacidad para responder a esta u otra contingencia" (*Los Tiempos*, 3/3/2020). Por su parte, el Colegio Médico de La Paz, a través de su presidente, Luis Larrea, también se opuso al retorno de los galenos cubanos advirtiendo que "no se permitirá el regreso de médicos extranjeros" (*Los Tiempos*, 3/3/2020).

El arribo del Covid-19 a Bolivia, a mediados de marzo, y su propagación rápida estableció un nuevo escenario para las relaciones entre el gobierno de Áñez y los colegios de médicos. Así, por ejemplo, el ente colegiado de los galenos de Santa Cruz exigió la presencia en ese distrito del ministro de Salud, Aníbal Cruz, con el fin de resolver los problemas de las carencias de equipos de bioseguridad, de recursos humanos, insumos y medicamentos para la atención de los pacientes con Covid-19 (*La Razón*, 2/4/2020). Otra de las preocupaciones, en medio de la crisis sanitaria, era la desinformación y las contradicciones gubernamentales con respecto a los datos de los SEDES departamentales sobre las estadísticas de nuevos contagios. Esto provocó, por ejemplo, que el Colegio Médico de Bolivia lamentara "que las autoridades del gobierno de Jeanine Áñez no tengan un listado sobre el personal de salud que está infectado" (*La Razón*, 17/4/2020). Más allá de declaraciones esporádicas, la relación entre el gobierno transitorio y los colegiados de galenos bolivianos no sufrió fricciones abruptas, lo que quizás obedeció a que muchos exdirigentes de los médicos ocupaban (y ocupan) cargos públicos.

En suma, el papel desempeñado por el Colegio Médico se caracterizó por un recurrente enfrentamiento con el gobierno

de Evo Morales en diferentes momentos, algunos de ellos muy tensos. La adhesión de esta institución a la cruzada para evitar una nueva postulación del binomio presidencial del MAS, sus movilizaciones en coyunturas claves –por ejemplo, en el proceso electoral del 2019– y, posteriormente, la incorporación formal de muchos dirigentes al gobierno transitorio de Áñez, son hechos que revelan el cariz político de las movilizaciones protagonizadas por los médicos bolivianos.

Grupos de choque

Unión Juvenil Cruceñista (UJC)

Históricamente, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fue el "brazo de fuerza" del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSC). En el contexto político de la presencia de Evo Morales en el gobierno se reactivó su accionar, sobre todo, en la coyuntura signada por la polarización sociopolítica, a raíz del debate sobre la Asamblea Constituyente. Precisamente, en ese momento político de alta conflictividad entre la entidad cívica cruceña y el gobierno del MAS-IPSP, el accionar de esta agrupación juvenil fue violento, sobre todo, con los partidarios y simpatizantes del entonces partido gobernante. A principios de la presente década, el proceso de resolución de esa polarización derivó en la consolidación hegemónica del MAS-IPSP en el campo político boliviano. Esta resolución supuso el repliegue del CPSC y, como efecto colateral, de la propia UJC.[28] Posteriormente, algunos miembros de esta agrupación juvenil incluso se adhirieron políticamente al MAS-IPSP.[29]

---

28 Por ejemplo, una noticia periodística daba cuenta de que la Policía capturó a Alfredo Saucedo Ayala, exdirigente de la UJC que estaba declarado rebelde, desde 2015, por el caso terrorismo (*El Potosí*, 19/1/2018).

29 "Ver en un abrazo a masistas y unionistas era impensable, y lo impensable sucedió. Una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y el candidato a segundo senador del Movimiento al

Después de pasar casi una década fuera del espectro público, la UJC reapareció en diciembre del 2018 cuando se registraron destrozos y la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, en el contexto de las movilizaciones para exigir respeto al voto del referéndum del 21 de febrero del 2016. Los miembros de la UJC fueron acusados de aquellos actos. Por otra parte, el 11 de septiembre de 2019, a poco más de un mes de las elecciones generales del 20 de octubre, la UJC protagonizó el destrozo de una casa de campaña del MAS-IPSP en Santa Cruz. A mediados de octubre, la Policía detuvo a un dirigente de la UJC en inmediaciones del lugar donde el MAS iba a celebrar su cierra de campaña en Santa Cruz, situación que derivó en enfrentamientos entre miembros de la UJC y la Policía.

Después de las elecciones y de la instalación del discurso del fraude, la UJC jugó un papel de amedrentamiento y enfrentamiento con sectores políticos y sociales articulados al MAS-IPSP. Así, el 30 de octubre tuvo lugar un choque violento, incluso con presencia de armas de fuego, en la localidad de Montero (Santa Cruz). Producto de ese enfrentamiento, dos integrantes de la UJC resultaron muertos.

En el curso del conflicto, la UJC logró articularse con otras agrupaciones juveniles afines por compartir rasgos violentos –como es el caso de la Resistencia Juvenil Cochala–, en un afán por convertirse en "grupos de choque" de la movilización urbana que derivaría en la renuncia del presidente. La articulación de la UJC a la CPSC fue evidente. Después de la posesión de Jeanine Áñez, el entonces presidente de la entidad cívica cruceña, Luis Fernando Camacho, logró ocupar importantes espacios en el Poder Ejecutivo, incorporando a muchos militantes de la UJC (informante clave, 18/4/2020).

Socialismo (MAS) por Santa Cruz, Isaac Ávalos, sellaron ayer una alianza para apoyar al binomio Evo-Álvaro en las elecciones del 6 de diciembre del 2009" (https://wilfredojordan.blogspot.com/2009/10/bloque-de-union-juvenil-crucenista-hara.html).

En suma, la reaparición de la UJC, luego de casi una década de repliegue, sucede en un contexto de fuerte cuestionamiento a la legitimidad del gobierno de Evo Morales. Esa coyuntura sirvió para que el CPSC reactive, una vez más, a la UJC como una organización esencialmente pensada para el enfrentamiento físico en tiempos de conflicto. Posteriormente a la asunción de Jeanine Áñez, muchos unionistas se articularon al gobierno transitorio. En los meses posteriores, la UJC no volvió a aparecer públicamente como grupo movilizado, replegandose de nuevo.

Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

La Resistencia Juvenil Cochala (RJC), también conocida como "motoqueros", se define, en su cuenta Twitter, como "plataforma ciudadana sin líderes formada para combatir la tiranía y luchar por la democracia en Bolivia".[30] Su irrupción en la escena pública se da a fines de octubre y principios de noviembre de 2019, o sea, en el contexto de las movilizaciones de sectores citadinos que, en definitiva, forzaron a la renuncia presidencial y, con ello, el quiebre constitucional. Según una nota periodística: "La RJC surgió a partir de la unión de siete jóvenes sin militancia política, pero con un claro rechazo a la figura del mandatario depuesto de Bolivia, Evo Morales. Durante los días de mayor conflictividad en las calles, en octubre de 2019, la Resistencia agrupó a 150 personas. Actualmente supera los 5 mil miembros. 'Cochala' es la forma coloquial con que se nombra a los nacidos en Cochabamba" (*Página 12*, 10/2/2020).

Aunque parece un hecho novedoso, en el caso específico cochabambino, la presencia de jóvenes de clase media alta protestando contra el gobierno del MAS-IPSP y, sobre todo, movilizándose para obstaculizar su propuesta del Estado Plurinacional, se remonta al año 2007. Esas protestas, encabezadas por jóvenes, derivaron en los hechos luctuosos

30 https://twitter.com/rjcochala

del 11 de enero del 2007, cuando la ciudad de Cochabamba se convirtió en un escenario de confrontación sociopolítica con sus derivas raciales entre sectores de la clase media y campesinos. De allí, emergieron grupos como la Juventud de la Democracia (o la Juventud K'ochala), esgrimiendo el discurso de la "democracia y la libertad" para oponerse tenazmente al denominado "proceso de cambio" (Tórrez *et al.*, 2009).

A diferencia de esas otras agrupaciones juveniles, la RJC se distingue por el uso de motocicletas, hecho que otorgaba a sus desplazamientos una *performance* que servía para una intervención pública más rápida y, además, violenta. El primer hecho violento en que estuvo involucrada la RJC se registró el 6 de noviembre del 2019 cuando una numerosa caravana organizada por la RJC se trasladó en numerosas motocicletas para desbloquear en inmediaciones del río Huayculli, en las cercanías de Vinto, donde había una barricada formada por grupos afines al MAS-IPSP. Quemaron las instalaciones de la Alcaldía de Vinto y ultrajaron a la alcaldesa. Como consecuencia de los enfrentamientos, resultó fallecido un miembro de la RJC.

Durante la movilizaciones de noviembre, vecinos de la zona sur de Cochabamba, lugar ocupado mayormente por gente migrante y pobre, y de Sacaba, municipio provincial –ambos bastiones electorales del partido de Evo Morales– denunciaron constantes actos de amedrentamiento y violencia perpetrados por los miembros de la RJC, mostrándose pasiva la Policía[31] (*Prensa Latina*, 19/12/2019). En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a propósito de la violencia, en Bolivia se afirma:

> Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia

31 Según una nota periodística, "en su momento, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, preponderó el trabajo de los jóvenes e incluso manifestó que se coordinarían trabajos con ellos" (*Opinión*, 8/12/2019).

> de agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada Resistencia Cochala, grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas.[32]

Por otra parte, una nota periodística sobre la RJC apunta: "Jóvenes en motos, encapuchados, con bates y palos. La agrupación Resistencia Juvenil Cochala nació luego de las elecciones del 20 de octubre y jugó un papel fundamental en los bloqueos y protestas que duraron casi un mes en Cochabamba mientras la Policía se encontraba amotinada" (*Opinión*, 8/12/2019).

Luego de la renuncia de Morales y del nombramiento de Jeanine Áñez como mandataria de Bolivia, la articulación de esta agrupación juvenil fue evidente. Así, por ejemplo, el mismo día de su posesión la nueva presidenta agradecía a la RJC: "¡Gracias Juventud de la resistencia cochala! ¡Que Dios los bendiga y nos permitan ser libres y llegar pronto a elecciones transparentes!".[33] Mientras tanto, los miembros de esta agrupación festejaban en Cochabamba. Esa articulación estaba mediatizada, sobre todo, por la estrecha relación que tenía la presidenta transitoria con el entonces presidente de la entidad cívica cruceña, Luis Fernando Camacho.[34] A tres

---

32 "CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019". En: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp

33 https://twitter.com/JeanineAnez/status/1255703173727236101 [consulta: 25 abril 2020].

34 El 29 de noviembre del 2019, los miembros de RJC brindaron protección al exlíder cívico Luis Fernando Camacho en el cabildo de la Plaza de las Banderas de Cochabamba. Hombres encapuchados hacían parte del acto. Esa seguridad fue catalogada de excesiva e innecesaria (*Página Siete*, 9/12/2019).

días de la represión contra campesinos en Sacaba perpetrada por el nuevo gobierno, en la cuenta Twitter de la RJC se podía leer: "Se siente la democracia después de 5 años y medio. ¡Cuidémosla!".[35] Al respecto, una nota periodística de un medio argentino destacaba: "Reniegan de la política, pero tienen vínculos innegables con líderes cívicos como Luis Fernando Camacho, y cuentan incluso con el visto bueno del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez" (*Página 12*, 10/2/2020).

Un mes después de la posesión de Áñez, el 15 de diciembre del 2019, la RJC recibió 15 motorizados nuevos. Según los miembros de esta agrupación, éstos fueron adquiridos con donaciones realizadas por la población de la ciudad de Cochabamba, en especial de vecinos que en latitas recaudaron monedas y billetes de diversos cortes (*Opinión*, 16/12/2019). Posteriormente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, organizó un homenaje a los jóvenes de la RJC y, fortalecida, esta organización estableció contactos con otras agrupaciones similares en el resto del país con el propósito de extender su radio de acción a nivel nacional,[36] conformando "comisiones en los nueve departamentos del país para estructurar un movimiento de defensa del proceso transitorio" (*El Periódico*, 10/1/2020).

En todo caso, el proceder de la RJC estuvo signado por atropellos, violencia física e, inclusive, por intentos de asesinato, así como por violencia simbólica cargada

35 https://twitter.com/RJCochala/status/1195373823761223680 [consulta: 2.05.2019].

36 En ocasión de la entrega de motorizados a la RJC, el 15 de diciembre del 2019, en la Plaza de Cala Cala se observó a muchos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) con sus poleras Asimismo, una nota periodística da cuenta de que, ante los anuncios de movilizaciones del MAS a partir del 22 de enero, la Unión Cívica Juvenil Chuquisaqueñista, de la que forman parte los denominados "cascos amarillos", firmaron una alianza con la RJC con el objetivo de fortalecerse ya que consideraban que nuevamente estaba "en riesgo la democracia" (*Correo del Sur*, 11/1/2020).

de racismo (es el caso, por ejemplo, de la expulsión a la fuerza de mujeres campesinas de la plaza de Cala Cala). Esta plaza, durante y después de las movilizaciones de octubre y noviembre, fue "apropiada" por miembros de la RJC. Estas actitudes violentas generaron mucha indignación, inclusive en sectores que al inicio de su aparición los apoyaban, pero luego empezaron a "marcar sus distancias" con esta agrupación.[37]

En el ámbito político, la ruptura entre la presidenta Áñez, luego candidata presidencial por la agrupación política Juntos, y el expresidente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho –también postulante a la presidencia por el frente Creemos–, supuso que los integrantes de la RJC apostaran por ambos frentes, repartiéndose en las listas a parlamentarios de ambas estructuras políticas. Después, a la luz de los pronósticos electorales que perfilaban a Camacho con una baja preferencia electoral, la líder del grupo, Milena Soto, anunciaba el retiro de su candidatura de diputada suplente por la alianza Creemos y que ahora su apoyo se dirigía a Juntos, organización política de la presidenta Áñez: "No podemos permitir que el MAS vuelva, es un deseo de todos los bolivianos, mi candidatura no será parte de la división del voto", decía (*Opinión*, 18/2/2019). Posteriormente, en las redes sociales apareció un video filmado en horas de la noche donde se ve a una gran cantidad de personas encapuchadas autonombradas como miembros de la RJC que gritaban, al unísono: "¡Únanse!", en alusión a los candidatos presidenciales

37 "El dirigente de la OTB Santa Ana de Cala Cala, Armando Pérez, manifestó que los vecinos de esta zona se sienten preocupados por la agresión registrada el fin de semana contra un periodista por parte de quien sería miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, Roger R. V. 'Nos preocupa bastante esta situación. Vamos a solicitar una reunión con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, porque se están generando circunstancias que no dicen nada bueno de lo que sucede en Cochabamba', señaló. Asimismo, resaltó que durante los 21 días de conflicto postelectoral de octubre y noviembre fueron todos los vecinos de Cochabamba quienes se movilizaron y no solo unos cuantos" (*Opinión*, 3/2/2020).

opositores al MAS-IPSP, apelando a la necesidad de conformar un solo frente electoral. Algún tiempo después, en febrero de 2020 –y con el propósito de "lavarse la cara"–, los miembros de la RJC llevaron a cabo algunos actos "solidarios" de ayuda a los damnificados por la mazamorra en Tiquipaya. Finalmente, la RJC apareció, en mayo y luego en julio del 2020, en el contexto de los conflictos en el botadero de K'ara K'ara, al sur de la ciudad de Cochabamba, amenazando con desbloquear e inclusive con impedir el ingreso de carros aguateros a la zona de conflicto.

Desde luego, la irrupción de la RJC en el escenario sociopolítico boliviano se da en un contexto de conflicto por la movilización contra el entonces presidente, Evo Morales, que precipitó su acortamiento de su mandato presidencial. Con la consigna de "Evo nunca más", el accionar violento de esta agrupación juvenil, emparentado con el de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), derivó en el típico proceder de un grupo de choque motorizado. Los acontecimientos posteriores develaron, por otra parte, el carácter instrumental de la RJC al servicio de una oposición política que buscaba el alejamiento de Evo Morales del gobierno. De allí, su aparente despliegue en momentos no conflictivos –o excepcionales– como lo ocurrido por la presencia del coronavirus en Bolivia. Dicho de otra forma, el rasgo violento de la RJC solo tiene sentido en el terreno de la política, siempre y cuando esté signado por un contexto de conflictividad social. Entonces, si el "periodo transitorio" deviene en un momento conflictivo seguramente nuevamente va a emerger violentamente, en el campo político, la RJC, al igual que la UJC.[38]

38 A propósito, a inicios de mayo del 2019, cuando la coyuntura política estaba signada por la discusión sobre la nueva fecha de las elecciones, fijada por la mayoría parlamentaria masista para dentro de tres meses (fecha que fue rechazada por el gobierno de Áñez argumentando razones de salud), apareció en las redes sociales un meme atribuido a la RJC que decía: "Cuidado masistas que nos obliguen a volver".

A modo de conclusiones

El Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 fue un momento de inflexión en el campo político boliviano que posibilitó, entre otras cosas, la aparición de la mayoría de los actores de oposición no partidaria al MAS-IPSP. En algunos casos –como las plataformas ciudadanas o el Conade– éstos irrumpieron de forma novedosa en el espectro político, mientras que, en otros –como Adepcoca, el Colegio Médico, la APDHB, Comcipo o el CPSC– reaparecieron en la escena pública. Otro de los rasgos de esta impronta desde la sociedad civil es el regreso de la UJC y la incursión de RJC, en ambos casos convertidos en grupos para la acción violenta. Finalmente, la actividad de la Fundación Jubileo y de Cáritas, a partir de su adscripción católica y de su posicionamiento como instituciones con vertientes académicas, propiciaron estudios y debates orientados a posicionar la idea que el MAS-IPSP se encaminaba por senderos "antidemocráticos".

Ahora bien, el CPSC se erigió en un actor estratégico, antes y después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre del 2019. Ciertamente, el ente cívico asumió el liderazgo de las movilizaciones absorbiendo al resto de las organizaciones opositoras no partidarias al MAS-IPSP. Quizás, este actor estratégico fue decisivo para las movilizaciones citadinas de octubre e inicios de noviembre, que desembocaron en la renuncia de Evo Morales. La principal narrativa de estas movilizaciones estaba anclada en el clivaje democracia/dictadura que luego se complementó con el discurso del fraude electoral.

Luego de la renuncia de Evo Morales y en el curso del gobierno transitorio, los diferentes actores no partidarios opositores al MAS-IPSP asumieron distintos caminos. Muchos de los allegados al CPSC y también a la UJC se articularon al gobierno de Jeanine Áñez, para luego desmarcarse. Lo mismo sucedió con el Colegio Médico. El Conade, por su parte, siguió insistiendo en su cuestionamiento al expresidente y a su partido. Es probable que en esto último radique el sentido de la presencia de estos actores sociales opositores al

MAS-IPSP en el contexto de la transición, organizándose en torno al pedido de postergación de las elecciones e, incluso, de la proscripción del partido del Evo Morales. Sin embargo, no todas las organizaciones opositoras al partido de Evo Morales están articuladas al gobierno de Jeanine Áñez. Por otra parte, los grupos juveniles como la UJC y la RJC se convirtieron, directamente, en grupos de choque "vigilantes" de la "transición".

En suma, la presencia de estas organizaciones no partidarias opositoras al MAS-IPSP encontrará sentido a sus acciones, al parecer, mientras el partido del expresidente Evo Morales siga teniendo presencia en el campo político boliviano.

Bibliografía

Calloni, Stella (2013). *Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia*. Buenos Aires: Editorial Punto de Encuentro.

Cordero, Sofía (2019). "Lo plurinacional tras las elecciones". En: *Animal Político* (*La Razón*, 25 de diciembre).

Flores, Víctor (2019). "El litio y el golpe de Estado en Bolivia". En: https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/016a1pol

Guarachi, Rudy (2020). "La propuesta de la Conade, un atentado contra las minorías electorales". En: https://www.noticiasfides.com/opinion/rudy-guarachi/la-propuesta-de-la-conade-un-atentado-contra-las-minorias-electorales

Mayorga, Fernando (2019). *Mandato y contingencia. Estilo de gobierno de Evo Morales*. La Paz: Friedrich Stiftung (FES)-Bolivia.

Mayorga, Fernando (2020). "Pandemia, política y sociedad". En: *La Razón*, 12 de abril.

Moldiz, Hugo (2020). *Golpe de Estado. La soledad de Evo Morales*. s/l: Ocean Sur. Disponible en: https://oceansur.com/uploads/libro/2020/04/01/golpe-de-estado-en-bolivia-os.pdf

Pedregal, Alejandro (2019). "El golpe de Bolivia huele a litio". En: https://www.telesurtv.net/opinion/El-golpe-de-Bolivia-huele-a-litio-20191125-0036.html

Tellería, Loreta (2019). "La ayuda externa de Estados Unidos en Bolivia". En: *Revista La Migraña,* N.° 31. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tórrez, Yuri *et al.* (2009). *Los jóvenes en el laberinto de la polarización. Agrupaciones juveniles, identidad política, violencia, racismo y democracia boliviana*. La Paz: Centro Cuarto Intermedio / PIEB / PNUD / Plural.

Tórrez, Yuri (2017). "Un año después" En: https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2017/02/19/un-ano-despues-por-yuri-f-torrez/

Unitas (2018). *Informe de Gestión. Condiciones del entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan su actividad en Bolivia 2017*. La Paz: Unitas.

IV

Las élites económicas en la Bolivia contemporánea

Jonas Wolff

En este trabajo trato de analizar el reposicionamiento político de las élites económicas bolivianas en la última fase del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), durante la crisis y caída de este gobierno en octubre y noviembre del 2019 y en el contexto actual. El enfoque se centrará en las representaciones institucionales más importantes del empresariado, es decir en las diferentes asociaciones y cámaras clave. Estas incluyen, en particular: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), a nivel nacional; y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), en Santa Cruz. Además de investigaciones previas al tema (Wolff, 2016, 2019), el siguiente análisis se basa en una revisión de la cobertura mediática y de la comunicación oficial de las asociaciones empresariales, así como en cuatro entrevistas realizadas de manera virtual en abril del 2020.[1]

1 Agradezco a Fernando Molina, Armando Ortuño, Verónica Paz y Rodney Pereira su disposición de compartir sus conocimientos y apreciaciones conmigo.

Los primeros años del gobierno del MAS se caracterizaron por un enfrentamiento abierto entre el gobierno central y las élites económicas, que –en este contexto (2006-2008)– actuaron en alianza estrecha con las élites políticas tradicionales. Tales alianzas se dieron sobre todo a nivel departamental, con enfoque en la "media luna" y Santa Cruz en particular, y tomaron la forma de movimientos autonomistas conservadores (Eaton, 2011). Después del acuerdo constitucional en el Congreso (octubre del 2008) y la aprobación de la nueva Constitución (febrero del 2009), sin embargo, la situación de enfrentamiento gradualmente dio lugar a procesos de acercamiento, de diálogo y negociaciones, hasta llegar a acuerdos y alianzas tácticas entre el gobierno de MAS y gran parte de las élites económicas del país. Este cambio del enfrentamiento a la cooperación fue más notable en Santa Cruz y, concretamente, en el caso de la agroindustria de esta región.[2] En lo que sigue, en un primer paso (1) analizaré el comportamiento de las asociaciones empresariales durante las movilizaciones pre y postelectorales. Después, (2) plantearé algunas tesis que pretenden situar este comportamiento en un contexto histórico y así ayudan a entenderlo mejor. En tercer lugar (3), trataré el posicionamiento de las élites económicas en la nueva coyuntura política, es decir durante el gobierno interino de Jeanine Áñez y con miras a las próximas elecciones. Finalmente (4), concluyo con observaciones generales con respecto a algunas cualidades y particularidades que caracterizan los distintos segmentos del empresariado boliviano.

El empresariado frente a las movilizaciones pre y postelectorales

Si observamos la movilización contra la repostulación de Evo Morales durante los años 2018 y 2019 y, luego, la escalada de

2 Véase, por ejemplo, mi análisis en: Wolff (2016, 2019).

las protestas después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, es llamativo el rol marginal y la posición cautelosa que han asumido las élites económicas. Las diferentes asociaciones empresariales clave se sumaron al movimiento opositor al gobierno del MAS de manera muy gradual e inconsistente y, en general, bastante tarde, a pesar de una evidente afinidad político-ideológica y de la cercanía sociocultural con este movimiento.

Veremos algunos ejemplos de la actuación de las asociaciones empresariales en respuesta a las movilizaciones preelectorales, es decir al movimiento por la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016 ("21F"):

- Cuando se convocó a un paro cívico para el 21 de febrero de 2018 con motivo del aniversario del referéndum de 2016, la CEPB se abstuvo de adoptar una posición oficial, dejando la decisión en manos de las federaciones y cámaras a nivel departamental y/o sectorial. En respuesta, varias organizaciones importantes se sumaron explícitamente a la convocatoria, entre ellas, la CNC, la ANAPO, la CAO y la FEPSC. La ASOBAN, en cambio, no se pronunció sobre el paro cívico.[3]
- Un patrón similar se repitió en diciembre de 2018, cuando la movilización se centró en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debía autorizar (o rechazar) la candidatura de Evo Morales. En este contexto, según *El Deber*, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, puso "énfasis en que la CEPB es una institución que

3 Éste y el siguiente ejemplo se basan en: Wolff (2019: 121-122). Véase también "Aparato productivo cruceño y privados acatan paro por el 21F" (*Página Siete*, 21 de febrero de 2018), "Soyeros y comercio apoyaron movimientos cívicos por 21F" (*El Diario*, 27 de febrero de 2018) y "Los empresarios cruceños acatarán el paro cívico y la ASFI [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero] garantiza la atención de la banca" (Radio Fides, 11 de enero de 2018).

representa los intereses de los empresarios del país en aspectos inherentes a sus actividades específicas, pero no tiene facultades para decidir sobre otros ámbitos que corresponden a los intereses, objetivos y visiones de sus afiliados". La CAINCO, por su parte, sí emitió un comunicado de apoyo al paro convocado por el Comité Pro-Santa Cruz, pero también refirió principalmente a sus "asociados" quienes "en su gran mayoría han indicado que estarían cumpliendo la disposición" propuesta por al Comité Cívico.[4]

- En marzo de 2019, en una entrevista con *Los Tiempos*, antes de su elección como presidente de la CEPB, el presidente de la FEPSC, Luis Barbery, respondió a la pregunta de por qué "estuvo distante" cuando otros empresarios bolivianos "se pronunciaron por el respeto al 21F": "Creemos que desarrollamos una representación totalmente empresarial y para la parte política están los sectores llamados a eso. Los empresarios nos han pedido representarlos en temas que tienen que ver con el desarrollo de Bolivia y en la medida que pueda haber cabida para trabajar en esa dirección estamos allí para apoyar", afirmó.[5]

En general, en esta fase –por un lado– crece la presión social hacia el empresariado para que se sume a la "defensa de la democracia", reforzada por la cercanía político-ideológica y sociocultural entre los actores movilizados y las élites económicas. Por otro lado, podemos observar que las asociaciones empresariales tienden a mantenerse al margen de los enfrentamientos políticos. Incluso las organizaciones que oficialmente participan en las protestas, mantienen sus

4 "Cainco acatará el paro convocado por el Comité" (*El Deber*, 4 de diciembre de 2018).

5 "Luis Barbery: 'Seguiré trabajando con el Gobierno sin que eso me haga oficialista'" (*Los Tiempos*, 11 de marzo de 2019).

relaciones de cooperación y negociación con el gobierno. Como resultado, las élites económicas no jugaron un rol muy activo o visible en las movilizaciones preelectorales, que más bien se caracterizaron por una alianza entre nuevas plataformas ciudadanas, oposición política y comités cívicos (Zegada, 2019: 150-152). Este reposicionamiento gradual y cauteloso refleja la naturaleza particular de la alianza entre el empresariado y el gobierno del MAS, que fue básicamente táctica, respondiendo a una correlación de fuerzas específica (la hegemonía política del MAS) (Wolff, 2019). Por lo tanto, con el debilitamiento del MAS y el resurgimiento de una oposición relevante la alianza también se debilita, pero no se rompe mientras una victoria del movimiento opositor sobre el gobierno del MAS todavía parecía lejos.

Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019 persiste la inconsistencia en la actitud de las diferentes asociaciones empresariales: al tiempo que algunas organizaciones mantienen una posición más neutral, otras apoyan, explícitamente, la movilización opositora. Esto sólo cambia cuando se hace evidente que Evo Morales realmente puede caer y que la oposición puede ganar:

- La CEPB representa el primer grupo. El 22 de octubre, un comunicado de la CEPB destaca que la "voluntad de la ciudadanía que ha acudido a las elecciones presidenciales debe ser respetada", pero a la vez hace "un llamado reflexivo a todos los sectores de la nación a actuar con prudencia y mesura de manera de preservar la paz social y la tranquilidad ciudadana, imprescindibles para mantener un clima de convivencia que garantice la inversión, el trabajo y la prosperidad de los bolivianos".[6] El 29 de octubre, en otro comunicado,

6 Comunicado de la CEPB, 22 de octubre de 2019, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/pronunciamiento-de-la-confederacion-de-empresarios-privados-de-bolivia-ante-la-actual-coyuntura-del-pais.

insta "a los actores políticos" a que actúen para "evitar a toda costa una escalada de violencia que ponga en riesgo la vida, el trabajo, la propiedad privada y sobre todo la convivencia pacífica entre todos los bolivianos". Destaca que tanto las instituciones estatales como las organizaciones sociales "debemos aportar a la búsqueda de soluciones que permitan que el país retorne a la tranquilidad, en un marco de respeto a la Constitución".[7] El 6 de noviembre, según *La Razón*, la CEPB indica que el país "no debe ingresar en un proceso de confrontación entre hermanos, de división, de bloqueos y de posible destrucción de su aparato productivo".[8] Incluso el mismo día de la renuncia de Evo Morales, la CEPB solo "insta a que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter de urgencia, convoque a nuevas elecciones", "toda vez" que el informe de la OEA recomienda un nuevo proceso electoral.[9] Después de la posesión de Jeanine Áñez como presidenta interina, sin embargo, la CEPB expresa "su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Áñez Chávez como Presidenta" y destaca su respaldo al nuevo gobierno interino.[10]

---

7 Comunicado de la CEPB, 29 de octubre de 2019, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/empresarios-piden-a-los-actores-politicos-responsabilidad-apertura-y-compromiso-para-evitar-escalada-de-violencia.

8 "El conflicto social golpea al comercio y a los servicios" (*La Razón*, 6 de noviembre de 2019).

9 Comunicado de la CEPB, 10 de noviembre de 2019, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/pronunciamiento.

10 Comunicado de la CEPB, 14 de noviembre de 2019, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/empresarios-privados-respaldan-a-la-presidenta-anez-y-reafirman-su-apoyo-a-la-democracia. Ver también "Empresarios expresan apoyo a Áñez para mantener crecimiento de la economía" (*La Razón*, 19 de noviembre de 2019).

- La CNI también responde de manera más bien equilibrada. En un comunicado del 23 de octubre de 2019 exhorta, por un lado, "al Órgano Electoral Plurinacional a respetar y cumplir estrictamente la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral para concluir transparentemente el proceso electoral y generar un clima de confianza y tranquilidad de la población en sujeción plena al voto del soberano", mientras que, por otro lado, invoca "a la ciudadanía en general a preservar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y guardar sujeción al estado de derecho evitando la transgresión al orden público o la generación de brotes de violencia que solo conducen a la disminución del bien común y atentan contra la convivencia pacífica que es la base del desarrollo de un país".[11] La CAINCO, en un comunicado del 22 de octubre, meramente "reafirma su compromiso con el Estado de Derecho" y "rechaza cualquier acto de violencia".[12] Después de la publicación del informe preliminar de la OEA, el 10 de noviembre, sin embargo, el presidente de la CAINCO, Fernando Hurtado, pide "a nombre de la institución […] la renuncia de Evo Morales".[13]

---

11 Comunicado de la CNI, 23 de octubre de 2019, http://www.cnibolivia.com/noticias/comunicado-oficial-cni. Ver también Comunicado de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ), 23 de octubre de 2019, http://www.cnibolivia.com/noticias/comunicado-oficial-cadinpaz.

12 Comunicado de la CAINCO, 22 de octubre de 2019, https://www.cainco.org.bo/actualidad/posiciones-institucionales/ver-posicion/cainco_reafirma_su_compromiso_con_el_estado_de_derecho_y_recomienda_tolerancia_al_sector_empresarial.

13 "Cainco se sumó al pedido de renuncia de Evo Morales y repudió los actos de violencia en el país" (*El Deber*, 10 de noviembre de 2019).

- La CAO representa el segundo grupo. Ya el 22 de octubre se posiciona de manera mucho más abierta, expresando "su preocupación por los acontecimientos suscitados en el marco de las elecciones" y destacando que, desde la Cámara, "respetamos y acompañamos las determinaciones cívicas".[14] El 20 de noviembre la CAO destaca que, "[d]esde el primer día del paro cívico hemos estado trabajando en lo que nos compete, que es la provisión de alimentos a la población nacional".[15] Y el 7 de noviembre, el directorio de la CAO decide, de manera unánime, "su apoyo incondicional al Comité Pro Santa Cruz en las medidas institucionales que lleve adelante", promete su "participación masiva" en las actividades de bloqueo y declara su disposición a defender la libertad y la democracia "hasta las últimas consecuencias".[16]
- La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) responde de la misma manera. El 23 de octubre anuncia que acatará el paro indefinido en rechazo al presunto fraude electoral anunciado por el Comité Pro Santa Cruz "porque se ha vulnerado la Constitución y la democracia": "Los empresarios necesitamos democracia y estabilidad para poder hacer negocios y seguir invirtiendo en el país. Es una medida extrema, pero la apoyamos", declara el presidente de la CADEX, Oswaldo Barriga.[17]

---

14 Comunicado de la CAO, 22 de octubre de 2019, https://twitter.com/Cao75261794/status/1186740426314862593/photo/1.

15 Comunicado de la CAO, 20 de octubre de 2019, https://twitter.com/Cao75261794/status/1189122957374824448/photo/1.

16 Comunicado de la CAO, 7 de noviembre de 2019, https://twitter.com/Cao75261794.

17 "Exportadores de Santa Cruz acatarán paro indefinido" (*El Deber*, 23 de octubre de 2019).

- La FEPSC, sin embargo, se mantiene más bien en la línea de la CEPB: En un comunicado del 9 de noviembre demanda la convocatoria de nuevas elecciones si se confirman las presuntas irregularidades en el proceso electoral pasado y considera "que debe haber diálogo entre el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil organizada".[18]

Algunas reflexiones sobre el rol de las élites económicas en la caída de Evo Morales

Con respecto al posicionamiento y rol de las élites económicas en la caída de Evo Morales surgen dos preguntas (aparentemente contradictorias):

(1) Si tomamos en cuenta el enfrentamiento tradicional de las élites económicas con gobiernos de izquierda en general y con el gobierno del MAS en particular, así como las diferencias político-ideológicas y socioculturales que los separan, ¿por qué asumieron un rol tan marginal y una posición tan cautelosa frente a la movilización opositora en el caso actual?

(2) Si consideramos la forma en que se beneficiaron estos sectores de las políticas económicas del gobierno del MAS (y de la estabilidad económica y política general que consiguió) y las relaciones cooperativas que surgieron entre el gobierno del MAS y sectores económicos claves (sobre todo de la agroindustria de Santa Cruz),[19] ¿por qué apoyaron tantas cámaras y asociaciones empresariales importantes tan abiertamente las movilizaciones en contra de Evo Morales?

---

18 "Empresarios privados piden nuevas elecciones previa renovación del TSE" (*Página Siete*, 8 de noviembre de 2019).

19 Véase Wolff (2016).

Para entender las dinámicas complejas que sugieren estas dos preguntas, quisiera plantear tres tesis desde una mirada histórica:

(a) En algunos aspectos clave, la posición opositora –aunque matizada– de las élites económicas frente al gobierno del MAS en sus últimos años se parece a la posición del empresariado frente al desarrollismo estatista de las décadas de 1960 y 1970. Como han demostrado Catherina Conaghan y James Malloy en su libro *Unsettling Statecraft: Democracy and Neoliberalism in the Central Andes* (1994), las élites económicas en ese entonces eran los beneficiarios principales de muchas de las políticas desarrollistas.[20] Sin embargo, tres factores empujaron al empresariado hacia una posición cada vez más crítica al modelo Estado-céntrico –y estos tres factores parecen igualmente relevantes para el caso actual–:

- el mismo discurso Estado-céntrico del desarrollismo y el rol del Estado en la economía que conllevaba;
- la poca representación/influencia formal y colectiva en los gobiernos[21] y sus políticas que se manifestaron en conflictos específicos;[22]

20 En el caso boliviano, esto se refiere, particularmente, a empresas y grupos económicos pertenecientes a la agricultura y la agroindustria cruceñas.

21 La falta de representación directa y/o formal en el gobierno del MAS es obvia. Con respecto al régimen militar de Banzer, Conaghan y Malloy (1994) destacan que Banzer, después de una primera fase de incorporación empresarial corporativista, se basó más bien en la inclusión individual de empresarios y en relaciones clientelares y personalistas, debilitando las organizaciones e instancias de representación colectiva.

22 Un ejemplo histórico (durante el gobierno militar de Banzer) fueron los conflictos sobre la política fiscal y los impuestos al sector minero en particular. En el caso del MAS, se podría mencionar los conflictos recurrentes sobre incrementos salariales, segundo aguinaldo o sobre las restricciones a ciertas exportaciones.

- la incertidumbre general sobre las reglas del juego, dada la debilidad o ausencia de Estado de derecho (con respecto, sobre todo, a los derechos de propiedad privada).

Sin embargo, habría que notar que, en el caso del MAS, tanto el discurso oficialista como las políticas económicas chocaron mucho más con las ideologías e intereses de las élites económicas que durante la mayor parte de los gobiernos de los años 1960 y 1970. Por ejemplo, aunque la agroindustria (cruceña) se benefició mucho de una serie de medidas de políticas en los últimos años, también vio afectadas sus ganancias por la política de restricciones (temporales) a sus exportaciones.[23] Con respecto al sector financiero, los bancos igualmente crecieron muchísimo durante el gobierno de MAS, pero al mismo tiempo tuvieron que enfrentar nuevos impuestos y regulaciones que no les gustaron para nada.[24] Lo mismo sucede con respecto a la política laboral y salarial del MAS que imponía costos relevantes a la industria y a las empresas privadas en general.[25] Además de estos conflictos de intereses, hay que añadir que las diferencias entre las élites económicas y el gobierno del MAS también tenían (y tienen) una fuerte dimensión sociocultural (en términos de clases sociales e identidad étnica).

(b) El rol del empresariado durante la última etapa del gobierno del MAS es muy diferente al rol muy activo, unificado e importante que jugaron las asociaciones empresariales en la crisis y caída del gobierno de Hernán Siles Zuazo en los años ochenta.[26] Eso puede entenderse básicamente por cuatro

23 Véase, por ejemplo, Ormachea y Ramírez (2013).

24 Véase Molina (2017), pp. 73-81.

25 Wolff (2019), p. 119.

26 Véase Conaghan y Malloy (1994).

diferencias clave entre la situación en ese entonces (1982-1985) y la situación actual (2016-2019):

- El gobierno del MAS, incluso en los años después del *commodities boom*, logró mantener una estabilidad macroeconómica básica (estabilidad monetaria y cambiaria, crecimiento continuo) que no tiene nada que ver con la crisis abierta y dramática de los ochenta.
- Esta estabilidad económica también está relacionada con una (relativa) estabilidad política garantizada por el MAS (hasta la crisis postelectoral del 2019), situación muy distinta tanto a los años anteriores a la primera elección de Evo Morales (2005) como al periodo 1982-1985 en el cual el gobierno de Siles Zuazo no fue, en absoluto, capaz de desmovilizar o tranquilizar (o cooptar) a los sectores populares (ni al movimiento obrero, en particular).
- A estos dos logros macro importantes –no solo, pero también desde la perspectiva de las élites económicas– hay que añadir una serie de beneficios concretos relacionados con las políticas neodesarrollistas del gobierno del MAS: algunos sectores se beneficiaron del incremento de la inversión pública de manera directa por sus contratos con el Estado (por ejemplo, en los sectores de construcción y comercio), otros de manera indirecta, por la mejora en la inversión pública en infraestructura. A eso se suma una política cada vez más concertada con el empresariado en algunos sectores clave, como la agroindustria (cruceña).[27]
- Tal concertación se da como resultado de un acercamiento entre el gobierno del MAS y asociaciones empresariales y sectores económicos claves que se inicia en 2009 y que culmina, a partir del 2013, en una

27 Para estudios de las políticas económicas del gobierno del MAS, véase, entre otros, Agramont y Kauppert (2018), Arze y Gómez (2013), Loza (2013) y Wolff (2019).

relación de cooperación abierta y directa –el ejemplo más importante, otra vez, sigue siendo el empresariado agroindustrial de Santa Cruz–.[28]

Un resultado de esta dinámica ha sido que, durante el gobierno del MAS, se disolvieron –o al menos se complejizaron– las relaciones tradicionalmente muy estrechas entre los partidos políticos de centro-derecha, las élites económicas y las asociaciones civiles (asociaciones empresariales pero también comités cívicos regionales). Como respuesta al fracasado intento de los movimientos autonomistas conservadores de detener el proyecto (constitucional) de cambio del MAS (Eaton, 2011), las élites económicas gradualmente adoptaron una posición más abierta y colaborativa frente al gobierno de Evo Morales, mientras que las fuerzas políticas y sociales que mantenían una posición abiertamente opositora se encontraban cada vez más marginados (Wolff, 2016). El ejemplo más notable, en este sentido, es el Comité Pro Santa Cruz que fue debilitado dramáticamente en estos años para recién retomar fuerza con la nueva ola de protestas contra la repostulación de Evo Morales –con una posición abiertamente crítica a la colaboración entre gran parte del empresariado cruceño y el gobierno del MAS–. Por lo tanto, durante estos años había tensiones marcadas entre las élites políticas, sociales y económicas que tradicionalmente estuvieron estrechamente entrelazadas (en Santa Cruz, pero también más allá de este departamento). Eso ha hecho más complejo una movilización opositora unida (que existía durante la crisis constitucional del 2008 y durante los años 1982-1985).

(c) Recién en la crisis postelectoral el gobierno del MAS perdió su capacidad de garantizar la estabilidad social y política. Al mismo tiempo, surgió la opción de un nuevo gobierno más centrista y liberal –sino abiertamente conservador y neoliberal–; una opción que había estado

28 Véase, por ejemplo, Wolff (2016).

ausente durante muchos años (básicamente desde el referéndum constitucional del 2009). Sin embargo, con la irrupción de protestas masivas y la radicalización del movimiento opositor surge, a la vez, temporalmente, otro escenario posible con costos potencialmente muy altos para el empresariado: un escenario de inestabilidad prolongada, incertidumbre generalizada y escalada de violencia (hasta una posible guerra civil). Este escenario, por las diferentes correlaciones de fuerza a nivel regional, no parecía tan relevante en Santa Cruz como en La Paz –diferencia que se refleja en los posicionamientos diferentes de las cámaras cruceñas vis a vis las confederaciones nacionales–.

El empresariado frente al gobierno interino y la campaña electoral

Cuando asume Jeanine Áñez como presidenta interina, la respuesta de las élites económicas es unánime. El 13 de noviembre de 2019, por ejemplo, la CAO publica un tuit que dice: "¡Viva Bolivia! Agradecemos el desprendimiento y el apoyo incondicional de todos los subsectores y productores en esta lucha para recuperar la democracia de nuestro país".[29]

Un día después, la CEPB emite un comunicado con el título "Empresarios privados respaldan a la Presidenta Áñez y reafirman su apoyo a la democracia".[30] El 19 de noviembre,

29 https://twitter.com/Cao75261794/status/1194437087547842561

30 "La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a través de un comunicado público, expresó hoy su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Áñez Chávez como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, 'en el marco de la sucesión constitucional y el principio de continuidad institucional', lo que en criterio de la entidad, garantiza la vigencia plena del sistema democrático y, sobre todo, genera las condiciones para la pacificación y normalización de las actividades en el país". Nota de prensa de la CEPB, 14 de noviembre de 2019, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/empresarios-privados-respaldan-a-la-presidenta-anez-y-reafirman-su-apoyo-a-la-democracia/. Ver también "Empresarios expresan apoyo

la CNC y la CNI emiten una Declaración Conjunta en que celebran "la recuperación de la Democracia en Bolivia", expresan su apoyo "al actual Gobierno de transición" e instan "a la convivencia pacífica y el respeto a las normas vigentes".[31] Otras asociaciones como la ASOBAN, que tradicionalmente mantiene un perfil menos visible y más profesional, parecen no haberse pronunciado al respecto.

Con el gobierno interino, el empresariado boliviano otra vez goza de una representación mucho más directa en el Ejecutivo nacional, tal como solía tenerla en décadas anteriores al gobierno del MAS. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada Rivero, por ejemplo, es un economista de Santa Cruz con una trayectoria importante tanto en el sector privado como en el sector público del departamento.[32] El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue fundador y presidente de la Asociación de Hoteleros del Trópico de Cochabamba. La nueva ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert de Paz, exsenadora cruceña, fue representante gremial en los años 1990 y presidenta del Comité Cívico de Montero (Santa Cruz). Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Wilfredo Rojo Parada, ocupó cargos en la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) y la CAINCO.[33] Estos

---

a Áñez para mantener crecimiento de la economía" (*La Razón*, 19 de noviembre de 2019).

31 Declaración Conjunta de la CNI y la CNC, 19 de noviembre de 2019, https://twitter.com/GusJaureguiG/status/1197001065742372867/photo/1. Ver también el comunicado de la CNC del 12 de noviembre de 2019 ("La Cámara Nacional de Comercio celebra la restitución del orden constitucional y la Democracia en Bolivia"), https://twitter.com/cncbol/status/1194434386298593281/photo/1.

32 "José Luis Parada es el nuevo ministro de Economía" (*Página Siete*, 13 de noviembre de 2019).

33 "Conoce al gabinete completo de Áñez; trayectoria, bienes y activos" (*La Razón*, 3 de diciembre de 2019). Véase también: https://www.mmaya.gob.bo/institucion/ministro-de-medio-ambiente-y-agua. En mayo, Rojo renunció y asumió Óscar Ortiz

ejemplos clave demuestran la presencia predominante de representantes del empresariado de Santa Cruz, que refleja –entre otras cosas– el rol del partido de la presidenta interina (Demócratas) en el gobierno actual. Además de esta presencia directa también se retoman mecanismos de articulación entre el empresariado y el gobierno, por ejemplo, con la creación de un Consejo de Desarrollo Productivo por el gobierno y la CEPB "como instancia consultiva para sugerir políticas económicas".[34]

En términos de políticas económicas, el cambio hacia un "nuevo bloque de poder" (Molina, 2020) hasta ahora no ha sido acompañado por un cambio abrupto, sino más bien por ajustes graduales y selectivos (con la excepción, por supuesto, de las medidas drásticas en respuesta a la pandemia del Covid-19). Por ejemplo, el 22 de enero de 2020 el gobierno promulgó un decreto que liberaliza las exportaciones agrarios y agroindustriales: se retira de la lista de productos con suspensión temporal de exportación, que había sido introducida por el gobierno del MAS en el 2008, "los animales de especie bovina, la carne de res, la carne de pollo, el maíz, el sorgo, el aceite de soya y girasol, y el azúcar", pero –a pesar del anuncio de querer liberalizar todas las exportaciones– se mantiene el arroz y el trigo.[35]

En la coyuntura actual parece que la gran mayoría de las élites económicas son cercanas al gobierno interino. Aunque, frente a la campaña electoral, las asociaciones empresariales evitan tomar partido por algún candidato

---

como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Ortiz, exsenador por Santa Cruz, trabajó por muchos años en la CAINCO (1991-2005). Véase: http://oscarortiz.com.bo/biografia.

34 Nota de prensa de la CEPB, 5 de febrero de 2020, http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/gobierno-y-cepb-crean-el-consejo-de-desarrollo-productivo-como-instancia-consultiva-para-sugerir-politicas-economicas.

35 "Liberación de exportaciones aún no incluye el arroz y trigo" (*Página Siete*, 4 de febrero de 2020).

individual de manera pública, su cercanía al gobierno de Áñez puede entenderse como un cierto apoyo, de hecho, a su candidatura. Con las perspectivas cada vez menores de Camacho, probablemente habrá poco apoyo a su candidatura, incluso entre el empresariado cruceño. Al mismo tiempo, la decisión de SOL.bo y Unidad Nacional (UN) de apoyar a Áñez implica también una pérdida de respaldo empresarial para Carlos Mesa en el Occidente, sobre todo en La Paz. En términos generales, la alianza entre Demócratas, SOL.bo y UN significa que las familias y los grupos empresariales ligados a estos tres partidos tienden a alinearse en las filas de la campaña de Áñez. Por lo tanto, se puede concluir que gran parte del empresariado (en particular, los grandes empresarios y principales grupos económicos) favorecen y apoyan la continuación de Áñez en la presidencia. No obstante, en caso de una segunda vuelta, seguramente se alinearán detrás de cualquier candidatura que no sea del MAS.

Observaciones sobre los distintos segmentos de las élites económicas

Con base en las cuatro entrevistas con personas expertas sobre el tema,[36] en esta última sección trataré de identificar algunas cualidades y particularidades que caracterizan a los distintos segmentos del empresariado boliviano.

En general, las élites económicas en Bolivia se encuentran fragmentadas en diferentes sectores económicos (financiero, agricultura/agroindustria, hidrocarburos, minería, industria, comercio, construcción, etc.), en regiones con identidades político-culturales y perfiles socioeconómicos propios (por ejemplo, Santa Cruz versus La Paz, Oriente versus Occidente) y en grupos económicos (véase abajo). Con excepción de la CEPB, como confederación general del empresariado, las asociaciones a nivel nacional siguen la lógica sectorial

36 Fernando Molina, Armando Ortuño, Verónica Paz y Rodney Pereira (ver nota al pie n.° 1).

(ASOBAN, CNC, CNI, etc.), mientras que, a nivel departamental, a veces predomina la lógica regional (como es el caso de la CAINCO en Santa Cruz). En general, dada la importancia económica de Santa Cruz, el empresariado cruceño frecuentemente prefiere actuar, incluso al nivel nacional, a través de sus representaciones institucionales departamentales, en lugar de recurrir a las asociaciones nacionales en las cuales participa en igualdad de condiciones con las representaciones de los demás departamentos. Eso se refleja en el poder y el rol importante de la CAINCO, pero también en el hecho de que la FEPSC sea la única federación departamental de empresarios privados que no pertenece a la CEPB (se retiró de esta confederación en 2004).

Más allá de las empresas públicas (como YPFB o ENTEL), las empresas más grandes que operan en Bolivia pertenecen a inversionistas extranjeros.[37] En términos generales, puede decirse que estas empresas transnacionalizadas –aunque sí influyentes en cuanto a sus intereses económicos particulares– se mantienen al margen de los debates político-partidarios. Las empresas más importantes de capitales privados, según datos del 2017, incluyen la cadena de supermercados Hipermaxi (del Grupo Kuljis) e Industrias Oleaginosas (del Grupo Marinkovic) (Molina, 2019: 41-42). Pero como ya se ve en estos dos casos, los actores nacionales más importantes no son empresarios que posean empresas individuales sino los representantes de grupos económicos que controlan toda una cadena de empresas. Según Molina, los grupos principales "son los que se forman en torno a los bancos

37 Son los casos de: Telefónica Celular de Bolivia (Tigo Bolivia) y Nuevatel PCS de Bolivia (VIVA), Minera San Cristóbal, Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Embotelladoras Bolivianas Unidas (EMBOL, Coca-Cola Bolivia) y la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) (Molina, 2019: 41). Según Molina (*ibid.*: 42) con datos del 2017, también las dos empresas oleaginosas más grandes (Industrias de Aceite - IASA, Gravetal Bolivia) y los bancos más importantes (Banco Solidario - BancoSol, Banco de Crédito de Bolivia - BCP) pertenecen a inversionistas o *holdings* extranjeros.

grandes y tradicionales", pero incluyen "empresas de muchos otros tipos, desde supermercados y *malls* hasta molineras y embotelladoras" y "en la región oriental del país poseen tierras, plantas agroindustriales y ganado" (*ibid.*: 49-50). Estos grupos económicos normalmente están vinculados a una familia en particular, tienen una ubicación regional y una naturaleza multisectorial. Por lo tanto, desbaratan la lógica de representación de intereses sectoriales y tienden a reforzar la lógica departamental. Los casos más importantes son el Grupo Zuazo (alrededor del Banco Mercantil Santa Cruz, BMSC), el Grupo Bedoya (Banco Nacional de Bolivia, BNB), el Grupo León Prado (Banco BISA), el Grupo Monasterio (Banco Ganadero, BG), el Grupo Kuljis (Banco Económico) y el Grupo Marinkovic (también Banco Económico).[38]

Con respecto a su (re-)posicionamiento político, el gran empresariado agroindustrial cruceño ha pasado de un enfrentamiento abierto con el gobierno del MAS (2006-2009) a un acercamiento gradual (2009-2013) y a una fase de cooperación sin mayores conflictos (2013-2019). Sin embargo, durante esta última etapa del gobierno del MAS (2016-2019), el empresariado cruceño empezó a acercarse a los sectores movilizados en contra del gobierno (en defensa del 21F), pero sin romper o arriesgar un mayor conflicto con el gobierno. Organizaciones como la CAO y la CAINCO, por lo tanto, se convirtieron en el blanco de las críticas de las fuerzas de la oposición radicalizada (como es el caso de Luis Fernando Camacho del Comité Cívico Pro Santa Cruz). Es solo con la escalada de las protestas postelectorales –que implican un incremento de la presión social hacia el empresariado cruceño y revelan una sorprendente debilidad del gobierno masista– cuando las élites económicas cruceñas adoptan una posición abiertamente antimasista. Con el gobierno interino de Áñez este sector tiene una relación básicamente fluida,

38 Véase el análisis de los grupos económicos bolivianos en Molina (*ibid.*: 49-74).

caracterizada por su presencia directa en el gabinete y por la mucha influencia política.

En términos generales, esta trayectoria del empresariado agroindustrial cruceño marca también la trayectoria predominante del empresariado privado boliviano representado por la CEPB. La dirigencia de la CEPB acompaña el acercamiento al gobierno del MAS a partir del 2009 y mantiene buenas relaciones con el gobierno en su última etapa, incluso durante el auge de las protestas, a partir de 2017. De hecho, mientras el Comité Pro Santa Cruz elige, en febrero del 2019, a Luis Fernando Camacho como su nuevo presidente, en marzo del 2019, la CEPB elige al empresario cruceño Luis Barbery, quien representa la corriente pragmática, cercana al gobierno. Como hemos visto, la CEPB trata de mantenerse al margen de la disputa política –desde una posición supuestamente "apolítica"– hasta la renuncia forzada de Evo Morales.

Por su parte, otros sectores económicos y el empresariado en el Occidente del país, en general, no tuvieron una relación tan buena con el gobierno del MAS y parece que dieron más apoyo a la candidatura de Mesa, aunque tampoco se puede afirmar que llegaran a actuar como fuerzas opositoras. En el caso del sector industrial (occidental), esto refleja plausiblemente su debilidad económica, así como el rol preponderante de las empresas transnacionales en el sector industrial. Por otra parte, el sector comercial, representado por la CNC, sí adoptó, durante los últimos años del gobierno del MAS, una postura más política, apoyando, explícitamente, las protestas en defensa del 21F. De hecho, cuando se trataba de elegir a un nuevo presidente de la CEPB, a comienzos del 2019, el presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas, intentó disputar el liderazgo a Luis Barbery con un discurso más crítico hacia el gobierno. Sin embargo, eran diferencias de grado pues, en general, la CNC también mantuvo una postura de cooperación con el gobierno del MAS hasta el final.

Respecto del gobierno interino, el empresariado no cruceño carece de una presencia e influencia tan directas,

aunque, en términos generales, cierra filas en torno a Áñez, al considerar el suyo como un gobierno esencialmente proempresarial.

Por último, el sector financiero presenta algunas características particulares. Por su importancia económica, tiene un peso político innegable y –en comparación con los otros sectores– es un sector más consolidado y capaz de adoptar posiciones nacionales comunes. Pero, al mismo tiempo, suele evitar la demostración de su poder de manera visible, así como adoptar posiciones políticas en el debate público. Así que la ASOBAN casi no aparece como actor político, con excepción de pronunciamientos que específicamente se refieren a su sector, como es el caso de sus críticas a la Ley de Servicios Financieros en el 2013. Durante el gobierno del MAS, esta postura probablemente también refleja el hecho de que el sector financiero se benefició muchísimo del *boom* económico y de la estabilidad política y económica de estos años, a pesar de algunas políticas (en cuanto a impuestos o a la fijación de tasas y cuotas) que iban en contra de sus intereses. Al mismo tiempo, como es el caso para el conjunto de las élites económicas bolivianas, siempre ha habido una diferencia marcada con el gobierno del MAS tanto en términos político-ideológicos como en cuanto a estatus/clase social e identidad sociocultural/étnica. Esta diferencia con el gobierno (y su base social) se ha disuelto con el gobierno interino.

Esta cercanía general del empresariado boliviano al gobierno interino, por supuesto, no excluye diferencias políticas específicas. De hecho, en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, han surgido una serie de tensiones y desacuerdos entre el gobierno interino y el empresariado boliviano. A finales de abril, por ejemplo, la CAO criticó, abiertamente, las "medidas desproporcionadas" en la lucha contra el coronavirus y, según *La Razón*, advirtió al gobierno que estas "ponen en peligro el abastecimiento de algunos alimentos de prioridad

que son parte de la canasta familiar".[39] En mayo, la CNI "acusó" al gobierno "de incumplir los acuerdos alcanzados con este sector para dar continuidad a la actividad industrial" y lamentó la falta de respuestas por parte del gobierno.[40] Para la CEPB, su presidente Luis Barbery destacó que "las grandes empresas, los mayores empleadores" todavía no habían recibido apoyo del gobierno frente a la crisis.[41] En este mismo sentido, a finales de mayo, la CAINCO y la CNC manifestaron su descontento con la decisión gubernamental de diferir el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) sólo para las empresas que no pertenecen a los principales o grandes contribuyentes.[42] En general, desde los diferentes sectores empresariales, los representantes de la CEPB, la CAINCO y la CNI están pidiendo más apoyo estatal –un fondo de garantía, menos impuestos, más flexibilización laboral, más impulsos a las exportaciones, mayor liberalización de la economía– como respuesta a la crisis actual.[43] Por su parte, la ASOBAN, a mediados de mayo, envió una carta a Áñez en la que advirtió que las medidas de diferimiento en el pago de créditos podrían provocar "efectos devastadores en el sistema financiero" y solicitó una reunión con la presidenta interina "con carácter de extrema urgencia".[44]

---

39 "CAO: Medidas del gobierno ponen en peligro el abastecimiento de algunos alimentos" (*La Razón*, 29 de abril de 2020).

40 "La CNI acusa al Gobierno de incumplir con autorizaciones" (*La Razón*, 13 de mayo de 2020).

41 "Empresas grandes esperan apoyo para su reactivación" (*La Razón*, 29 de abril de 2020).

42 "Cainco y CNC piden que diferimiento del pago del IUE se aplique a todo el universo de contribuyentes" (Economy.com.bo, 28 mayo 2020).

43 Véase "Reactivación económica dependerá de la rapidez para conseguir dinero" (*El Deber*, 1 de junio de 2020).

44 "Asoban advierte con iliquidez y quiebra de bancos si se difiere por otros seis meses pago de créditos" (*La Razón*, 27 de mayo de 2020).

Con respecto a las relaciones de las élites económicas con las diferentes corrientes y candidaturas políticas actuales, es obvio que hay unidad en cuanto al rechazo a un posible retorno del MAS al gobierno. Al mismo tiempo, frente a la actual campaña electoral, el empresariado y sus representaciones principales no suelen tomar posiciones explícitamente partidarias. Sin embargo, con la alianza entre Demócratas, UN y SOL.bo alrededor de la candidatura de Áñez, se puede suponer que este grupo recibe actualmente el apoyo de la gran mayoría del empresariado tanto en Santa Cruz como en el resto del país. Con la caída de Camacho en las encuestas, es difícil decir qué queda de la fractura de las élites cruceñas. Pero parece claro que las asociaciones principales y los grupos económicos más importantes de Santa Cruz están con Áñez. El apoyo empresarial que puede tener Carlos Mesa se concentra en La Paz y en el Occidente del país, en general, pero otra vez parece que la mayoría de los empresarios y sus representaciones están apostando por Áñez. Sin embargo, la crisis por la pandemia del Covid-19 obviamente crea muchísima incertidumbre al respecto.

Para concluir, todo parece indicar que –en términos de las relaciones entre las élites económicas y el Estado– Bolivia está volviendo a la situación previa al gobierno del MAS, definida por dos características:

(1) Acceso político privilegiado del empresariado, de manera directa (a través de la presencia de representantes de intereses empresariales en el gobierno y el aparato estatal) e indirecta (a través de partidos afines y el *lobby* de sus asociaciones empresariales);
(2) Orientación de la política económica que –en términos generales– corresponde a las propuestas y los intereses del empresariado privado.

Esto, por supuesto, no excluye diversos conflictos de intereses, tanto entre el gobierno y sectores específicos como entre diferentes segmentos del empresariado. De hecho,

dado el escaso margen de maniobra de la política fiscal en el contexto actual, es muy probable que tales conflictos sigan aumentando.

Bibliografía

Agramont Lechín, Daniel y Philipp Kauppert, eds. (2018). *Debates progresistas sobre políticas económicas en Bolivia*. La Paz: Fundación Friedrich Ebert.

Arze Vargas, Carlos y Javier Gómez (2013). Bolivia: ¿El "proceso de cambio" nos conduce al Vivir Bien? En *Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina*, ed. Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez. La Paz: CEDLA, 45-176.

Conaghan, Catherine M. y James M. Malloy (1994). *Unsettling Statecraft. Democracy and Neoliberalism in the Central Andes*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

Eaton, Kent (2011). Conservative Autonomy Movements: Territorial Dimensions of Ideological Conflict in Bolivia and Ecuador. *Comparative Politics* 43: 3, 291-310.

Loza Tellería, Gabriel (2013). *Bolivia: El modelo de economía plural*. La Paz: Ediciones Vínculos.

Molina, Fernando (2017). *Breve Historia de la Banca (1957-2017): Seis décadas de aporte al desarrollo de Bolivia*. La Paz: ASOBAN.

Molina, Fernando (2019). *Modos del privilegio: alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Molina, Fernando (2020). Bolivia: un nuevo bloque de poder. *Nueva Sociedad*, enero 2020, https://nuso.org/articulo/Bolivia-derecha-Evo-Morales.

Ormachea S., Enrique y Nilton Ramírez F. (2013). *Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del "poder empresarial-hacendal"*. La Paz: CEDLA.

Wolff, Jonas (2016). Business Power and the Politics of Postneoliberalism: Relations Between Governments and Economic Elites in Bolivia and Ecuador. *Latin American Politics and Society* 58: 2, 124-147. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2016.00313

Wolff, Jonas (2019). The political economy of Bolivia's post-neoliberalism: Policies, elites, and the MAS government. *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 108, 109-129. DOI: https://doi.org/10.32992/erlacs.10468

Zegada, María Teresa (2019). El escenario boliviano en 2018: estabilidad económica e incertidumbre institucional. *Revista Ciencia Política* 39: 2, 147-164. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200147

V

La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019

Fernando Molina y Susana Bejarano

Todo campo mediático está atravesado de múltiples luchas y tensiones, que en unos casos son propias y en otros, determinadas por las del campo político. Por tanto, los agentes de aquel campo –los medios de comunicación y sus miembros– normalmente ocupan posiciones diferentes y hasta antagónicas entre sí. No obstante, un seísmo social como el que ocurrió en octubre-noviembre de 2019 en Bolivia se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad para afectar a todos los componentes y relaciones del campo y, entonces, transformar la configuración integral de tal microcosmos. Puede decirse que, si antes del mencionado fenómeno sociopolítico existía un determinado campo mediático, después existirá otro. El propósito de este texto es describir esta transformación, sobre todo respecto a lo que uno de sus autores describió como la "hegemonía instantánea" de un nuevo bloque en el poder en él.[1] La primera versión de este texto se escribió en mayo de 2020,[2] es decir, antes de la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 18 de octubre. Su horizonte no va más allá de los intentos de

1 Fernando Molina, "Hegemonía instantánea: la prensa en la crisis boliviana", disponible en: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/12/03/hegemonia-instantanea-la-prensa-en-la-crisis-boliviana.

2 Fue corregido previamente a su publicación.

construcción de poder político y mediático por parte de las fuerzas restauradoras que antagonizaban con el MAS en ese momento. Es más, está limitado al albor de esta construcción (noviembre de 2019).

Nuestro discurso se desplegará en cinco secciones. Comenzaremos recordando cómo era –y cómo estaba– el campo mediático en vísperas de la contrarrevolución restauradora de fines de 2019; luego, describiremos al nuevo bloque de poder surgido de la convulsión política; a continuación, en dos secciones, abordaremos la reacción de los distintos agentes mediáticos a estos cambios (en un arco temporal acotado a noviembre de 2019) y, para concluir, señalaremos los efectos inmediatos de la tormenta política en el campo mediático.

Por razones de acceso a los archivos, haremos referencia a algunos comportamientos mediáticos generales, pero sólo usaremos ejemplos documentados provenientes de la prensa escrita.

El campo mediático prederrocamiento

En vísperas de los eventos que condujeron al derrocamiento del presidente Evo Morales y, consiguientemente, al acabamiento de su gobierno nacional-popular (2006-2019), Bolivia vivía los momentos de decadencia de la hegemonía de este líder y este partido sobre el campo mediático. Esta decadencia estaba relacionada con los crecientes problemas que Morales y el MAS debían enfrentar en el campo político, sacudido por fenómenos tales como la extensión y el fortalecimiento de la resistencia al continuismo gubernamental, el ascenso de la crítica antiigualitaria, la etnización y racialización de las clases medias (como resultado de su prolongado antagonismo con los grupos étnico-raciales representados por el gobierno), y, finalmente, el resurgimiento mundial de las ideologías ultraderechistas.

En Bolivia, por la dependencia económica de los medios con respecto a las fuentes de financiamiento estatal, el campo mediático tiene poca autonomía con relación al campo político.

El MAS había logrado hegemonizar el campo mediático hacia el año 2010, luego de una dura lucha contra la élite mediática que lo controlaba, la cual había formado parte del *bloque de poder neoliberal* y, por tanto, había perdido influencia y espacio políticos con la llegada de Evo Morales a la Presidencia, en enero de 2006. La élite mediática neoliberal pertenecía al conjunto de clases y grupos sociales que perdieron recursos políticos y poder durante el llamado "proceso de cambio".

El MAS reaccionó a la oposición de esta élite a su gobierno incrementando la extensión y la fuerza de la red de medios estatales, usando la publicidad estatal como un instrumento para disciplinar a los medios, apelando al apoyo de agentes privados (periodistas de base y empresarios de pequeños medios) y, cuando esto último fallaba, aplicando una serie de maniobras controversiales –y hasta ahora no del todo esclarecidas– para que empresarios oficialistas compraran algunas de las principales casas periodísticas del país.[3]

El MAS silenció así los impulsos de clase de la vieja élite en contra suyo. No solo porque volvió la oposición al gobierno económica y legalmente indeseable para esta élite, sino porque en ese momento tenía una fuerte ascendencia discursiva sobre el país. Al mismo tiempo, generó una contra-élite, conformada por los dueños de los medios que se aliaron al oficialismo. Esta contra-élite adquirió un liderazgo temporal del campo mediático, el cual era sordamente repudiado por la élite tradicional. Dentro de los medios oficialistas se estableció

3 Fernando Molina, 2015, *De la polarización a la hegemonía. La relación entre los medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales*, La Paz: Libros Nómadas.

una línea editorial más o menos premeditada y coordinada, y se exigió que los trabajadores la respetaran; algunos de estos lo hicieron por convicción, pero, como se vería después, muchos de ellos sólo se adaptaron superficialmente a la atmósfera política, callando sin abandonar su alineamiento de clase y étnico-racial con los segmentos sociales a los que pertenecían (o creían que pertenecían).

Gracias a estas operaciones, la hegemonía mediática del MAS fue casi completa en el periodo 2011-2016. Entonces el gobierno podía definir la agenda pública e imponía unos modos sui géneris y restrictivos de distribuir la información y la propaganda estatal. Los principales medios evitaban confrontarse con el oficialismo. La autocensura era la opción más cómoda y se daba de manera más o menos generalizada. Los agentes opositores dentro del campo mediático eran pocos, estaban desfinanciados y, como el periódico *Página Siete*, recibían "homéricos" ataques verbales de las autoridades gubernamentales.

En 2016, esta hegemonía comenzó a deteriorarse a resultas del caso de Gabriela Zapata, exnovia del presidente Morales, quien afirmara falsamente[4] haber tenido un hijo con él. El impacto de este escándalo fue tan importante que todos los mecanismos de "agenda *setting*" que había estado usando el gobierno sobre los medios dejaron de funcionar. Por un lado, inclusive los medios oficialistas no podían dejar de informar sobre el tema que concitaba la atención máxima de la población. Y los medios opositores concentraban su trabajo en la cobertura en el caso: *Página Siete* llegaba al punto de dedicarle editoriales diarios. Por el otro lado, el gobierno

4 "Una jueza dictamina que no existe el supuesto hijo de Evo Morales con la empresaria Zapata", Agencia EFE, 12 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/politica/una-jueza-dictamina-que-no-existe-el-supuesto-hijo-de-evo-morales-con-la-empresaria-zapata/20000035-292343.

sufrió la peor crisis comunicacional que había enfrentado hasta entonces. Por casualidad, poco antes había cambiado a los encargados de la comunicación gubernamental, y éstos se revelaron incapaces de manejar la crisis. Así, los miembros de la antigua élite mediática comenzaban a sentirse libres para volver a expresar su antagonismo de clase con el gobierno.

Esta tendencia se intensificó luego de que Morales perdiera el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, diseñado para permitir que optara a una nueva reelección en 2019. Posteriormente, el MAS intentó "corregir" esta derrota a través del Tribunal Constitucional, que impuso la reelección indefinida por primera vez en la historia del país. Esto impulsó un movimiento de protesta de las clases medias, en general blancas, (Movimiento 21F) que ejerció una constante y fuerte presión sobre los miembros de estas clases que militaban en el oficialismo y también sobre los medios de comunicación con esta filiación. Se produjo una oleada de censura social en contra de los *influencers*, *trolls*, periodistas y medios con afinidad masista, que se expresó sobre todo en las redes sociales, pero que también incluyó casos de acoso.

De 2016 a 2019, la hegemonía mediática del MAS fue deteriorándose poco a poco. Los sucesivos ministros de comunicación, bastante deficientes la mayoría de ellos, no lograban establecer una relación de *dominio sostenible* sobre los medios privados, pese a su manejo centralizado de abundantes recursos fiscales dedicados a la difusión de propaganda gubernamental. En este periodo, los medios estatales y los medios cooptados por el gobierno perdían influencia y capacidad de expansión; en parte porque eran saboteados por los analistas, columnistas y voceros políticos relacionados con el Movimiento 21F, y en parte porque navegaban en contrasentido respecto a la inclinación política,

crecientemente crítica, de sus audiencias.[5] Los medios estatales se encerraban en el sectarismo de su unilateral defensa del gobierno. Una parte de los trabajadores de los medios privados oficialistas comenzaba a rebelarse frente a la línea editorial de éstos, por lo que la imposición de la misma por parte de sus directores causaba tensiones internas. Unos y otros medios se tornaban blanco de críticas, pullas y amenazas en las redes sociales. Algunos miembros de la contra-élite mediática eran insultados e increpados públicamente. Solamente salían mejor librados los programas y periodistas que había sabido conservar cierto pluralismo anteriormente, durante la hegemonía plena del MAS.

La escalada antimasista terminó en acciones físicas y jurídicas de neutralización de los medios que pertenecían al bloque de poder evista. Estas acciones fueron parte del proceso de derrocamiento de Morales. El canal estatal, Bolivia Televisión, fue tomado por manifestantes en las horas previas a la caída del Presidente. En los días previos y posteriores a ésta, la cadena televisiva ATB, en La Paz, sufrió amenazas de quema de sus instalaciones, que obligaron a esta empresa a requerir la protección del entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. Por otra parte, en los días posteriores a la asunción del gobierno de Jeanine Áñez, los sindicatos de periodistas de ATB y de *La Razón* resistieron la línea editorial de sus medios y exigieron el cierre del programa que conducía Jaime Iturri, el accionista mayoritario del canal, así como el despido de Claudia Benavente, directora de *La Razón*.[6]

---

5 En particular, las audiencias de los medios escritos, que, por razones educativas, son mayoritariamente de clase media.

6 "Sindicato de *La Razón* convoca a paro este jueves y exige la renuncia de su directora, Claudia Benavente", Brújula Digital, disponible en: https://brujuladigital.net/politica/sindicato-de-la-razon-convoca-a-paro-este-jueves-y-exige-la-renuncia-de-claudia-benavente.

Los periodistas de este medio se expresaron públicamente en contra de su colega, el caricaturista Alejandro Salazar, lo que determinó que éste renunciara a su puesto.

Como se ve, el cambio de la situación política nacional generó dos tipos de reacciones: el silenciamiento de los periodistas más relacionados con el régimen caído y la emergencia de la *verdadera lealtad de clase* de los demás, de quienes habían logrado camuflarse en los medios estatales y oficialistas. Los huelguistas de *La Razón* creyeron que este periódico cambiaría prontamente de dueños, toda vez que el empresario Carlos Gill estaba siendo investigado por sus relaciones con el gobierno de Morales. También Marcelo Hurtado y Jaime Iturri, dueños de ATB, fueron rápidamente imputados por la Fiscalía. Se los acusaba de haber extorsionado a Abdallah Daher, antiguo propietario de PAT, para hacerse ilegítimamente de la propiedad de este canal y ponerlo al servicio de la propaganda oficialista.

Luego del 10 de noviembre, tanto ATB como PAT cambiaron su línea editorial en 180 grados. Después de la renuncia de Morales, la anterior adhesión de estos medios al "proceso de cambio" se volvió insostenible en términos económicos y hasta de seguridad. Tal cambio de orientación, junto con el previsible y abrupto giro de timón de los medios estatales, constituyeron algunos de los rasgos fisonómicos del nuevo campo mediático, como veremos más adelante. *La Razón* mantuvo su perfil previo, por lo que su crisis interna se tornó crónica.[7] Gigavisión se volvió férreamente opositor a Áñez, lo que le costaría amenazas de parte de los organismos de seguridad a uno de sus propietarios, Junior Arias.

---

7 La huelga de los empleados de *La Razón* no logró su objetivo de defenestrar a la directora Claudia Benavente. En cambio, meses después de esta huelga, con el periódico apretado, adicionalmente, por la crisis económica y la pandemia, más de 140 de sus trabajadores fueron despedidos o invitados a renunciar.

Estos hechos no pueden explicarse más que tomando en cuenta la enorme fragilidad que ya tenían las posiciones logradas por el anterior gobierno en el campo mediático, en vísperas de su derrota. En el periodo final del régimen evista, las fuerzas que acabarían con este régimen también se manifestaban, y vivamente, en el microcosmos de los medios de comunicación.

La formación de un nuevo bloque de poder

La caída de Evo Morales se debió a un cambio en la actitud política de la mayoría de la población. Un sector de ésta, conformado por las clases medias y altas, en general blancas, se enfrentó fuertemente al expresidente y obtuvo la aquiescencia activa o pasiva de muchos otros sectores, constituyendo una *mayoría insurreccional*.[8] Este proceso, sumado al impacto sobre estas clases de los conflictos sociales durante los días de vacío de poder que se produjeron luego de la renuncia del presidente, determinó un *giro de la población hacia la derecha*, produciendo un *movimiento pendular* del campo político respecto a la naturaleza sociológica y demográfica, la orientación ideológica, las políticas y los objetivos del "proceso de cambio". Apareció, así, un nuevo campo político con una correlación de fuerzas completamente distinta. La tormenta política produjo el ascenso y el simultáneo descenso de determinados agentes políticos, intelectuales y comunicacionales que forman parte de este campo. Los agentes que ascendieron se articularon para dominarlo, con lo que emergió un nuevo bloque de poder dentro del campo.

A lo largo de su tiempo de vida, este bloque de poder evolucionó y se volvió más complejo y pluralista. Sin embargo, no nos referiremos a estos cambios y nos limitaremos a presentar el bloque de poder tal como surgió en la segunda mitad de noviembre de 2019.

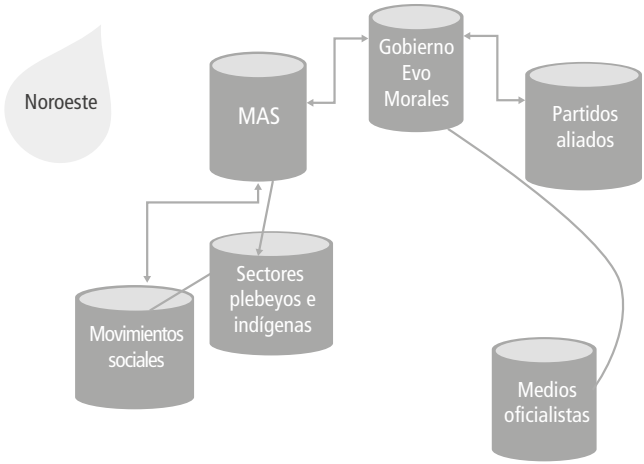
---

8 Que no necesariamente era una mayoría electoral.

Dicho bloque estaba conformado por las fuerzas militares y policiales, la Justicia, las universidades y las organizaciones e instituciones de las clases medias y altas (en lugar preminente, los comités cívicos y la red de grupos de choque de La Resistencia, pero también las asociaciones empresariales, las fraternidades, las logias, los clubes sociales, etc.).

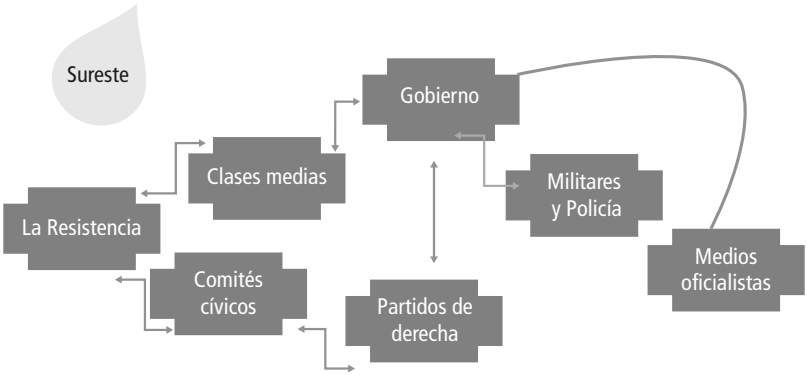
En este bloque participaban, "con voz y voto", los jefes y las expresiones políticas de la derecha y la extrema derecha, fueran éstas de viejo cuño (como el expresidente Jorge Quiroga), fueran relativamente recientes (como el Movimiento Demócrata Social, que era el partido de la presidenta Áñez y de muchos de sus ministros) o fueran recién llegados (como los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, que constituían la referencia política de La Resistencia). Los partidos de centro, Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa, y Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, participaban de manera algo más descentrada en el mencionado bloque, ya que respaldaban la sucesión de Morales, así como a Áñez en contra del MAS, pero no participaban en el gobierno interino.

Gráfico 1. Bloque de poder anterior a noviembre de 2019



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Bloque de poder posterior a noviembre de 2019



Fuente: Elaboración propia.

Debido a su novedad, por el vacío dejado a raíz de la salida de Evo Morales del escenario y por las características (insurreccionales o "contrarrevolucionarias") de su conformación histórica, el nuevo bloque en el poder había llegado para quedarse, sin importar cuáles de sus miembros terminaran por ganar las elecciones previstas para un tiempo inmediatamente posterior. Un ganador de centro podía atenuar los aspectos más agresivos del bloque de poder, pero era más probable que triunfara un partido o un frente que correspondiera plenamente con las transformaciones históricas que acababan de suceder.

Algunas de las fuerzas ascendentes

En el lapso transcurrido entre el 21 de octubre y el 13 de noviembre de 2019, con sus bloqueos de calles y paros en las principales ciudades del país, y enfrentándose en numerosas ocasiones a las columnas de trabajadores y campesinos que apoyaban al MAS y buscaban "desbloquear", las clases medias y altas, en general blancas, lograron detener el funcionamiento del aparato productivo y arrinconar al gobierno de Morales.

Su presión sobre la Policía fue una de las causas del estallido, primero, y luego de la extensión del motín en esta institución, que constituyó el "jaque mate" de la revuelta ciudadana contra el presidente Evo Morales. Su presión también fue determinante para el apoyo de las Fuerzas Armadas a la renuncia de éste y para la salida de los militares de sus cuarteles el 12 de noviembre por la noche, a fin de respaldar a la Policía sobrepasada por los manifestantes.[9]

Las clases medias y altas se expresaban y organizaban por medio de las redes sociales. Reivindicaban su acción como la "revolución de las pititas" (por las sogas delgadas que habían usado en los bloqueos y que habían sido motivo de burla para Evo Morales), a la que consideraban la rebelión contra una dictadura; de ahí su fuerte antagonismo con los periodistas extranjeros y nacionales que habían atribuido la caída de Morales a un "golpe de Estado".

Estas clases se constituían en la principal fuerza de respaldo del gobierno interino de Jeanine Áñez, en particular, de su política de persecución judicial contra los exgobernantes y los dirigentes del MAS. Se movilizaban en contra del "retorno de los masistas", que para ellas era equivalente a la repetición de los actos violentos (tanto reales como imaginarios) que se habían producido el 11 y el 12 de noviembre en contra de algunos barrios residenciales de La Paz.

Los sectores más altos de la sociedad nunca habían comulgado con la perspectiva de un gobierno dirigido por un movimiento campesino con ideas heterodoxas en economía, política y relaciones étnico-raciales. Este rechazo se fue

---

9 Como veremos, lo mismo ocurrió con los medios de comunicación, que en Bolivia –como en otras partes del mundo– eran manejados por especialistas salidos de las clases medias y altas. En Bolivia, además, estos especialistas, sobre todo los de mayor rango, pertenecían o deseaban enrolarse en el grupo de estatus étnico blanco, por lo que tendían a actuar en correspondencia con este grupo.

extendiendo al conjunto de las clases medias a consecuencia de la captura del Estado por parte de la élite masista, su uso sectario de las instituciones y su deseo de permanecer en el poder alterando las normas y las tradiciones democráticas bolivianas.[10]

Durante la crisis, jóvenes provenientes de estas clases se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de Morales. Estos grupos se llamaron a sí mismos La Resistencia. Antes de la renuncia del expresidente, atacaron a determinadas figuras del régimen masista, con el propósito de amedrentarlas y obligarlas a renunciar. Después, siguieron movilizados. Se encargaban del cuidado de las calles, controlaban lo que sucedía en las casas de los masistas, restringían o vigilaban el tránsito de algunos indígenas en ciertos lugares públicos, todo esto con el aval de la Policía. En ese momento tenían como referentes políticos a los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Por la forma en que actuaron durante la crisis, las fuerzas policiales y militares adquirieron un papel político que no tenían, al acompañar la movilización de las clases medias y altas contra el "retorno del masismo" y como soporte del gobierno interino. Quizá por primera vez en la historia contemporánea, la Policía, que normalmente había sido discriminada y maltratada por los grupos sociales dominantes, recibía el aplauso e incluso la admiración de éstos, lo que constituía un importante aliciente para sus efectivos.

---

10 En la extensión del malestar contra el MAS cumplió un importante papel la búsqueda de legitimidad social de la clase media recién formada, de proveniencia indígena, a través de la emulación del comportamiento político y del racismo de la clase media tradicional.

Jeanine Áñez y su gabinete llegaron por casualidad al poder, pero desde el principio empatizaron fuertemente con las demandas sociales existentes. Mostraron de inmediato una adecuación populista a estas demandas, sobre todo a la persecución del MAS exigida por las clases medias. El gobierno logró convocar a elecciones, conformar tribunales electorales y "pacificar" el país, neutralizando a los movimientos sociales masistas y persiguiendo sistemáticamente a los exgobernantes y a sus colaboradores.

El precio en cuanto a derechos humanos fue alto,[11] pero una buena parte de la población, radicalizada por el odio al MAS y el miedo a su retorno, estuvo dispuesta a pagarlo. Las clases medias victoriosas apoyaban intensamente al gobierno, aunque, posteriormente, la postulación de Áñez como candidata a las elecciones, anunciada el 25 de enero de 2020, y algunas de las medidas que esta adoptó en el gobierno matizarían este apoyo. En todo caso, en el momento en que se enfoca nuestra investigación, el gobierno añista –aunque no contaba más que con unos pocos parlamentarios y supuestamente era transitorio–, disponía de un mando casi discrecional: no estaba sometido al control de ningún poder y, al contrario, todos los poderes se le subordinaban a un punto que ni siquiera Evo Morales había logrado en su momento de mayor control del aparato estatal. Gracias a ello, pudo invertir las orientaciones de la política exterior, alineando a Bolivia con los Estados Unidos y desbaratando la política de alianzas internacionales del anterior gobierno. También cambió los principios de la política económica, sacando a las empresas estatales del sitial de privilegio en el que se encontraban y cediendo a las demandas desregulatorias de la empresa privada, en especial de la banca, algo que continuaría haciendo posteriormente.

---

11 Sobre todo, por los actos represivos de Sacaba y Senkata (véase más abajo).

Luego de dos décadas de tener poca influencia y menos popularidad, la derecha política volvió a ser atractiva por su oposición al MAS, por su estilo de gobierno, sus ideas y políticas. De ahí la repentina centralidad del Movimiento Demócrata Social y, en general, de la élite política cruceña, considerados por mucho tiempo demasiado conservadores para prosperar, e incluso para poder actuar en el occidente del país, en general más progresista.

La justicia continuó funcionando como instrumento al servicio de los gobernantes de turno y, en este caso, de las fuerzas sociales que estos representaban. Los fiscales y jueces, nombrados de una u otra manera por el gobierno anterior, se empeñaron en tratar de borrar las huellas de su pasado comprometedor por medio de una diligente contribución a la "pacificación", entendida como sanción ejemplificadora de los movimientos sociales y de los individuos que habían servido al régimen anterior.

Si en el anterior bloque de poder predominaban los agentes salidos del noroeste del territorio nacional, en el bloque que resultó del derrocamiento de Evo Morales (que, como hemos dicho, no era exactamente el que se configuraría posteriormente) predominaban fuerzas provenientes del sureste de Bolivia.

El papel de los medios en la caída de Evo Morales

Como hemos dicho, la hegemonía del gobierno del MAS en el campo mediático comenzó a ceder desde 2016, lo que se expresó primero en las redes sociales y sólo después en los medios periodísticos masivos. Conforme los sucesivos ministros de Comunicación fracasaban en su búsqueda de control de la agenda pública,[12] el nuevo sentido común que

12 Ahora se sabe que esto ocurrió, en parte, porque la distribución del presupuesto nacional de propaganda se hizo de manera poco profesional. Esto significa que se beneficiaba en exceso a

ya era evidente en las redes –y que llevó al MAS a tratar de recuperar el terreno perdido en ellas mediante la creación de una Dirección de Redes en el Ministerio de Comunicación[13]– se fue filtrando a los medios. El escepticismo respecto a los mensajes gubernamentales y una mayor cobertura de los múltiples errores y escándalos del gobierno se dieron, incluso, en los medios que no se consideraban abiertamente opositores.

En ese momento, a despecho de su escasa lectoría,[14] *Página Siete* empezó a desempeñar un papel clave, basado en su importante influencia en los círculos de clase media-alta y alta. Con sus numerosas denuncias y críticas al gobierno, se convirtió en la referencia de la cobertura periodística de tendencia opositora. Otros medios escritos y audiovisuales comenzaron a seguir con regularidad sus temas.

---

los medios amigos y muy poco a los medios "neutros" o menos cercanos. Tal conclusión se desprende del informe realizado por la ministra de Comunicación de Áñez, Isabel Fernández Suárez (luego viceministra, a resultas de la reforma de esta repartición del Estado), sobre las sumas que se entregaron en las gestiones precedentes de su ministerio a diferentes televisiones y periódicos (*Correo del Sur*, "Revelan que semanarios 'desconocidos' recibían más dinero que periódicos de circulación nacional". Disponible en: https://correodelsur.com/economia/20200507_revelan-que-semanarios-desconocidos-recibian-mas-dinero-que-periodicos-de-circulacion-nacional.html.)

13 *Opinión*, "Bolivia crea dirección general de Redes Sociales". Disponible en: https://www.opinion.com.bo/articulo/ciencia-tecnolog-iacute/bolivia-crea-direcci-oacute-n-general-redes-sociales/20160419000100548233.amp.html.

14 Según una encuesta de la empresa Ruiz Mier, realizada en 2014, *Página Siete* tenía un 5% de lectoría; en la misma encuesta, *Extra* tenía el 17,2%; *La Razón*, el 18% y *El Deber*, el 21,4%. Viceministerio de Gestión Comunicacional, "Servicios para la realización de *rating* de medios de comunicación", La Paz, 2014 (inédito).

Este periódico se había hecho crecientemente crítico al gobierno de Morales y se hallaba en problemas económicos principalmente por esta razón, ya que a partir de ello dejó de recibir propaganda estatal. Como hemos dicho, altos cargos del gobierno habían chocado públicamente contra sus directores y propietarios. Desde el 2016, a partir del referendo para la repostulación de Morales y la denuncia del "caso Zapata", *Página Siete* intensificó y radicalizó su perfil político. Entre el 1 de febrero y el 30 de junio del 2016, le dedicó 35 editoriales críticos a los entretelones de la investigación de la "exnovia del presidente Morales"; en ese mismo periodo, *La Razón* solo publicó uno y *El Deber*, cinco.[15] Además, *Página Siete* informaba con parquedad sobre los logros gubernamentales, que rara vez se destacaban dentro de su jerarquización noticiosa y, en cambio, publicaba un abundante contenido antigubernamental en sus páginas de noticias, editoriales, columnas de opinión y suplementos. También auspiciaba unas encuestas electorales en las que el MAS siempre aparecía con una intención de voto menor a la que le daban los otros sondeos. Este sesgo se debía al carácter más urbano de dichas encuestas, que captaban, principalmente, el estado de ánimo de las clases medias, una característica que *Página Siete* no hacía explícita.

Como muestra de la actitud de *Página Siete* respecto al gobierno de Morales –que, además, nos dará luces sobre su aporte al derrocamiento (aporte que, en menor cuantía, hicieron también otros medios)–, presentamos a continuación la lista de los titulares que publicó el 21 de octubre de 2020, al día siguiente de las elecciones generales, las cuales,

15 Susana Bejarano, "Los medios de comunicación impresos en Bolivia y la aplicación de la Ley en Contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación a través del caso Gabriela Zapata, en Bolivia, del 1 de febrero al 1 de julio del 2016", Ginebra, The Graduate Institute Geneva, 2017.

ulteriormente, serían rechazadas por fraudulentas por la oposición al MAS.

Cuadro 1. Principales titulares de *Página Siete* (21 de octubre de 2019)

- Evo saca su peor resultado en 14 años, va al balotaje y pierde los dos tercios
- El MAS pierde los dos tercios en el Senado, según proyección
- Filas masivas, intervención policial y denuncias marcan un día histórico
- Paceños madrugan y votan con "conciencia" en las urnas
- El TSE frenó el TREP para evitar "confusiones" con el sistema de cómputo
- Vigilias en Potosí, Oruro y Santa Cruz por sospecha de fraude electoral
- El Alto vota con el recuerdo de una lucha que fue "traicionada"
- La Llajta fue a sufragar entre la obligación y desinformación
- 106 arrestados en Santa Cruz y voto con sabor a pacumutu
- Sospecha, incitación al voto y con pututu, así votaron los candidatos
- Los bolivianos marcan gran presencia en el exterior
- En Londres hubo desorden en mesas y constante vigilancia
- Mesa llama a defender la segunda vuelta
- CONADE llama a cabildo nacional y vigilias en defensa del voto
- El voto joven y un viaje de 1.400 km, en Argentina
- Toman las redes para cuidar el voto
- En los 14 años de Evo, al menos 12 cocaleros fueron parte de una rosca de poder

Fuente: https://www.paginasiete.bo/archivo/2019/10/21.

La lectura de estos titulares permite intuir la posición de este diario respecto a las elecciones: tómese en cuenta, para comenzar, la inexistencia o la tremenda escasez de titulares favorables al MAS o al gobierno de Morales[16] (que, por otra parte, también sería fácil de demostrar en otras ediciones de *Página Siete*, si se hiciera un análisis de contenido de las mismas).

Al mismo tiempo, la lista muestra que la redacción de este diario había preparado dos reportajes para ese día. Uno de ellos era: "En los 14 años de Evo, al menos 12 cocaleros

16 La única excepción era el artículo de opinión "Fraude, cabildos y violencia", escrito por el exministro de Minería, César Navarro.

fueron parte de una rosca de poder".[17] No parece un reportaje adecuado para ser presentado al día siguiente de unas elecciones. *Página Siete* no hizo ninguno parecido a éste sobre los problemas y escándalos de los otros candidatos. Otro reportaje previamente preparado era: "El Alto vota con el recuerdo de una lucha que fue 'traicionada'".[18] Puesto que la lucha de El Alto a la que este titular hacía referencia había estado vinculada al MAS, no hay duda de a quién se aludía al hablar de "traición".

La noticia principal de *Página Siete* del 21 de octubre hacía un recuento de los resultados extraoficiales de los comicios (ya que los oficiales preliminares habían sido suspendidos) y daba la segunda vuelta como un hecho:[19] "Evo saca su peor resultado en 14 años, va al balotaje y pierde los dos tercios".[20] En ninguna parte, este título aclaraba que la mencionada afirmación se basaba en resultados *extraoficiales*, provenientes del conteo rápido de las empresas encuestadoras. Aunque el artículo señalaba que ésta era su fuente, comenzaba así: "Acostumbrado como estaba a ganar con más del 50% de

17 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/en-los-14-anos-de-evo-al-menos-12-cocaleros-fueron-parte-de-una-rosca-de-poder-235019.html.

18 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/el-alto-vota-con-el-recuerdo-de-una-lucha-que-fue-traicionada-234999.html.

19 Recordemos a los lectores que la gran cuestión que se ventilaba en las elecciones del 20 de octubre de 2019 era si el presidente Morales lograría ser reelecto en la primera vuelta, para lo que necesitaba más del 40% de los votos y diez puntos porcentuales de diferencia sobre su inmediato seguidor; o si, al no lograr cumplir estos requisitos, debería desempatar con otro candidato en una segunda vuelta (o balotaje). Esta alternativa era crucial, ya que las encuestas señalaban que, en caso de ir a un desempate, Morales probablemente perdería.

20 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/evo-saca-su-peor-resultado-en-14-anos-va-al-balotaje-pierde-los-dos-tercios-235043.html.

los votos, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, sufrió su primera caída en unas elecciones generales". ¿"Caída"? Si había ganado las elecciones… Se podría suponer que lo que se quería decir era que Morales no había triunfado en primera vuelta. Parecería que se daba esto como un hecho, pese a que todavía no lo era, y que la posibilidad de que las encuestadoras se hubieran equivocado estaba descartada. Según esta mirada, si Morales no "caía", esto solo podría deberse a una razón fraudulenta.

Este artículo contribuyó a posicionar el resultado electoral preliminar de las encuestadoras como definitivo, lo que en ese momento era conveniente para el candidato que había salido segundo, Carlos Mesa. Entretanto, el MAS negaba que hubiera necesidad de segunda vuelta e, hipotéticamente, podía tener razón, ya que la votación había sido estrecha. Sin embargo, repetimos, *Página Siete* no tomó en cuenta esta posibilidad.

Fantaseemos un poco. Si, posteriormente, la cuestión del fraude no se hubiera instalado en la opinión pública a causa de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender el conteo preliminar de actas (TREP), podía haberse planteado, en cambio, a partir de la contradicción entre los resultados preliminares y los oficiales, que planteó esa misma noche el candidato Mesa.[21] Pues bien, en tal caso, el titular de *Página Siete* hubiera contribuido a ello, porque buscaba inducir a sus lectores a considerar los resultados finales del Tribunal Electoral como *falsos*, lo fueran o no.

El lector debe tomar en cuenta que estamos hablando de un momento en el que todavía no podía hablarse de fraude, ya que el Tribunal Electoral no había proclamado ganador a Morales (y *Página Siete* no podía saber que eso ocurriría).

---

21 "Mesa llama a defender la segunda vuelta". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/mesa-llama-defender-la-segunda-vuelta-235077.html.

Interpretar políticamente un hecho es uno de los roles de los medios periodísticos que generalmente éstos no admiten que cumplen. Así funcionan como aparatos ideológicos y producen "efectos de verdad" alineados con determinadas concepciones del mundo.

Ese día, *Página Siete* se posicionó aún más como un actor del campo ideológico cuando, en lugar de cubrir los argumentos del oficialismo sobre su supuesta victoria en primera vuelta gracias a que aún faltaba contar el voto rural, publicaba nada menos que una *respuesta* a esta argumentación, titulada: "Los resultados pendientes por subir al TREP no solo son del campo profundo", y subtitulada: "En anteriores procesos electorales, el TREP funcionó de manera paralela al cómputo oficial sin ningún inconveniente".[22] El contenido enunciado en el titular se atribuye a "una fuente vinculada a la entidad electoral", que no se identifica. Posteriormente, esta misma afirmación –que las actas que faltaba contar no eran puramente rurales– se intentaría probar a través de distintos métodos en varios estudios. No obstante, en ese momento estos intentos no se habían dado, por lo que *Página Siete* no podía saber si la información era cierta y, entonces, estaba obligado a contrastarla con la opinión del MAS, algo que, huelga decirlo, no hizo.

El subtítulo de esta noticia, además, era impreciso: en ningún proceso electoral previo, el TREP había publicado, antes de las 20:00 horas del día de la votación, resultados superiores al 80% de las actas electorales. La afirmación de que el TREP había funcionado al 100% en los conteos de otros procesos, que fue difundida por varios medios, tendría

22 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/los-resultados-pendientes-por-subir-al-trep-no-solo-son-del-campo-profundo-235079.html.

una importante incidencia en el debate posterior acerca del fraude.[23]

Como remate de esta estrategia de cobertura de las elecciones, *Página Siete* publicó la versión oficial del TSE sobre la suspensión de la emisión del TREP de la siguiente manera: "El TSE frenó el TREP para evitar 'confusiones' con el sistema de cómputo".[24] El lector debe reparar en el uso de las comillas. Obviamente, se buscaba disminuir la veracidad de la afirmación del TSE.[25]

No nos es posible hacer este ejercicio con cada edición de *Página Siete* y los otros medios de comunicación del país durante esos días. Baste decir que la mayoría de ellos no dudó del fraude electoral. También mostraron, con sensacionalismo, las manifestaciones en contra de Morales y, en algunos casos, "olvidaron" mostrar las movilizaciones a favor del presidente. *Página Siete* fue el medio que más extremó esta tendencia, pero la simpatía de sus colegas de los medios privados por las protestas era indisimulable. Los principales grupos televisivos hicieron una cobertura tan amplia e intensa de las protestas que buscaban la renuncia del presidente Morales, que era posible seguirlas, prácticamente en tiempo real. Las televisoras con una tendencia más afín al oficialismo (ATB y PAT), la estatal Bolivia TV, la cadena radial gubernamental Patria Nueva y el periódico público *Cambio* quedaron aislados

---

23 Los autores de este artículo no intentamos defender la suspensión del conteo del TREP por parte del Tribunal Electoral, que despertó tantas sospechas y arruinó el proceso electoral. No obstante, si Página Siete quería criticar esta suspensión debió hacerlo en su página editorial, no en sus secciones de información.

24 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/el-tse-freno-el-trep-para-evitar-confusiones-con-el-sistema-de-computo-235042.html.

25 Insistimos: quizá la argumentación del TSE no era veraz, pero *Página Siete* no tenia una forma periodísticamente legítima de saberlo y decirlo.

de la corriente mediática principal. *La Razón* intentó hacer una cobertura menos crítica contra el gobierno que la de su competencia paceña, tratando, al mismo tiempo, de recoger con cierta completitud lo que estaba pasando.

Televisión Universitaria (TVU) tuvo, por su parte, una intervención central en este momento de gran polarización en torno a la pregunta sobre los mecanismos del supuesto fraude. En el programa *Jaque Mate*, conducido por Ximena Galarza, el ingeniero en sistemas Edgar Villegas presentó "pruebas del fraude electoral", lo que mereció una amplísima cobertura de parte de otros medios, casi siempre sin dejar espacio a una contraparte.[26] A este bloque de medios opositores se sumó la cadena internacional CNN en Español, en concreto el programa *Conclusiones* del periodista Fernando del Rincón, cuya parcialidad con uno de los lados de la polarización boliviana se hizo comprable a la de Telesur. Aunque, más adelante, las denuncias de Villegas fueron cuestionadas por otros especialistas informáticos, ninguna de estas respuestas logró la misma cobertura. Lo mismo ocurrió con otras denuncias de fraude (la de Ethical Hacking, empresa supervisora del TREP; la de Marcelo Guzmán de Rojas, operador del TREP luego incluido en el proceso judicial sobre el fraude; así como varias de las diversas misiones electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA).

Las clases medias, comprometidas en la revuelta, y también los sectores populares decepcionados que terminaron apoyándolas prejuzgaron la realización de un fraude porque, para ellos, éste *ya se había producido* previamente, en noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales desoyendo los resultados del referendo

26 "Edgar Villegas presenta pruebas de fraude en TVU, entrevista con Ximena Galarza". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WA-u4HxzHZw

constitucional que le habían prohibido ir a una nueva reelección. Los medios de comunicación sentían el mismo malestar de las clases medias, que no en vano son los estratos sociales que normalmente influyen sobre ellos, ya que sus miembros son quienes los operan. Con excepción de los canales y periódicos más cercanos al anterior régimen, los medios se sumaron, con más o menos disimulo, a la denuncia de un fraude que, insistimos, no era necesario confirmar porque se sentía consumado desde mucho antes.

El alegato del fraude fue el principal de los discursos que la élite mediática puso en circulación para apoyar la tarea subversiva de las clases tradicionalmente dominantes en los momentos finales del gobierno evista. Otros discursos importantes, en este momento, fueron el de la oposición entre "dictadura" y "democracia", el del restablecimiento de la "moralidad" luego del "despilfarro, la corrupción y decadencia" del pasado, etc. Desgraciadamente, no podemos analizarlos con igual detenimiento que el primero.

Por otra parte, en vísperas de la caída de Morales, los medios privados llamaron muchas veces a los grupos que apoyaban al gobierno "turbas" y "hordas" brutales que actuaban violentamente contra los manifestantes opuestos al resultado electoral, los cuales, por el contrario, eran normalmente denominados grupos "vecinales" y "ciudadanos".[27] El primer ejemplo de este tratamiento lo dio el periódico *Los Tiempos* la noche misma de la elección, cuando describió el mitin del presidente Morales ante sus adherentes de la siguiente manera: "Con una turba de gente vitoreando '¡Evo! ¡Evo!' el presidente Evo Morales anunció su victoria en las elecciones generales de 2019 y puso su confianza en el voto rural".[28]

---

27 Excepto en un caso en el que los opositores incurrieron en graves actos de violencia contra la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS. Entonces también se habló de una "turba".

28 Disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/

Con ello se comenzaron a sentar las bases del relato mediático orientado a entronizar al nuevo bloque de poder surgido de la crisis y a legitimarlo, como veremos a continuación.

El alineamiento de los medios con el nuevo bloque de poder

En su artículo "Bolivia: anatomía de un derrocamiento", Pablo Stefanoni retrataba el cambio radical que acababa de vivir Bolivia y señalaba que éste se legitimaba, en el plano simbólico, con un relato que contaba con "tres palabras claves: "'hordas' –los militantes del MAS son reducidos a meros grupos de choque facinerosos–; 'despilfarro' –el ampliamente elogiado manejo macroeconómico habría sido una mera realidad virtual– y 'tiranía' –los últimos 14 años habrían sido puro despotismo estatal–".[29] Vamos a trabajar a partir de la primera de estas "claves" simbólicas, con la intención de ejemplificar el *modus operandi* de los medios en la construcción del relato dominante, sabiendo que éste constituye un elemento fundamental en el proceso de legitimación del poder.

Luego de la asunción del gobierno de Jeanine Áñez, *Página Siete* apoyó fervientemente al nuevo régimen con una cobertura dirigida a lograr objetivos políticos, que incluía campañas para contrarrestar las "mentiras del MAS", como si los reporteros estuvieran llamados a cumplir tal tarea.[30]

---

pais/20191020/evo-morales-confia-voto-del-campo-no-llegar-segunda-vuelta. Turba: "Despectivo. Multitud de gente, especialmente la que forma tumulto".

29 Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/01/21/opinion/1579562766_613079.html.

30 Una noticia de este periódico comenzaba así: "Para arrastrar a los vecinos de El Alto a sus movilizaciones, los militantes del MAS recurren a mentiras como que Evo Morales sufrió un golpe de Estado financiado por Estados Unidos". No se trataba

Su evidente intención era neutralizar cualquier crítica a la forma de constitución del nuevo bloque de poder. *Página Siete* y la mayoría de sus columnistas hicieron una sistemática campaña para despejar cualquier sospecha de que el nuevo gobierno de Áñez hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación de la élite. El periódico puso tanto empeño en ello que llegó a despedir a una de sus columnistas estrella, la feminista María Galindo, que en ese momento chocaba fuertemente contra el oficialismo y trataba de retratar en sus columnas, vitriólicamente, las reuniones que habían decidido los caminos de la sucesión de Evo Morales.[31] Hasta ese momento, *Página Siete* se jactaba de nunca haber censurado a alguno de sus colaboradores. Al actuar contra Galindo, el diario mostraba lo importante que era para este medio no desacoplarse de la opinión de las fuerzas ascendentes en el nuevo campo político, en particular de las clases medias que constituían su audiencia y también su cuna de proveniencia.

Otro aspecto de la defensa de los medios de la legitimidad gubernamental fue la mitificación de la "revolución de las pititas". Aunque se halle fuera del arco temporal de nuestra investigación, mencionemos que periodistas de *Página Siete* y de *El Deber* presentaron sendos libros, en general encomiásticos, del proceso político de fines de 2019. El de *El Deber* se tituló *Nadie se rinde. Una epopeya boliviana*, y

---

de una nota editorial. Aparecía en las páginas de información. Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/22/las-mentiras-del-mas-eeuu-dio-el-golpe-camacho-manda-saquear-238151.html.

La acusación/noticia sobre las "mentiras de Morales" no se detuvo aquí. Un próximo titular fue: "Muertes, videos falsos y fraude: 12 mentiras de Evo desde el exilio". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/24/muertes-videos-falsos-fraude-12-mentiras-de-evo-desde-su-asilo-238319.html.

31 "La columna de María Galindo, censurada por el periódico *Página Siete*". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IITnoZBjEhE.

consistía en una relación periodística del derrocamiento de Morales que se combinaba con la opinión de sus autores, los periodistas Roberto Navia y Marcelo Suárez. "Nadie se rinde, nadie se cansa", tal era el cántico de los opositores al presidente. Ya desde su título, entonces, el libro tomaba partido; buscaba pintar con colores brillantes la lucha de las clases medias contra "el dictador" y dedicaba poco espacio, si alguno, a las voces y las razones de los perdedores de la "epopeya". En cuanto a *La revolución de las pititas*, publicado en diciembre de 2019 por varios periodistas y columnistas de *Página Siete*, también incluía, además del relato convencional sobre la "epopeya democrática", algunas crónicas críticas, entre ellas dos sobre los sucesos de Senkata que recogían la voz de las víctimas.[32] Algo que el periódico no había hecho en los días posteriores a los hechos. Estas crónicas se publicaron exclusivamente en el libro citado, que se vendió por cuerda separada respecto al diario.

El apoyo mediático al nuevo oficialismo llegó al punto de justificar la represión ejecutada por el gobierno. El 16 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a la capital fue detenida por fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. Murieron diez campesinos y decenas fueron heridos. Ningún elemento uniformado murió o resultó herido por disparos. *Página Siete* tituló: "Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos". En la noticia se afirmaba, sin suministrar pruebas, que los manifestantes tenían "armas de fuego y otros objetos letales".[33] *Página Siete* se sumaba así a la línea oficialista que, desempolvando un

32 Leny Chuquimia, "El Alto, la ciudad que más perdió" y Carla Hannover, "Miedo y furia, los combustibles del bloqueo de Senkata", en *Página Siete*, *La revolución de las pititas*, La Paz, 2019.

33 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/16/fuego-cruzado-entre-cocaleros-ffaa-deja-al-menos-seis-muertos-237561.html.

viejo libreto, reducía los conflictos sociales a la acción de "grupos subversivos armados".

Tres días después, el 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina hasta La Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por militares con rifles de balines y armas de fuego. Por alguna razón no determinada, en el lugar no había policías con gases lacrimógenos. Los alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios, excepto *La Razón*, dijeron que el mismo fue volado con dinamita. Ninguno se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de las personas que estaban junto a ella.

Los medios repitieron así la versión del gobierno, en lugar de realizar una investigación propia, ya que ningún periodista estaba en el lugar y el momento de los hechos, según declararon los familiares de las víctimas de Senkata en el programa español *Salvados* y como se hace evidente por la cobertura (o, más bien, la falta de cobertura) de los medios nacionales. Pese a ello, ulteriormente, los medios aludieron, repetidamente, al "atentado dinamitero" contra la planta de Senkata, lo que les permitió hablar de "terrorismo", tal cual sucedió, por ejemplo, en la nota de *Página Siete* titulada: "En 10 días hubo al menos ocho actos terroristas en el país".[34]

---

34 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/21/en-10-dias-hubo-al-menos-actos-terroristas-en-el-pais-238042.html. Este titular no hace referencia a ninguna fuente, por lo que constituye una afirmación del propio periódico.

El subtítulo de esta nota es: "Desde la presencia de extranjeros con explosivos hasta el atentado a la planta de Senkata, los ciudadanos paceños y alteños vivieron días de terror", y el texto señala: "El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, *a punta de dinamitazos*, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios".[35]

Los videos que fueron tomados por los propios manifestantes mostraban que los actos de Senkata tuvieron un carácter espontáneo y desorganizado, lo que no calzaba con ningún "atentado". Una mujer que fue parte del grupo de manifestantes que actuó en Senkata declaró al diario español *El País*: "Nos quieren animalizar, dicen que queríamos volar la planta, como si no supiéramos que eso nos mataba a todos".[36] Otra aseguró que la gente del barrio "sabe cuidar su planta" y que derribaron el muro porque los militares arrastraron tres cadáveres dentro de la planta. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos, pero el único medio nacional que entrevistó a los protagonistas en los días inmediatamente posteriores a los hechos e incorporó su versión a los reportes que hizo fue *La Razón*.

La narrativa oficialista sobre "atentados terroristas" permitió justificar la muerte por bala de 11 personas humildes y sin antecedentes policiales. Los medios bolivianos no pusieron en cuestión esta justificación y, con ello, permitieron que el gobierno lograra su propósito. No constituye una causalidad que las víctimas fueran indígenas sin agencia cultural o política. Los medios escritos, como hemos dicho, casi no hablaron de ellas en noviembre y luego lo hicieron

35 Cursivas de Molina y Bejarano.

36 "El Gobierno de Bolivia anula el decreto que permitía a los militares reprimir las protestas". Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actualidad/1575039515_623830.html.

escasamente, mientras que dedicaron muchas páginas a las víctimas de clase media y blancas de la violencia política.[37] A causa de la negativa de los medios nacionales a recoger sus voces, entre los movimientos sociales cundió un sentimiento de repudio a la prensa nacional, que se combinaba con una mayor confianza hacia los periodistas internacionales, los únicos que parecían interesados en dar, en sus reportajes, un espacio a la contraparte.[38]

Como hemos dicho ya, los principales canales del país cubrieron exhaustivamente las protestas contra "la dictadura" de Morales. En cambio, desde la renuncia de éste, los mismos medios solo emitieron informes escuetos sobre las manifestaciones anti Áñez y, en muchos casos, describieron a sus protagonistas como parte de "hordas" y "turbas", palabras

---

37 "Organizan una campaña para ayudar a la periodista Casimira Lema". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/14/organizan-una-campana-para-ayudar-la-periodista-casimira-lema-237409.html. "Organizan función de cine en apoyo a Lema". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/cultura/2019/11/29/organizan-funcion-de-cine-en-apoyo-lema-238894.html. "Dueños de casas quemadas viven con el dolor de lo ocurrido y esperando justicia". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/12/2/duenos-de-casas-quemadas-viven-con-el-dolor-de-lo-ocurrido-esperando-justicia-239141.html. "*Página Siete* presenta a su Personaje 2019: Generación Pitita". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/30/pagina-siete-presenta-su-personaje-2019-generacion-pitita-241909.html. "Plan Fénix entrega esperanza a afectados por casas quemadas". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/12/11/plan-fenix-entrega-esperanza-afectados-por-casas-quemadas-240076.html. Y, sobre todo, véanse las dos páginas de: "La pesadilla de la que Casimira Lema aún no logra despertar". Disponible en: https://eldeber.com.bo/157622_la-pesadilla-de-la-que-casimira-lema-aun-no-puede-despertar.

38 *Cf. Salvados*, "Las dos Bolivias". Disponible en: https://www.lasexta.com/temas/salvados_las_dos_bolivias-1.

de las que incluso el Ministro de Defensa se disculpó,[39] pero que no cesaron de emplearse en los diarios y telediarios.

Casi ningún medio, ninguna asociación periodística y pocos periodistas, individualmente, protestaron porque las cadenas Telesur y Russia Today (RT), venezolana y rusa, respectivamente, fueran suspendidas de todos los servicios de cable del país. Esta cancelación de emisión era más grave que todas las restricciones realizadas por el gobierno del MAS, que nunca se había atrevido a tanto, pero se acogió en silencio o con aprobación.

Lógicamente, la inmensa mayoría de grandes medios bolivianos, con la sola excepción de La Razón, no dio realce a las declaraciones de los afectados por las masacres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Página Siete hizo una cobertura puramente formal de la llegada de la misión de la CIDH a Bolivia a fines de noviembre, sin mencionar en ella el contenido de las denuncias que dicha misión estaba recibiendo.[40] Luego, publicó una noticia sobre el informe que esta misión emitió, el cual "califica [los] hechos de Sacaba y Senkata de masacre".[41] Esta calificación contradecía la cobertura que de este asunto había hecho el periódico el mes anterior. De modo que la noticia no fue desarrollada, como es lógico. En cambio, *Página Siete* publicó, dos días después, un editorial titulado "El incompleto

39 *Cf. Diario Libre*, "El ejército no disparó un solo proyectil, asegura el Gobierno boliviano". Disponible en: https://www.diariolibre.com/actualidad/el-ejercito-no-disparo-un-solo-proyectil-asegura-el-gobierno-boliviano-FC15420544.

40 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/23/reunion-de-la-cidh-se-desarrolla-entre-amedrentamiento-confrontaciones-238373.html.

41 "CIDH califica hechos de Sacaba y Senkata de masacre, y pide investigación internacional". Disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/10/cidh-califica-hechos-de-sacaba-senakta-de-masacre-pide-investigacion-internacional-240095.html.

informe de la CIDH", en el cual, en contra de todo lo sostenido anteriormente por el periódico, se reconocía que era "muy posible que las fuerzas del orden hayan ocasionado parte de esas muertes y ello debe ser investigado y sancionados los responsables". Sin embargo, enseguida el editorial cambiaba de tono y se ponía abiertamente a justificar las masacres. Veamos:

> ¿Qué iba a hacer la fuerza pública con los miles de cocaleros que estaban en el puente de Huayllani, a la salida de Sacaba? ¿Dejar que siguieran su marcha hasta Cochabamba y cometieran destrozos y quizás muertes? Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera habían pedido que sus simpatizantes "resistieran" y "respaldaran" el denominado "proceso de cambio". Ello quería decir, en otras palabras, que se enfrenten a otros civiles (…).
>
> ¿Y en el caso de Senkata, qué cree el buen [relator de la CIDH, Francisco José] Eguiguren que se debía hacer? ¿Por cuánto tiempo dos millones de personas debían estar sin gas licuado para cocinar y gasolina para mover el transporte público, las ambulancias y los carros basureros? ¿De manera indefinida? ¿Se debía permitir que unos cientos de bloqueadores, además, atacaran con explosivos la Planta de Senkata, con el riesgo de generar una tragedia de proporciones inconmensurables?[42]

Los medios nunca sometieron a una investigación sistemática –es decir, para tratar de determinar si era verdad o no– la sorprendente declaración gubernamental de que las víctimas de Sacaba y Senkata hubieran sido matados por… ¡los propios manifestantes![43] En la gran mayoría de los artículos sobre el tema, los periodistas no pusieron en duda la versión del gobierno de que en Senkata había habido un "atentado". Sus acciones dan a entender que no estaban interesados en descubrir la verdad, sino en legitimar lo

42 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/12/20/el-incompleto-informe-de-la-cidh-240987.html.

43 *Diario Libre*, *ibid*.

sucedido y evitar que, con alusiones a Sacaba y Senkata, se quitará legitimidad "de origen" al nuevo bloque de poder.

El ejercicio que acabamos de hacer podría hacerse también respecto a las otras dos "palabras clave" que menciona Stefanoni. Dejémoslo aquí. Creemos haber probado suficientemente el alineamiento de los principales medios con el relato o interpretación del cambio político que el nuevo bloque de poder estaba interesado en imponer.

La nueva hegemonía "instantánea" del campo mediático

Luego de la asunción de Jeanine Áñez al poder, en cuestión de horas, el campo mediático abandonó un paradigma ideológico, simbólico y discursivo, y adoptó otro. Este cambio vertiginoso de la hegemonía generó un conjunto de eventos que habría que calificar de curiosos. En Bolivia TV, los mismos periodistas que hasta un día antes trataban de persuadir al público de las razones del MAS se empeñaban, sin cambiarse el traje siquiera, en alabar las bondades de la "sucesión constitucional". ATB, que había sido la televisora privada más cercana al anterior gobierno, comenzaba a entrevistar, febril y complacientemente, a las nuevas autoridades, eliminaba sus programas políticos de línea izquierdista y adoptaba el lenguaje de sus colegas sobre los manifestantes y el MAS: "hordas", "narco-terrorismo", etc. Lo mismo ocurría con PAT y muchos otros medios que eran considerados oficialistas. En cuanto a los no oficialistas, como hemos visto, se convertían inmediatamente en tales, como si su reticencia anterior no se debiera a cuestiones de principio ("periodismo independiente"), sino a su antipatía a la contra-élite masista.

Estos hechos mostraban, por un lado, el espíritu pragmático y "peguista" de los bolivianos, fueran o no periodistas. Y también la tendencia del desarrollo histórico

nacional a avanzar con *movimientos de péndulo*.[44] Finalmente, probaban la dependencia del campo mediático boliviano de las transformaciones del campo político, dependencia que resulta de la poca institucionalidad de los medios, y de su necesidad oportunista de congraciarse con el Estado, el principal anunciante del mercado.

En este caso, además, el alineamiento de los medios se aceleró por la relación orgánica de la élite mediática con quienes, en la "revolución pitita", habían hallado el instrumento de reivindicación histórica de la capa superior de la sociedad, identificable como la élite *señorial*.

Hemos calificado la hegemonía del nuevo bloque de poder de "instantánea" para subrayar que no requirió de una ardua –y no muy transparente– tarea de persuasión y cooptación de los medios, como otras construcciones hegemónicas previas. Aunque los contratos de propaganda del gobierno siguen y seguirán siendo un mecanismo fundamental de cohesión y control del campo mediático, podemos decir que en las primeras semanas de conformación del nuevo bloque de poder se produjo un apoyo espontáneo e ideológicamente motivado de los principales medios de comunicación a aquél. Desde entonces, hasta las elecciones del 18 de octubre de 2020, estos medios expresaron –con una libertad que no se habían dado antes– la aversión de sus propietarios y de muchos de sus periodistas respecto al MAS, sus líderes, sus políticas y sus bases sociales. También reprodujeron la tendencia de la élite *señorial* –élite que, en última instancia, expresaban– a invisibilizar el mundo indígena, lo que lograron contando lo que se decía de él, pero no lo que él quería decir.

---

44 *Cf*. Fernando Molina, "Bolivia: ¿Golpe o (contra)revolución?", en *Nueva Sociedad*, noviembre de 2019. Disponible en: https://nuso.org/articulo/bolivia-golpe-o-contrarevolucion.

La coincidencia de propósitos entre el bloque de poder y la élite mediática se originó en una vinculación, ya lo hemos dicho, de tipo *orgánico*: similitud de intereses, y también, de creencias, que son las compartidas por las clases superiores y los estatus blancos bolivianos acerca del papel de los "otros" y el de sí mismos en la construcción del país.

Aunque la hegemonía mediática del gobierno de Jeanine Áñez se fue debilitando paulatinamente, conforme se fueron manifestando disputas sectoriales y partidistas dentro del bloque de poder, la primacía de este bloque sobre el campo mediático no disminuyó. Así saltaba a la vista apenas el debate dejaba de referirse a Áñez y pasaba a ocuparse del MAS.

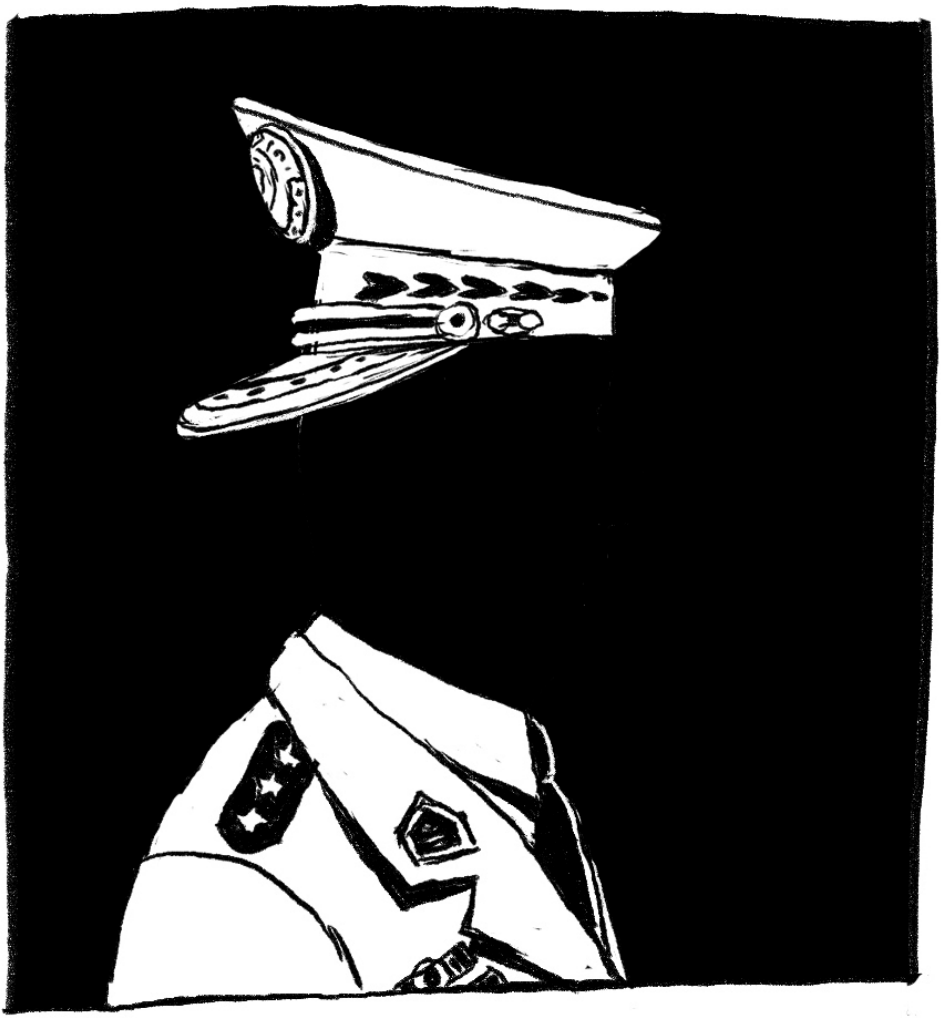
Cuadro 2. El campo mediático en el periodo gubernamental de Áñez

Tipos de medios	Características
Medios de comunicación antiguamente opositores o más neutros respecto a Evo Periódicos: *Página Siete* (La Paz), *Los Tiempos* (Cochabamba), *El Deber* (Santa Cruz), *El Día* (Santa Cruz), *El País* (Tarija) Televisoras: Unitel, Red Uno, Bolivisión Radios: Panamericana, Fides, Erbol Agencias: ANF	Los medios periodísticos que se oponían y también los que no se alineaban abiertamente con el gobierno anterior (aunque actuaban bajo la hegemonía del MAS) han aumentado su popularidad e influencia. Es probable que también aumenten sus ingresos por publicidad estatal. En general, su línea editorial apuntala el trabajo del gobierno de transición.
Medios de comunicación oficialistas o cercanos al anterior gobierno Periódicos: *La Razón* (La Paz), *El Periódico* (Tarija), *Opinión* (Cochabamba), *Le Monde Diplomatique* (La Paz), *La Época* (La Paz) Televisoras: ATB, PAT, Abya Yala, Gigavisión, RTP Radios: ATB Radio	Los medios relacionados con el anterior gobierno se encuentran en problemas económicos y bajo ataque judicial. Su continuidad se encuentra en duda, al menos con las características que han tenido hasta hora. La mayoría ha tratado de continuar su rol oficialista del pasado, repitiéndolo respecto al gobierno de Áñez. Una excepción a este respecto la constituyen *La Razón* y Abya Yala.

(Continúa en la siguiente página)

Tipos de medios	Características
Medios estatales Periódicos: *Bolivia* (ex *Cambio*) (La Paz) Televisoras: Bolivia TV Radios: Red Patria Nueva Agencia: ABI	Cambiaron en 180 grados su paradigma discursivo, pasando de una ideología nacional-popular a una ideología conservadora, antiizquierdista y neoliberal.
Medios sindicales Radios: Kausachum Coca, radios mineras	Aunque algunas de estas emisoras fueron críticas con el anterior gobierno, ahora se han convertido en referencia de los movimientos sociales y del MAS. Conservan el paradigma ideológico nacional-popular.
Medios internacionales prooficialistas Televisoras: CNN en Español	La conservadora CNN en Español sigue siendo una referencia ideológica de los sectores medios del país y, en esa medida, del nuevo bloque de poder.
Medios internacionales proevistas Televisoras: Telesur, Russia Today	Su señal dentro del país ha desaparecido.

Fuente: Elaboración propia.



VI

Motín policial de 2019: Tensiones irresueltas y reconfiguración político-institucional en Bolivia

Gabriela Reyes Rodas

Introducción

La Policía boliviana es una institución con mando único, que tiene la "misión específica de la defensa de la sociedad, y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano".[1] Cuenta con aproximadamente 40 mil efectivos repartidos en dos escalas jerárquicas que se diferencian por su grado de instrucción en la Universidad Policial (Unipol): oficiales, que ascienden hasta el grado de general; y suboficiales, clases, y policías, que ascienden hasta el grado de suboficial superior. La Policía depende del presidente de Bolivia, quien ejerce autoridad por intermedio del ministro de Gobierno.

Desde su creación en 1826, la historia de la institución Verde Olivo es el reflejo de una construcción institucional accidentada y conflictiva, de adaptaciones forzadas y convenientes, de acuerdo a los tiempos políticos que vivía el país convirtiéndola en una institución subordinada a las élites políticas, alejada de la ciudadanía, con bajos niveles de legitimidad y difícil adaptación a los preceptos básicos de la democracia (Tellería, 2017). El 8 de abril de 1985, se promulga la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual otorga

1 Art. 251, Constitución Política del Estado.

autonomía a la institución y la dota de mayor liderazgo para llevar a cabo la implementación de políticas de seguridad. Sin embargo, la ley mantiene el centralismo policial, la discrecionalidad, y los modos de actuación autoritarios de los años anteriores que la caracterizaban.

La Policía boliviana ha atravesado una serie de procesos de reestructuración y modernización parciales con el objetivo de modificar el enfoque represivo de sus intervenciones y de fortalecer su desarrollo institucional. Las propuestas de reforma institucional no es que hayan nacido como parte de los planes de gobierno de quienes estaban al mando, sino que surgieron como reacción a denuncias de casos de corrupción donde se han visto involucrados policías mayormente de alto rango, además de denuncias de violaciones de derechos humanos y ciertos casos de deliberaciones por parte de personal policial (Quintana, 2005). Sin embargo, factores como la improvisación, la carencia de recursos, o el fuerte énfasis en la restauración del orden público, impidieron que estas iniciativas cumplan su objetivo de mejorar el funcionamiento integral de la institución policial.

El 2004, bajo la presidencia de Carlos D. Mesa, se dieron unos pasos iniciales hacia una posible reforma policial que surgió como resultado de los sucesos de 2003 y de la grave crisis que enfrentó el país que llevaron a la caída del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. El 17 de noviembre de 2004, se constituye la Comisión Nacional de Reforma de la Policía Nacional, la cual era responsable de la elaboración de un documento base para la reforma estructural de la Policía y, además, se crea el Consejo Consultivo Institucional Ad Honorem responsable del apoyo y seguimiento de la referida Comisión. La última acción llevada a cabo por esta Comisión fue la presentación de un estudio de la situación interna y externa de la Policía Nacional, el cual fue remitido al presidente Evo Morales el 2006.

Los resultados del estudio reflejaron a la Policía de manera interna como una institución donde sus miembros,

en su mayoría, se sentían orgullosos de ser policías, a pesar de que algunos veían a su profesión como menos valorada que otras.[2] Asimismo, el estudio evidenció la precariedad con la que el policía realizaba su labor detectando, por ejemplo, un malestar interno por la falta de infraestructura y equipamiento policial, los bajos niveles de remuneración, la carencia en las prestaciones sociales, la sobrecarga laboral, entre otros. Del mismo modo, el estudio mostró elevados niveles de maltrato y discriminación tanto interna como externa. En el ámbito laboral, la sobrecarga de trabajo injustificado, el maltrato físico, arrestos infundados y otras sanciones, parecían ser prácticas relativamente normales. En su relación con la ciudadanía, los policías percibían un distanciamiento con la sociedad que desconfiaba de su trabajo, no los colaboraba en su misión y, en algunas ocasiones, hasta ejercía maltrato físico hacia ellos.

Resultados adicionales del estudio mostraron, por ejemplo, una prominente brecha educativa entre oficiales y suboficiales, existiendo dos niveles diferentes de formación y, por lo tanto, también de formación especializada, siendo ésta limitada y diferenciada para el caso de los suboficiales. El liderazgo policial y la legitimidad de los altos mandos eran cuestionados debido a la percepción de que uno no lograba llegar a esos cargos de manera meritocrática. La mayoría de los policías también desconocía el modo en que se administraban los recursos económicos de la institución, dando a entender, además, la existencia de un manejo discrecional que impedía una distribución de acuerdo a las necesidades de las diferentes unidades policiales. Esto, junto a una aplicación de la norma también de modo discrecional por parte de los altos mandos, se constituía en un hecho poco denunciado, pero generalizado para el policía promedio, convirtiéndose en el deseo de acabar con la corrupción dentro de la institución (PNUD, 2006).

2 Se trata de la percepción de oficiales (13%) y suboficiales (20%).

La Policía durante el gobierno del MAS-IPSP

Evo Morales asumió el poder con niveles altos de legitimidad, pero heredó una Policía que no pudo ser reformada del mismo modo que se habían reformado otras instituciones a finales del siglo XX. Con todo lo que esto implicaba, el gobierno de Morales, en los 14 años que estuvo en el poder, no logró concretar una reforma policial de manera integral. Para comprender el rol de la Policía en los hechos de octubre y noviembre 2019, lo descrito a continuación en este acápite es una mirada crítica de la política policial del gobierno del MAS desde una percepción institucional de la Policía.

La institución Verde Olivo, durante el gobierno del MAS, estuvo marcada por dos facetas. La primera se relaciona con todos los avances que se han hecho dentro de la institución no solo en términos de fortalecimiento y modernización, sino también de reconocimiento de la labor policial por parte de las máximas autoridades. La segunda se refiere a los cambios institucionales que han despertado prejuicios arraigados en la cúpula policial, que han generado malestar interno a todo nivel y en el que se deben incluir los intentos escasos pero evidentes de politizar/ideologizar esta institución, así como el deterioro de la relación entre la misma y el presidente Morales.

Fortalecimiento institucional y reconocimiento de la labor policial

La gestión policial por parte del Estado se inicia con una suerte de recuperación de la soberanía policial, la cual se vio reflejada en el alejamiento de la Embajada de Estados Unidos en decisiones gerenciales, como el nombramiento del comandante general, la desarticulación de la Organización de Desarrollo para Estudios Policiales –que era financiada por el gobierno de EE.UU.–, la remoción de policías de la Embajada Americana –que tenían más de diez años de servicio–, la expulsión de la DEA de las tareas de lucha contra el narcotráfico y la sustitución de los bonos otorgados por

la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NAS) a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) por bonos otorgados directamente por el Tesoro General de la Nación, a través de la Unidad Ejecutora de la Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) (Tellería, 2015). Asimismo, se revalorizó la formación policial, logrando la titulación con el grado de licenciatura de los oficiales que se gradúan de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y la incorporación de la Unipol en la Ley 070 de la Educación "Avelino Siñani", como una Universidad Pública de carácter especial, administrada y financiada por el Estado.

Con la aprobación de la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana el 2012, la Policía logró obtener un financiamiento adicional a través de la asignación del 10% del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) para la modernización y mejora de condiciones laborales para los efectivos. Esta medida permitió la desconcentración de los servicios policiales mediante las Estaciones Policiales Integrales (EPI) y la articulación del proyecto más ambicioso de modernización de la Policía con los gobiernos municipales, el Sistema de Seguridad Integrado - BOL 110. El BOL 110 es un servicio de respuesta operativa para la prevención y atención de urgencias, incidentes, delitos, emergencias, que contó con la inversión de 105 millones de dólares por parte del gobierno de Bolivia.[3] Este proyecto incluye la construcción de centros de monitoreo y vigilancia, otorgación de cámaras de seguridad, motocicletas, vehículos y helicópteros que forman parte de la nueva Dirección del Servicio Policial Aéreo, en el marco de la Ley 264.

En términos salariales, la Policía logró un incremento de Bs 100 como resultado del motín policial del 2012,[4] y se

3 https://urgente.bo/noticia/evo-pone-en-marcha-el-sistema-integrado-de-seguridad-ciudadana-bol-110

4 Tema que será abordado más adelante.

incrementó el bono de seguridad ciudadana, que para los suboficiales fue de un 90% adicional. El gobierno aumentó el salario de cada policía en un 150% entre 2005 y 2019, construyó viviendas policiales en diferentes departamentos del país y dejó en plena ejecución proyectos de desarrollo social para la familia policial en el marco del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple". Asimismo, se le asignó a cada policía una doble ración de víveres y, en general, se incrementó la asignación alimentaria por cada efectivo.

Asimismo, fue durante el gobierno de Morales cuando más generales, sobre todo comandantes generales de la Policía, han sido llevados ante la justicia principalmente por hechos de corrupción y mediante denuncias hechas por el mismo Ministerio de Gobierno o por el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Cuadro 1. Generales denunciados por actos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales

N.º	Año	Autoridad	Denuncia penal
1	2006	Gral. Isaac Pimentel	Manejo irregular de fondos del Consejo de Vivienda Policial (Covipol) con un daño económico aproximado de 3,2 millones de dólares.
2	2008 - 2009	Gral. Miguel Gemio	Imputado por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo porque se habría adjudicado irregularmente un departamento (Edificio Los Reyes).
3	2009 - 2010	Gral. Victor Hugo Escobar	Procesado por la adquisición ilícita de un departamento en el edificio Los Reyes.
4	2011	Gral. Oscar Farfán	Imputado por caso de placas clonadas de vehículos decomisados por Diprove.
5	2011 - 2012	Gral. Jorge Santisteban	Procesado por permitir el ingreso de cadetes a cambio de dinero.
6	2012 - 2013	Gral. Alberto Aracena	Denunciado por compra irregular con sobreprecio de uniformes (blusas) para efectivos policiales.
7	2015	Gral. Oscar Nina	Detenido en Palmasola por vínculos con el narcotráfico.

Continúa en la siguiente página

N.º	Año	Autoridad	Denuncia penal
8	2015	Gral. Luis Enrique Cerruto	Detenido en Palmasola por la firma del contrato para la compra de 83.000 quintales de azúcar y arroz para la Policía con una enmienda que estipula que se debía pagar el 30% de adelanto.
9	2016	Gral. Rino Salazar	Procesado por designación irregular de destinos.
10	2016 - 2017	Gral. Abel de la Barra	Procesado por designación irregular de destinos.
11 12 13	2018	Gral. Faustino Mendoza Gral. Walter Lizeca Gral. Iván Quiroz	Procesados por ingreso irregular de postulantes a la Unipol.

Fuente: Elaboración propia, con base en información periodística.

Aunque, por una parte, esto fue bien visto por la mayoría de los policías, fue también un mensaje a los altos mandos de que el gobierno no iba a convivir con aquellos involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. Estos casos hicieron que se mantengan las dinámicas de los gobiernos anteriores de tener un comandante general por año registrándose, por otra parte, varios cambios de ministro de Gobierno (Carlos Romero Bonifaz fue el último ministro a cargo).

El rol del ministro Romero se ha destacado con la Policía por adoptar, en general, una posición de protección y reconocimiento de la labor de los efectivos. Muchos policías coinciden en que Romero "se la jugaba" por ellos e interpretaban esto como una manera de reconocer la ardua labor que realizaban en la lucha contra el delito. Un ejemplo de esto es el caso del atraco a la relojería Eurochronos en Santa Cruz, el 2017, donde murieron cinco personas en medio de un enfrentamiento entre policías y delincuentes. A pesar de las críticas, Romero calificó el operativo como un "éxito" y la respuesta de la Policía como "un contundente mensaje a la criminalidad".[5]

5 https://correodelsur.com/seguridad/20170916_romero-defiende-a-policia-en-interpelacion-legislativa.html

Reivindicación indígena, reducción de prerrogativas, politización y deterioro de la relación Policía - Presidente

La segunda faceta está compuesta por cuatro componentes que, además, ayudarán a explicar mucho los sucesos de noviembre 2019 hacia adelante. Si bien el 2009 Bolivia aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE), el mandato de la Policía, establecido en el artículo 251, no sufrió cambio alguno con respecto al de la anterior Constitución. Sin embargo, al reconocer la diversidad étnica del país, junto con el liderazgo de Morales –el primer presidente indígena de Bolivia–, se consigna la reivindicación de la indianidad en el poder político,[6] ocasionando esto también un impacto dentro de la institución Verde Olivo. Esto implicó, por ejemplo, la apertura de la Anapol a postulantes de origen indígena campesino y el uso de la wiphala, reconocida en la nueva CPE como símbolo patrio, en los uniformes de la Policía junto con la bandera de Bolivia. Asimismo, era probablemente la primera vez en la historia de la Policía que jefes y mandos medios y superiores tenían por encima de ellos a autoridades indígenas-campesinas, teniendo que dar parte a estas, como un signo de saludo, subordinación y reconocimiento de autoridad. Todo esto se da en un contexto en el que la oficialidad policial arrastra consigo elementos de racismo muy arraigados que hasta el 2009 hicieron que sea muy raro que personas con apellidos indígenas, como Quispe o Mamani, ingresen a la Anapol. Esta apertura de la oficialidad policial hacia lo indígena no cayó bien internamente, pues la concepción que prevalece es que el mando policial y la autoridad electa o nombrada deben ser, como ellos dicen, "gente bien". Esto hasta el día de hoy continúa siendo un prejuicio en estas esferas policiales.

En el ámbito normativo-institucional, el año 2010, bajo la administración del entonces ministro de Gobierno, Sacha

6 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01880735/document

Llorenti, se aprobó la Ley 101 de Régimen Disciplinario, la cual ha generado molestia interna ya que presume la culpabilidad del acusado al sancionarlo con la suspensión de sus haberes a sola acusación. Si bien el anterior reglamento era burocrático, lento y muy judicializado, en el actual se observa una fuerte presencia del ministerio de Gobierno en el proceso disciplinario, principalmente mediante la creación de la Oficina de Control Interno, dependiente del ministerio y la intervención de agentes encubiertos civiles. En la actualidad, los artículos considerados inconstitucionales han sido congelados como resultado del motín policial de 2012, pero la abrogación de la Ley 101 sigue siendo una demanda latente por parte de la Policía.

Adicionalmente, el gobierno del MAS tomó otras decisiones en temas operativos como consecuencia de graves hechos de corrupción y muestras de ineficiencia, especialmente en la otorgación de carnets de identidad y licencias de conducir, mediante la creación, el año 2010, del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), una nueva entidad a cargo de civiles para proveer este servicio ciudadano. Esto generó molestias dentro de la institución, manifestándose los policías en servicio pasivo en contra de la norma y evidenciándose un boicot por parte de éstos con la adulteración de las bases de datos de Identificaciones donde se encontraron al menos 400 mil cédulas de identidad duplicadas, adulteradas o clonadas.[7] Otra medida fue el nuevo reglamento de admisión a la Anapol y a la Escuela Básica Policial (Esbapol), el cual, por primera vez, le quitaba el monopolio de las decisiones a la Policía llevándolas a una Comisión de Máxima Instancia e incluyendo diferentes Ministerios y a la Defensoría del Pueblo al proceso de selección para reducir así los niveles de corrupción.[8]

---

7 https://www.opinion.com.bo/content/print/segip-halla-mas-irregularidades-policia-tramite-cedulas/20110801192000371932

8 https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20101109/ano-reabren-academia-policias

El 2016, el entonces presidente Morales tomó la decisión de transferir los servicios de seguridad presidencial de la Policía a las Fuerzas Armadas y se eliminó la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI), transfiriendo también esa responsabilidad a los efectivos militares. Esta medida causó mucho malestar interno en la Policía, pero además se lo interpretó como un signo de desconfianza de la máxima autoridad del país hacia la institución Verde Olivo y de preferencia de éste por las Fuerzas Armadas. Algo similar ocurre en abril de 2018, cuando se crea el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, nombrando como viceministro a un coronel de las Fuerzas Armadas. La creación de este viceministerio dependiente del Ministerio de Defensa determina la inclusión de los militares a la lucha contra el contrabando mediante la creación de un Comando Estratégico Operativo (CEO) y la activación de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), ambas con presupuesto adicional y bajo dependencia de las FFAA: otra tarea exclusivamente policial que se vio parcialmente transferida a esa institución.

En el ámbito político/ideológico, la Policía adoptó el 2010 el lema "patria o muerte, venceremos", el cual surgió a sugerencia de Morales y fue primeramente adoptado por las Fuerzas Armadas. A esto se suma la serie de discursos que vertían los comandantes generales al referirse a los cambios necesarios de la institución para lograr consolidar una Policía con una nueva doctrina "antimperialista, anticolonialista y antineoliberal".[9] Esto equiparaba a los discursos de carácter predominantemente político de las máximas autoridades, ante la tropa policial. Posiblemente, el discurso más representativo de esto fue el vertido por el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, el año 2015, quien a días de asumir el cargo pidió a la Policía "subordinación al mando político" en un saludo a

9 http://eju.tv/2012/05/comandante-interino-habla-de-una-policia-anticolonial-antiimperialista-y-antineoliberal/

la tropa policial.[10] Esto fue tomado internamente como una instrucción verbal de llevar a cabo una gestión política de la seguridad y, por supuesto, no cayó bien.

La herencia de la relación informal entre el poder político y el poder policial se ha visto mediada por el clientelismo y la politización de las élites policiales (Quintana, 2005: 78) y plasmada en acciones concretas como la intervención policial –muchas veces considerada como selectiva– a favor de organizaciones sociales afines al gobierno del MAS, los servicios extraordinarios fuera de lo establecido en la norma[11] o cambios de destino de manera discrecional por "padrinazgos" de autoridades políticas. Ejemplos de esto fueron la represión a la marcha indígena en contra de la construcción de la carretera por el TIPNIS el 2011, donde se evidenciaron violaciones de derechos humanos que culminaron con la renuncia del ministro Llorenti, y las intervenciones policiales en contra de protestas ciudadanas cuando estas interpelaban a autoridades del partido de gobierno por hechos de corrupción, como sucedió en Yapacaní, en enero de 2012, y en Achacachi,[12] en septiembre de 2017.

Finalmente, se debe destacar la relación de la Policía con el expresidente Morales, y cómo ésta se fue desgastando en el transcurso de los años. Es importante, sin embargo, contextualizar la árida relación de Morales con la Policía en la época del neoliberalismo, caracterizada principalmente por la represión y abusos que sufrió en el marco de la implementación de las políticas de erradicación forzada de

---

10 https://eldeber.com.bo/118821_moldiz-pide-subordinacion-al-mando-politico

11 http://eju.tv/2019/10/policias-denuncian-que-fueron-obligados-a-ir-al-acto-del-mas-en-el-cambodromo-de-santa-cruz/, https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/de-la-barra-asegura-fue-a-concentracion-del-mas-por-34celo-profesional-34-384376

12 El alcalde de Achacachi en ese momento era el exsuboficial Edgar Ramos, quién estaba como presidente de ANSSCLAPOL en el motín policial de 2012.

la hoja de coca como dirigente máximo de las federaciones cocaleras del Trópico y como diputado nacional. Esto si bien ha sentado un precedente, a lo largo de su presidencia, la desgastante relación avanzó hasta ser reconocida como algo recurrente inclusive por los mismos policías que se identifican como admiradores de esta autoridad.

Posiblemente, los primeros signos de quiebre entre el presidente Morales y la Policía se hacen evidentes en 2011, luego del cambio de comandante general de manera anticipada debido a un posible hecho de corrupción. En su discurso, Morales habló sobre la corrupción dentro de la institución y reveló "códigos que se manejan por la irresponsabilidad de algunos miembros de la Policía", dando al nuevo comandante general 90 días para "erradicar el cáncer de la Policía".[13] No solo los altos mandos pero también la tropa policial tomaron estas palabras como una generalización y hasta estigmatización del policía como corrupto por parte del presidente. Este discurso, además, precede a la aprobación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario y la Ley 145 del SEGIP, ambas destinadas a combatir la corrupción interna en la Policía.

El segundo quiebre de la Policía con el presidente Morales ocurrió también en 2011, luego de la intervención a la marcha del TIPNIS, en septiembre, cuando se afirmó que hubo un rompimiento de la cadena de mando. Morales, sin que se dispusiera todavía de investigaciones conclusivas sobre la polémica intervención a la marcha, descargó toda la responsabilidad en la Policía: "Lamento decirlo, pero algunas decisiones tomó unilateralmente la Policía Nacional [*sic*], sin una instrucción", afirmó en una entrevista en CNN. Esto causó molestia al interior de la Policía a tal punto que se habló de un posible motín policial. Guadalupe Cárdenas,

13 http://eju.tv/2011/05/corrupcin-polica-boliviana-en-crisis-cae-farfn-civiles-administrarn-las-recaudaciones-de-carnets-y-brevets/

representante de las esposas de policías, en una protesta al respecto indicó: "El señor Presidente Evo Morales acusa a la policía de todo lo que está sucediendo, de la intervención que ha habido. Tiene que mirarse al espejo y decir la verdad porque él ha ordenado al Comando General de la fuerza que intervenga en una marcha pacífica. Si este gobierno permite hablar a los policías van a decir toda la verdad de lo que ha sucedido realmente".

Motín policial del 2012. Sin embargo, el no atender este reclamo a tiempo tuvo sus consecuencias. La molestia capitalizó otras demandas policiales, y en junio de 2012 el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL), Edgar Ramos, anunció que el sector de los suboficiales entraba en emergencia ante la falta de respuesta de las demandas presentadas la gestión anterior (2011). Estas demandas eran: nivelación salarial, jubilación de un 100% del salario percibido, y abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía. Esto desencadenó un motín policial de varios días donde, al finalizar el diálogo con el gobierno, la Policía logró, entre sus principales acuerdos, un incremento salarial a todos los efectivos de Bs 100, dotación de un cupo adicional de víveres y alimentos, paralización de los artículos observados de la Ley 101, creación del Defensor del Policía, y creación de una comisión para analizar la demanda sobre la jubilación. Evidentemente, los suboficiales no lograron que se cumplan sus principales demandas, lo que puede entenderse también como una subordinación al poder político y a los intereses corporativos jerárquicos,[14] pero por otro lado, se debe entender lo complejo de atender pedidos que representan importantes cargas al Tesoro General de la Nación y de temas de mucha sensibilidad en la Policía,

14 Edgar Ramos, presidente de ANSSCLAPOL, luego se postularía como candidato a alcalde de Achacachi por el MAS obteniendo el triunfo. Sin embargo, en 2019, Ramos termina detenido por la presión social de los ciudadanos originada en denuncias de corrupción en su gestión.

como es la elaboración de un nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario en esa coyuntura.

El trato diferenciado del presidente Morales con la Policía era notado internamente. Morales, muchas veces, no se quedaba hasta el final de los actos principales de la institución, no compartía demasiado tiempo con los familiares que asistían a los actos de graduación, de ascenso, de reconocimiento. En las reuniones de Estado Mayor, Morales se dirigía como una persona ajena o lejana a los problemas concernientes al ámbito policial.

Pero la característica más significativa en este relacionamiento con Morales fue la diferencia que hacía entre la Policía y las Fuerzas Armadas, en trato, en la dotación de equipamiento, infraestructura, tecnología, cargos jerárquicos al interior del gobierno, hasta las pendientes demandas históricas de la equiparación del sueldo entre ambas instituciones y la jubilación al 100%, privilegio del que goza la institución militar. Probablemente, el último evento en el cual la Policía percibió ese trato diferenciado con respecto a las Fuerzas Armadas fue durante los 21 días de paro, luego de las elecciones generales de 2019, a raíz de la labor de contención realizada, jornada tras jornada, por los efectivos policiales evitando violencia y enfrentamientos.

Es ahí donde Morales no solo tardó en demostrar un signo de agradecimiento al esfuerzo de la Policía, sino que, además, en medio esta coyuntura, el 6 de noviembre, a propósito de la conmemoración del 193 aniversario de la creación de las Armada Boliviana, el presidente Morales reconoció el trabajo y esfuerzo de las Fuerzas Armadas, como "un símbolo de soberanía e independencia con dignidad, identidad y unidad" y sin realizar mención alguna de la labor policial.[15]

15 https://twitter.com/evoespueblo/status/1192245249910943744

La Policía durante la crisis electoral de 2019

En octubre de 2019, luego de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, Bolivia entró en una crisis que llevó a la movilización de sectores urbanos mediante una protesta generalizada que paralizó varias ciudades. Esto, sumado a una acción cívico-opositora coordinada contra el partido de gobierno, al motín policial y a la sugerencia de las Fuerzas Armadas de la renuncia presidencial, derivaron en la salida anticipada de Evo Morales del poder.

El motín policial marcó un antes y un después en la crisis de octubre-noviembre de 2019, ya que, con esto, el partido de gobierno dejó de tener control en las calles, sabiendo que no iba a cometer el error de sacar a las Fuerzas Armadas para enfrentar la movilización social. Éste fue el principal hecho que estableció el inicio de la caída de Evo Morales.

El día mismo de las elecciones, mientras se esperaba el conteo de la votación y se discutía sobre la diferencia de diez puntos de la primera fuerza política sobre la segunda, el candidato por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llama a la movilización de la ciudadanía ante los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para velar por el voto.[16] Es así que las protestas se iniciaron en inmediaciones de los diferentes TED, tornándose luego en actos violentos con incendios y destrozos de estas instalaciones, y causando también daños a policías y a sus herramientas de trabajo. El rol de la Policía boliviana en los sucesos de octubre y noviembre de 2019 se lo puede reflejar mediante un repaso cronológico de los hechos:

El *21 de octubre* sale a declarar en Chuquisaca una dirigente de ANSSCLAPOL diciendo que habría ocurrido un motín policial entre sus filas. Dos días después, el comandante departamental de Chuquisaca aclara, en conferencia de

16 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191021/mesa-llama-movilizacion-defender-voto-popular-que-lleva-segunda-vuelta

prensa, que no hubo tal motín y que las declaraciones de la dirigente habían sido realizadas de manera personal.[17]

El *22 de octubre*, el comandante departamental de Potosí, Cnel. Williams Villa, decide replegar a los efectivos que se encontraban resguardando el TED, esto luego de un acuerdo con el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, que dio lugar a su repliegue y reemplazo por otro comandante. En ese momento, las esposas de los policías en Potosí se declaran en emergencia rechazando dicho cambio y solicitando a los efectivos que se replieguen para evitar enfrentamientos.[18] Horas después, se restituye al Cnel. Villa, mediante un anuncio leído a los medios de comunicación por él mismo, arguyendo que su cambio había sido un error.[19]

El *23 de octubre*, el Ministerio Público de Santa Cruz imputa a 31 personas por la quema del TED y por los destrozos y lesiones contra policías que se encontraban custodiando el lugar. Seguidamente, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestiona la decisión del comandante departamental de Santa Cruz, Cnel. Igor Echegaray, de retirarse del lugar, argumentando que esto fue lo que ocasionó que los daños continúen. Ese mismo día en las redes sociales circulan fotos de policías durmiendo en el piso del Comando Departamental de Santa Cruz. Como consecuencia, el Comité Cívico de Santa Cruz organiza un envío de alimentos a los efectivos policiales al comando.

El *24 de octubre*, el Cnel. Echegaray sale a explicar que replegó a la policía del TED para evitar "consecuencias y efectos colaterales"; asimismo, le manda un mensaje a Camacho, diciéndole que hará cumplir la Constitución y

---

17 https://www.redunosur.com niegan-motin-policial-en-chuquisaca/

18 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/22/relevan-al-comandante-de-policia-de-potosi-235173.html

19 https://eju.tv/2019/10/por-presion-social-restituyen-en-el-cargo-al-comandante-de-la-policia-en-potosi/

manifestando que las fotos de policías durmiendo en el suelo fueron un montaje. Echegaray expresó su molestia y criticó que los traten como mendigos al llevarles alimento.[20]

El *25 de octubre*, Camacho se reúne con el Cnel. Echegaray para solicitarle que no reprima al pueblo, esto de acuerdo a las versiones vertidas por el líder cívico.[21] Lamentablemente, no se conocen versiones de dicha reunión por parte del excomandante departamental de Santa Cruz.

El *27 de octubre*, en medio de la convulsión social, se publica un audio en el que se escucha al comandante departamental de Cochabamba, Cnel. Raúl Grandy, solicitando a policías de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) entregar todo el equipo antidisturbios para su mantenimiento. El comandante departamental alegó la manipulación del audio atribuyéndoselo a la exdirigente de la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (ANESSCLAPOL), Guadalupe Cárdenas.[22] Asimismo, se filtra un video del Cnel. Grandy en reunión con cocaleros del Chapare, en Cochabamba. En el video se ve a Grandy intentando tranquilizar a las bases cocaleras que estaban movilizadas, con el fin de equilibrar las manifestaciones de los grupos sociales en contra de la denuncia de un posible fraude electoral. Esto causó molestia tanto en la Policía como en la ciudadanía, ya que consideraban que, con esta acción, el comandante de Cochabamba no se mantuvo neutral ante los hechos.

El caso de Cochabamba es especial debido a que en ese departamento se encuentra el núcleo más duro de apoyo a Morales, las federaciones cocaleras del Trópico cochabambino;

---

20 https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/santa-cruz-suman-39-detenidos-por-quema-del-ted-la-policia-los-tilda-de-drogados-y-alcoholicos-401861

21 https://www.comiteprosantacruz.org.bo/hitos-historicos-de-la-recuperacion-de-la-democracia/

22 El 2014, Cárdenas también fue candidata a diputada por el partido PDC y estuvo en la cárcel por difundir videos en contra del gobierno del MAS y amenazar al presidente Morales.

pero también, debido a la conformación del grupo civil armado denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC).[23] Este grupo se caracteriza por movilizarse en motocicletas y por estar dotado de diferentes tipos de armas, equipamiento y protección. La primera acción notoria de este grupo, en el marco de las protestas y enfrentamientos en Cochabamba, fue un ataque a tres mujeres y a un joven, quien tuvo severas fracturas y un traumatismo encefalocraneano (esto sucedió, sin embargo, sin que se identifique a este grupo irregular por su nombre). En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, describió a los miembros de este grupo como "pandilleros montados en motocicletas, con bazucas prefabricadas, disparando contra gente de color de piel".[24]

Días después, el *31 de octubre*, la RJC aparece de manera más organizada y equipada y con un notorio incremento en el número de integrantes. Ese día, el ministro Romero, en conferencia de prensa, denuncia que la RJC estaba usando "bazucas, lanzacohetes, y que además tenían un notorio entrenamiento en actividades".[25] Llamó la atención no solo que tuvieran chalecos tácticos, sino también, por ejemplo, la familiaridad del uso de las bazucas en motocicletas en movimiento.

El *1 de noviembre*, la Policía reporta 191 detenidos y 60 policías heridos –uno de ellos en estado de coma–, como resultado de los enfrentamientos a nivel nacional. El cansancio y malestar se notaba ya entre las filas policiales no solo por la intensidad del conflicto, sino también por el tiempo de acuartelamiento, el manejo de los turnos, los traslados a otros

23 En su informe del 11 de diciembre, la CIDH describió a la RJC como un grupo parte de la Masacre de Sacaba de noviembre de 2019.

24 http://www.laprensa.com.bo/nacional/20191030/romero-acusa-ciudadanos-de-estar-armados-y-pide-afines-al-mas-no-caer-en

25 https://erbol.com.bo/seguridad/romero-culpa-de-la-violencia-de-lincuentes-"pandilleros"-y-"caracortadas"

departamentos, y las agresiones que estaban recibiendo por parte de la población.[26]

El *5 de noviembre*, el gobierno otorga un bono a la Policía boliviana. Se decide pagar este complemento debido a que los miembros de la institución habían estado ya muchos días acuartelados, y también como compensación de los turnos que estaban siendo planificados por el Comando General.[27, 28] Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, en las redes sociales lo denominaron "bono de lealtad", y se corrió la falsa información entre los policías de que la plata utilizada para este bono provenía de sus propios aportes. Por su parte, algunos policías lo tomaron así, ya que no se dio ninguna explicación inicial de las razones del pago extra. Esto causó molestia interna en los policías: "El día del cabildo aquí en La Paz me han golpeado y empujado, ese día he sufrido, pero los jefes, ¿acaso te preguntan si están bien? A ellos les vale. Muchos nos hemos querido amotinar, seguro por eso nos han depositado esa plata, es un bono a la lealtad", contó una suboficial.[29] El Ministerio de Gobierno tuvo que aclarar mediante un comunicado y reunirse con algunos grupos de la Policía para explicar la procedencia del dinero del bono.[30] Pero no fue suficiente.

---

26 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/5/gobierno-da-bono-lealtad-de-bs-3000-policias-algunos-repudian-el-deposito-236395.html

27 https://eldeber.com.bo/155656_el-gobierno-confirma-pago-a-la-policia-y-lo-denomina-estipendio

28 De acuerdo a un estudio interno de la Policía de 2015, el 60% de los suboficiales tiene un trabajo adicional al de su labor policial.

29 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/5/gobierno-da-bono-lealtad-de-bs-3000-policias-algunos-repudian-el-deposito-236395.html

30 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/5/gobierno-da-bono-lealtad-de-bs-3000-policias-algunos-repudian-el-deposito-236395.html

Ese mismo día, en *Jaque Mate*, programa televisivo del canal universitario de La Paz, Ruth Nina, miembro de ANESSCLAPOL y candidata presidencial en las elecciones de octubre de 2019 por PAN-BOL, convoca de emergencia a un congreso nacional en rechazo al enfrentamiento entre policías y ciudadanos, y se refiere a la omisión de algunos jefes del alto mando policial.[31] Asimismo, en la misma entrevista otros miembros de ANESSCLAPOL indican que el bono recibido por los policías era menor que el que iban a darle a las FFAA,[32] que no entendían cuál era el fin del bono y que "no se iban a vender fácilmente a los Bs 3.000". Finalmente, pidieron que cumplan con los acuerdos de 2012.[33]

Desde el *6 de noviembre* empezaron a circular entre los policías diferentes imágenes, no solo de lo que el gobierno había sido "quitado" a la institución (SEGIP, Control Aduanero, Seguridad de Dignatarios), sino que además eran imágenes que contenían falsa información sobre unidades que supuestamente pasarían a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público si Morales continuaba en el poder. Estas imágenes tenían el logo de la Policía boliviana. El rumor de motín policial estaba instaurado ya en diferentes grados policiales. Ya se habían pronunciado públicamente distintos grupos de la Policía, como el Consejo Departamental del Servicio Pasivo Policial –conformado por la Asociación Departamental de Generales, Jefes, Oficiales y Viudas del Servicio Pasivo Policial– y la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías, Administrativos, Reserva Activa, Jubilados y Viudas de la Policía Boliviana (ASCLASJUPOL), filial Cochabamba, en defensa del respeto al voto del 20 de octubre, así como la Asociación de Generales, Jefes, Oficiales y Viudas del Servicio Pasivo de la Policía boliviana, filial Santa Cruz, expresando

31 https://www.youtube.com/watch?v=0ZFf7XKEDkM

32 Las FFAA emitieron un comunicado aclarando que no se les había otorgado ningún bono a los militares.

33 https://www.youtube.com/watch?v=0ZFf7XKEDkM

que la Policía no debe subordinarse a las aspiraciones de quienes transgreden la CPE.

El 7 *de noviembre*, Patricia Arce, alcaldesa de Vinto (Cochabamba), es agredida por una turba de manifestantes contrarios al partido de gobierno, entre los que se encontraban varios miembros de la RJC. A la alcaldesa le cortaron el pelo, le quitaron los zapatos, le echaron pintura roja, entre otras vejaciones. Fue un acto de violencia, del cual la autoridad pudo salir gracias a la acción de un contingente policial[34] que actuó de manera encubierta, aunque ante una evidente inacción de la Policía que estaba a cargo en esa jurisdicción.

El *8 de noviembre* empieza a circular un audio de Ruth Nina, dirigido a los policías, indicando que el plan de Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz era "hacer desaparecer a la Policía boliviana". Nina pide que tomen especial atención en Cochabamba, criticando al comandante departamental, Cnel. Grandy, por sus acciones y llamándole "masista". Ese mismo día, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se presenta en el Comando General en La Paz para entregar "la investigación técnica que demuestra la delincuencial manipulación del recuento de votos".[35] Asimismo, en Cochabamba, entre algunos policías empiezan a informar que gente del Chapare estaba planeando intervenir el Comando Departamental. Entretanto, empezaron a circular audios entre los policías que alertaban que a las 16 h cerrarían la UTOP-Cochabamba, por lo que era necesario que todos estén atentos. Es así que tiene lugar el motín policial en oficinas de la UTOP en Cochabamba.

El mismo *8 de noviembre*, a las 17 h, los policías de la UTOP-Cochabamba se amotinan. Entre los efectivos amotinados se encontraba el líder de la RJC. La noche de ese mismo día, en el cabildo convocado por el Comité Cívico

---

34 https://urgente.bo/noticia/polic%C3%ADa-logra-rescatar-la-alcaldesa-de-vinto-que-estaba-como-reh%C3%A9n

35 Comunicado Oficial del Conade.

Santa Cruz, Camacho hace aprobar las demandas de la Policía: igualación de condiciones salariales, sociales y de vivienda a la par de las Fuerzas Armadas, jubilación al 100%, restitución de las unidades tradicionales, puesta en vigencia del plan de carrera de generales de la Policía desde enero de 2020. En sus redes sociales, Camacho *postea* el documento que leyó con estas demandas, el cual titula "Petición de la Policía para amotinarse". Simultáneamente, a nivel nacional varias unidades policiales son rodeadas por la gente a modo de presionar a los policías para que se sumen al pedido de renuncia de Morales.

El 9 *de noviembre* por la madrugada, ya había varias unidades de la Policía en diferentes lugares del país que se encontraban amotinadas, por lo que el Ministerio de Gobierno convoca al diálogo a la Policía con el objeto de viabilizar tres demandas: abrogación de la Ley 101, nivelación salarial y jubilación al 100%. Seguidamente, por la mañana, al mando del Cnel. José Antonio Barrenechea, se amotina la UTOP en La Paz, que es la unidad encargada de brindar seguridad en Plaza Murillo, sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y del Palacio de Gobierno (o Casa Grande del Pueblo).

El *10 de noviembre* en horas de la madrugada, la OEA emite un comunicado adelantado los resultados preliminares de la auditoría sobre las elecciones y estableciendo que estas debían anularse y realizarse de nuevo.[36] Horas después, el presidente de ANSSCLAPOL en Santa Cruz, rodeado por la dirigencia del Comité Cívico Santa Cruz, anuncia oficialmente el motín policial.[37] Ese mismo día, en conferencia de prensa, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, sugiere a Evo Morales renunciar a la presidencia; solicitud que replica después el comandante

36 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-100/19

37 https://eldeber.com.bo/156001_presidente-de-ansclapol-quiero-declarar-publicamente-motin-policial

general de la Policía boliviana,[38] Yuri Calderón, en un acto de insubordinación al mando constitucional. Paralelamente, varios asambleístas y autoridades de gobierno y regionales fueron víctimas de la quema de sus casas, y hasta del secuestro de sus familiares, hechos que tampoco contaron con la intervención policial, pero que forzaron a estas autoridades a renunciar a sus cargos.[39]

El *10 de noviembre*, Morales renuncia a la presidencia y al día siguiente se va del país.

De acuerdo a esta cronología, se puede apreciar a una Policía que actúa de manera corporativa. El peso de las demandas irresueltas y los factores que generaron rechazo al poder político durante el gobierno de Morales fue tal que se sumaron a los actos que marcaron las decisiones de la institución en los últimos días previos a la salida de Morales. El motín policial –que, según la narración del líder cívico, Luis Fernando Camacho, estuvo precedido por el "cierre" (acuerdo) por parte de su padre con la Policía[40]– pone en evidencia una autonomía corporativa de la institución policial mediada por el clientelismo político y la negativa a la pérdida de prerrogativas, lo cual da lugar a la "abdicación de la autoridad estatal sobre el monopolio legítimo de la fuerza pública"[41]

---

38 https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/las-fuerzas-armadas-y-la-policia-piden-la-renuncia-del-presidente-morales-402317

39 https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/victor-borda-suplica-que-liberen-a-su-hermano-tomado-como-rehen-y-renuncia-a-su-curul-402315

40 https://erbol.com.bo/nacional/camacho-revela-que-su-padre-cerr%C3%B3-con-militares-y-polic%C3%ADas-para-la-renuncia-de-evo

41 Para Juan Ramón Quintana, la abdicación de la autoridad pública es un reflejo de la crisis de institucionalidad policial marcada por una relación político-policial informal e instrumental, la cual ha contribuido a que exista un aumento en la brecha entre el poder democrático y la autonomía policial, así como una reducción de las garantías constitucionales del ciudadano y del acceso a la seguridad como un bien público (Quintana, 2005: 82).

y a la final insubordinación al mando constitucional. Estos hechos convirtieron a la Policía, al igual que las Fuerzas Armadas, en actor político y nuevo factor de poder.

El motín policial de 2019 marca una diferencia histórica con los anteriores motines policiales, que, si bien también estaban motivados por reclamos a demandas institucionales fueron protagonizados por la tropa policial (suboficiales, clases y policías), habiendo algunos que contaron con participación mínima de oficiales. Sin embargo, esta vez el motín también fue protagonizado por jefes y oficiales. Aunque no se puede atribuir el motín a la totalidad de la institución, lo que se vio fue un mando unificado en el acto de insubordinación y, a diferencia de los anteriores motines, los jefes policiales, en su mayoría, no buscaron el apaciguamiento de la tropa, ni estuvieron abiertos a instalar el diálogo para viabilizar sus demandas.

En este sentido, es evidente que los altos mandos tuvieron un rol importante en el motín policial de 2019, pero esto puede ser leído de dos modos: el primero, es que dichos mandos mantuvieron, hasta el final, un pacto de reciprocidad con el nivel político que estaba en el poder (algo que luego se quebró por la participación del Comité Cívico de Santa Cruz en el motín policial –clientelismo que, por otra parte, se pone en evidencia por los dichos de Camacho en relación a "cerrar" con la Policía). La otra lectura posible es que las presiones para favorecer al partido de gobierno o a los manifestantes (en vistas de una segunda vuelta electoral y, luego, de la renuncia de Morales), se dieron de ambos lados: tanto por parte del gobierno como de los comités cívicos y de la ciudadanía en general. No obstante, basándose en las actuaciones de los comandantes departamentales, se puede apreciar que no existió una articulación entre ellos sobre cómo actuar, existiendo una pérdida de legitimidad de la autoridad pública a medida que las protestas se hacían más violentas, independiente del posicionamiento que tomaban. Es así que la presentación del estudio sobre el fraude electoral

por parte del Conade al comandante general de la Policía, como un hecho simbólico, insertó la idea de que el policía, al no amotinarse, podía estar defendiendo a un partido político (MAS) y no así cumpliendo lo que manda la CPE.

Asimismo, es importante anotar que el comandante general de la Policía boliviana, Gral. Vladimir Yuri Calderón, fue el último en expresar su posición con respecto al presidente Morales, a pesar de la enorme presión que tenía de una institución que ya estaba amotinada y que había rechazado instalar una mesa de diálogo con el gobierno. Finalmente, el comandante de la Policía se expresó luego de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya había sugerido a Morales que renuncie.

La ANSSCLAPOL, por su parte, se mantuvo al margen desde el inicio de los conflictos, salvo por algunas manifestaciones de carácter personal, a raíz del bono que otorga el gobierno. En este ámbito, sin embargo, la cara visible es la ANESSCLAPOL, es decir, las esposas de los policías de base (sin dejar de lado que una de las dirigentes era también candidata presidencial) que se articulan para asumir la representación de la tropa sobre su estado de situación. Las esposas de los policías de base juegan así un rol clave en crear tensión y atraer la atención de la tropa hacia los temas concernientes no solo al bono otorgado, sino también a las demandas que no se cumplieron tras el anterior motín.

La acción de la UTOP, por otra parte, marca el inicio de la caída de Evo Morales y es un actor clave en su concreción. La UTOP de Cochabamba al inicio no solo se ve ante la tarea de tener que lidiar con un grupo masivo de motociclistas armados (RJC), sino también con la aparente parcialidad del Cnel. Grandy en favor del partido de gobierno, a partir de sus decisiones operativas, con todo lo que ello implicaba para la institución. Este segundo punto, junto a la amenaza de los cocaleros de entrar a Cochabamba, incrementaron el malestar interno. Sin embargo, a medida que van pasando los días, se va notando un cambio de actitud de la Policía

hacia la RJC, sobre todo con la excusa de que eran muchos y que podían aparecer más y rebasar a la Policía. Lo que hasta el día de hoy queda en duda es si los miembros de la RJC –que muy hábilmente manipularon bazucas desde motos en movimiento y con las caras cubiertas– operaron gracias a un entrenamiento militar minucioso o si fueron miembros de la Policía insertos en el grupo quienes los apoyaron. Sin embargo, las primeras imágenes del motín policial en Cochabamba mostraban tanto a miembros de la RJC como a policías, festejando juntos.[42]

Por su parte, la UTOP en La Paz había estado resistiendo a pesar de la presión. Su amotinamiento marca el triunfo de un predominio civil sobre la Policía y se convierte en un símbolo del debilitamiento de la legitimidad de Morales como autoridad pública (pues ya no tiene control ni de los que le cuidan). Lo que, en conjunto con otros factores, apresuró su salida.

La Policía mantuvo un distanciamiento con las Fuerzas Armadas hasta los últimos días de Morales en el poder.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC) y Comcipo, por su parte, empezaron provocando a la Policía al inmiscuirse en decisiones operativas en torno a la contención de los conflictos y, en el caso del CCPSC, a través del reforzamiento de las noticias falsas sobre las precarias condiciones de la labor policial.[43] Además, el CCPSC tenía claro, desde ese momento, que iba a necesitar de la Policía para lograr que avanzaran sus acciones en contra el gobierno, por su rol fundamental en la contención de los conflictos. Es por eso que, al final, se da, más que una articulación, un pacto entre el CCPSC y la Policía.

---

42 https://www.facebook.com/redgigavision videos/2386495124999958/

43 Hubo una coincidencia entre el tiempo en que se viralizó en las redes sociales una foto falsa de policías durmiendo en el piso y los miembros del Comité asistiendo a la Policía.

Pacto cívico-policial. En el audio revelado por Camacho, se afirma que su padre "cerró" con la Policía el 2 de noviembre y que esto, junto al "cierre" con las FFAA para que no salgan a las calles, le permitió dar 48 horas a Morales para que renuncie. El 4 de noviembre se cumplen las 48 horas que coinciden con el anuncio hecho por Camacho de que mostraría, en cabildo en Santa Cruz, una "gran bomba", para la cual montaron pantallas gigantes en el Cristo Redentor. De acuerdo a información de algunos policías, en el cabildo de ese día se iba a mostrar el amotinamiento de la Policía, pero algo pasó… Camacho decide viajar a La Paz al día siguiente, siendo ese mismo día cuando se otorga el bono a la Policía y que se activa la ANESSCLAPOL en los medios de comunicación, hablando no solo del bono, sino de las demandas incumplidas por parte del gobierno de Morales. Entre el 5 y el 6 de noviembre empiezan los mensajes internos en la Policía (audios, *chats*, memes) con un objetivo claro de propagar el malestar general. El 8 de noviembre se produce el amotinamiento y, al día siguiente, Camacho aprueba, en cabildo, la "petición de la Policía para amotinarse". El 10 de noviembre, ANSSCLAPOL, rodeado de miembros del CCPSC, en puertas del Comando Departamental, confirma el motín general, sellando así el pacto cívico-policial.

Los hechos de octubre y noviembre de 2019 ocurren como resultado de la convergencia de diversos factores. Desde una mirada institucional, no son solo las demandas insatisfechas, sino también la reducción de prerrogativas, el favorecimiento a las Fuerzas Armadas por encima de la Policía, el racismo arraigado en una parte de la oficialidad, el sentido de estigmatización o maltrato institucional –muchas veces generalizado–, los factores que, en medio de la coyuntura y de la crisis electoral, son aprovechados para actuar corporativamente con la ilusión de recuperar lo perdido, de que se cumplan los compromisos pendientes y de obtener un reconocimiento, como héroes, de una parte de la población, principalmente de la clase media y alta. Esto,

junto a una percepción de que pasan de defender a un partido político a defender los preceptos de la Constitución Política del Estado, es lo que explica mayormente la actuación de la institución Verde Olivo durante una coyuntura que definirá el rumbo de la historia nacional.

Gobierno de transición y pandemia del Covid-19

Los primeros días luego de la caída de Morales estuvieron llenos de simbolismos al interior de la Policía, como una prueba de que estaban recuperando lo perdido durante el gobierno de Morales. El mismo día que Evo Morales se fue del país, el comandante general de la Policía fue hasta el SEGIP, haciendo una toma "simbólica y pacífica" de las oficinas.[44] Simultáneamente, ante una evidente ausencia de las fuerzas de seguridad en las calles, la Policía, junto con las FFAA, apoyaron que Luis Fernando Camacho y dos personas más (Marco Antonio Pumari, líder de Comcipo, y Eduardo León, abogado) ingresen a Palacio de Gobierno con la Biblia y la bandera de Bolivia.

Asimismo, luego de que Jeanine Áñez se autoproclamara presidenta, se produjo una disputa entre policías y militares sobre quién debía asumir la seguridad presidencial. Si bien, los primeros momentos fueron los militares quienes se encargaron, se decidió que sea la Policía la que retome sus funciones de resguardar la seguridad de la primera mandataria transitoria.[45] Paralelamente, efectivos de la institución policial empiezan con el retiro de la wiphala de los mástiles de los comandos, la cortan de su uniforme, e inclusive la queman; todo esto porque la consideraban como un símbolo del MAS. La expresión más clara de este rechazo fue cuando el recién

44 http://www.gente.com.bo/actualidad/20191111/policia-toma-el-segip-tras-renuncia-de-evo

45 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/15/los-militares-policias-se-disputaron-la-seguridad-de-anez-el-dia-de-su-asuncion-240466.html

posesionado comandante departamental de Santa Cruz, Cnel. Miguel Mercado, manifestó: "[Sacando de su bolsillo la bandera de Bolivia y la wiphala] …nos han hecho creer que había dos Bolivias y nosotros siempre hemos pensado que Bolivia es una sola, que el rojo, amarillo y verde es el que nos tiene que cobijar a todos… para mí ha sido una reivindicación… todos mis policías se han sacado [la wiphala del uniforme policial]… se lo han cortado y permanecen con el rojo amarillo y verde como es que tiene que ser".[46]

Estos actos, que fueron difundidos a nivel nacional por los medios de comunicación y las redes sociales, causaron una gran molestia entre la población de Occidente, principalmente, ocasionando que varias organizaciones sociales se trasladen a las sedes policiales y las incendien y destrocen. Luego, la Policía tuvo que hacer un acto de desagravio por dichas acciones.[47] Por otro lado, varios policías manifestaron que se sentían conformes con la relación con Áñez en sus actos, al asistir y quedarse hasta el final, pero más que nada, resaltaban el buen trato que les daba, a diferencia de cómo ellos percibían que era en el pasado.

Evidentemente, todos estos hechos han llevado a una recomposición en la relación entre la Policía y el poder político. Los hechos de octubre y noviembre de 2019 resituaron a la Policía como un actor político y como un factor de poder en la esfera pública. Este nuevo posicionamiento de la Policía en el gobierno transitorio de Áñez fue mediado por dos elementos: una nueva relación con una gran parte de la ciudadanía y una reconfiguración de la relación entre la Policía y el gobierno central.

---

46 https://eju.tv/2019/11/policias-de-santa-cruz-quitan-la-whipala-de-sus-uniformes-no-hay-dos-bolivias/

47 https://www.youtube.com/watch?v=XZKtqqbwWGk

Reestructuración de la relación de la ciudadanía con la Policía

Históricamente, la Policía ha gozado de niveles muy bajos de confianza ciudadana.[48] Si bien no hay encuestas actuales al respecto –que no sean en el marco del Covid-19– hoy existe un grupo predominantemente urbano de clase media y media-alta que siente una gratitud con la Policía por su rol en la caída de Morales. Se pudiera decir que empezó una suerte de idilio entre la Policía y esta clase social, junto con la clase política a cargo del gobierno transitorio. Esto también se ha visto reflejado en el aplauso y el no cuestionamiento de la acción policial y militar en las masacres de Senkata y Sacaba, por parte de estos grupos al sentirse protegidos de los "salvajes" que protestaban en las calles.[49] En el marco de la pandemia, la ciudadanía que tiene las condiciones de quedarse en casa cumpliendo la cuarentena agradece a la Policía junto a las FFAA, por el trabajo de protección y de cuidado de la vida de las personas. Al inicio de la cuarentena, la banda de música de la Policía se trasladaba a los barrios de las familias más acomodadas para dar serenatas en la calle, algo que era muy bien visto por este sector de la ciudadanía.

Asimismo, los delitos comunes –y sobre todo los vinculados a violencia intrafamiliar y de género– en los que se ha evidenciado que fueron policías los que cometieron los hechos, no han padecido el rechazo y repudio sistemático que se daba en anteriores gestiones.[50, 51] Para el policía, todos

48 El 2018, de acuerdo a la encuesta del Latinobarómetro, casi 8 de cada 10 personas decía tener poca o ninguna confianza en la Policía.

49 Es importante, sin embargo, destacar que estos dos hechos terminaron con, al menos, 30 muertos y varios heridos, entre ellos mujeres y niños (no hubo ningún policía muerto ni herido).

50 Esto puede estar relacionado a la poca cobertura mediática que ahora se le da estos hechos.

51 Por ejemplo, el 28 de mayo de 2020 fueron detenidos dos policías

estos elementos han significado un reconocimiento a su labor por parte de este sector de la sociedad. Sin embargo, el comportamiento de los grupos disconformes tanto con Áñez en la presidencia, como con las medidas interpuestas por el gobierno transitorio por el Covid-19, han resultado no solo en un reto para ellos al estar en la primera línea de "combate", sino también en un rechazo a lo que, siguiendo el discurso del gobierno transitorio, son grupos organizados por el MAS para no cumplir con la cuarentena. Todo esto también refuerza ese racismo arraigado descrito al inicio de este documento, haciendo que el policía se identifique con un sector de la población rechazando a otro.

Reconfiguración de la relación Policía-gobierno central

La nueva relación entre la Policía y el gobierno central se ha caracterizado por los siguientes rasgos: i) los altos niveles de autonomía que ha logrado la institución, especialmente de la tropa policial; ii) el uso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) como brazo coercitivo del gobierno de Áñez; y, iii) la importancia de la Policía para contener los conflictos sociales en el marco de la pandemia y las decisiones hacia las próximas elecciones presidenciales.

La caída de los exministros Llorenti y Moldiz demostró que la Policía ejercía un relativo poder político mediado por sus intereses corporativos. Estos hechos reflejaron un modo de resistencia de la Policía a aquellos cambios (traspaso de SEGIP a un mando civil, Ley 101, etc.) o posibles cambios (reforma policial) que favorecen a la institucionalidad de

---

en Potosí por violación reiterada y explotación sexual a una adolescente de 14 años, a diferencia del impacto social que tuvo la violación y explotación sexual de una mujer en la cárcel de Rurrenabaque, en 2019, por parte de tres policías, el caso ocurrido este año no mereció atención de los medios de comunicación ni preguntas al ministro de Gobierno.

la Policía, pero que buscan eliminar –o al menos reducir– prerrogativas. Con el motín policial de 2019, que dio como resultado la caída de Evo Morales, este poder emanado en su autonomía deliberativa ha dejado de ser relativo, convirtiendo a la Policía en un actor político con recursos fortalecidos para el ejercicio de poder.

Por su parte, tanto el motín policial de 2012 como el de 2019 fueron el reflejo de una molestia interna con el poder político con el fin de velar por intereses corporativos y demandas institucionales (igualación de salario al de las FFAA, jubilación al 100%, etc.), pero el hecho de que hasta la fecha no hayan conseguido este objetivo, no significa que no se haya fortalecido esta relación prebendal con el poder político. Ejemplo de esto son el incremento de sueldo a los policías[52] en medio de la pandemia, o el Decreto Supremo que reglamenta la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI).[53]

La autonomía deliberativa de la Policía se refleja, por ejemplo, en la respuesta inmediata del ministro de Gobierno convocando a los suboficiales de Estado Mayor y representantes de los diferentes grados de la suboficialidad, luego de que ANSSCLAPOL-Santa Cruz emitiera un comunicado expresando molestia interna por las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la demanda de los policías de dotación de uniformes de bioseguridad para la tropa por el Covid-19. Murillo, en conferencia de prensa, dijo que no necesitaba que los policías se vistan "como marcianos", que era suficiente con mantener la distancia necesaria. En la

52 En el mejor de los casos, a un policía se le incrementó no más de Bs 800 al mes, algo que todavía está muy alejado de la escala salarial de las FFAA.

53 De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía, el Cmdte. Gral. es el único que puede reglamentar unidades, por lo que el referido Decreto Supremo tenía un sentido sobre todo simbólico, como un signo de que se les estaba cumpliendo una de sus demandas.

reunión lograron que se les otorgue un seguro por Bs 100 mil y uniformes de bioseguridad.[54]

ANSSCLAPOL Santa Cruz en su comunicado vertió importantes declaraciones:

"Rechazamos las declaraciones emitidas y difundidas a nivel nacional por el Ministro de Gobierno… deponga su actitud amenazante y arrogante para con la Policía Boliviana... No asombra que en tan poco tiempo se haya olvidado que fue su Policía junto a su pueblo que recuperaron la democracia sin importar los 21 días de acuartelamiento consciente".

"Recordamos a la clase gobernante y políticos de turno, que una cosa es mandar a que cumplamos los servicios y otra trabajar en el terreno… que hacemos señor ministro mantener un metro de distancia y ver desgarrados e impotentes de no poder ayudarles porque el protocolo dice mantener la distancia… nooo… está claro que otra cosa es estar en los zapatos de los policías".

"A las y los trabajadores que hoy primero de mayo se recuerda una jornada de homenaje a los mártires de Chicago… y aunque su Policía no está contemplado en los alcances de la Ley General del Trabajo dedica más de esas 8 horas al servicio de su pueblo… Reiteramos nuestro compromiso inclaudicable de defensa de la sociedad a la cual nos debemos…".[55]

Este alto grado de autonomía policial se ha convertido en un recurso de poder para la Policía. Internamente, la rápida respuesta de Murillo con la convocatoria a los suboficiales y el cambio de decisión sobre los uniformes de bioseguridad fue una señal al ministro de que la institución le van a poner un límite al maltrato a la tropa.

Por otro lado, es inevitable no ver el poder que ha alcanzado la FELCC desde que Áñez asumió el poder. La

---

54 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200517/covid-19-dan-seguro-policias-bs-100-mil

55 ANSSCLAPOL-Santa Cruz, Comunicado a la Opinión Pública. Santa Cruz, 1 de mayo de 2020.

persecución política del actual gobierno, principalmente contra exfuncionarios del MAS y autoridades del Poder Judicial, ha sido criticada por diferentes organismos internacionales, como Human Rights Watch, la misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrado y Abogados.[56] Una característica de estos pronunciamientos ha sido que se difunden cuando el brazo coercitivo del gobierno –la FELCC– actúa por fuera de la ley, principalmente con detenciones arbitrarias como, por ejemplo, en el caso del juez que estaba a punto de iniciar una audiencia por las denuncias sobre la adquisición de respiradores con sobreprecio por parte del Ministerio de Salud para enfrentar el Covid-19,[57, 58] o en el caso del allanamiento del domicilio del alcalde de Cochabamba, en el que se procedió a violentar la puerta de la vivienda sin que existiera, según denuncia del alcalde, orden de allanamiento.[59]

Otro ejemplo de esta instrumentalización de la FELCC como brazo coercitivo del gobierno de Áñez ha sido la publicación de una carta por parte de miembros de las

56 https://eldeber.com.bo/166040_relator-de-la-onu-ve-persecucion-politica-en-bolivia

57 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/22/juez-que-debia-procesar-navajas-fue-aprehendido-por-el-caso-quintana-256285.html

58 https://www.la-razon.com/nacional/2020/06/10/defensoria-del-pueblo-pide-liberar-a-patricia-hermosa-ante-detencion-ilegal-y-persecucion-politica/

59 https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/18/leyes-cuestiona-orden-de-aprehension-en-su-contra-y-cuestiona-actuacion-fiscal/

FFAA,[60] expresando su malestar porque esta institución no puede ejercer atribuciones que la CPE otorga, de manera exclusiva, a la Policía, como la aprehensión e inicio de casos. Las FFAA también manifestaban su malestar por los niveles de corrupción policial y por la negligencia de la Policía para detener a personas que, según los denunciantes, estarían evidentemente involucrados en las protestas y destrozos a un autobús en la ciudad de El Alto, a consecuencia de la aprobación de la Ley Electoral.[61] La Policía no solo salió a negar el hecho denunciado, sino que dijo que no había una denuncia formal del delito.[62] Es así que esta denuncia quedó sin ser investigada.

A estos casos se añaden varios más, como el asedio policial a la residencia de la Embajada de México en La Paz y la permisividad de grupos organizados para que se queden haciendo vigilia en la calle durante la pandemia, a pesar de los decretos aprobados en el marco del Covid-19; el cambio repentino del director departamental de la FELCC de Santa Cruz, según fuentes internas de la Policía, por haberse negado a investigar al periodista Junior Arias,[63] y la no investigación del Ministerio de Gobierno al exdirector de la FELCN, Cnel. Maximiliano Dávila, luego de haber informado que éste habría

60 La carta fue entregada en la Red ATB y contenía cuatro firmas, las cuales no fueron difundidas para mantener el anonimato de los firmantes y prevenir posibles represalias por la denuncia.

61 https://www.atb.com.bo/sociedad/mediante-una-carta-militares-denuncian-que-polic%C3%ADas-reciben-%E2%80%98coimas%E2%80%99-de-parte-de-personas-que-infringen-la-cuarentena

62 Algo que es contrario a la Ley 101 de Régimen Disciplinario, ya que es la Oficina de Control Interno, dependiente del Ministerio de Gobierno, la que, a simple conocimiento del hecho, debe tramitar la denuncia en la Fiscalía Policial (Ley 101 de Régimen Disciplinario, etapa investigativa, art. 64, inicio).

63 https://eldeber.com.bo/181941_repentino-cambio-de-mando-en-la-felcc-y-la-felcv-de-santa-cruz

tenido una participación en el caso del *jet* que salió de Bolivia a México con una tonelada de cocaína en enero de 2020.[64]

Todos estos hechos denunciados también por la Defensoría del Pueblo, no sólo se han mantenido en la impunidad, sino que, en varias ocasiones, ha sido el mismo Ministerio de Gobierno el que ha salido a defender estas actuaciones.[65] Es así que se da una instrumentalización de la Policía para intereses políticos del gobierno de turno con niveles altos de impunidad para la actuación policial.

La Policía juega un rol esencial en la contención de los conflictos sociales que enfrenta un gobierno de transición que goza de relativa legitimidad. Esto ha llevado a que se haga un esfuerzo por parte del gobierno de Áñez para lograr una fidelización de la institución policial hacia el gobierno interino: primero, con los discursos hacia los miembros de la Policía vertidos por el Ministro de Gobierno, realzando la labor policial y haciendo un intento evidente para diferenciar el actual gobierno del de Morales, como se muestra en los siguientes ejemplos:

"Es un gusto y placer que cada día haya mejores policías, mejores instructores. Creo que la Policía Nacional está viviendo uno de sus mejores momentos, hay mucho por hacer eso es seguro pero las señales que se están dando son importantes", aseveró Murillo según un reporte de Bolivia TV.[66]

"No es para mí extraño que el Movimiento al Socialismo ha pisoteado a la policía y con la policía estaba gasificando y reprimiendo al pueblo de Bolivia que lo único que quería era democracia y paz; para mí no son nada extrañas esas

---

64 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/2/21/implican-exjefe-antidroga-policias-mas-en-el-narcojet-247364.html

65 https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/ministerio-de-gobierno-solicito-la-aprehension-del-juez-huacani-404925

66 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-policia-nacional-viviendo-mejores-momentos/20200124172426747537.html

órdenes", respondió el ministro Murillo a los periodistas, en el evento de reconocimiento del nuevo comandante de la FELCN.[67]

Y después, con elementos ya antes descritos, como el aumento de sueldos en plena pandemia, la asignación de Bs 15 millones para un seguro por invalidez total o permanente o muerte derivada del Covid-19 para los policías con los recursos provenientes de las multas de infracciones a la cuarentena,[68] cuando públicamente, el Ministro de Gobierno había afirmado que este dinero recaudado sería para el Tesoro General haciendo énfasis en que éste no iría a la Policía,[69] o el Decreto Supremo de reglamentación de la USEDI, entre otros.

Finalmente, el gobierno ha implementado una política de *securitización* de la gestión de la pandemia en la que la Policía juega un rol esencial, estando en la primera línea de combate, para hacer cumplir la cuarentena y realizar los controles respectivos de dicho cumplimiento. Asimismo, junto con las FFAA, son el brazo represivo ante los diferentes grupos y poblaciones que protestan por las medidas interpuestas por el gobierno, ayudando al gobierno transitorio a mantener una relativa estabilidad social confrontando las diferentes manifestaciones sociales.[70] En este elemento específico, el poder de la Policía reside en que "a menor legitimidad del sistema político, y ante la incertidumbre procedimental para resolver los conflictos sociales, los organismos de seguridad tienden a incrementar su poder, toda vez que se convierten

67 http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=803&chnid=11

68 Decreto Supremo 4289, del 15 de julio de 2020.

69 https://www1.abi.bo/abi_/?i=447510

70 Por ejemplo, en contra de decisiones de Áñez que pudieran estar dando a entender que no hay una voluntad de que haya elecciones presidenciales lo más rápido posible.

en el pararrayos de la crisis de gobernabilidad" (Quintana, 2005: 64).

Una mirada al futuro

La Policía Nacional vive una crisis institucional que viene arrastrando históricamente, y que con los sucesos de octubre y noviembre 2019 se ha profundizado, tal como evidencia esta reconfiguración en su relación con el poder político a la cabeza del gobierno de transición. Y es que la Policía, como institución, sigue siendo la misma, y sus miembros siguen siendo los mismos; por ello, tanto sus virtudes como defectos, su estructura, sus incentivos y sus demandas permanecen intactos.

Una reforma policial que apunte a abordar temas estructurales, a tocar intereses corporativos arraigados en la institución y a dar un giro en la relación entre la Policía y el poder político en el marco del mandato otorgado por la Constitución Política del Estado, requiere de tres aspectos esenciales.

El primero es un gobierno legítimo con voluntad política para el cambio, la otorgación de ingresos adicionales al presupuesto anual para la Policía, y una Policía dispuesta a ceder prerrogativas admitiendo la necesidad de cambio y de una reconfiguración del poder político de la institución. Hoy en día y en los próximos años, por la crisis política y económica que vive el país, es muy difícil que se den estas condiciones. El poder político, sea el que esté en el poder ahora o luego de las elecciones de octubre de 2020, va a necesitar de la Policía para tener estabilidad social y gobernabilidad democrática. Por lo tanto, no se va a arriesgar a causar malestar interno con cambios que toquen intereses corporativos con una reforma policial, basado en todos los antecedentes hasta la fecha descritos en este documento.

Por su parte, como segundo aspecto, la Policía ha sido y es también un instrumento del poder político; ha sido y es víctima de aquellos políticos que usan a la institución para sus fines,

que no pueden responder a sus demandas institucionales, teniendo, hoy por hoy, una institución débil y con altos niveles de autonomía deliberativa también como medio de protección institucional. Hoy en día –y, probablemente, por algunos años más– la Policía no podrá concretar el cumplimiento de sus demandas históricas por lo que eso implica económicamente para un Estado y un país que entra en una crisis económica.

Finalmente, el reto más grande en un corto plazo se puede dar en el escenario en el que el MAS vuelva al poder, ya que, por un lado, los policías temen las represalias por el motín policial de 2019, pero, por otro, el MAS los necesitará para garantizar niveles de gobernabilidad en el escenario de polarización política que se encuentra el país. Sin embargo, la mayor responsabilidad de los futuros gobernantes –y también de los actuales– será evitar la profundización de la desinstitucionalización e instrumentalización de la Policía para fines e intereses políticos que quedan al margen de lo que establece la Constitución Política del Estado. No debemos olvidar que la debilidad institucional de la Policía se constituye, finalmente, en un elemento que atenta contra el funcionamiento de la democracia.

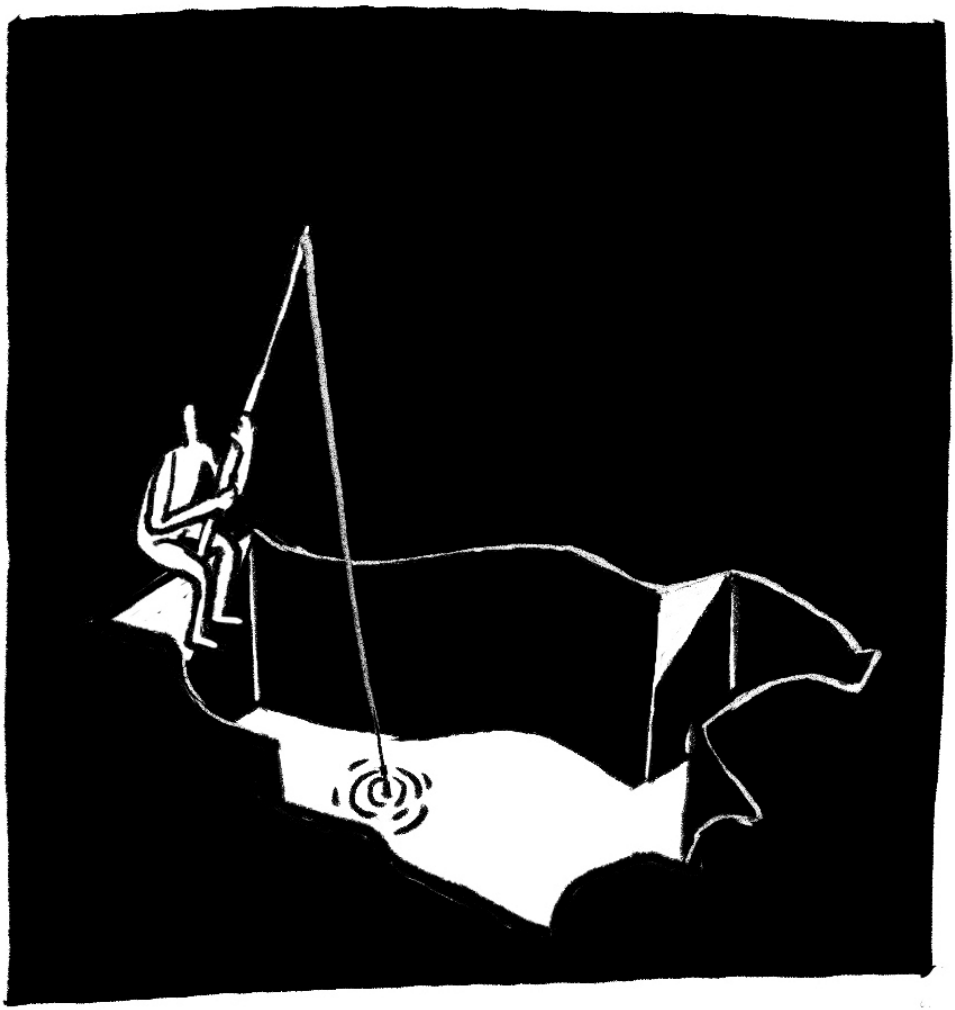
Bibliografía

Quintana, Juan Ramón (2005). *Policía y Democracia en Bolivia: una política institucional pendiente*. La Paz: PIEB.

Tellería, Loreta (2017). "Política Policial en Bolivia: entre la continuidad y el cambio". En: *Delito y Sociedad*, N.° 44, Año 26, 2do semestre. Santa Fe: Ediciones UNL.

Tellería, Loreta (2015). *Hegemonía Territorial Fallida. Estrategias de Control y Dominación de Estados Unidos en Bolivia 1985-2012*. La Paz: Fondo Editorial de la Vicepresidencia.

PNUD-Bolivia (2006). *Encuestas para el Desarrollo Humano: Policía Nacional y Seguridad Ciudadana*. La Paz: PNUD.



VII

Incidencia de actores y factores externos en Bolivia: Recomposición geopolítica regional en el escenario postelectoral

Gustavo Fernández Saavedra

Estas páginas, como se ha solicitado, intentan describir brevemente mi punto de vista sobre la incidencia de los factores externos en Bolivia, en los acontecimientos políticos y sociales del último trimestre del año pasado (2019), en la primera parte y, en la segunda, procuran resumir los actores y circunstancias que influirán en la inserción externa del país, en el futuro próximo.

Bolivia ganó margen de autonomía económica durante el "hiperciclo" de las materias primas (2009-2014): redujo la deuda externa (entre otras cosas por el HIPIC[1]), tuvo superávits en la balanza comercial, aumentó sustantivamente las reservas del Banco Central, estimuló la demanda interna, invirtió en infraestructura. Los excedentes del comercio exterior, las remesas y los ingresos fiscales, le permitieron financiar ese proceso, con el apoyo relativamente secundario de Venezuela. No requirió financiamiento externo (excepto de la Corporación Andina de Fomento, CAF) ni precisó acuerdos de ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En esta fase, ocurrió algo importante: se *sudamericanizó* el comercio exterior y las exportaciones de gas a Brasil y Argentina pasaron a representar cerca del 70% de las ventas e ingresos nacionales, con los efectos políticos subsecuentes.

1 *Heavily Indebted Poor Countries*: Programa de Alivio a la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados.

2019

En todo ese proceso, los mecanismos comerciales de los procesos de integración –Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercado Común del Sur (Mercosur)– jugaron un papel relativamente secundario, con la excepción notable de la expansión de la frontera agrícola e industrial del complejo soyero. El margen de preferencia arancelaria de la Comunidad Andina permitió sostener las ventas de ese grano a los mercados de Perú, Colombia y Venezuela hasta el momento en el que el incremento sustantivo de la demanda china y de los precios internacionales de las materias primas mejoró notablemente la competitividad del sector, así como las utilidades de los exportadores nacionales. De esta manera, el grupo andino fue factor crítico del nacimiento y consolidación de la agricultura industrial en el Oriente del país. En la actualidad, ese mercado es el principal destino de las ventas del complejo soyero boliviano.

En cambio, el gas natural –el principal componente del *boom* del comercio exterior boliviano– se negoció y apuntaló en las relaciones bilaterales con Brasil y Argentina, desde la construcción del gasoducto Santa Cruz-San Pablo, a principios de este siglo. Por su parte, como es sabido, las ventas de productos mineros –que estos días han recuperado posiciones en la composición y valor del comercio exterior boliviano, en la medida en que declinaron las colocaciones de gas natural–, se dirigen a mercados extrarregionales.

En dos palabras, los ingresos por la venta de gas natural a los países de la Cuenca del Plata y los de las exportaciones del complejo soyero a la Comunidad Andina han sido los pilares (económico y político) de la inserción externa boliviana, así como la plataforma de la estrecha vinculación política con Brasil y Argentina, por un lado, y con Perú y Colombia, por otro. No se puede dejar de mencionar, por otra parte, la vinculación estratégica del país con la CAF que aportó recursos financieros a lo largo de todo este proceso, sin condicionamiento político, aunque a un costo relativamente más alto.

A partir de 2014, cuando cambió el ciclo, Bolivia sobrellevó el costo de la caída de precios de sus exportaciones con sus

reservas monetarias y, en los últimos años, con préstamos del gobierno chino. La deuda externa comenzó a crecer nuevamente.

Eso en el plano comercial y económico. En el político, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Mercosur fueron el sostén externo del gobierno boliviano. Dieron un inapreciable respaldo político al gobierno del MAS, incluso mediante el controvertido informe de UNASUR en el conflicto de la "media luna" y en los sucesos de Porvenir (Pando, 11 de septiembre de 2008), ocasión en la que el interés político boliviano convergió con el de Chile y los otros socios del organismo. El gobierno nacional requería afirmar su legitimidad interna, UNASUR consolidar su presencia regional y el gobierno de la señora Bachelet tender puentes con Bolivia. Más adelante, esa cobertura se amplió y se consolidó en el ALBA y el Mercosur.

El escenario político regional cambió gradualmente a partir de 2014 y, radicalmente, en 2019, en la secuencia que marcó la declinación del socialismo del siglo XXI y de los procesos nacionalistas de izquierda, que comenzó con el golpe en Honduras (2009), prosiguió con el juicio político a Fernando Lugo en Paraguay (2012), los fallecimientos de Hugo Chávez (2013) y Fidel Castro (2016), la victoria de Mauricio Macri en Argentina (2015), el juicio político contra Dilma Rousseff (2016), la prisión de Lula da Silva (2018) en el marco del proceso denominado Lava Jato en Brasil y, finalmente, las elecciones de Lenin Moreno en Ecuador (2017) y de Lacalle Pou en Uruguay (2019).

Ese cambio en el contexto externo se puso de manifiesto en la interrupción brusca del funcionamiento de los organismos de integración y en el aislamiento del gobierno del MAS durante los acontecimientos políticos de octubre y noviembre de 2019. México y Argentina apoyaron a Evo Morales para su salida y refugio, pero no para sostenerlo en el poder.

El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral (23 de octubre de 2019), el Informe a la Secretaría del Departamento de Cooperación y Apoyo Electoral (Auditoría,

10 de noviembre[2]), y el Informe Final de Integridad Electoral (20 diciembre[3]) de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron elementos decisivos en el registro de las irregularidades y fraude a lo largo del proceso electoral, que finalmente eclosionaron, social y políticamente, a partir de octubre de 2019. Este recuento no debe pasar por alto que Evo Morales pidió la auditoría vinculante de la OEA, porque probablemente confiaba en la simpatía de su secretario general, Luis Almagro, hacia su gobierno. En cambio, la oposición boliviana miró entonces con suspicacia y recelo el papel del secretario general de la OEA, luego de su entusiasta participación en el lanzamiento de la campaña electoral oficialista en el Chapare. Lo que probablemente ocurrió después es que, en el minuto de la verdad, Almagro aprovechó la evidencia del fraude electoral para dar término a una relación crecientemente incómoda.

Los países del Grupo de Lima, por su parte, se limitaron a decir que esperaban en Bolivia un proceso electoral transparente, cuando llegara el momento. Sin embargo, no hostilizaron ni marginaron al gobierno de Evo, como sí hicieron con el de Maduro. Parecían coincidir en que, pese a sus diferencias ideológicas y políticas, era mejor que Evo Morales continuara en el gobierno, con poder reducido, obligado a guardar formas más democráticas, sobre todo si, como esperaban, el régimen de Maduro terminaba desmoronándose.

---

2 "El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para llevar a cabo comicios confiables".

3 "En conclusión, nuestro análisis de los datos de las Elecciones de Bolivia 2019 deja en claro que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo… El tamaño de las rupturas es extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad del proceso".

El giro de los acontecimientos posteriores sorprendió a los países del Grupo de Lima. Apenas tuvieron tiempo para reaccionar, con la excepción de Colombia y Brasil, que tampoco opinaron *ex ante*. Llegaron después. En verdad, hasta ese momento, el Grupo de Lima apreciaba el papel de intermediación y articulación que Evo Morales trataba de cumplir en la crisis de Venezuela, como puente entre el grupo de Montevideo, la Unión Europea y el ALBA. Morales llegó a pedir, públicamente, una solución política a la crisis venezolana, lo cual, "decodificado", implicaba la salida de Maduro del poder, por la vía electoral, declaración que ocasionó serias diferencias en su propio equipo íntimo.

Esos meses, la región estaba concentrada en la crisis venezolana y cada país en sus propios problemas. Chile en el estallido social, Ecuador en su crisis financiera y social, Perú en la disolución del Congreso y las elecciones parlamentarias, Uruguay en su proceso electoral. Por eso, entiendo que la hipótesis de que el Grupo de Lima jugó un papel –protagónico o secundario– en la crisis boliviana no tiene fundamento fáctico.

Al término del gobierno de Peña Nieto (de derecha pura, que sin embargo mantuvo una relación cordial con Evo Morales), el Grupo de Lima dejó de operar en la práctica. El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, actuó como actuó en la salida de Evo Morales por razones de política interna, pero el asunto salió de su agenda y de sus preocupaciones después de que el expresidente boliviano se fuera a la Argentina. La embajadora de México mencionó el tema en la OEA para atacar la candidatura de Almagro a la reelección, pero nada más.

Por otra parte, la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea llegó a la misma conclusión que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA:[4] lo dijo de

4 "La misión de expertos electorales de la Unión Europea (MEE-UE) considera que las decisiones del TSE, combinadas con la ausencia de explicaciones sobre sus decisiones y el cambio de tendencia, dañaron irrevocablemente la confianza en el proceso de cómputo de resultados". La Alta Representante de la UE emitió una

otra manera, pero comprobó y denunció lo mismo. Pidió segunda vuelta y, después, nuevas elecciones. Desempeñó un papel clave en la transición pacífica, en la construcción del consenso para la convocatoria a elecciones, junto a la Iglesia, la dirección parlamentaria del MAS y la antigua oposición.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) llegó al país con la idea de que se había producido un golpe y, aunque nunca mostró particular empatía con el gobierno de Jeanine Áñez, aceptó en los hechos su legitimidad y no rebatió la hipótesis de que el fraude y el levantamiento de las ciudades fueron la explicación final de la caída del régimen. Durante su participación en el proceso de pacificación, jugó papel positivo en la protección de los cuadros del anterior gobierno de la persecución judicial y policial.

Las elecciones bolivianas interesaban a los bolivianos. En mi opinión, Morales no cayó por presión geopolítica externa, especialmente latinoamericana (el papel de Estados Unidos se menciona más adelante). Eso no quiere decir, desde luego, que ese hecho no tenga consecuencias geopolíticas posteriores. Están a la vista.

Litio

La cadena de valor del litio incluye carbonato, hidróxido, cátodos, celdas, baterías,[5] a partir, por cierto, del mineral. Es una industria química y de ensamblaje, de alta sofisticación tecnológica. Las baterías de automóviles serán, sin duda, el corazón de ese negocio (sus ventas se multiplicarán fácilmente por diez en el mediano plazo), mucho más después de la emergencia sanitaria del coronavirus. La exigencia del fin de los combustibles fósiles será mayor que antes.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que éste es un mercado oligopólico y que empresas vinculadas a grandes corporaciones

---

declaración en la que reiteró que era necesario celebrar unas elecciones nuevas y oportunas con una autoridad electoral renovada para restablecer la confianza y la credibilidad en el sistema democrático boliviano.

5 BBC, 20 de junio 2019. *Perfil*, octubre 2019.

transnacionales son las principales compradoras del mineral, del carbonato y del hidróxido de litio. Las cifras[6] indican que el mercado mundial de litio fue de 214.000 toneladas en 2017, que puede crecer hasta 769.000 toneladas en 2025, y que China (186 mm), con 23,7% del mercado; Corea (161 mm), con el 20,3%, y Japón (130 mm), con el 16,4%, son los consumidores más destacados. Los expertos recuerdan que fabricar baterías en Sudamérica no tiene mucho sentido, por el momento. Las baterías son pesadas, la distancia a las fábricas es muy grande y las celdas son altamente volátiles, difíciles de transportar. No se pueden exportar por avión y las travesías por barco son muy largas. Por eso, probablemente, hasta ahora, el carbonato de litio es el principal producto de exportación desde el triángulo sudamericano. Las ventas de Chile (499 mm) representan el 61,2% del mercado mundial (de un valor cercano a los 700 millones de dólares anuales), y las de la Argentina (155 mm) el 19,1%. No son sumas muy altas, como se puede notar (500 millones de dólares para un total de exportaciones de más de 65.000 millones, en el caso de Chile).

Por otra parte, el Decreto Supremo 3738, de 7 de diciembre de 2018, que aprobó el acuerdo que Morales firmó con Alemania (no con China o Rusia, nótese), fue abrogado por presión del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), aunque Alemania ha dejado en claro que no aceptará la ruptura unilateral de ese convenio. Es útil recordar que se trataba de una concesión por 70 años del Salar de Uyuni a la empresa boliviano-alemana YLB-Acisa (Yacimientos del Litio Bolivianos y Advanced Clean Innovations), para producir entre 35.000 y 40.000 toneladas métricas (TM) de hidróxido de litio (derivado de las salmueras residuales de la producción de carbonato de litio); con el 85% para el mercado alemán y con la participación accionaria boliviana del 51%. De acuerdo a sus estipulaciones, YLB no podía vender ningún derivado del Salar a Europa sin previa venia del

6 CEPAL, *Perspectiva Internacional*, 2018.

socio alemán minoritario, que controlaría la administración y las decisiones de este consorcio.

Esos son los datos disponibles. El del litio es un mercado de 700 a 1.000 millones de dólares anuales, que puede crecer a cinco o siete mil millones hasta 2025. Los productores de materia prima están instalados en Estados Unidos (geotermia), Australia (espodumena) y en los salares del triángulo andino (Bolivia, Chile y Argentina). La competencia por comprar litio y fabricar baterías se concentra, por el momento, entre países avanzados en Australia, Asia (China, Japón, Corea, compradores de Argentina y Chile), a los que se sumarán, indudablemente, Alemania y Estados Unidos, con mucho mayor intensidad en el mundo post Covid-19.

No cabe duda de que el litio será un producto muy codiciado en el mediano y largo plazo (de 10 a 20 años), pero parece muy exagerado (sino fantasioso) afirmar que la competencia entre esas empresas provocó un golpe en Bolivia, en 2019. En todo caso, el litio será parte, relativamente modesta, de la confrontación tecnológica, económica y política entre Asia y Occidente en los años por venir, pero esa será otra historia, en otro tiempo…

2020

Lo que ocurrió –o está ocurriendo– consolida y potencia el proceso, que lleva más de dos décadas, de afirmación de China y el Asia como centros de poder en el sistema internacional. Esto acentuará las tensiones entre Estados Unidos y ese nuevo centro de poder, en el plano tecnológico, comercial, político y de seguridad.

La Administración Trump ahondó también la brecha con Europa durante la crisis del Covid-19. Esa alianza militar, económica, tecnológica y política se quebró seriamente, en perjuicio de Estados Unidos. Pasó la hora del alineamiento automático. Europa aprendió que debe valerse por sí misma y que no puede confiar su seguridad militar y su prosperidad económica a la voluntad de su antiguo aliado. El sistema de la postguerra quedó en el pasado; marca el fin del ciclo que comenzó en la Segunda Guerra Mundial y prosiguió con la Guerra Fría. Cada nuevo acuerdo tendrá

que ser negociado según sus propios méritos y no debiera extrañar que Europa busque el rol de bisagra entre las dos superpotencias confrontadas.

La eventual victoria del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre en Estados Unidos puede bajar el tono del diálogo y de las manifestaciones formales sobre la posición de esta potencia en el mundo, pero no cambiará la sustancia de esas tendencias.

Como es sabido, América Latina, por designio geográfico e histórico, forma parte del hemisferio occidental, en el que Estados Unidos trató siempre de imponer sus reglas y su forma de vida, como antes lo hizo Inglaterra y, con seguridad, lo harán China y Alemania en sus zonas de influencia. Cada "imperio" denunciará al otro. Los adjetivos cambiarán, pero el objetivo será el mismo: mantener su dominio y tratar de ampliarlo.

En el pasado reciente, en un mundo unipolar, bajo la hegemonía de Estados Unidos, el margen de autonomía de América Latina podía crecer sin inquietar a la superpotencia. Al final, todos dependían de Estados Unidos y de sus corporaciones. El mundo entero era la zona de influencia de esa potencia. Muchas de las empresas chinas que compraban en la región eran filiales de las corporaciones norteamericanas. Las cadenas de valor, tecnológicas y financieras tenían un núcleo común. Eso ya no será así. El sistema es ahora multipolar con una fuerte inclinación a convertirse en bipolar. La propia consigna de la lucha antiimperialista cambia de contenido.

En ese horizonte, Estados Unidos, como es lógico, tratará de consolidar su zona de seguridad nacional y de influencia inmediata en América Latina, que volverá a ser una de sus principales prioridades. No puede seguir descuidándola o ignorándola. La necesita para negociar con Europa y para confrontar a Asia. Esto significa que la doctrina Monroe retornará con fuerza, con ese u otro nombre, de manera explícita o encubierta, sutil o torpe. Con halagos o amenazas. Es una plataforma irrenunciable para esa potencia.

La importancia de Venezuela en el marco de la reciente crisis y transformación del mercado de energía puede servir de ejemplo. Puede volver a ser el punto crítico del arco de

seguridad nacional de Estados Unidos, como consecuencia del nuevo valor geopolítico de las reservas latinoamericanas de energía.

El problema es que Estados Unidos tendrá que operar en un territorio diferente de el del pasado. El eje de la relación comercial de Sudamérica cambió. Lo que ocurrió no se podrá borrar. China y Asia pusieron pie en el mercado tecnológico, son una opción financiera importante y continuarán siendo mercados significativos para el hierro, la soya, los minerales y los alimentos de América Latina.

La emergencia del coronavirus transformó la guerra comercial entre Estados Unidos y China en una confrontación tecnológica, política, económica y cultural abierta.

A Brasil, Argentina, Perú y Chile les costará mucho mantener fluida la relación comercial con China, principal mercado para exportaciones (hierro, soya y cobre), vitales para sus economías, frente a la presión política constante de Estados Unidos, que hará lo imposible por frenar la presencia china en el continente. El caso de Bolivia es diferente. Sus colocaciones externas se orientan a Estados Unidos, América Latina y Europa, principalmente, pero se benefician, indirectamente, del efecto de la demanda china en el mercado mundial de materias primas.

Puede anticiparse, en todo caso, que Estados Unidos redoblará su presión para influir y condicionar la relación de Bolivia con China, en el campo financiero y tecnológico, una vez que el cambio de gobierno ha enfriado la vinculación financiera que se había incrementado durante el gobierno del MAS y, porque, como se ha dicho, China es un mercado relativamente secundario para las exportaciones bolivianas.

Entiendo, sin embargo, que está en el interés de Bolivia tener abiertas otras opciones comerciales, económicas y tecnológicas, ante las cuales, por cierto, debe incluirse la de esa gran potencia asiática. Sin embargo, hay mucho trecho de allí a las alianzas políticas, ideológicas y estratégicas, en las que tampoco China parece mostrar gran interés.

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos nunca se rompieron. Se degradaron al nivel de encargados de negocios y, con el nuevo gobierno, se anunció que se repondrán

al nivel de embajadores. Pero ese dato, esencialmente formal, no es el más importante. Lo significativo es que Estados Unidos recuperó presencia gravitante en Bolivia, así como en el resto de los países sudamericanos, con o sin embajadores.

Eso explica la rapidez con la que actuó después del desenlace de la crisis de octubre y noviembre de 2019. No estoy muy seguro de su papel en el desarrollo de los acontecimientos, pero, por lo menos, no tuvo en ellos el protagonismo y la visibilidad que se puso en evidencia en Venezuela, a lo largo de 2019 (Bolton pasa de largo la crisis boliviana en su libro *The room where it happened*, pero dedica un capítulo entero y detallado al relato del accionar norteamericano en ese país).

No debe olvidarse que ni Trump, ni Pompeo ni Bolton incluyeron a Bolivia en el "eje del mal", en la misma bolsa que Cuba, Nicaragua y Venezuela. De sus declaraciones o de su lenguaje corporal se podía deducir que, aunque no guardaban simpatía por este gobierno, tenían en cuenta la estabilidad política, social del país y el comportamiento de la economía nacional, lo que, naturalmente, no caía muy bien a la oposición política de entonces, descontenta con los amables lazos entre el gobierno y el sistema económico internacional (el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, llegaron a mencionar a Bolivia como modelo de disciplina para otros países en desarrollo). En síntesis, Morales no era considerado un paria o una amenaza a la seguridad norteamericana o regional.

No obstante, ocurrieron las cosas que ocurrieron y ahora tiene que esperarse que la influencia de Estados Unidos en Bolivia y en el hemisferio se haga sentir con mayor fuerza, después de la emergencia del coronavirus, porque se requerirá apoyo financiero del FMI y del BID, y acceso al mercado de capital occidental para enfrentar la muy seria crisis económica que se avecina.

En este sentido, se vaticinan tres crisis interconectadas en el continente, que obligarán a todos a focalizar su atención en los asuntos internos. Se han descrito también los factores que serán relevantes para la política exterior boliviana, en las cuencas del Pacífico y del Plata, en el eventual retorno

de Estados Unidos y en las derivaciones de la confrontación geopolítica global con China.

Parecen pertinentes un par de anotaciones sobre la influencia en el país del comportamiento de los otros actores regionales, consecuencia lógica de la historia y de su emplazamiento geográfico en el centro del continente.

La influencia de Brasil y Argentina en la economía y política boliviana, para bien o para mal, es un dato inconmovible de la realidad nacional. El peso creciente de las tierras bajas del Oriente, ahora en Santa Cruz y más adelante en el Beni y Pando, es consecuencia, en un grado significativo, de la proyección del crecimiento de esos dos grandes polos sudamericanos. El eje geoeconómico y geopolítico del país se inclina cada vez con mayor fuerza en dirección de las cuencas del Plata y del Amazonas. La pregunta no es si ambos países incidirán en el destino del nuestro, sino cuánto, cómo y en qué dirección.

Si esas son la premisa y la respuesta, corresponde una rápida mirada al impacto de la crisis sanitaria, económica y política en los dos países, para estimar su eventual reflejo en Bolivia.

Un comentario general: las consecuencias económicas, sociales y políticas de la pandemia son, en agosto, mucho más graves que las que se anticipaban en abril o mayo de este año. El último informe disponible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[7] anota que el Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano caerá en 2020 en -9,1%, que el valor de las exportaciones disminuirá en 23% y que la pobreza aumentará este año de 30,2% a 37,3%, para llegar a un total de 213 millones de pobres. La recuperación, cuando empiece, será larga, lenta y penosa. Si bien los sectores de menores ingresos son los más afectados, el desencanto de las clases medias emergentes será el factor social de mayor explosividad, en un ambiente de rechazo al sistema político. La gente entiende que el virus es un desafío complejo, pero

7 Alicia Bárcena. *Desafíos de América Latina y el Caribe en la post-pandemia*. Santiago, agosto 5, 2020.

atribuye a los políticos el manejo incompetente de la crisis y subraya su responsabilidad por la situación del sistema de protección social. Muy poca gente (13%) tiene confianza en los partidos y para el 80% de los latinoamericanos no cabe duda que la corrupción carcomió el sistema democrático y las instituciones del Estado. La confluencia de esos vectores presagia tormenta económica, social y política, en todo el continente y en Bolivia, desde luego. Tempestad global que, por otra parte, es tan imprevisible y se propaga con tanta velocidad como el propio virus que la desencadenó.

Brasil entró en crisis. Mejor dicho, no logró salir de la anterior. La emergencia sanitaria destruyó los esfuerzos de reforma del sistema de previsión social y de estabilización económica liberal que aplicó el gobierno de Bolsonaro, profundizando la política que había comenzado durante la gestión Temer. Las proyecciones del FMI anticipan una caída del PIB del 5,3% en 2020, aunque también registran el extraordinario crecimiento de la producción y las exportaciones agrícolas, que superaron los récords precedentes. Desde luego, la caída excepcional de los precios del petróleo daña severamente los planes de expansión de los depósitos del "Presal"[8] (lo que en cierta medida favorece las ventas de gas natural boliviano). El dato más importante, sin embargo, es el cuadro de inestabilidad política provocado por el presidente Bolsonaro, que fracturó la alianza circunstancial que sirvió para ocupar transitoriamente el vacío que dejaron el PT, el PMDB y el PSDB y provocó tensiones en la relación entre los Estados de la Federación y el gobierno central, así como entre Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial. En esa misma medida, creció la influencia de las Fuerzas Armadas en la estructura de poder. Esa *confusâo* (para usar una expresión coloquial brasileña), no se aclarará pronto.

Argentina, en el otro extremo del arco ideológico regional, tiene sus propios problemas. Alberto Fernández ganó autoridad y popularidad –tal vez demasiada para el gusto de amigos y adversarios– por su gestión de la emergencia sanitaria, pero ya

8 Reservas marinas de petróleo ubicadas en el litoral brasileño.

no puede retrasar la negociación para reestructurar la deuda con los tenedores externos de bonos, lo cual dejará cicatrices económicas y políticas (en la que curiosamente cuenta con el apoyo del FMI) y sacará a la superficie las diferencias entre el ala oficialista que busca evitar la moratoria y el sector más radical de su base popular. En todo caso, cualquiera sea el resultado de esa negociación, le espera un quinquenio de seria contracción económica, a juzgar por las previsiones de la caída del PIB, el incremento de la pobreza (en el rango del 40%), el peso de la deuda (del 90% del PIB), el acceso limitado a los mercados de capital, las dificultades para contener la inflación (que oscila alrededor del 50%) y las consecuencias del desplome de los precios de carburantes en el desarrollo del proyecto estrella de los yacimientos de Vaca Muerta. Queda, por cierto, como en Brasil, el horizonte de la expansión del *campo*, pero, paradojalmente, esa posibilidad echará sal a la herida de la áspera relación del peronismo urbano con los productores agrícolas.

En resumen, las cartas muestran inestabilidad política y recesión económica del lado de la Cuenca del Plata.

Por otra parte, Perú y Chile no solo influyen, también contrapesan la relación de Bolivia con Brasil y Argentina. Son países medianos, unidos a Bolivia por una antigua historia y por importantes vínculos comerciales y económicos.

Ambos países estaban bien, antes de octubre de 2019. Entonces estalló en Santiago un incidente importante, pero aparentemente local, en las redes del Metro, por el incremento de pasajes para estudiantes que terminó con las manifestaciones más grandes de la historia de Chile y con el incendio, literal, de centros comerciales, buses, plazas, monumentos, iglesias, centros universitarios, en las principales ciudades, de norte a sur. Miles de heridos, centenares de muertos, el Ejército en las calles, toques de queda, culminaron con la decisión de convocar a un plebiscito para reformar la Constitución y encaminar el debate de un nuevo pacto social. Desde marzo de este año, el Estado, gracias a su papel en el férreo control de la pandemia, recobró cierta estabilidad, pero se encontró con dificultades para salir de la cuarentena, tanto porque anunció prematuramente que

había domado la curva de expansión del virus como porque se averió el consenso sobre la necesidad de la propia reforma constitucional. Sociedad inquieta, partidos de oposición dispersos y sin liderazgo, gobierno desgastado… Si a esos datos se agrega la seria contracción económica y el aumento del desempleo, se perfila el cuadro de un recorrido agitado para éste y el próximo año, justo cuando aspiraba a llegar a su bicentenario como país del primer mundo. Pero eso no es lo peor. Se dañó la autoestima y la seguridad en sí mismo. La hoguera que consumió Plaza Italia y la Alameda (las "grandes alamedas" de Allende) es una pesadilla que no quiere borrarse.

El caso del Perú es menos traumático, en los tres órdenes. Hay muchas preguntas en el ambiente sobre el proceso electoral de 2021, ante el colapso de todos los partidos –tradicionales y recientes– desde el aprismo hasta el fujimorismo, las cicatrices de la corrupción del Lava Jato en el sistema político y empresarial peruano y la recesión económica. La crisis sanitaria no termina de aflojar su presión y el gobierno de Martín Vizcarra, con una altísima popularidad, se vio obligado a aceptar que pecó de optimista. Pero, así y todo, se está abriendo campo la construcción de un acuerdo nacional para enfrentar los desafíos de las crisis económica, social y política que se avecinan. Perú la pasará mal, pero el futuro próximo no parece catastrófico (en todo caso, para relativizar esa afirmación, debo advertir al lector que escribí un pronóstico semejante sobre Chile, en septiembre de 2019, un mes antes de que estallase el conflicto social).

Por su parte, Ecuador entró en la lista de los enfermos graves. Las secuelas del coronavirus serán tanto o más graves que las de un cataclismo. Como si fuera poco, el hundimiento histórico de los precios del petróleo confirmó que la recesión pos Covid-19 será más dolorosa que la de sus vecinos.

Cambiando de latitudes, las diferentes acepciones de la palabra "crisis" (económica, social, política, humanitaria) resultan insuficientes para describir la situación venezolana. Venezuela perdió cualquier presencia política relevante en el continente, en la acumulación del éxodo, la situación

humanitaria (el Programa Mundial de Alimentos coloca a Venezuela entre los cinco países con riesgo inminente de hambruna, junto a Yemen, Sudán, Congo y Afganistán) y el rocambolesco y absurdo juego político interno. Según las previsiones del FMI, el PIB de Venezuela caerá 15% en 2020, lo cual debe sumarse al despeñamiento de un 35% en 2019 y a los de años anteriores.

López Obrador, por su parte, no es el líder que él creía, ni mucho menos el que México esperaba. México no crecerá. La frustración de la industria petrolera, a la que apostaba tanto, pesará mucho. El dato frío, que define su drama y sus expectativas, es que forma parte del espacio económico y político de Estados Unidos. En ese barco navega.

Éste es el paisaje sudamericano que se perfila en el análisis. Como se puede ver, no hay mucho espacio para especular sobre alineamientos ideológicos y geopolíticos, por lo menos en el corto plazo. Todos están mal o muy mal, a la derecha o la izquierda del espectro convencional.

La realidad es que a ninguno de los gobiernos latinoamericanos le alcanzará el tiempo para atender las crisis –sanitaria, económica, ambiental y política– que les cayeron del cielo. Ninguno tendrá recursos para maniobras regionales de poder. Eso vendrá después.

Los organismos regionales de integración económica están prácticamente inoperantes. Su horizonte es incierto: la UNASUR dejó de existir, el ALBA se mantiene en coma inducido. Luego de la reunión de cancilleres (a la que Bolivia no concurrió) en la que México asumió la Presidencia Pro-Témpore, a principios de este año, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no ha dado muchas señales de vida, apreciación que también se puede extender al Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), creado a tropezones en el segundo semestre de 2019. Una vez que López Obrador alejó a México del Grupo de Lima y de la Alianza del Pacífico, esas dos estructuras entraron en "modo pausa". Finalmente, han surgido tensiones entre Argentina y sus socios en el Mercosur, como lo dieron a conocer los comunicados de la Presidencia Pro-Témpore del organismo y del gobierno de Alberto Fernández, el 25

de abril pasado, cuando se anunció que Argentina dejará de participar en la negociación de acuerdos comerciales en curso y de las futuras negociaciones del bloque, excluyendo los acuerdos ya firmados con la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Un último apunte. América Latina tendrá que encontrar su espacio de acción en un sistema mundial de mercado. El sistema económico mundial seguirá siendo capitalista, en el futuro previsible (a propósito, el economista serbo-estadounidense Branko Milanovic distingue el capitalismo político autoritario de China del capitalismo liberal de Estados Unidos). Ni China ni Rusia son economías centralmente planificadas, con propiedad estatal de los medios de producción: no lo son ni lo serán. Son economías capitalistas, rivales de Estados Unidos. Pero todos saben que la relación perversa del paradigma de desarrollo y la preservación y cuidado del medio ambiente es insostenible. Y que nada será posible si no se aborda el desafío de la obscena concentración de la riqueza y la inmensa desigualdad que aleja y confronta clases sociales, países y continentes.

En ese marco, el gobierno que surja de las elecciones en Bolivia escogerá sus preferencias y tropezará con sus restricciones.

Finalmente, cabe señalar que la gestión de Jeanine Áñez durante la transición muestra sus inclinaciones –ruptura con Venezuela y Cuba, relación íntima con Estados Unidos, cercana a Israel, defensiva con México y Argentina, pasiva o distante frente a organismos regionales (sin muchos signos vitales, con la vida en suspenso). En este momento, Estados Unidos y la OEA son el centro de gravedad de su política exterior, en contraste radical con la que conducía Morales. Si Carlos Mesa resultara victorioso, probablemente se aproximaría más a Perú, Ecuador, Uruguay, Latinoamérica y Europa, sin descuidar a Estados Unidos, obviamente, para abrir sus cartas. Por último, parece lógico que Luis Arce, por su parte, buscaría apoyarse en Argentina, México y en algún país europeo, en un entorno regional y hemisférico poco amistoso.

VIII

¿Política laica o plurirreligiosa? Actores confesionales y partidos en la política boliviana contemporánea

Eduardo Paz Gonzales

Introducción

Vistiendo un traje negro y ataviada con la banda presidencial, Jeanine Áñez salió al balcón de Palacio Quemado en el epicentro del poder político paceño la noche del 12 de noviembre de 2019. Se dirigió a la multitud reunida en Plaza Murillo rodeada de sus aliados políticos. Al concluir su mensaje a los congregados alzó con sus manos un libro gordo de tapas violetas y concluyó: "Esta Biblia es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, que Dios los bendiga queridos hermanos bolivianos".

Días antes, Luis Fernando Camacho, en ese entonces líder del Comité Pro Santa Cruz y hoy candidato a presidente por la alianza Creemos, había ingresado al mismo Palacio Quemado y colocó una Biblia en el centro del patio central del edificio, arrodillándose frente a la bandera boliviana que preside aquel espacio.

Estas potentes imágenes de los adversarios políticos de Evo Morales fueron reproducidas dentro y fuera de Bolivia. Es innegable que durante el conflicto poselectoral de 2019 se multiplicaron las menciones a Dios, se alzaron crucifijos y biblias y se llamó a jornadas de oración. Una suerte de teatralidad cristiana revistió las protestas en contra del entonces mandatario Morales y en algunos casos se llegó

a escenificaciones que evocan el histrionismo de algunas congregaciones. En ese contexto es comprensible que medios de comunicación hayan resaltado la presencia del aspecto religioso en la protesta y en el gobierno de transición. Sin embargo, los titulares pueden ser engañosos en cuanto replican un tópico de los discursos de los rivales del Movimiento Al Socialismo (MAS): "La Biblia vuelve al Palacio".

Una interpretación literal de ese anuncio puede haber levantado preocupaciones sobre el retorno a un Estado confesional en desmedro de un Estado laico. Pero cabe preguntarse hasta dónde se había construido un Estado laico después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, en febrero de 2009. Cabe igualmente cuestionarse hasta dónde los estilos dramáticos de invocar a Dios por parte de distintos líderes, realmente pueden afectar la estructura del Estado dada la presencia de múltiples grupos de interés en pugna o responden, antes que nada, a tácticas de comunicación política. En ello hay que reconocer que tanto las versiones de un retorno del fundamentalismo cristiano al Estado boliviano, al igual que los recuentos que satanizan a Evo Morales son, ambas, parte de una disputa por la narrativa política, incluso en sus versiones más "potables". Hay elementos que muestran la complejidad de ese escenario de reyertas y mostrarlo es uno de los objetivos de este trabajo.

Esta complejidad se advierte al considerar que Evo Morales mantuvo una relación conflictiva con la jerarquía eclesial católica, pero una relación ambigua con el catolicismo. Meses antes de las elecciones de 2019, Evo Morales promulgó la ley de libertades religiosas (Ley 1161) y en el acto no se abstuvo de lanzar dardos contra la cúpula católica en el país.[1] Recordó el entonces presidente que la conquista se hizo con armas, pero también con la Biblia. Igualmente trajo a colación que algún obispo habría dicho que en Palacio estaba

1 Promulgación de la Ley 1161: https://www.youtube.com/watch?v=H76NwhGGgjs

Satanás. Evo Morales dibujó así un arco de continuidad en el que personeros de la Iglesia católica siguen siendo parte de la colonización del país. Matizó ello, no obstante, recordando que otras personas en la Iglesia católica trabajan con ellos en proyectos sociales, y destacó que el papa Francisco, en su visita a Bolivia, pidió perdón al movimiento indígena por las acciones negativas de la iglesia en el pasado. Las declaraciones son expresivas de una posición frente a los actores religiosos en el país: destacar las formas de práctica religiosa que están más cerca de la opción por los pobres y tener a la mano el argumento del involucramiento de la iglesia con la dominación del pueblo. Pero hay algo más: el hecho mismo de promulgar una ley de libertades religiosas en los meses previos a la elección presidencial se constituyó, inevitablemente, en una señal de campaña electoral; un guiño a las iglesias protestantes y evangélicas para reforzar el reconocimiento que existe en la Constitución Política del Estado a la profesión de distintas creencias espirituales en el territorio nacional.

Los pronunciamientos públicos que apelan a ganar ciertas simpatías circunstanciales tienen por detrás un conjunto de factores estructurales que habilitan, tanto como limitan, los cursos de acción de los actores políticos. En las siguientes páginas se desarrolla el argumento de que la polémica pública que involucró e involucra hoy a iglesias –grey y líderes– con políticos y partidos no se entiende bien reduciendo la cuestión a política laica o confesional. Lo que se ha producido y está en curso es un conflicto por la influencia sobre líderes políticos de las iglesias, así como la negociación de su apoyo a diferentes frentes políticos. Se trata, en fin, de una competencia por tener mejor posición y poder en la intersección entre lo religioso y lo político.

Para comprender aquello nos hemos hecho varias preguntas: ¿Cómo se han situado las iglesias en relación al gobierno de Evo Morales y luego en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez? ¿Qué recursos han movilizado y qué discursos

y narrativas han generado para intervenir en el escenario político, especialmente en el contexto pre y poselecciones 2019? ¿Cómo han empleado actores políticos los recursos de la fe, el nombre de Dios, la legitimidad o no de las iglesias en los conflictos políticos contemporáneos? ¿Cómo se configura el mapa actual de actores religiosos y con qué posible incidencia en el actual escenario (pos)electoral? ¿Cuáles son las narrativas, intereses y demandas predominantes hoy en las iglesias? ¿Con qué recursos cuentan para conseguir esas demandas?

Para responder estas preguntas, este trabajo se apoya en una revisión de hemeroteca digital, principal recurso disponible en el contexto de emergencia sanitaria actual. Se corrieron búsquedas sobre temas conocidos (ley de libertades religiosas, por ejemplo), movimientos ("Con mis hijos no te metas") y personajes de la política local. Con la información de estas búsquedas se identificó información adicional que también fue buscada y sobre la que se desconocía su existencia. Además, se visitó extensamente los portales digitales de iglesias, pastores y líderes cuando estos estaban disponibles y abiertos, además de revisar los planes de gobierno de las distintas agrupaciones y frentes inscritos para las elecciones de 2019 y 2020. En paralelo, se buscó bibliografía adicional en revistas académicas para identificar contrastes regionales de la problemática.

El texto se divide en cinco secciones. La primera está dedicada a la tórrida relación entre el gobierno de Evo Morales y la Iglesia católica, y el tránsito hacia el Estado laico, que como se advertirá, ha tenido mucho más de forma que de fondo. La segunda trae a colación el tema de la agenda de derechos y su rechazo por las organizaciones religiosas, algo que fue fundamental en el posicionamiento de las iglesias evangélicas en la política nacional. En la tercera parte se aborda el devenir de la Iglesia católica desde el periodo de campaña hasta su proyección política actual; mientras que la cuarta parte hace lo mismo, pero para las iglesias evangélicas.

Por último, en el quinto apartado propone un repaso de las formas en que los partidos políticos apropian el tema religioso en sus agendas y perspectivas políticas.

En estas cinco secciones se pueden apreciar varios elementos sustantivos que se analizan con toda la evidencia en las conclusiones: las iglesias han ganado terreno en la arena política después de la crisis política de octubre-noviembre de 2019, pero esta ganancia no se logra después de un periodo de arrinconamiento, como podría hacer suponer la mala relación entre el gobierno de Morales y el clero católico principalmente. Los partidos políticos, incluido el MAS, han buscado formas de hacer equilibrios entre sus posturas políticas y las presiones religiosas de distinta índole. En ese sentido, el Estado laico dio paso, en realidad, a un Estado abierto a múltiples influencias religiosas en vez de refractarlas, como se supone que dictaría la norma. Para los partidos grandes esto ha significado mantener abiertas alternativas de negociación o inclusión con distintos credos, mientras que han sido partidos chicos los que, por su misma proyección, han apostado a concentrarse en nichos religiosos específicos. Ahora bien, quedará claro con la narración de las siguientes páginas que las iglesias actúan desde los límites estructurales que les confiere su propia conformación como iglesias (en un eje de menor a mayor jerarquización) y que, por ende, tienen distinto peso en su influencia política. La clave de la situación es cómo distintos pesos son equilibrados y procesados por los actores políticos.

Evo, la Iglesia católica y el Estado laico

Desde el inicio de su gobierno, Evo Morales entró en entredicho con la Iglesia católica. Si bien él mismo declaró ser católico (*Opinión*, 30/6/2012), esta categoría es, en sí misma, compleja en Bolivia. A diferencia de otros países de América Latina, como México, donde el culto cristiano tiene mayor arraigo tradicional, en Bolivia existen formas a la vez laxas e híbridas de ser católico. Laxas, en cuanto se cumplen las ceremonias

de paso de vida (bautizo, primera comunión, matrimonio) y se reconoce la existencia de Dios sin que haya una exigencia de ortodoxia y doctrina presente en el cotidiano. Híbridas, en cuanto la religión católica asumió formas sincréticas con las formas de espiritualidad andina y, a decir de Spedding (2011: 10), para los mismos practicantes no hay una ruptura entre lo católico y lo andino, sino que ambos son vividos como una sola religiosidad: el catolicismo popular andino.

El culto popular resultante es una concatenación de credo cristiano con innumerables añadidos animistas y rituales dirigidos a otras deidades (Alasitas en enero, ofrenda de mesas en agosto, etc.). Es posible que en ello resida cierto carácter de categoría no marcada del catolicismo en Bolivia y que no haya habido en la historia reciente un enfrentamiento directo entre corrientes políticas e Iglesia católica, como existió en otros países.

Llamará la atención, entonces, que un gobernante que se reconoce como católico en un país donde esto no es ni demandante ni prescriptivo haya entrado en conflicto regular con la Iglesia católica. Se verá en esta sección que, si bien estas pugnas existieron, nunca alcanzaron niveles de beligerancia excesivos como sucedió, por ejemplo, en la Guerra Civil española o la guerra de cristeros en México. Antes de aplicar políticas en abierta confrontación con la Iglesia católica –como serían confiscación de tierras, propiedades, cobro de impuestos por sus actividades o fiscalización de sus actividades–, el gobierno de Morales cruzó con la iglesia la mayor parte de las veces en cuanto se ocupaba de otros temas de Estado: laicidad o agenda de derechos, particularmente.

En ello hay que considerar que el entorno del mismo presidente Morales ha sido diverso en su fe religiosa: el vicepresidente García Linera se declaró marxista revolucionario –lo que hace suponer que es ateo–, pero en 2012 se casó en la Catedral de La Paz (Postero, 2017); Antonio Peredo, senador en el primer gobierno de Evo Morales, sí era un ateo declarado. Adriana Salvatierra, senadora en el

último gobierno de Morales, profesó el protestantismo, y Héctor Arce, que llegó a ser ministro de Justicia después de ocupar muchos cargos, es católico. Félix Patzi, ministro de Educación en el primer gobierno de Evo Morales o Félix Cárdenas, viceministro de descolonización desde el segundo gobierno, han declarado su rechazo a la visión cristiana, en general, y reivindican las cosmovisiones andinas. Es pues un entorno variopinto en lo religioso el que circundó a Morales y que muestra una diversidad que afectó de modos diferentes durante 14 años de gestión.

Donde Evo Morales y el conjunto de altas autoridades del gobierno han coincidido de manera más sistemática ha sido en la oposición con el alto clero católico, asociado en la narrativa del exmandatario a la defensa de privilegios de la élite y el pertrechamiento para conservar fueros y privilegios propios. El primer conflicto intenso del gobierno con la iglesia tuvo al ministerio de Educación en primera línea. El entonces ministro Félix Patzi –luego apartado del gobierno– empezó a tomar medidas para hacer de la educación pública una educación laica y en ello fue respaldado por Morales. La reacción de la jerarquía católica no se dejó esperar. El cardenal Julio Terrazas llamó a defender la fe y la educación, y prontamente se organizaron marchas que exigieron que la propuesta de Patzi sea retirada y que él renuncie (*La Prensa*, 26/7/2007). El II Congreso de la Educación Boliviana fue saboteado por organizaciones religiosas que rechazaron la posibilidad –desestimada por Patzi– de que se prohíba la enseñanza de la religión. En la escaramuza mediática de ese momento se llegó a especular que el gobierno quería debilitar la influencia católica, enfrentarla con las iglesias evangélicas y, finalmente, imponer la hegemonía de tradiciones andinas (BBC, 8/8/2006).

Entre los planteamientos concretos –porque nunca se habló de prohibir la enseñanza religiosa– las modificaciones de Patzi suponían que el Estado dejaría de formar maestros de religión católica y se encargaría de formar preceptores

en principios de distintas religiones, así el sueldo de los profesores pagados por el Estado se haría en un principio de pluralidad y no como funcionarios de la Iglesia católica pagados por el Estado. Aquello puso en alerta tanto a la iglesia como a los profesores de religión, parte del magisterio. Para la Iglesia católica, la medida afecta una parte fundamental de su aparato de difusión: la presencia en las escuelas fiscales de todo el país sin necesidad de erogar recursos.

Conviene recordar que, en esa coyuntura, con el gobierno de Morales dando sus primeros pasos, existían varios temas irresueltos en agenda: se desconocía el tenor del gobierno y en sectores de oposición se temió un encono acérrimo contra la religión. A la vez, el tema de las autonomías departamentales seguía en discusión y, regionalmente, se quería evitar el avance de posturas demasiado andinocéntricas y, por sobre todo, se estaba a punto de ingresar en una Asamblea Constituyente que definiría el dibujo institucional del país. Ello fue destacado por el pastor Alberto Salcedo, de la iglesia cristiana Ekklesía, quien declaró que habría que esperar las deliberaciones de la asamblea sobre el estatus religioso (*ibid.*).

Fue precisamente la Asamblea Constituyente la que cambiaría la oficialidad de la religión católica por un Estado independiente de la religión. Sin embargo, lo ocurrido en la Asamblea admite varios matices por la complejidad con la que se resolvieron las cosas.

Lo primero sustantivo en la Asamblea Constituyente se produjo en la Comisión visión de país. Allí se discutió el núcleo conceptual del Estado y varios de los representantes más importantes de las diferentes tiendas políticas tomaron parte. Entre esas discusiones debió discutirse el carácter religioso del Estado, pero ese tema en apariencia fundamental fue desplazado por otros igualmente candentes. La naturaleza de la comunidad política boliviana era lo que estaba en juego y allí fue que se dieron las discusiones más intensas sobre la forma republicana, plurinacional, multinacional, etc. Esta discusión supuso, además, una ardua confrontación sobre el

carácter de la nación: mestiza o indígena, una o muchas; así como la cuestión de la ciudadanía –que fue tratada también en una comisión específica– como atributo de individuos o colectividades. Sin embargo, la cuestión del Estado laico fue un tema tratado solo tangencialmente (Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2012).

Al volver sobre los borradores de la comisión Visión de País se advierte que el informe de la mayoría, del MAS, definía a Bolivia como Estado laico (*ibid.*, p. 57 y ss.). El informe de la primera minoría, comandada por Félix Cárdenas –luego funcionario del gobierno de Morales–, quien entonces lideraba una bancada bajo el rótulo de Concertación Nacional-Patria Insurgente (CN-PI), igualmente estipuló en su propuesta el carácter laico del Estado. Curiosamente, el documento de justificación de la propuesta de CN-PI menciona a las "huacas" como deidades sagradas que son parte de la comunidad natural. Es decir, en la misma justificación de propuesta de Estado laico se introduce una consideración religiosa sobre la conformación del mundo vital de los humanos en su conjunto.

Según el reglamento de la Asamblea, cada comisión debía presentar un informe de mayoría y uno de minoría. En un ardid técnico, el MAS favoreció a una fuerza diferente pero no opositora –justamente la de Cárdenas– para que su propuesta sea votada como propuesta de minoría. La intención era dejar a la minoría opositora sin propuesta para la plenaria. Sin embargo, dado el conflicto que se avecinó con aquella jugada, la presidencia de la Asamblea aceptó un segundo informe de minoría. Este informe de minoría, en lo tocante a la religión, afirma la libertad de religión y de culto. Significativamente, debido a las críticas enfrentadas por Patzi, como ministro de Educación, recoge la garantía al derecho a una educación religiosa. Si bien, en la propuesta de artículos se habla de libertad de culto, la justificación hace una mención del reconocimiento a la religión católica, que por su impronta en el país debe ser reconocida de algún modo;

aunque luego ello no sea objeto de presión en discusiones posteriores.

En ninguno de los informes se argumenta encarnizadamente para defender la oficialidad de la religión católica. Sin duda, los temas de la comisión fueron polémicos y merecieron más de un conflicto, pero la cuestión religiosa no estaba en primera línea de fuego. En medio de conflictos agudos que posteriormente excedieron a la Asamblea Constituyente (temas de autonomía y capitalía, por ejemplo) la transición hacia un Estado laico pareció realizarse de manera apacible. Jorge Lazarte, connotado politólogo opositor y asambleísta miembro de la Comisión visión de país, señala en un texto de 2009 que la discusión sobre la religiosidad fue sensible (2008). Sin embargo, al cotejar actas de la comisión no se encuentra ni el tema ni lo sensible del mismo. Finalmente, el texto constitucional presentado por la plenaria de la Asamblea para aprobación por voto popular dejó redactada la cuestión señalando: "El Estado es independiente de la religión" (CPE, art. 4).

El informe sobre laicidad del Estado, publicado en 2018 por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, apunta certeramente que en el escenario de la Asamblea Constituyente el desplazamiento de la religión católica estaba anunciado, al considerar que defensores de posiciones evangélicas y protestantes, así como convencidos de las cosmovisiones andinas, convergieron en el interés de adquirir estatus igualitario frente a la jerarquía apostólica. Es posible agregar a esos tres actores con impronta religiosa, algunas variaciones sobre el mismo tema que existen, aunque no conformen frente: la del católico de corte liberal que, manteniendo su credo, sostiene que los asuntos públicos no deben discutirse desde la religión; y la de los ateos de toda laya que llegan al mismo principio que los liberales. En suma, en la Asamblea Constituyente la fragmentación en segmentos de posiciones sobre la cuestión religiosa es lo que permite comprender el resultado formal del Estado laico.

La sorpresa de la agenda cristiana en general –con católicos y evangélicos convergiendo en esto– provino de otro lugar distinto al de la laicidad del Estado. Dentro de la organización de las bancadas en la Asamblea se repitió el patrón de gradación de los asambleístas: algunos asambleístas tomaron posiciones de liderazgo y coordinación a la vez que establecieron comunicación permanente con los jefes de sus partidos o frentes políticos. Otros, muchos, mantuvieron relación de comunicación con sus bases, pero, en general, quedaron subordinados a las estructuras partidarias en lo tocante a temas políticos. De tal modo, sin novedad particular, se podía distinguir líderes de participantes llanos.

Lo anterior funcionó en temas políticos sin implicación de la fe religiosa. Cuando las comisiones o la plenaria debieron debatir temas relativos a la sensibilidad cristiana, sobre el derecho a la vida, muchos asambleístas de base se apartaron de la instrucción partidaria para seguir consejo de sus pastores. Así, los cuadros dirigentes se vieron sorprendidos por la autonomía de asambleístas que votaron según criterios propios, antes que siguiendo la directriz del partido o frente político. Durante las discusiones en la Comisión de derechos, por ejemplo, asambleístas del MAS fueron quienes respaldaron que el derecho a la vida se reconozca desde la concepción, lo que cerraría o dificultaría discusiones posteriores sobre la interrupción del embarazo. Esto, finalmente, aunque no quedó plasmado en el texto constitucional fue parte de las discusiones en comisiones.

Es difícil rastrear esta influencia por algo que parece ser una opción de discreción de distintas figuras públicas. En este sentido, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, participó de un acto en el que líderes evangélicos entregaron propuestas para su consideración en comisiones y plenaria (Agencia de Noticias Fides, 9/4/2007). Sin embargo, entre la documentación revisada no se ha podido encontrar una declaración explícita de la religiosidad de Lazarte, no

obstante su participación en el mencionado acto conlleva la sospecha de alguna afinidad con las iglesias evangélicas.

Aquello es reforzado por datos proporcionados por Huaco Palomino (2017: 90), quien señala una modificación sustantiva hecha bajo la mirada de Lazarte. Según este autor, el texto constitucional aprobado señalaba que el reconocimiento del matrimonio como acuerdo jurídicamente vinculante de derechos y deberes fue modificado en la Comisión de revisión y consistencia presidida por Silvia Lazarte. La comisión introdujo, excediendo sus prerrogativas, que el matrimonio se realizaba entre un hombre y una mujer, cerrando de ese modo la posibilidad del matrimonio igualitario en un proceso jurídico más expedito del que se necesitaría actualmente.

Así, la postura religiosa cristiana, en sentido amplio, no tomó la cualidad del Estado laico como punto crítico de sus intereses. En cambio, encontraron en su misma grey en la Asamblea Constituyente los mecanismos para influir en temas de su interés en los que hay controversia. Así como el entorno de Evo Morales era variopinto en la cuestión de orientaciones religiosas, la bancada de asambleístas también lo era. Mientras en ciertos temas políticos de reivindicación cultural o derechos políticos y económicos de corte igualitario y redistributivo hubo convergencia, en cuestiones de sensibilidad religiosa se produjeron fisuras dentro del mismo frente del MAS.

Agenda de derechos o ideología de género

La atención de las iglesias cristianas, en sus diferentes vertientes, sobre los temas de valores tradicionales en la familia es lo que caracteriza su agenda de demandas específicas. Si bien es posible rastrear señales de apoyo de jerarcas de la Iglesia católica a causas más amplias –como la lucha autonómica en los años 2006-2009 o la demanda de capitalía durante la Asamblea Constituyente–, esto también se replica de manera más localizada: alto clero de Santa Cruz más autonomista, alto clero de Chuquisaca más próximo a

la capitalía. Otras cuestiones, sobre las que se vuelve más adelante, como la limitación del poder de Evo Morales en el gobierno si convoca a comunicados en común por los voceros de la Iglesia católica. En ello las iglesias evangélicas resultan, por su propia estructura y burocracia –o por la escasez de ellas, en realidad– menos decisivas a la hora de movilizar a sus adeptos.

Los temas que movilizan de manera más eficiente a la feligresía cristiana, al mismo tiempo, son aquellos en los que hay un impulso en dirección opuesta de lo que, por ahora, llamaremos "agenda de derechos" y que demandan matrimonio igualitario, despenalización del aborto, educación laica y en derechos sexuales, además de la denuncia de la violencia machista, incluida la dimensión del Estado como cómplice por la pesadez de su reacción jurídica. Esta agenda de derechos ha registrado un florecimiento en su empuje y vigor desde inicios del siglo XXI, posicionándose como paraguas de movimientos sociales más activos de los últimos años. Su presencia constante en medios, campañas de información, *lobbys* legislativos les han permitido poner en discusión sobre normativa legal los temas de su interés en distintos países.

La presencia de los activistas de la agenda de derechos –una expresión que, en realidad, sirve para nombrar las más diversas posturas políticas que coinciden en estas demandas– ha producido una reacción opuesta entre sectores de valores más tradicionales. En los últimos años se ha confeccionado una narrativa y repertorio propio de esta reacción tradicionalista, y ellos han empezado a denunciar lo que llaman "ideología de género" y a utilizar epítetos denigrantes como el de "feminazis". Personajes como Agustín Laje, politólogo argentino, han ocupado el lugar de intelectuales de una derecha, que a decir de Juan Elman (s/f), de decadente ya no tenía intelectuales. Llamativamente es una versión que quiere dar la lucha cultural en términos gramscianos y, al mismo tiempo, acusa al "marxismo cultural"

(gramsciano, quieren decir) de librar una batalla ideológica contra los valores tradicionales. Hay, sin embargo, una cosa lograda en el abordaje de los ideólogos conservadores como Laje, Gloria Álvarez y Alex Kaiser, y es la renovación de la narrativa conservadora por contar con un marco teórico desde donde producen argumentos.

Esta acción ideológica que existe a nivel continental tiene su resonancia en Bolivia.

En 2017 el gobierno de Evo Morales trató de aprobar un nuevo Código de Procedimiento Penal. En sí, la empresa era arriesgada porque las modificaciones al Código Penal afectarían muchos frentes a la vez. Tal cual, el gobierno tuvo que lidiar fundamentalmente con el rechazo al código por las modificaciones relativas a lo que se entendía como mala praxis médica, que movilizó a todo el gremio. Pero, simultáneamente, las iglesias convocaron a movilizaciones y marchas pidiendo que no se ampliaran las causales de interrupción del embarazo, lo que se contemplaba en el artículo 153 del proyecto (*El Potosí*, 18/11/2017).

Entre los primeros involucrados en la organización de la marcha aparece el denominado Consejo Nacional Cristiano, encabezado por Luis Aruquipa, quien demandó ser recibido por el presidente a quien en ese momento todavía llamaba "hermano". La marcha se convoca con una narrativa que dice ponerse por encima de religiones, partidos e ideologías a fin de defender algo más primordial como es la vida. En consonancia, la marcha se denominó "marcha por la vida" y partió de Caracollo (Oruro) rumbo a La Paz. A poco de iniciada la protesta, la Conferencia Episcopal Boliviana se sumó al contingente. Según un medio digital, la participación católica fue fundamental porque hasta ese momento la marcha era de siete personas (Grupo Centro, 11/20/2007).

En Santa Cruz otros pastores tomaron iniciativas de marchas que llamaron la atención de los medios de comunicación. El pastor Humberto Peinado, de la llamada Iglesia Cristiana de la Familia, fue el personaje mediático de

la movilización que declaró que es "una aberración querer solucionar la pobreza matando niños", en una interpretación antojadiza de la redacción propuesta en el proyecto.[2] Más allá de la exageración del pastor Peinado (que luego fue candidato vicepresidencial de Víctor Hugo Cárdenas, con Unidad Cívica Solidaridad, UCS), está el hecho de que las iglesias evangélicas, tanto como la católica, estaban prestas a oponerse al proyecto. La marcha convocada en Santa Cruz, según el recuento hecho por la plataforma Yo Amo la Vida, congregó 200 mil personas.[3] Por su parte, la marcha proveniente de Caracollo, a su entrada a La Paz, llegó a reunir a "miles" de marchistas, según el reporte del matutino *Página Siete*. Si bien la marcha que partió de Caracollo era esmirriada, las manifestaciones urbanas demostraban más músculo de la capacidad de convocatoria. Como grupos que activan, las manifestaciones prestan su servicio de visibilización de la demanda, pero si bien la convergencia en una demanda por parte de las iglesias demuestra capacidad de convocatoria, también la confunde en la diversidad de credos que acaban

2 El artículo 153 en su párrafo quinto establecía que no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer en las siguientes circunstancias: se realice hasta las primeras ocho semanas de gestación; sea estudiante; tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos. Tampoco constituirá infracción penal –continuaba este artículo– cuando el aborto se realice por prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles para la vida. Asimismo, cuando sea consecuencia de la reproducción asistida no consentida por la mujer o que al embarazo sea consecuencia de la violación o incesto, o la embarazada sea niña o adolescente. Fuente: https://www.minsalud.gob.bo/2730-ministra-campero-articulo-153-del-codigo-penal-es-un-logro-historico-de-las-mujeres-bolivianas

3 https://www.facebook.com/PlataformaProVidaFamlia/videos/1381852241851061/

revueltos en una demostración pública. Ninguna iglesia puede, por sí misma, atribuirse sola la capacidad de convocatoria.

Sobre la ampliación de las causales de interrupción del embarazo, Evo Morales, en su momento, evadió el tema. En declaraciones reproducidas en *El Deber*, Morales afirmó desconocer el detalle de lo que discutía la Asamblea al respecto y concedió que era un tema polémico que necesitaba debate. Las declaraciones expresan la cautela del entonces presidente, pero también cierta distancia sobre la lucha por algunos derechos. La cautela proviene del hecho de que Morales, un hombre proveniente de la clase campesina y forjado en la lucha cocalera, entiende el abanico de luchas sociales de izquierda, pero no se encuentra compenetrado con todas. Incluso en sus mejores oficios por respaldar luchas de mujeres, Morales acaba pareciendo poco apropiado desde la perspectiva y sensibilidad de las demandas de género y sus activistas. Éste es un problema mayor porque devuelve, de modo práctico, la brecha que separa sensibilidades ilustradas de clase media con las formas más espontáneas de sensibilidad popular.

Cuando se presentó el proyecto de Ley de Identidad de Género en 2016, los proponentes, asambleístas de clase media del MAS, convencieron a Morales de la importancia de la ley y de la buena nota para un sector de la población. Morales aceptó y se convocó de manera rauda a los asambleístas para que la ley sea discutida sin dilaciones. Lo que sabían los diputados de clase media es que no debían dejar tiempo a que los asambleístas creyentes consultasen con sus pastores o curas para tratar así de que voten por la ley siguiendo su propia convicción o intuición, librados de la presión religiosa. El tratamiento de la ley y su promulgación fueron expeditos y la reacción en medios estuvo controlada por la satisfacción de colectivos GLBT. Efectivamente, no se había dado tiempo a las iglesias para reaccionar.

Sin embargo, esta ley fue llevada a consideración del Tribunal Constitucional por diputados de oposición de orientación conservadora (Horacio Poppe, entre ellos) y

por la plataforma por la Vida y la Familia, una organización evangélica cuyos mensajes se encuentran en franca oposición a la agenda de derechos y a las posturas feministas. Cinco meses después de la promulgación de la ley, el Tribunal Constitucional señaló que artículos de la ley relativos al ejercicio de derechos –matrimonio, adopción– eran inconstitucionales. En virtud de ello, la ley quedaba inutilizada por no tener efectos jurídicos reales. No es difícil sospechar que la postura conservadora del Tribunal Constitucional obedece a una comprensión tradicional de la familia que, sea o no por influencia directa de las iglesias, en el fondo comulga con ellas.

Un elemento que hay que considerar en la acción de las iglesias evangélicas, más contemporánea, es que ésta no se ha limitado a interponerse en la legislación del MAS. En fecha reciente, cuando la presidenta Jeanine Áñez confirmó su alianza con SOL.bo, partido de Luis Revilla, alcalde de La Paz, Luis Aruquipa cargó en contra de esa alianza. Aruquipa, como presidente del Consejo Nacional Cristiano y vocero de Iglesias Evangélicas Unidas, criticó la alianza de la agrupación de Áñez con Revilla porque este último apoya causas GLBT (Éxito noticias, 1/25/2020), a través de la gestión de la alcaldía paceña. Esa alianza, según este dirigente, le haría perder no solo el voto evangélico sino, además, el voto católico: 95% de la población, de acuerdo con Aruquipa. Hay que destacar que, sin tener un control efectivo del voto confesional, Aruquipa amenaza con incidir en cómo se decante éste.

Más allá de la especulación de Aruquipa, hay que retener el hecho de que, en términos programáticos, este dirigente dibuja una línea en la arena: ideología de género, matrimonio homosexual, las intenciones de destruir las iglesias por parte del Foro de São Paulo –al cual Revilla pertenecería–, aborto libre, etc., son cuestiones que están más allá de lo que aceptan, venga de donde venga. En las siguientes páginas el rol de ciertos liderazgos evangélicos seguirá siendo tratado por su protagonismo en eventos fundamentales, pero igualmente

quedará más claro que se trata de un actor que presenta dificultades para ser procesado por otros frentes políticos.

La Iglesia católica: el poder de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)

La candidatura de Evo Morales estuvo en tela de juicio desde el inicio del proceso electoral. La derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 quedó como una espina clavada en el costado. Cualquier palabra empeñada por Morales sobre respeto de la voluntad popular era acorralada por medios y redes sociales porque ya había faltado a su compromiso. Como dice Bourdieu, el capital político está asociado a una forma de ser percibido, y en el caso de Morales esa percepción estaba degradada en todo el espectro de sus opositores. No se trataba solo de que sus opositores sean sus detractores –algo que, por lo demás, es obvio– sino de que se sospechó (y se estimuló la sospecha) de que una jugarreta del MAS estaba en ciernes.

La Iglesia católica, en voz de representantes oficiales de la CEB, se hizo eco de aquella desconfianza. En junio de 2018, Toribio Porco Ticona fue nombrado cardenal por el papa Francisco, constituyéndose en la más alta autoridad de la Iglesia católica boliviana. Porco Ticona, un religioso de origen humilde y que en términos de etnicidad boliviana podría ser considerado indígena, mostró simpatías con Evo Morales y declaró, en más de una ocasión, que son amigos. Tal vinculación llevó a que la prensa muy pronto le pregunte por su opinión sobre el 21F; la respuesta de Porco Ticona fue evasiva, invocando justamente la amistad que le une con Morales. El contraste era sustantivo: el anterior cardenal –Julio Terrazas (1936-2015)– mantuvo una relación accidentada con Morales.

Lo anterior causó revuelo porque Porco Ticona se convertía, incluso sin decir nada, en voz disonante. La Conferencia Episcopal pronto lanzó un comunicado en el que apuntaba que Porco Ticona no cumple tareas de vocería

oficial de la Iglesia católica, pues esos cargos se eligen dentro de la CEB y sus determinaciones se toman como conjunto. Un año antes –y luego de manera insistente–, la Conferencia Episcopal pidió respeto a los resultados del referéndum de 2016.[4] Las declaraciones ambiguas apuraron a la Conferencia a aclarar que el cardenal puede tener sus opiniones, pero que no se trata de la postura oficial de la Iglesia católica, que, decían, pedía el respeto al voto y a la Constitución.

El cardenal había sido desautorizado frente a los fieles. Inclusive, aquello provocó reacciones de crítica desde las esferas del MAS, indicando discriminación de los obispos en contra del cardenal. Parece plausible sospechar que la elección del cardenal Porco Ticona es consistente con las intenciones del papa Francisco de vitalizar la iglesia desde sus bases humildes y en ello confluye con el estilo narrativo de Evo Morales. Francisco y Morales se reunieron un par de veces y el estilo del primero sintonizaba mejor con la comprensión de la Iglesia católica que gusta a Morales. La designación del cardenal Porco Ticona fue del agrado del MAS, pero, en los hechos, se vio pronto que la Conferencia Episcopal lo dejó solo, algo que nunca había pasado mientras Julio Terrazas vistió el solideo rojo.

Lo anterior no deja de ser paradójico. Durante el papado de Benedicto XVI, este criticó mucho las conferencias episcopales porque, según él, no se apoyaban en ningún lado de la doctrina católica. En fin, era una instancia fuera de la jerarquía eclesial en forma y señalada como impropia. Fue en el papado de Francisco, menos ortodoxo en la interpretación de la doctrina y más volcado a las funciones sociales de la iglesia, que las Conferencias Episcopales cobraron bríos de nuevo. Que la CEB haya sido la instancia que neutralice al cardenal nombrado por Francisco muestra que dentro del catolicismo se establece también un campo de luchas específico y que no es ajeno a las contiendas políticas

4 https://www.youtube.com/watch?v=KXhvCE1p6IA

profanas. Sin embargo, actualmente en Bolivia carecemos de una mirada más profunda sobre las relaciones de fuerza dentro de la Iglesia católica.

En todo caso, hasta el día de hoy, el cardenal Toribio Porco Ticona no ha recobrado una voz propia en la arena pública. Al iniciarse la crisis electoral, los obispos se encontraban en Roma en un sínodo en el que se trató el tema de la Amazonía. El 22 de octubre de 2019, dos días después de los comicios, los obispos hablaron de "signos evidentes de fraude" en un video en el que aparecen juntos (Vatican News, 22/10/2019). Sorprende la audacia de la declaración si se considera que todavía estaba en discusión qué había ocurrido y tomaría semanas la realización de la auditoría de la OEA. Sorprende aún más la declaración porque el estilo oral de los sacerdotes al manifestarse públicamente suele referirse de modo oblicuo a los hechos de la política profana. Después de esas declaraciones, la CEB se había jugado por una posición.

A su retorno al país, los obispos, desde sus diferentes sedes en los departamentos, siguieron pronunciándose, volviendo la mayor parte del tiempo a su estilo genérico en el que piden por la paz y el respeto a la vida, llamando al diálogo como medio de salida del conflicto. Pero en sus intervenciones se deslizan breves comentarios que muestran el lado que toman en el conflicto: monseñor Scarpellini, en la diócesis de El Alto, habla en su misa de la ilegitimidad del gobierno;[5] en Santa Cruz, monseñor Gualberti manda un mensaje para reconfortar a la gente que se encuentra en paro en contra del gobierno[6] y celebra que la fortaleza de los movilizados sea la fe. El secretario general de la CEB, Pesoa, se pronuncia el 8 de noviembre y convoca a deponer la violencia con un mensaje más ecuánime entre los grupos en conflicto.[7] Se trata de un momento en el que la iglesia hace uso amplio de sus medios de

5 https://www.youtube.com/watch?v=De4hDDwc7-c [min 8']

6 https://www.youtube.com/watch?v=df4KmtxD6xo

7 https://www.youtube.com/watch?v=izJGRLPkMqE

difusión y son constantes las conferencias de prensa a las que convoca (tres en siete días) y los mensajes son reproducidos en su canal de YouTube. Llamativamente, el cardenal aparece solamente en uno de 47 videos subidos a la red en los días de crisis, sumando 1 min 37 s de participación. Mientras tanto, el mismo canal de YouTube en esos días retransmitió, íntegra (11 min), la intervención Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El mensaje del cardenal, genérico en buena voluntad y llamados a la paz, ocupó la décima parte que el discurso del diplomático uruguayo. Lo anterior sugiere un orden político dentro de la iglesia más enrevesado del que se puede ver desde afuera.

Igualmente significativa resulta la prédica de los obispos en sus iglesias en los domingos posteriores a la renuncia de Morales. "Dios gobierne a Bolivia", titula una cápsula difundida, del mismo modo que la prédica llama a la reconciliación en el país, así como a recibir a Dios para reconstruir el país. Los tonos de la prédica indican el regocijo por el retorno de Dios a su pueblo y las tareas de volver a edificar –sugiriendo el pasado reciente como de devastación y el cultivo del odio de unos contra otros.

El 1 de diciembre los videos subidos al canal de YouTube que sirve como palestra de la Iglesia católica retornan a una aparente normalidad. Se vuelcan a la celebración de la Navidad y cubren eventos religiosos como los congresos de franciscanos en Bolivia. Hay, por otra parte, un tema que en 2020 se convertirá en eje de atención dentro de la iglesia: la Amazonía. Fue a instancias del papa Francisco que se llevó adelante el sínodo sobre la Amazonía como momento de delineación de una agenda de acción que incluye dimensiones de cuidado ecológico, evangelización intercultural con los pueblos indígenas y un interés por las condiciones de explotación de recursos naturales, pero también de los mencionados pueblos. En 2020 se han hecho regulares las reflexiones eclesiales sobre la situación de y en la Amazonía, trayendo a colación, por ejemplo, las quemas y

chaqueos para expansión de tierras de cultivo, con menciones al descontrol de los incendios forestales durante septiembre de 2019, en el gobierno de Morales.

Ciertamente, el gobierno de Morales procuró llevar una relación dialogada con la agroindustria del Oriente boliviano, lo que le llevó a flexibilizar su posición de los primeros años, enemiga de la expansión de monocultivos de exportación y del uso de semillas transgénicas. El poder económico de la agroindustria, sin embargo, eventualmente retiró sus pretensiones de control de la política del sector exportador, pero recibiendo a su vez condiciones para mantener su producción y ganancias. En ese marco fue que, en septiembre de 2019, el chaqueo dirigido a la expansión de la frontera agrícola se salió de control y se convirtió en desastre nacional por la quema del Bosque Seco Chiquitano –que colinda con la Amazonía. La Iglesia católica, entonces y luego del sínodo referido, volvió sobre el tema, criticó la falta de cuidado y llamó a los actores a concertar acciones positivas para la región. A mediados de 2020, los católicos se encontraban activos en esta línea, haciendo seminarios sobre la Amazonía. Sin embargo, ante una coyuntura marcada por nuevos incendios, desde julio la prensa digital no registra críticas de la iglesia referidas al manejo de la emergencia. Contrastan el silencio repentino de la jerarquía católica con su anterior elocuencia.

"La era de Evo está llegando a su fin y la de Cristo está naciendo"

Se mencionó que la Ley de libertades religiosas fue promulgada en abril de 2019, seis meses antes de las elecciones generales. Imposible, por lo tanto, no ver en la rúbrica de Morales un acto con guiños proselitistas. Se habló ya de la relación difícil de Morales con la jerarquía católica, así como se comentó que en filas del MAS no han faltado los representantes evangélicos. Igualmente se ha comentado la influencia conocida de los pastores sobre sus asambleístas. No resulta extraño por

ello que con la Ley de libertades religiosas el gobierno de Morales haya apuntado a, por lo menos, suavizar la relación con los pastores, asegurándoles un conjunto de derechos y mostrando apertura para entablar negociaciones. En este "toma y daca" entre cultos, la ley afirmaba, una vez más, que la Iglesia católica era una entre varias.

Una de las observaciones que se hizo a la ley –y que fue polémica antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa– es la obligación relativa a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre sus estados financieros, las características de sus actividades y otros detalles internos. Cuando esto fue planteado en el anteproyecto de ley, el temor de las iglesias era que el gobierno tenga autoridad suficiente para fiscalizar sus actividades, pero particularmente sus finanzas; más aún cuando la ley reitera el carácter no lucrativo de las organizaciones religiosas. La Asamblea llamó a representantes de las iglesias e instalaron una mesa de negociación. Según la prensa, en los borradores de la ley se establecía el deber de las iglesias de tributar (*El Universo*, 26/3/2019), no obstante, la norma finalmente aprobada no hace mención de tributación o impuestos.

Por otra parte, algo que satisfizo a los representantes de la iglesia fue el reconocimiento de la enseñanza religiosa y la reafirmación de la validez de los establecimientos de educación religiosa en los distintos grados. Igualmente, el Estado se comprometió a respetar la formación que curas, pastores u otros pudieran recibir según sus propias convenciones. En ese sentido, la reyerta de una década atrás en la que las iglesias temían que se les quite aquel fuero había quedado definitivamente saldada. Líderes de las iglesias que participaron en las mesas de discusión del proyecto de ley, como Alberto Salcedo, de Ekklesía, mostraron su beneplácito. Otros, sin embargo, como Luis Aruquipa, del Consejo Nacional Cristiano, embistieron en contra del gobierno con las siguientes críticas:

> En la exposición de motivos, en el lineamiento seis, dice claramente: toda actividad religiosa y espiritual de los bolivianos y sus organizaciones religiosas y de gremios espirituales se constituyen en fuerza viva del proceso de cambio, los religiosos, las iglesias no estamos en el proceso de cambio. Es decir: no quiere que adoremos a Dios, sino quiere que adoremos al proceso de cambio.[8]

Aruquipa denunciaba, con ello, unas supuestas segundas intenciones de la ley. Prosigue el pastor, precisando que expuso tres problemas en la ley. El primero se refiere a las consideraciones laborales de los pastores u otros servidores religiosos que, según la ley, pueden (aunque esto no es obligatorio) aportar al sistema de pensiones, mientras que los funcionarios (es decir, aquellos que tienen un trabajo en el seno de una iglesia) están sujetos a la Ley General del Trabajo.

La segunda consideración de Aruquipa aludía a la igualdad en la que la ley pone a pastores, amautas y yatiris. Desde el punto de vista de ciertos cultos, amautas y yatiris ejercen prácticas heréticas y propias de las fuerzas negativas, por lo que son denunciados en las prédicas. Aruquipa renegó en su momento de una norma que les obligaría a convivir con ritos que consideran sacrílegos.

En esta misma línea, Aruquipa alude a que la ley enmarca la actividad de las iglesias al amparo del artículo 14 de la CPE, específicamente, el parágrafo 2 que señala la prohibición de varios tipos de discriminación. Según el representante evangélico, aquello les obligaría a guardar silencio sobre homosexuales, aborto y brujería, insistiendo en el carácter protestante de las iglesias y en que ello no se puede coartar (Urgente, 21/3/2019).

El último punto enfila con lo que ya se ha visto es la trinchera principal de las iglesias evangélicas: la lucha contra

---

8 https://urgente.bo/noticia/aruquipa-la-ley-no-quiere-que-adoremos-dios-sino-al-proceso-de-cambio

la ideología de género. Pero, hay que hacer notar que Aruquipa, a diferencia de otros, entiende que su combate contra lo que ve como pecado sobrepasa un marco de derechos *laicicizados*. En ello no hay que dejar de subrayar una nota fundamentalista en su actuar. Algo semejante hay que reconocer en su denuncia de que los pastores no pueden estar considerados por la ley al mismo nivel que yatiris y amautas, pues estos no son líderes espirituales –como sí lo son, en cambio, los sacerdotes católicos–, sino que se aproximan a practicantes de brujería.

Es cierto, por otra parte, que durante el gobierno de Evo Morales se dio cabida a amautas y yatiris en celebraciones oficiales. A poco de aprobada la nueva Constitución, por ejemplo, las conferencias organizadas por la Vicepresidencia del Estado comenzaban con quemas de mesas y actos con motivos andinos. En estas celebraciones, la gente debía ponerse de pie y, aun a regañadientes, escuchar la perorata de los celebrantes. Esto se replicó por todo lado en el Estado central, añadiéndose a rituales ya practicados en la administración pública desde antes de Morales: *ch'alla* el viernes en que inicia el carnaval, mesas rituales en agosto, armado de mesas con panes en Todos Santos (fiesta católica pletórica de elementos andinos).

Sería posible argüir que este fomento oficialista a los rituales andinos resultaba incómodo para la ortodoxia cristiana que combate aquello que entiende como pagano, hereje o, en fin, relacionado con prácticas diabólicas. Que la ley de libertades religiosas ponga en la misma categoría jurídica a pastores junto a amautas sería visto, desde esa óptica, como fuente de una contaminación ritual en tanto lo sagrado se junta con lo profano. El pastor Aruquipa abrió así un frente más de pugnas.

Pero ese no fue necesariamente el sentir del conjunto de las iglesias evangélicas. El presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, Munir Chiquie, aseguró que esta Asociación, así como Iglesias Unidas de La Paz y El Alto, y la Asociación Cristiana Evangélica de Santa Cruz

desconocieron a Aruquipa como dirigente o voz autorizada (*El Deber*, 2019). Inclusive declaró que el Consejo Nacional Cristiano ni siquiera tiene personería jurídica, algo que no fue negado por Aruquipa. Este último replicó que los pastores que apoyaron la ley son brazos operativos del MAS. Días antes, Alberto Salcedo, anciano de Ekklesía, había comentado en medios de comunicación que la ley fue de larga discusión y que se reunieron con varios ministros y cabezas de sectores, como Impuestos Internos, y sostuvo que no era posible pensar en una ley que separe a amautas y yatiris (Radio Líder, 22/3/2019).

La forma de existencia de las iglesias evangélicas, rara vez organizadas en jerarquías escalonadas de gran organicidad, les provee mucha autonomía. Como ha señalado Seman (2019), esto las hace muy plásticas para su expansión en el terreno mismo de la prédica: el mensaje evangélico puede ajustarse a los contextos y sensibilidades donde se ancla. Pero a la vez, la falta de centros burocráticos origina que haya dispersión de criterios en temas como los de la ley de libertad religiosa. Cabría indagar mucho más sobre las formas de cohesión y capacidad de convocatoria que tienen las organizaciones detrás de Aruquipa y aquellas que lo desconocieron. Entonces, si bien se evidenció que pueden actuar juntas y compartir un terreno en torno a ciertos valores (derecho a la vida desde la concepción, por ejemplo) sus modos de relacionamiento con el Estado o los términos con los que se relacionan con practicantes y celebrantes de la espiritualidad andina responden a evaluaciones diferentes de la situación. Por esos días el mismo Aruquipa amenazó al gobierno con que 2,5 millones de votantes evangélicos no votarían por el MAS (Agencia de Noticias Fides, 20/5/2019). Vista la relación más compleja entre iglesias evangélicas puede concluirse que Aruquipa no está en posición de ofrecer o negar 2,5 millones de votos. Cabe en todo caso tratar retener la masa votante sobre la cual tiene una expectativa de influencia.

El 22 de octubre de 2019, Aruquipa llamó a la desobediencia civil para rechazar lo que calificó de fraude. Su llamado tuvo repercusiones en medios, porque hizo el anuncio en Plaza Murillo, de donde después fue desalojado por fuerzas policiales. Algunos días después, Aruquipa estuvo en el programa televisivo No Mentiras arremetiendo contra el gobierno de Morales tanto como contra la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) por ser aliados sus aliados. Las acusaciones no eran nuevas, ya que en la campaña había señalado a ANDEB como próxima al gobierno, pero también había advertido que las listas de candidatos del MAS y Comunidad Ciudadana tenían representantes GLBT.

Finalmente, el 9 de noviembre el mismo Aruquipa junto a otros pastores logran llegar a las puertas de Palacio Quemado, allí se arrodillan y rezan tomados de la mano pidiendo la intervención sobrenatural de Dios.[9] Evo Morales renuncia al día siguiente.

En la indagación que he seguido no he podido encontrar a Aruquipa en Plaza Murillo el día que Luis Fernando Camacho entra a Palacio Quemado con la Biblia en la mano. Sí se puede encontrar, en cambio, información sobre un reconocimiento que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), presidido por el entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, le hace a Aruquipa. Más aun, Aruquipa es entrevistado para una nota publicada por *The Guardian* (27/1/2020) en la que se examina cómo los cristianos se atribuyen haber sido fundamentales en la defenestración de Evo Morales. En esa entrevista Aruquipa declaró: "La era de Evo está llegando a su fin y la de Cristo está naciendo". Si bien las relaciones dentro de las iglesias cristianas tienen sus tensiones, también se evidencia que Aruquipa se ha convertido en un personaje mediático y político reconocido por una pluralidad de actores.

---

9 Página de Facebook del Consejo Nacional Cristiano (9 de noviembre de 2019).

Aspiraciones políticas cargadas de fe

Varios candidatos se propusieron y postularon para enfrentar a Evo Morales en las elecciones de 2019. En el trayecto hacia las elecciones, unos más que otros pusieron sus credenciales de fe como garantía de programas con orientación hacia ciertos valores. Las candidaturas más fuertes, según los primeros sondeos, fueron menos ostentosas de orientaciones religiosas: las tres que arrancaban mejor –el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dijo No (BDN)– mantuvieron mayor discreción sobre temas que pudieran producir polémica en términos de valores. El MAS, como se vio, juntando gente de sensibilidades religiosas muy distintas, igual que CC. Al inicio de la campaña, Ortiz, de BDN, declaró que es católico, pero que eso no debería ser parte de la gestión de lo público. Primer elemento importante: habiendo un electorado con varios matices religiosos, incluyendo los que apuestan por prescindir de la religión en lo público, tomar partido estricto por una opción puede ser contraproducente.

La situación es distinta para partidos que están buscando afianzarse en un nicho específico. Protestas en contra de políticas específicas de Evo Morales cohesionaron sensibilidades cristianas, lo que brindó la oportunidad de apostar a conseguir un voto en particular. Así el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, devenido evangélico, participó en una marcha por el respeto a la vida, saliendo de una suerte de retiro de la vida pública. El pastor Humberto Peinado, activo en la plataforma por la vida y la familia, también fue activo en la organización de estas protestas en Santa Cruz. Ambos luego conformaron el binomio presidencial de UCS, partido venido a menos sin orientación religiosa definida y que carecía de figuras relevantes.

Cárdenas y Peinado apostaron por una línea dura de valores cristianos cruzados con teología de la prosperidad. El programa de gobierno de UCS, un documento de 11 páginas, insiste en su primera parte en la defensa de la familia y de la vida, y luego hace un punteo de medidas de liberalismo

económico. Cárdenas generó polémica en sus apariciones en medios de comunicación por el anuncio de medidas controvertidas como liberalizar la tenencia de armas a fin de que las mujeres se defiendan. Sin embargo, UCS no llegó al 1% de la votación en octubre de 2019. En ese caso el nicho evangélico no reaccionó de manera positiva a la candidatura.

Otra situación fue la del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que, en primera instancia, postuló a Jaime Paz, quien luego se retiraría. El PDC encontró en Chi Hyun Chung, un pastor presbiteriano coreano-boliviano, un sustituto para la candidatura a la presidencia. Llamativamente, el programa del PDC evoca un conjunto de pensadores católicos europeos con una mirada católica sobre lo que es la justicia social, algo que podría parecer más propio del extinto Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) que del candidato presbiteriano.

Chi, que se sumó de modo tardío a la campaña, levantó aún más polvareda que Cárdenas con sus declaraciones: aseveró que la población GLBT necesita tratamiento psiquiátrico (*Correo del Sur*, 03/9/2019) sugiriendo que padecen un desorden psicológico. Lo anterior le mereció una respuesta de descalificación desde los colectivos GLBT, que lo pusieron en la mira. En un tenor semejante, Chi explicó que el aumento de feminicidios se debe al abuso que las mujeres ejercen sobre sus esposos (*Correo del Sur*, 2/10/2019), quedando nuevamente en el centro de la polémica. Como pastor evangélico, las posturas de Chi no son sorprendentes en cuanto se ajustan a la agenda de defensa de la vida en contra de la agenda de derechos. Si bien Cárdenas mostró un tono agresivo, Chi no se quedó atrás: ambos utilizaron tonos duros para hablar de población GLBT o de las demandas de mujeres. Chi, sin embargo, tuvo más éxito. Según el cómputo oficial (luego anulado por ley[10]), Chi alcanzó el 8%. Las encuestas

10 La Ley 1266 (Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales), de 24 de noviembre de

de intención de voto mostraron el crecimiento de Chi, que pronto peleaba el tercer lugar con Óscar Ortiz. Su crecimiento fue tan sorpresivo que circularon versiones de que era un candidato manufacturado por el MAS para dividir el voto conservador.

Julio Córdova, al dar cuenta de las características de Chi, menciona lo siguiente:

> Chi condenó el "paganismo" de Evo Morales por "idolatrar" a la Pachamama (madre tierra). Afirmó que el trágico incendio en los bosques de tierras bajas (Chiquitania) por más de 70 días, que consumió cerca de 4 millones de hectáreas, era un "castigo de Dios" porque en Bolivia se estaban aprobando leyes a favor de las diversidades sexuales. Dijo que las personas GLBTI necesitaban tratamiento psiquiátrico. Señaló sin ruborizarse que la violencia hacia las mujeres era una reacción compresible frente a lo "contestonas" que se volvieron ellas, y a su falta de sumisión al hombre. Dijo que había que educar a las mujeres para que aprendan su rol en el hogar (cocinar y cuidar a los hijos). Se definió como un "capitalista cristiano" y, al igual que Bolsonaro, señaló que el centro de su programa de gobierno es "colocar a Dios en primer lugar en Bolivia" (Córdova, 2019).

Es el mismo Julio Córdova quien, analizando las encuestas de intención de voto, llega a la conclusión de que mientras el voto del MAS y CC en 2019 se asocia a ciertas clases sociales, la votación de Chi es transversal a las clases. Chi es la muestra eficiente de la convocatoria, a la vez, tanto del voto evangélico (¿quizás porque es pastor?) como de quienes desconfían de los políticos tradicionales.

Ambos programas de gobierno aúnan un conjunto de valores conservadores con un liberalismo económico de estilo estadounidense: la imagen del *self-made man* y un

---

2019, "…deja sin efecto legal las Elecciones Generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados" (inc. i, art. 2).

país construido con base en emprendedores. La impronta de Trump y de Bolsonaro en la política regional se deja sentir en la aparición de estas candidaturas, a la vez que corporizan la reacción a la llamada "ideología de género". Es un escenario de transformaciones en curso, por lo mismo debe quedar apuntado como un tema de exploración todavía por ser trabajado.

Las encuestas de intención de voto previas a la elección de 2019 preocuparon al conjunto de la oposición de Evo Morales por la posibilidad de una victoria del binomio oficialista en primera vuelta. Desde diferentes posiciones opositoras se lanzó la consigna del voto útil para alcanzar la segunda vuelta. En los hechos, el voto útil favoreció a la candidatura de Carlos Mesa, lo que se evidencia en el desplome de Ortiz en el último tramo de la campaña. En el esquema de poder regional, la pérdida de peso de Ortiz restaba iniciativa política a sectores cruceños. Dieciséis días antes de las elecciones, el Comité Pro Santa Cruz (CPSC) llamó a un cabildo, convocado, significativamente, a los pies del Cristo Redentor. Ahí, frente a una masa nutrida –más de un millón y medio de asistentes, según el CPSC–, el Comité instaló una agenda en la que anticipó una reacción de resistencia frente a un posible fraude, además de demandas sobre la política de tierras y el federalismo.[11] Antes de que las elecciones se produjeran, la idea del fraude pasó a ser de uso común en el léxico preelectoral y se difundió desde posiciones clave en Santa Cruz. Luego, como reacción en cadena, se sostuvieron cabildos en Potosí, Tarija, La Paz. El presidente cívico, Luis Fernando Camacho, que había tenido participaciones discretas sobre la política el resto de 2019, apareció como figura suprapartidaria de una resistencia anticipada a la prorrogación de Morales en la presidencia.

11 https://www.comiteprosantacruz.org.bo/hitos-historicos-de-la-recuperacion-de-la-democracia/

Sin embargo, todavía la dimensión religiosa no había entrado en funcionamiento.

El 22 de octubre de 2019, el Comité Pro Santa Cruz –autodenominado como "gobierno moral de los cruceños"– llamó a un paro cívico. Otros candidatos como Carlos Mesa y Óscar Ortiz desconocían las elecciones y, como ya se mencionó, las iglesias también pasaron a apoyar las medidas de protesta. En los distintos departamentos, columnas nutridas de ciudadanos protestaban en las inmediaciones de las oficinas de los TSE y sus sedes departamentales. La reacción de las fuerzas del orden fue con gases lacrimógenos y cierre de vías para proteger distintos edificios estatales.

El domingo 20 de octubre, las iglesias evangélicas se reunieron en la plaza principal de Potosí para sostener una velada de oración en medio de los conflictos. Ocho días después, en Santa Cruz, también se realiza una jornada de oración con distintas iglesias, hecho destacado por el mismo recuento de eventos realizado por el CPSC.[12] El 31 de octubre, en un nuevo cabildo en el Cristo Redentor, Camacho citó frases de Morales: "Ni dios me va a sacar del Palacio", recibiendo el abucheo del público presente. Citó otra frase: "La ayuda no va a venir del cielo, Dios no existe", recibiendo un abucheo aún más estruendoso. Sentenció Camacho que Evo no cree en Dios y pretendía usar el feriado de Todos Santos para distraer a los movilizados. Efectivamente, si bien es cierto que Morales propuso un cuarto intermedio por Todos Santos, no he encontrado referencias que respalden las frases atribuidas por Camacho a Evo Morales. Como fuere, el discurso de Camacho muestra cómo la oposición instaló lo que entendían que era la lucha por la democracia, con Dios frente a su antagonista, Morales (quien, por cierto, sí había dicho, años antes, que en Palacio no gobierna la Biblia, sino la Constitución) (Eju.tv, 31/10/2014). Después de

12 https://www.comiteprosantacruz.org.bo/hitos-historicos-de-la-recuperacion-de-la-democracia/

dirigirse al cabildo y referirse a la necesidad de la renuncia de Morales y del TSE, y de establecer, entre las demandas, que Morales debía quedar prohibido de candidatear en próximas elecciones, el presidente cívico concluyó el cabildo haciendo rezar, de rodillas, el Padre Nuestro a los asistentes al encuentro –todo ello retransmitido por las televisoras locales.

En el cabildo del 2 de noviembre, Camacho volvió a presentarse frente a los cruceños y, a través de la televisión, frente a un auditorio nacional. La tarima en la que se situaron los líderes cívicos tuvo como fondo un crucifijo de unos cuatro metros de alto el cual, mientras los oradores se confundían en una masa de personas, permanecía erguido de frente a los asistentes. En el atril del orador, al lado del micrófono, se situó una imagen de la virgen. Ese día, en mitad de su intervención, Camacho pidió rezar nuevamente el Padre Nuestro, convocando a los asistentes a arrodillarse una vez más. Dos días después, en un tercer cabildo, las arengas de presentador, además de una estatua de la virgen de Cotoca y la referencia a la fe como factor común de los bolivianos terminaron de estampar un contenido religioso en las protestas. La lucha convertida en profesión de fe, Dios como baluarte que garantiza que el objetivo es alcanzable y un sentido magnificado de la gesta proveyeron una mística particular a esos días de noviembre de 2019. Son conocidos los eventos posteriores y las particularidades de la renuncia de Morales, desde el Chapare, así como el desborde y celebración de los movilizados en las capitales de departamento. A estos hechos se suma el ingreso de Camacho y del líder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, a Palacio Quemado, Biblia en mano.

La situación de movilización generalizada en el país resultó ser terreno fértil para la búsqueda de abrigo en Dios. Sin embargo, como se sabe por otras luchas y diferentes movilizaciones de otros movimientos, tanto en Bolivia como en el continente, los escenarios de protesta y enfrentamiento no recurren necesariamente a la fe religiosa como instrumento

de cohesión y resistencia a fuerza. La teoría del populismo de Laclau indica que la articulación dentro y entre movimientos se da por la producción de un significante flotante, esto es, un significante que pueda hacer equivalencia entre distintas demandas y presentarse como demanda unificada de diversos intereses. Sin embargo, uno podría encontrar un conjunto de demandas inclusivas más transversales y se podría prescindir narrativamente de Dios.

Los indicios llevan a pensar que fueron el CPSC y Luis Fernando Camacho quienes propiciaron el reposicionamiento de Dios como imagen decisiva en las movilizaciones, aun cuando no necesariamente era un factor compartido por otros contingentes. Fue suficiente que, quien se había convertido en cabecilla de la insurrección insista en el contenido religioso que generó la mística de una cruzada por la democracia. Ello, por supuesto, no es creación *ex nihilo* de Camacho. El conjunto de antecedentes vistos en las páginas previas indica la actividad constante, aunque a veces desapercibida en los titulares de los periódicos, de un peso electoral católico conservador –que no coincide con todos los católicos laxos–, así como de un evangelismo activo y militante que también tiene un peso específico propio.

Cuando Jeanine Áñez fue posesionada como presidenta interina ya se había instalado un modo de comunicación que incorpora la épica religiosa en la "recuperación de la democracia". Siendo Áñez evangélica, los modos le salen naturales. Pero en eso es heredera de los modos histriónicos cultivados durante la protesta por Camacho y el CPSC. La agitación constante de los símbolos religiosos por parte de varios líderes políticos fue una adopción proveniente de enmarcar las protestas contra Morales como si se tratara de una "misión" y, de hecho, llevó a algo más: la alusión a Dios no como referencia moral o inspiración de acción, sino como presencia actuante en los eventos políticos actuales, es decir, una forma propia pentecostal de experimentar la religiosidad (Frigerio, 2019).

Durante la campaña, Óscar Ortiz –que encarnaba la opción competitiva más conservadora (al menos antes de que aparezca Chi Hyun Chung)– utilizó referencias a Dios de un modo que casi podría calificarse como "de cortesía". Concluir mensajes agradeciendo a Dios como la expresión más común de sus modos religiosos. En fin, un uso de etiqueta. En todo caso, luego de las protestas de octubre-noviembre de 2019, se instaló el uso ostensible y ostentoso del nombre de Dios y sus símbolos. Una de las formas teatrales de ese uso se encuentra en el programa de gobierno de Libre 21, agrupación que postula a Jorge Quiroga para las elecciones 2020 y que es pletórica inclusive en numerología, asociando un versículo del Libro de Oseas (Antiguo Testamento) con las protestas de esos días, como verdad revelada por una profecía. Quiroga, no obstante, apenas figura en las intenciones de voto. Lo que Salamanca no da, Dios no presta.

En Jeanine Áñez, la constante referencia a la Biblia, los pedidos de oración o actos como la celebración de Semana Santa en la puerta de la Casa Presidencial durante la cuarentena del Covid-19 muestran una concatenación más coherente de la situación: el uso de Dios se encuentra en la comunicación que mantiene por medios y en los símbolos que usa, pero éstos revisten la estructura del poder burocrático del Estado, además de convocar aparatos de organizaciones políticas previas: Demócratas, de Ortiz y Rubén Costas; Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina –hoy su candidato a vicepresidente–, y SOL.bo, de Luis Revilla –su aliado actual. Es en la conjugación de estructuras políticas reforzadas con discursos religiosos que resulta más eficiente. En el caso de Camacho, que actualmente también es candidato a la presidencia, no se logra el mismo efecto: la pugna entre élites cruceñas lo orilló con el ala más radical, mientras que en Demócratas previeron que desde la presidencia de Bolivia y la Gobernación de Santa Cruz se tienen mejores plataformas para ganar la elección.

Áñez, con todo, apeló a la ambigüedad en su uso de Dios. Siendo evangélica, su mensaje religioso ha mantenido un

tono cristiano neutro, que le habla de igual modo a católicos como a protestantes sin delatar sesgo de orientación. Ha entrado, como lo hicieran antes Evo Morales y Carlos Mesa, en el juego de equilibrar intereses distintos sin espantar otros nichos de votación, aunque fuera acusada de apartarse de los valores cristianos por su alianza con Luis Revilla (ver *supra*). Discursivamente, Dios le ha servido, a la vez, para proveerse de algo que no puede obtener de otro modo: legitimidad. No habiendo sido elegida por el voto ni tampoco pudiéndose reivindicar como artífice o líder de los eventos de octubre y noviembre, no le queda otra legitimidad a la que apelar que la de haber recibido un mandato por gracia divina.

En definitiva, entre el inicio de la carrera electoral, en 2019, y el anuncio de la nueva fecha de elecciones, en octubre de 2020, ha habido una ganancia de terreno para la política que encumbra a Dios y lo incorpora en su discurso y simbolismo. Esta ganancia, sin embargo, no subvierte las estructuras de participación política ya existentes. Aunque ni Dios ni la religión son sustitutos para estructuras partidarias, vínculos con sectores o programas, sí están siendo utilizados como recurso comunicativo que marca la intención de cambio en el campo político: reducir al MAS todo lo posible.

Conclusiones: las artes del funambulismo

La condición de Bolivia como Estado independiente de la religión es poco más que una declaración formal. Para aspiraciones de construcción del Estado Plurinacional, es una referencia empleada por distintos actores en la arena política que buscan limitar la influencia de la iglesia en el Estado. Estos actores son principalmente los grupos que promueven una agenda de derechos relacionados con demandas feministas y GLBT. Su preeminencia en el espacio público es limitada, aunque estratégica: actores vinculados con ONG y financiamiento internacional, con una impronta de clase media letrada que tiene posibilidad de establecer *lobbys* legislativos pero que no se enraíza en movimientos sociales con capacidad de movilización.

Por lo demás, la laicidad del Estado es desplazada por el hecho social de la fuerte presencia religiosa en la sociedad, pero también en el Estado. Bolivia es menos un país laico que un país plurirreligioso en el que distintos actores llevan su fe a los diferentes espacios en los que participan. Una parte del Estado boliviano, principalmente el Viceministerio de Descolonización, ha servido como palestra desde donde se quiso potenciar las cosmovisiones andinas, o al menos la lectura que de estas tuvieron ciertos intelectuales como Félix Cárdenas. Un aspecto de estas cosmovisiones es la consideración del ser humano como un actor en un mundo en el que hay otros actores como *wakas* o la misma Pachamama como instancias con quienes se dialoga.

En términos de los debates del desarrollo o del Vivir Bien, este tipo de miradas, se presume, deberían ser menos "extractivistas" y más "sustentables" en cuanto la naturaleza no es una fuente de riquezas sino una "comunidad" de la que el ser humano es parte. Más allá de que estas posturas han logrado poco en términos de la reconceptualización del desarrollo en un sentido práctico, son evidencia de un reencantamiento del mundo en el que el humano se relaciona con espíritus como parte de su vida ordinaria. Comentaristas como Arnold y Spedding han señalado que estas formas discursivas llevan la cosmovisión a límites de retórica que no tienen contraparte en la vivencia de comunidades o pueblos. Pero aun cuando la espiritualidad fomentada desde el Estado sea más lírica que la espiritualidad concreta de campesinos o indígenas de base, tomó un lugar en el Estado y es defendido por intelectuales y activistas de organizaciones urbanas. Hubo un nicho estatal marcado por la visión espiritual de algunos funcionarios.

Pero las cosmovisiones andinas no son las únicas con existencia en el Estado. Se comentó en páginas anteriores que, en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Legislativa, en ministerios –así como hoy evidentemente en la presidencia–, la cuestión religiosa ha estado y está muy presente en sus variantes cristianas. Votaciones de proyectos decididas

en consulta con guías espirituales de distinta naturaleza son la expresión definida de cómo se mantienen vías de comunicación que van hacía los poderes del Estado. Y en ese mismo orden de cosas, la presidenta Áñez, a falta de recursos de legitimación, ha usado los rituales de la Semana Santa y del Corpus Christi como forma de barnizar una gestión muy cuestionada.

La imagen que se perfila de esto no debería sorprender: el Estado boliviano, caracterizado por una debilidad estructural, ve reflejado dentro de sí mismo la condición multirreligiosa de la sociedad sin capacidad –o cabría pensar sin el interés– de reflectar esa influencia. En vez de un Estado laico se tiene un Estado que negocia, incorpora y entra en tensión con varias religiones y espiritualidades. Esto lleva a una cuestión de fondo: la falta de separación de las esferas de la vida social. Esto, que en la modernidad clásica se considera un rasgo fundacional, en Bolivia se produce como indiferenciación y, en consecuencia, deriva en una arena pública pletórica de vertientes de fe.

Que haya un espacio abierto para una pluralidad de voces religiosas que se hacen presentes en lo público no significa, no obstante, que todas se hagan oír de la misma manera. No todos los actores religiosos pesan igual ni movilizan del mismo modo. En lo que respecta a las cosmovisiones andinas, es su carácter no institucional lo que las ha debilitado después de la renuncia de Evo Morales y por consecuencia de sus funcionarios abocados a esas tareas. Existen asociaciones de celebrantes andinos, pero antes que iglesias son organizaciones gremiales que funcionan para demandar cosas del Estado de manera conjunta, comenzando con su reconocimiento. Pero no hay jerarquía, grey o doctrina específica, sino adecuaciones seculares que se hacen parte de la vivencia cotidiana de la población sin existencia de institución. Esa forma de existencia capilar también se traduce en debilidades para organizarse y presentarse como grupo de presión eficiente, quedando en dependencia de intelectuales que, de llegar al Estado, puedan apoyar.

El caso evangélico muestra mayor organización sin constituirse en institución centralizadora. La forma misma que asumen las iglesias evangélicas, que rechazan la idea de intermediarios de Dios y aceptan, doctrinalmente, que es la Biblia la única fuente de autoridad, se expresa en jerarquías chatas. Cada congregación tiene su pastor, que puede ser parte de redes más extensas de predicadores, pero no se debe a estas, de las que existen muchas. Para fines prácticos –y, justamente, para existir frente al Estado– se conforman asociaciones que cumplen funciones de representación, pero no funciones de organización religiosa.

Dentro de esta dinámica se ha mostrado en las páginas precedentes que hay líderes de agrupaciones con fines específicos. El pastor Luis Aruquipa, del Consejo Nacional Cristiano, ejerce un liderazgo orientado a combatir lo que considera "aberraciones" relativas a la agenda de derechos (interrupción del embarazo, derechos GLBT). Muy activo en sus demandas y en sus posicionamientos públicos, concita el interés de los medios, que le dan coberturas en las que él se posiciona como portavoz de las iglesias evangélicas y amenaza con inclinar la orientación de la votación de los evangélicos. Sin embargo, estas apariciones no las hace sin cuestionamiento de otras asociaciones, como ANDEB, que desconoce esta representación. Cuando Aruquipa convocó a una marcha hacia la ciudad de La Paz fue acompañado por siete personas, aunque luego, en La Paz, las marchas por la "defensa de la vida" congregaron algunos miles de participantes en las que, como ya se sabe, hay de todo y no solo evangélicos. Aruquipa encarna pues la figura de las minorías activas que ejercen presión pública sobre ciertos temas y que adquieren su gravitación por una presencia constante en medios. Otros pastores activos, como Humberto Peinado, luego candidato de UCS, muestran que estas minorías pueden ejercer una influencia estratégica, aunque no decisiva. El 8% logrado por Chi Hyun Chung en los comicios de 2019, si bien difícilmente se explicaría por la acción de activistas como

Aruquipa o Peinado, quedará para mediciones subsecuentes tratar de aislar el factor de estas minorías activas.

El catolicismo, por su parte, es la religión con cuerpo eclesial más consistente y con autoridades bien definidas en una gradación más compleja. Sin embargo, la revisión de la presencia pública de la Iglesia católica mostró la fuerza que tiene la Conferencia Episcopal, en desmedro de la figura del cardenal en un tema sustantivo de la política: el referéndum del 21 de febrero. Los obispos de los departamentos mostraron más músculo y más artes políticas antes y después de las elecciones de 2019, dejando al cardenal como figura aislada. Sin embargo, las pugnas internas en la iglesia no son algo nuevo: durante los primeros años del gobierno de Morales se pudo advertir la existencia de tensiones políticas dentro de la iglesia, principalmente en el periodo de la lucha por la autonomía. El aislamiento del cardenal es un episodio reciente, pero, sin duda, existe un vacío de investigación sobre la forma en que se pugna dentro de la Iglesia católica.

Por otra parte, la misma Iglesia católica se convierte en una máquina pesada de manejar. Su capacidad de adecuación a contextos locales es menor que la de las iglesias evangélicas porque, al final, está supeditada a la jerarquía. Es cierto que la convivencia con las cúpulas del Estado le es beneficiosa, inclusive para posicionarse como mediador de conflictos –a diferencia de las iglesias evangélicas que son demandantes. Inclusive el hecho de que los feriados religiosos sean oficiados por representantes de la Iglesia católica muestra hasta dónde el catolicismo boliviano sigue manteniendo rasgos de categoría no marcada: no estigmatiza. Que la presidenta Áñez, que es evangélica, sea partícipe del ritual católico es indicativo de aquello. El catolicismo puede haber sido hegemónico y haber perdido esa condición, pero conserva fuerza.

Al igual que las iglesias evangélicas, la católica no puede garantizar cómo votan sus fieles. Por cómo ha actuado desde la época preelectoral, se advierte que su fuerza sigue siendo revestir de legitimidad un pedido cuando lo apoya y erosionar una posición cuando está en contra de ella. Hay que

apuntar que la Iglesia católica suele tomar posiciones y, por lo mismo, su rúbrica de legitimidad es algo que se pone en juego regularmente, no de manera extraordinaria. La segunda fortaleza de la Iglesia católica, derivada de su estructura, es la posibilidad de plantearse temas de intervención a largo plazo. Por supuesto, la cuestión de "defensa de la vida" los hace converger activamente con evangélicos, pero la cuestión de la Amazonía –que ha quedado establecida como línea de acción de la iglesia– será un tema a tener en cuenta, más aún por los intereses de diversos actores sobre aquel territorio.

En ese espacio plural pero desigual de las instituciones religiosas, los partidos adoptan estrategias más bien de equilibrio. Se trata, para los partidos grandes, de lograr equilibrios, en primer lugar, entre los no afectados por los temas religiosos en política (quienes, aunque existen, en este trabajo no aparecen, justamente porque no resuenan en las cuestiones religiosas). Y entre ellos, los políticos, que son parte del catolicismo como forma de pertenencia que se ejercita los domingos o en los rituales, pero que no es parte del quehacer laboral. A estos indiferentes se agregan los políticos y los grupos de presión confesionales que buscan inclinar posiciones de llegarse a posiciones de decisión en el Estado.

Se vio en el MAS, por ejemplo, el juego a varias bandas: Morales tratando de acercarse al papa y al cardenal, emitiendo una ley de libertad religiosa y celebrando rituales andinos, lo cual da señales de que los diversos credos tuvieron su lugar en el entonces partido de gobierno. La relación con la Iglesia católica misma fue llevada de manera tensa, sin embargo Morales fue persistente en hablarle a los creyentes afirmando su catolicismo y reivindicando a luchadores como Luis Espinal.[13] En esos términos, el MAS es el más plural de

13 Luis Espinal (1932-1980) fue sacerdote católico jesuita, identificado con la doctrina social de la iglesia y reconocido activista por la democracia en Bolivia en contra de los gobiernos dictatoriales. Fue asesinado por militares y paramilitares el 21 de marzo de 1980, días antes del golpe de Estado de Luis García Meza.

los partidos, algo que se explica por su posición en el espectro político: abarcando todo lo que pueda a partir de su raigambre nacional-popular. En el caso reciente de Carlos Mesa, parece –pero esto es a título de hipótesis– que la apertura religiosa es semejante con una salvedad: el mesismo no apeló a llegar a las masas populares que parecen dejadas a la influencia del MAS. Quizás por eso la posición del mesismo sobre las vinculaciones con las iglesias no se deja ver, probablemente como una forma de adoptar el tono de católico de etiqueta que no compromete nada.

En la parte del campo político que nítidamente se puede catalogar como derecha, las prácticas de buscar equilibrios se mantienen en las alianzas más pujantes mientras que en las alianzas más pequeñas hay un decantamiento más visible por una opción religiosa. Partidos como la UCS y el PDC en las elecciones de 2019 jugaron el factor religioso como su carta principal a fin de apelar a un nicho específico. Esto con su consiguiente riesgo: se apela a un votante específico, convirtiéndose en opción no considerable para quien está en la acera diferente. El 8% de Chi Hyun Chung será la llamada de atención recurrente sobre ese tema: parece el éxito de ese voto evangélico que sale furioso contra tendencias que van en contra de sus valores. Análisis específicos sobre votación podrían mostrar mejor ese perfil evangélico del voto de Chi, pero quedan algunos criterios: ese voto tiene un peso, no un peso que hace gobierno, pero sí uno que hace una bancada y, llegado el caso, minoría con potencial desequilibrante. Se ha llegado a un punto en el que se hará difícil para los partidos descartar la cuestión evangélica sin más.

Las alianzas más relevantes de la derecha adoptan un tono más neutro. Áñez, actualmente, repite un gesto ya hecho por Bolsonaro: presentarse tanto como evangélica como católica. Pero a diferencia de lo que hizo Óscar Ortiz en las elecciones de 2019 –ser el candidato orientado por valores católicos pero que no necesita esa credencial pegada al pecho–, Áñez, tanto como Camacho, han convertido la religión no en una cuestión de orientaciones éticas y credos íntimos, sino del

testimonio de la presencia, aquí y ahora, de la gracia de Dios. Y en ello hay un acento pentecostal: Dios manifestándose en las cosas que pasan, interviniente y efectivo en la tierra. Éste es un rasgo de la política en este momento en el país, que se ignora si perdurará después de la restauración de algún gobierno vía voto, pero que está asociado a los eventos más recientes: la mística y la épica religiosa como parte de una gesta de recuperación de la democracia. Esa vitalidad de la narrativa de salvación es hoy un elemento a tener en cuenta en la arena política y actores sustantivos la están usando.

Bibliografía

Libros y artículos

Córdova, Julio

2019 "Chi y la irrupción del voto evangélico en Bolivia". En: http://www.gemrip.org/chi-y-la-irrupcion-del-voto-evangelico-en-bolivia/

Elman, Juan

s/f "¿Quién le teme a Agustín Laje?". En: *Revista Anfibia*. Disponible en: http://revistaanfibia.com/cronica/quien-le-teme-a-agustin-laje-2/ [consulta: 5 de junio de 2020].

Frigerio, Alejandro

2019 "La experiencia religiosa pentecostal". En: *Nueva Sociedad*, N.° 280, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/la-experiencia-religiosa-pentecostal/.

Huaco Palomino, Marco

2017 "*Laicidades* in the Andean Sub-region: *Laicidad*, Sexuality, and Reproduction in Bolivia's and Ecuador's Constituent Assembly Debates". En: Vaggione J., Morán Faúndes J. (eds), *Laicidad and Religious Diversity in Latin America. Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies*, vol. 6. Suiza.

Lazarte, Jorge

2008 "La Asamblea Constituyente de Bolivia: De la oportunidad a la amenaza". Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/28250051_La_Asamblea_Constituyente_de_Bolivia_de_la_oportunidad_a_la_amenaza [consulta: 5 de junio de 2020].

Observatorio de derechos sexuales y reproductivos

2018 *Diagnóstico sobre la situación de laicidad en Bolivia*. La Paz: Católicas por el derecho a decidir.

Postero, Nancy

2017 *The indigenous state*: *race, politics and performance in plurinational Bolivia*. California: University of California Press.

Seman, Pablo

2019 "¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? Pentecostalismo y política en América Latina". En: *Nueva Sociedad*, N.° 280, marzo-abril, 2019. Disponible en: https://nuso.org/articulo/quienes-son-por-que-crecen-en-que-creen/

Spedding, Alison

2011 *Sueños, kharisiris y curanderos. Dinámicas sociales de las creencias en los andes contemporáneos*. La Paz: Editorial Mama Huaco.

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

2012 *Enciclopedia histórica documental del proceso constituyente* (Tomo III, Informes por comisiones). La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Medios digitales

Agencia de Noticias Fides

09-04-2007 "Presidenta Constituyente recibió propuesta de cristianos evangélicos". En: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/presidenta-constituyente-recibio-

propuesta-de-cristianos-evangelicos-31936 [consulta: 5 de junio de 2020].

20-05-2019 "Desconocen a Pastor que bendijo al binomio: Evo y Álvaro, según Aruquipa". En: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/desconocen-a-pastor-que-bendijo-al-binomio-evo-y-alvaro-segun-aruquipa-397664 [consulta: 5 de junio de 2020].

BBC

08-08-2006 "La supremacía de un credo" por Mery Vaca. En: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_5255000/5255464.stm [consulta: 5 de junio de 2020].

Correo del Sur

03-09-2019 "Chi sugiere tratamiento psiquiátrico para LGBTI". En: https://correodelsur.com/politica/20190903_chi-sugiere-tratamiento-psiquiatrico-para-lgtbi.html [consulta: 5 de junio de 2020].

02-10-2019 "Chi: aumento de feminicidios se debe al abuso de las mujeres contra el hombre". En: https://correodelsur.com/politica/20191002_chi-aumento-de-feminicidios-se-debe-al-abuso-de-las-mujeres-contra-el-hombre.html [consulta: 5 de junio de 2020].

Eju.tv

31-10-2014 "La Biblia no gobierna, dice Evo al presentar palacio que costará más de $us 33 millones". En: http://eju.tv/2014/10/la-biblia-no-gobierna-dice-evo-al-presentar-nuevo-palacio-que-costara-ms-de-us-33-millones/ [consulta: 5 de junio de 2020].

El Deber

2017 "Evo no entra al debate y la Iglesia católica se resiste al aborto legal". En: https://eldeber.com.bo/55683_evo-no-entra-al-debate-y-la-iglesia-catolica-se-resiste-al-aborto-legal.

2019 "Desconocen a Aruquipa tras oponerse a proyecto de ley". En: https://eldeber.com.bo/52786_desconocen-a-aruquipa-tras-oponerse-a-proyecto-de-ley [consulta: 5 de junio de 2020].

El Potosí

18-11-2017 "Las Iglesias evangélicas marcharán en contra de las causales del aborto" Potosí. En: https://elpotosi.net/nacional/20171118_las-iglesias-evangelicas-marcharan-en-contra-de-las-causales-del-aborto.html.

El Universo

26-03-2019 "Iglesias deberán pagar impuestos al Estado boliviano, según nueva ley". Recuperado de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/26/nota/7253225/iglesias-deberan-pagar-impuestos-estado-boliviano-segun-nueva-ley [consulta: 5 de junio de 2020].

Éxito noticias

01-25-2020 "Iglesia evangélicas quitan su apoyo a Añez por Aliarse con Revilla". Recuperado de https://exitonoticias.com.bo/index.php/2020/01/25/iglesias-evangelicas-quitan-su-apoyo-a-anez-por-aliarse-con-revilla/ [consulta: 5 de junio de 2020].

Grupo Centro

11-23-2007 "La CEB se suma a la marcha de evangelistas en contra del aborto". Recuperado de http://www.grupocentro.com.bo/node/1500 [consulta: 5 de junio de 2020].

La Prensa

26-07-2007 "Evo acusa a la Iglesia, pero se abre posibilidad de diálogo". La Paz. Recuperado de https://www.comunidad.org.bo/index.php/noticia/detalle/cod_noticia/83 [consulta: 5 de junio de 2020].

Opinión

30-06-2012 "Evo dice que es católico, pero está decepcionado de la iglesia". Cochabamba. Recuperado de https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/evo-dice-es-catolico-

decepcionado-iglesia/20120630014900422586.html [consulta: 5 de junio de 2020].

Página Siete

25-11-2017 "Marcha contra el aborto llega a La Paz y suma apoyo de miles de religiosos" La Paz. Recuperado de https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/25/marcha-contra-aborto-llega-suma-apoyo-miles-religiosos-160851.html [consulta: 5 de junio de 2020].

Radio Líder

22-03-2019 "Hay grupos cristianos que no aceptan convivir con amautas y gais". Recuperado de http://radiolider97.bo/noticia/4/5447/hay-grupos-cristianos-que-no-aceptan-convivir-con-amautas-y-gais [consulta: 5 de junio de 2020].

The Guardian

27-01-2020 "Satan be gone!: Bolivian Christians claim credit for ousting Evo Morales". Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/jan/27/bolivian-christians-evo-morales-indigenous-catholic-protestant [consulta: 5 de junio de 2020].

Urgente

21-03-2019 "Aruquipa: La ley no quiere que adoremos a Dios, sino al proceso de cambio". Recuperado de https://urgente.bo/noticia/aruquipa-la-ley-no-quiere-que-adoremos-dios-sino-al-proceso-de-cambio [consulta: 5 de junio de 2020].

Vatican News

22-10-2019 "Bolivia. Obispos llaman a vigilar trasparencia del proceso electoral". Recuperado de https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/obispos-bolivia-llaman-veedores-internacionales-vigilar-eleccion.html [consulta: 5 de junio de 2020].

f

IX

La reconfiguración del espacio político en Internet durante la crisis política de finales de 2019

Eliana Quiroz y Wilmer Machaca

Introducción

Internet –y más específicamente las redes sociales– son un nuevo campo de lucha política. Son lugares que congregan a grandes auditorios con los más diversos intereses y donde se delibera, entre otros temas, acerca de asuntos públicos y políticos como las candidaturas a cargos públicos, las decisiones de gobierno o la corrupción en compras estatales.

En la etapa previa a la crisis de octubre y noviembre de 2019, estos espacios digitales tenían diversidad de actores y actoras políticos que apoyaban o atacaban a una u otra organización política. Estaban los guerreros digitales en apoyo al MAS y las cuentas de oposición al MAS, sobre todo las del 21F y las que denunciaban prematuramente un fraude electoral antes de las elecciones. Al igual que la tendencia global, las redes sociales ya se habían poblado de cuentas falsas y *trolls* que convivían con cuentas legítimas, todas generando actividad de opinión, creando tendencias falsas y reales, difundiendo noticias falsas que generaban confusión e incluso atacando cuentas de políticas y políticos con el fin de acallarlas.

Sin embargo, la campaña política digital fue más bien aburrida, las redes comenzaron a arder a partir del final de la tarde del 20 de octubre, a la espera de resultados de las

elecciones, y desde ese día que marca el inicio de la crisis política, la configuración de actores políticos en Internet ha cambiado.

En este documento, brindamos elementos de análisis de tres aspectos de la vida digital ligada a la política y a deliberaciones públicas en Bolivia durante y después de la crisis política de fin de 2019:

- Caracterización de espacios digitales: Facebook, Twitter y WhatsApp.
- Actores políticos de estos espacios: cuentas individuales, grupos políticos, identidades y espacios de difusión.
- Estrategias: lucha por los relatos, informar/difundir/interactuar/desinformar.

Sin duda, hace falta más investigación, documentación y debate acerca de los usos políticos y cambios en la composición de fuerzas políticas en espacios digitales, principalmente por sus efectos en la calidad de la democracia. Como todos y todas tenemos algo que aportar por nuestras vivencias digitales y análisis propios, este documento está totalmente abierto a debate e intercambio de análisis.

Reconfiguración del espacio político en redes sociales

Antes de la crisis política

El Referéndum Constitucional de febrero de 2016 (21F) fue el parteaguas de las estrategias políticas específicas para redes sociales.[1] Antes de este evento, el MAS no las percibía como un espacio de lucha política; después de los resultados del 21F, sin embargo, intentó regularlas, para luego cambiar de

1 En las elecciones nacionales del 2014 y elecciones locales 2015 también se usó Internet como parte de las campañas, pero se lo hizo, mayormente, para la difusión de contenidos y con escasa interacción con el electorado.

estrategia y tratar de influir en el espacio digital a través de la Dirección de Redes Sociales y de los llamados guerreros digitales. Por otro lado, la oposición se organizó en Facebook y en WhatsApp durante la campaña del 21F y, posteriormente, el día del referéndum para defender el resultado que les dio la conquista en las urnas.

Evo Morales, después del 21F, declaró que el MAS había perdido el referéndum debido a las redes sociales como resultado de la guerra sucia del caso Zapata-CAMC.[2] Ese evento inaugura Internet como campo de lucha política; entonces, el gobierno desarrolló dos estrategias con relación a las redes sociales:

- *Controlarlas:* Es la primera reacción. Es el momento del ímpetu orientado a regular las redes sociales. Se anuncia un proyecto de ley que sería presentado a la Asamblea por el diputado Víctor Borda proponiendo la creación de tres figuras penales nuevas relacionadas a delitos digitales, así como un Consejo Nacional para control de las redes.[3] Este proyecto de ley nunca fue presentado a la Asamblea porque el gobierno entendió, finalmente, que las redes sociales son plataformas privadas y que, por tanto, localmente no se puede regular los contenidos que se publican sino a través de estas empresas y también, aunque en menor medida, porque se dieron cuenta de que esta iniciativa implicaría censurar la libertad de expresión.

---

2 El caso Zapata, denunciado por Carlos Valverde, surgió durante la campaña del Referéndum Constitucional de 2016. Se denunció un supuesto caso de tráfico de influencias del presidente Morales con Gabriela Zapata por la existencia de un supuesto hijo entre ambos.

3 https://anteriorportal.erbol.com.bo/noticia/politica/24022016/proyecto_de_ley_propone_crear_tres_tipos_penales_en_el_ambito_de_redes_sociales

- *Ganar la lucha política dentro de las redes sociales*. Entonces, se cambia la estrategia y el gobierno decide ir a ganar la lucha política en el campo de batalla virtual. Se crea la Dirección de Redes Sociales[4, 5] y se capacita a guerreros digitales[6, 7] "para informar al pueblo boliviano con la verdad, responder a las mentiras de la oposición",[8] según declaraciones de voceros del MAS.

De los guerreros digitales y de la Dirección de Redes Sociales se han dicho muchas cosas relacionadas con la propaganda partidaria a favor del MAS y con persecución política contra opositores al MAS, pero no se tiene ningún documento que detalle a qué se dedicaban, por lo que solo podemos entender que fueron parte de una estrategia de presencia en redes sociales, de influencia en la opinión pública y difusión de logros de gobierno.

Por otro lado, la oposición al MAS organizó algunas estrategias de comunicación de guerra sucia y desinformación durante la campaña del 21F aprovechando el caso Gabriela Zapata-CAMC, que incluían acciones específicas en medios masivos, redes sociales (Facebook principalmente y algo en Twitter) y grupos de WhatsApp. Luego del 21F, en las redes sociales se instalaron varias narrativas: "defensa de la democracia", "lucha contra la dictadura" y, en meses previos a las elecciones de octubre de 2019, "fraude electoral". Es así

---

4 https://www.paginasiete.bo/nacional/2016/4/19/gobierno-crea-direccion-general-redes-sociales-93750.html

5 https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160420/21080

6 https://www.fayerwayer.com/2018/06/bolivia-forma-guerreros-digitales/

7 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190227/mas-incrementa-guerreros-digitales-sube-aportes

8 https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/5/31/el-mas-gradua-80-guerreros-digitales-que-trabajaran-sin-paga-181808.html

que los grupos de WhatsApp pasaron a tener el protagonismo, se crearon grupos de base microterritorial para la defensa del resultado del referéndum constituyente[9] que, a la vez, servían como canales para fortalecer un sentimiento antimasista y antievista. Estos grupos, muy fuertes en las ciudades grandes (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), también funcionaron en el resto de ciudades, aunque con menos fuerza.

Durante la crisis política

Los grupos de WhatsApp, Twitter y Facebook fueron centrales al final de la jornada del día mismo de las elecciones, el 20 de octubre de 2019. La sorpresa y molestia por la interrupción del conteo del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) alrededor de las 19:00 h de ese día, reanudándose casi 24 horas después, fue compartida por estos espacios digitales.

Si bien la crisis política es un momento de escalada de violencia generalizada, se define dos polos discursivos que luchan violentamente por la hegemonía del relato. En ese contexto, las redes sociales y los servicios de mensajería (principalmente WhatsApp y en menos medida Telegram y Signal) fueron utilizados con cuatro objetivos:

- Generar histeria e indignación colectiva a partir de la interrupción del conteo rápido por parte del TSE, mostrando irregularidades en la votación, difundidas y transmitidas en las redes sociales el mismo día de las elecciones: el descrédito al proceso electoral y la confirmación de la narrativa del fraude electoral.

9 Acerca de cómo se crearon estos grupos, un estudio inédito de León y Quiroz (2019) muestra que de 43 grupos de WhatsApp identificados como 21F en la ciudad de La Paz y estudiados, el 90% había sido creado por los mismos cuatro números de teléfono y eran administrados, en un 100%, por esos mismos números. Esto corresponde a una organización central y no a la creación vecinal espontánea de grupos barriales.

- Organizar la protesta contra el MAS. Lo que en Santa Cruz fueron los 21 días de paro que fueron menos importantes en Cochabamba y La Paz, y prácticamente no se sintieron en ciudades como El Alto. Para esto, los grupos de WhatsApp creados en el 21F y otros nuevos fueron fundamentales.
- Influir en tendencias de opinión. Probablemente lo más evidente fue la creación de la #GeneraciónPitita para hacer frente a *hashtags* favorables al MAS en Twitter principalmente y que tenían impacto en medios y opinión pública externa al país. El posicionamiento de *hashtags* como #NoFueGolpeFueFraude #BoliviaNoHayGolpe #EvoEsFraude a partir del 10 de noviembre lo evidencian.[10]
- Persecución política contra opositores al MAS y contra masistas. Se usaron las redes sociales y los servicios de mensajería para hacer denuncias de supuestas búsquedas de la justicia contra personajes políticos con perfil público que resultaron ser falsas.

Los medios y los periodistas fueron uno de los sectores más violentados, la polarización los alcanzó exigiéndoles militancia, no se aceptaba prensa crítica. La sanción era restringir su difusión. En el Informe de vulneraciones contra derechos digitales elaborado por la Fundación Internet Bolivia (2020), se documentaron 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter.

---

10 Para detalles de cómo se crearon 68.000 cuentas y se generó apoyo a la versión del "fraude pero no golpe" desde el 10 de noviembre de 2019, se puede revisar este hilo en Twitter de Julián Macías que decía en anterior bio que era Jefe de Redes Sociales del partido Podemos de España: https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1196184676957904896?s=20

También se crearon grupos en Telegram y WhatsApp para coordinar acciones de denuncias en plataformas para bajar contenidos y hacer cerrar cuentas de redes sociales de opositores políticos. Esto no es legal y va contra la libertad de expresión. Este caso también está documentado en el informe mencionado en el párrafo anterior.

Después de la crisis política: el gobierno de transición

La posición que ha tomado el gobierno de transición es dual, basada en el desconocimiento. Por un lado, el tono de los primeros meses hasta que inició la pandemia fue de criminalización y estigmatización de las actividades en redes sociales y, por otro lado, da mucha importancia a las críticas que se generan principalmente en Twitter.

Desde el lado de la criminalización, el gobierno de Áñez buscó acentuar la estigmatización y la imagen negativa de vandalismo que se le atribuye al MAS y a sus militantes, para lo que recurrió a cinco hallazgos relacionados con los guerreros digitales:

- Descubren *software* y registro de ingresos de nacionales y extranjeros a una casa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Sopocachi con el que supuestamente se realizaba espionaje. Se emite una orden de aprehensión contra el padre de una exdiputada del MAS por organizar un grupo de guerreros digitales desde ese lugar y aprehenden a un exfuncionario de ANH por supuestamente obligar a funcionarios a crear cuentas falsas.[11]
- Toman presos a dos funcionarios de AGETIC de los que se dice que eran guerreros digitales porque hallan memes contra el gobierno de Áñez en computadoras

11 https://erbol.com.bo/seguridad/denuncian-que-el-mas-usaba-la-anh-para-espionaje-inform%C3%A1tico-y-%E2%80%9C-guerreros-digitales%E2%80%9D

que ellos usaban y se sospecha que administraban páginas en Facebook donde los difundían.[12]

- El ministro de Gobierno Arturo Murillo informa sobre la aprehensión a 67 activistas políticos por "desinformar, desestabilizar y hacer guerra virtual" desde grupos de WhatsApp, 37 de los cuales habrían tenido juicios abreviados y estarían cumpliendo penas. Se desconoce los nombres de estas personas y los detalles de su aprehensión y demás procedimientos legales.[13]
- Toman preso y mandan al penal de Palmasola a Mauricio Jara, creador de siete grupos de WhatsApp, administrador de 11 e integrante de 75 grupos desde los que emitía mensajes favorables al MAS. Fue calificado como guerrero digital.[14]
- José Daniel Llorenti fue acusado de publicar un tuit falso desde la cuenta del Ministerio de Justicia por una cuenta que aún mantenía en Tweetdeck. También recibe la calificación de guerrero digital.[15]

Por otro lado, sobre todo las reacciones que vienen de presidencia tienden a idealizar y dar un lugar influyente a las críticas que provienen de Twitter y Facebook. Se ha destituido a autoridades por críticas en estas redes sociales, como en los casos del ministro de Minería, Fernando Vásquez; del

---

12 https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/formalizan-aprehension-guerreros-digitales/20200101223007743813.html

13 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/15/aprehenden-67-activistas-politicos-por-hacer-guerra-virtual-252716.html

14 https://eldeber.com.bo/175926_envian-a-palmasola-a-guerrero-digital-del-mas-acusado-por-sedicion-e-instigacion-publica-a-delinquir

15 https://erbol.com.bo/nacional/acusan-%E2%80%9Cguerrero-digital%E2%80%9D-del-mas-de-manipular-el-twitter-del-ministerio-de-justicia

viceministro de Trabajo, Franz Choque, e incluso del ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Otra muestra de este rol inusitadamente central que se le da a Twitter y Facebook es un capítulo del caso de posible corrupción en la compra de ventiladores. Como mensaje de transparencia, la presidenta Áñez señaló que se enteró de las denuncias por redes sociales y que transparentará todo el proceso de compra en estas mismas redes sociales,[16] como si estas fueran un organismo con estructura y legalmente constituido en el país.

Uso político de redes sociales y otras plataformas de Internet

A continuación, presentamos la reconfiguración de actores y dinámicas políticas en Twitter, Facebook y WhatsApp como producto de la crisis política de finales de 2019 en Bolivia.

Twitter

La cantidad de cuentas de Twitter es pequeña en Bolivia y en el mundo.[17] Además, en Bolivia Twitter no ha llamado la atención masivamente, a diferencia de lo que sucede con la farándula argentina, por ejemplo. Tampoco las empresas bolivianas han volcado su interés en esta red social, prefiriendo Instagram o Facebook. Las compañías telefónicas se han esforzado, por su parte, en pagar publicidad y abrir cuentas en Twitter, del mismo modo que en el caso específico de algunas otras empresas, como Pollos Kiky en Santa Cruz.

---

16 https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/19/anez-dice-que-transparentara-compras-en-rrss-y-caso-respiradores-seguira-caiga-quien-caiga/

17 Existen 1,3 billones de cuentas en Twitter en el mundo de las que solo 328 millones están activas https://www.website-hostingrating.com/es/twitter-statistics/ frente a 2.500 millones de cuentas activas en Facebook https://yiminshum.com/facebook-2020-digital/

Sin embargo –y a pesar de su tamaño pequeño–, esta es una red social mediática e influyente en espacios políticos. Es un espacio de deliberación pública con tono lúdico e irónico que requiere estar informado/da para interactuar y ganar influencia, aunque últimamente, al igual que otros espacios digitales de interacción social, la deliberación convive con el discurso de odio, las tendencias falsas y las amenazas y otras violencias digitales, principalmente de tono político.

Tipología de perfiles en Twitter

En Bolivia, la historia de apropiación social de Twitter define el tipo de cuentas que son protagonistas en esa red. Esta historia puede dividirse en tres fases:

a) Fase tecnológica y ciudadana dominada por cuentas ciudadanas ligadas a temas tecnológicos. Esta fase se extiende desde 2008 cuando se abrieron las primeras cuentas bolivianas hasta 2011 con la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.
b) Fase mediática en la que ingresaron y se activaron cuentas de periodistas que cubrían la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS[18] tomando mayor protagonismo que las cuentas ciudadanas y tecnológicas. También ingresan más cuentas ciudadanas debido a la cobertura de los medios acerca de esta red, por lo que alguna gente se entera de su existencia. Esta fase se extiende hasta febrero del 2016.
c) Fase política, en la que Twitter se puebla de cuentas de actores políticos y políticas iniciando una etapa de lucha política en esta red social desde el referéndum

18 En julio de 2012 se realizó un sondeo entre las principales cuentas de Twitter de periodistas de origen boliviano. De las 50 cuentas de las que se logró recabar datos, el 56% afirmó que las usaron con mayor intensidad o las reactivaron debido al conflicto del TIPNIS.

> constitucional de febrero de 2016, aunque las cuentas mediáticas mantienen su protagonismo. Desde noviembre de 2019, ingresan con mayor énfasis cuentas ciudadanas y *bots* a defender posiciones políticas alrededor de los resultados de las elecciones del 20 de octubre, y otras cuentas ciudadanas que se integran a la dinámica de tono irónico y de consumo cultural. Los siguientes son dos ejemplos de *bots* y cuentas ciudadanas que ingresaron a defender o atacar posiciones políticas: #GeneraciónPitita que es antimasista y #GeneraciónWiphala que es masista.

Ahora Twitter está conformado socialmente por perfiles ciudadanos ligados a la tecnología, a la política y a muy variadas actividades; periodistas y medios; políticos y políticas; y cuentas *trolls* y *bots* falsas. Estas últimas son el legado de la crisis política junto con perfiles ciudadanos que ingresaron a defender o atacar posiciones políticas y a algunos curiosos.

Antes de febrero de 2016, Twitter no era concebido como una red social importante para la política. Evo Morales ingresó precisamente en ese año y la tendencia de los principales políticos fue crear cuentas en Twitter antes que en otras redes; tal y como ocurrió con Víctor Hugo Cárdenas, Félix Patzi y Carlos Mesa, reconociendo el carácter político de esta red social. El caso de Óscar Ortiz es diferente porque es resultado del asesoramiento de una empresa de *marketing* y creó varias cuentas a la vez. La cuenta de Evo Morales es la que tiene más seguidores (1 millón) y concita más interés que su cuenta de Facebook. Morales utiliza Twitter para difundir opiniones y consignas políticas y no para interactuar, lo que es muy común entre otras cuentas de figuras políticas.

Los nuevos actores en Twitter, como producto de la crisis política, son tres: a) Actores ciudadanos que ingresaron para hacer activismo político; b) Cuentas ciudadanas curiosas; y c) *Bots* y cuentas falsas creadas para generar tendencias:

a) *Actores ciudadanos que ingresaron para hacer activismo político*: Del lado antimasista está la #GeneraciónPitita que son personas que participaron en los movimientos #21F demandando respeto a procedimientos democráticos ligados a la candidatura de Evo Morales, y que pararon 21 días de paro en Santa Cruz denunciando fraude en las elecciones del 20 de octubre. Están unidos por un sentimiento antimasista vacío de propuestas políticas. Estas personas son producto de una migración masiva de Facebook, a convocatoria del Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y organizaciones ciudadanas #21F, cuando se dieron cuenta de que en la esfera internacional se informaba activamente en esta red social y se organizaron para contrarrestar el relato de "Golpe de Estado" con el de "Fue Fraude".

   Actualmente, si bien la #GeneraciónPitita sigue siendo antimasista, está dividida en varios frentes: quienes apoyan a Áñez; quienes están en su contra, pero no apoyan a nadie; mesistas y camachistas.

   La #GeneraciónWiphala es una reacción a la #GeneraciónPitita y se construye a partir de un evento de quema de la wiphala el día en que Jeanine Áñez asume la presidencia. Es una identidad masista compuesta por cuentas que ya existían y nuevas, varias de ellas anónimas. Probablemente expresa una búsqueda de identidad digital que trata de alejarse del estigma de la identidad de "guerreros digitales" asociada al MAS.

b) *Cuentas ciudadanas curiosas*: Éste es un fenómeno que ha sucedido en Twitter desde octubre de 2019 con el uso del anonimato para la creación de nuevas cuentas, lo que era menos común antes de este mes. Entre las identidades propias del activismo político abundan nombres que podrían ser calificados como bots: un nombre común seguido de varios números (por ejemplo, "@Alejandro34562") o nombres relacionados

a consignas políticas o identitarias de cada grupo. Este cuidado con el anonimato puede ser una reacción a la intensa persecución política que ha caracterizado a la crisis y a la postcrisis política en el país.

Existe una alta presencia de cuentas creadas desde Santa Cruz que impone una obligada mirada a la farándula cruceña, prácticas de *influencers* comerciales y la mirada crítica hacia esas dinámicas, mucho más cuando se relaciona con temas públicos. Es el caso de un *challenge* creado por la modelo Stephanie Herela Limpias para ganar seguidores a propósito de la ayuda humanitaria a personas afectadas por la cuarentena que fue llamado "Desafío de la pobreza".

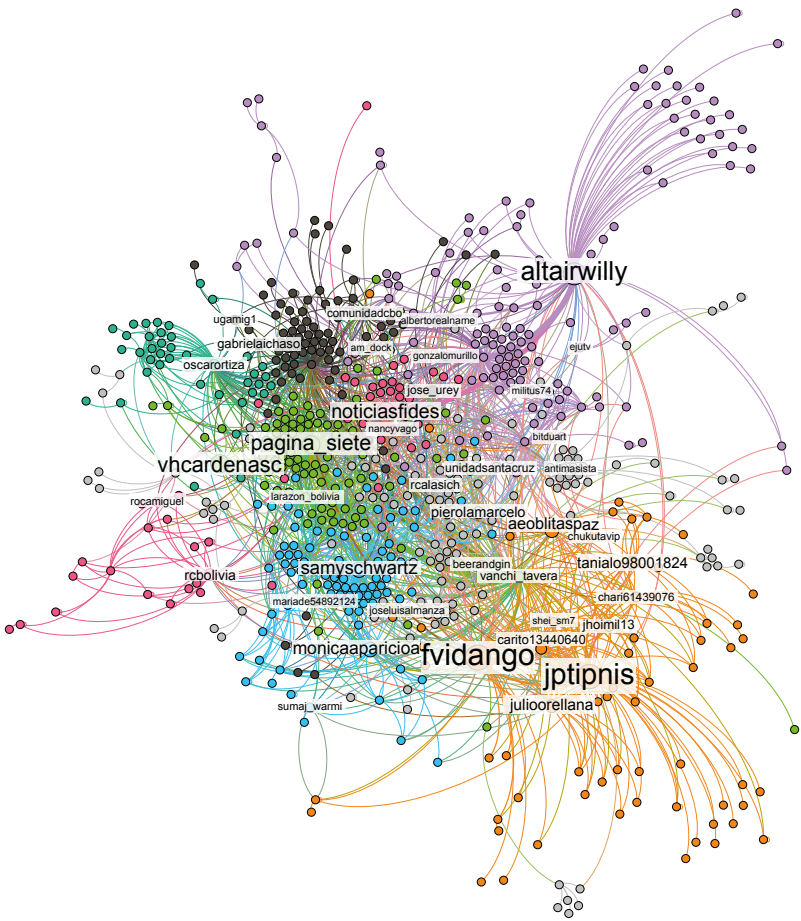
c) Bots *y cuentas falsas para crear tendencias*. Antes de la crisis se denunciaba cuentas falsas y *trolls* masistas y opositores al MAS que generaban discurso de odio en redes incluso amenazando a cuentas que pensaban diferente pero nunca se había hablado de granjas de *bots* que crearan masivamente cuentas para generar tendencias o apoyos falsos. Existen mediciones de tendencias en Twitter que muestran que se habrían creado 68.000 cuentas falsas para apoyar a Camacho y a Áñez y generar tendencias en ese sentido. Al respecto, se aconseja la revisión de los hilos y publicaciones de Julián Macías, Rodrigo Quiroga y Rosa Miriam Elizalde y Pedro Santander Molina.[19]

---

19 Creación de 68.000 cuentas falsas para influir a favor del relato de fraude: https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1196184676957904896?s=20
Análisis de 14 *hashtags* durante la crisis: https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1197246292352782336?s=20
Cuentas nuevas que siguen a Camacho: https://twitter.com/rquiroga777/status/1196753177359634432?s=20 Cuentas *bot* creadas con inteligencia artificial para generar tendencias: http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/01/06/cinco-preguntas-sobre-la-operacion-del-golpismo-boliviano-en-twitter/

Una medición del *hashtag* #21F del 1 de julio de 2019 elaborada por Cristian León (inédita) con 846 cuentas y 2.854 interacciones muestra que las cuentas con mayor actividad para difundir mensajes con este *hashtag* con @Altairwilly @vidango y @jptipnis. Si bien el nivel de actividad parece ser alto, es poco probable que esté automatizado, es decir, lo más probable es que sean cuenta de activistas políticos, pagados o no, que con gran ímpetu se dedican a compartir y replicar mensajes de apoyo a una postura política con una interconexión con usuarios y usuarias, pero no granjas de *bots* comparados.

Gráfico 1. Grafo del *hashtag* #21F, de 1 de julio de 2019



Fuente: Cristian León (2019).

Hemos identificado cuentas Twitter con cantidad de seguidores y seguidos de actores políticos, actores ciudadanos influyentes en temas políticos y los medios y periodistas más influyentes en la generación de opinión pública en esta red social. Se las puede consultar en anexos de este artículo siempre tomando en cuenta que son tablas que se desactualizan con rapidez.

Facebook

Facebook es la red social de mayor uso en Bolivia, tiene 7,1 millones de usuarios, lo que nos lleva a concluir que la mayoría de los bolivianos cuenta con un perfil en esta plataforma, por lo tanto, es donde se dirigen una gran mayoría de las estrategias en distintos ámbitos, tanto estrategias comerciales como de comunicación política.

Ésta es la red más masiva y miscelánea. Desde que se creó, el 2004, ha cambiado mucho; es una plataforma que ha evolucionado bajo iniciativa propia, pero también al incorporar funciones que caracterizaban a otras plataformas, desde el *chat*, los *hashtags*, las historias, hasta los recientes avatares. Es decir, que se han multiplicado las herramientas: *marketplace*, *facebook live*, *messenger kids*, etc.

Tipología de cuentas en Facebook

En Facebook se puede interactuar a partir de perfiles, grupos y páginas. En un perfil pueden confluir entre amistades, familia, entorno laboral, gente afín a un credo o ideología, etc. El interés por la actividad política en los perfiles suele darse, sobre todo, en usuarios que tienen vínculo con lo político-partidario, el periodismo y el activismo; pero en situaciones de crisis política y procesos electorales, el tema político se masifica como principal motivo de interacción, tal es el caso de octubre y noviembre del 2019, un proceso electoral con crisis social y política.

Las páginas y grupos son espacios de confluencia de intereses comunes de distintos usuarios en Facebook: la

política es uno de ellos. En Bolivia las primeras comunidades de grupos en torno a lo político se crearon a partir de la VIII marcha por el TIPNIS el 2011, movilización que conmovió y convocó a las clases medias de las ciudades capitales del país. A partir de varios procesos electorales –elecciones nacionales 2014 y elecciones locales 2015–, se conformaron grupos de apoyo partidario, aunque su impacto fue, en la mayoría de los casos, intrascendente.

Es a partir del referéndum del 2016 que los grupos y páginas de Facebook empiezan a jugar un rol central dentro de las estrategias políticas en el país. Uno de esos grupos –el más importante en esos años– fue: "A mí me gusta la democracia y no la dictadura", el cual llegó a tener 215.000 miembros, donde casi la totalidad de sus publicaciones eran en oposición al gobierno del MAS. Era un grupo que servía como insumo de material, de memes, que posteriormente eran distribuidos en distintos espacios, perfiles, grupos y en otras redes sociales, como Twitter. Este grupo se cerró el 14 de febrero del 2019 por un ataque de notificaciones.

Estrategias políticas y discursivas

En este primer periodo se da una interesante caracterización dentro de la actividad política en Facebook, una diferenciación en la preferencia del uso, donde muchos grupos de difusión política, la mayoría y los más masivos, habían adquirido un rasgo opositor al MAS, permaneciendo muchos vigentes hasta hoy: "Yungueños por el mundo"; "Si los medios callan las redes hablan-Bolivia"; "Noticias de Bolivia y del Mundo Oficial", "Kuña Mbarete™ Mujer Fuerte", etc. En cambio, la estrategia del MAS en ese entonces apuntó a generar contenidos a través de *fanpage* y sitios web que funcionan como portales de información: "La Resistencia Bolivia", "El piojo cabrón", o páginas que aluden a otros propósitos, pero tienen un fin político como: "La Paz de mis amores", "Te Amo El Alto" e "Indignados UMSA".

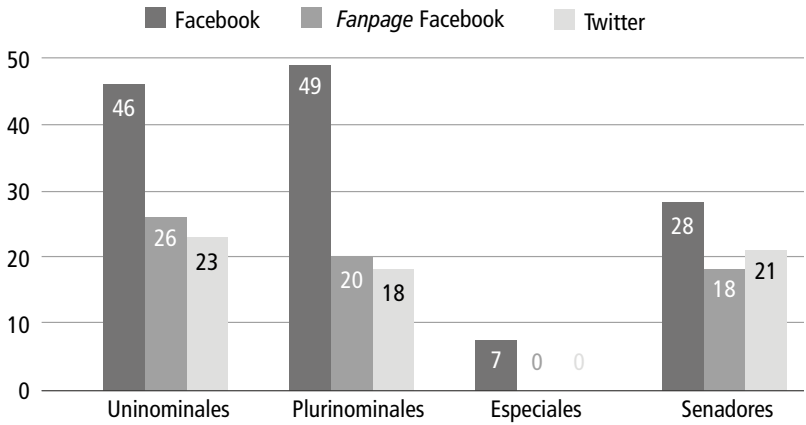
Si bien esta dinámica en los usos se mantuvo hasta antes de la crisis de octubre y noviembre de 2019, es a partir de los incendios forestales en la Chiquitania cuando se generan abrumantes campañas de desinformación y noticias falsas, no sólo a partir de perfiles, páginas y grupos de difusión política partidaria, sino también a partir de medios de comunicación con trayectoria.

Existen diferentes esferas en los perfiles políticos en las redes sociales: los políticos partidarios (militantes, candidatos y autoridades), los que generan opinión (analistas, politólogos, activistas, etc.), los programas y periodistas de medios y los que generan y difunden contenido político. En los perfiles de políticos, tenemos principalmente a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales para las elecciones 2020, exmandatarios y autoridades en actual gestión.

Por otra parte, un espacio político institucional fundamental en el país es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La mayoría de los diputados y senadores tienen cuentas en Facebook, aunque no todos ni todas los usan como canales de comunicación con la ciudadanía y varias son cuentas inactivas. Se podría decir que quienes sí tuvieron la intención de generar una comunicación e interacción por sus redes sociales son precisamente quienes crearon cuentas en Twitter y abrieron *fanpages* en Facebook, ya que es un patrón que se repite al revisar las cuentas de los congresistas, pero son menos los que dieron continuidad y actividad a sus redes. En el caso de diputados indígenas, en la categoría de circunscripciones especiales, ninguno tiene Twitter ni *fanpage* de Facebook.

A continuación, unos cuadros que explican lo señalado.

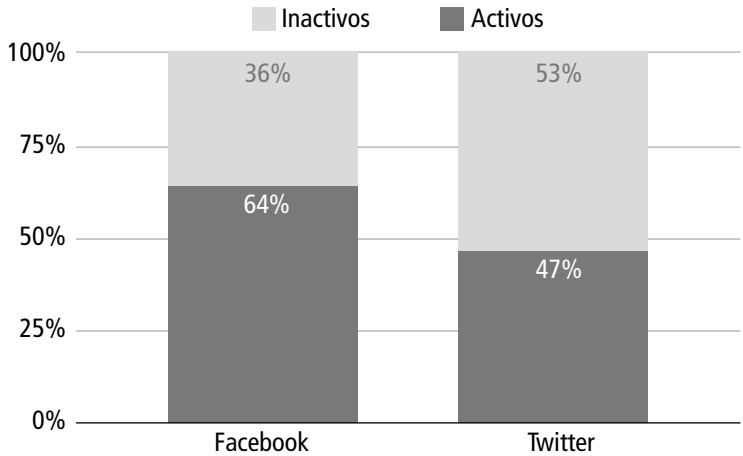
Gráfico 2. Asambleístas bolivianos que usan Facebook, *fanpage* y Twitter



Fuente: Elaboración propia.

Del total de los asambleístas con cuentas de Facebook y Twitter, la relación de cuentas activas e inactivas se expresa en el siguiente gráfico.

Gráfico 3. Porcentaje de cuentas activas e inactivas de Facebook y Twitter entre los asambleístas bolivianos



Fuente: Elaboración propia.

Los programas de periodismo que tienen interacción, reproducción y son fuente de información política en Facebook se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Programas de periodismo político influyentes difundidos a través de Facebook

Nombre	URL	Seguidores	Fecha
John Arandia (Periodista)	https://www.facebook.com/johnarandiaperiodista/	138.698	24 octubre 2017
Carlos Valverde Bravo	https://www.facebook.com/carlos.valverdebravo/	422.652	17 marzo 2015
María Galindo	https://www.facebook.com/profile.php?id=100008591051800	38.248	---
Amalia Pando (Cabildeo)	https://www.facebook.com/CabildeoDigital/	172.885	15 enero 2016
Jimena Antelo	https://www.facebook.com/JimenaAnteloOficial/	75.679	1 marzo 2018

Fuente: Elaboración propia.

La política en el espacio digital se desenvuelve en dos ámbitos: el formal y el de los submundos de la red. El primero es el de las campañas electorales, desde la militancia y las cuentas oficiales de partidos y candidatos; mientras que el segundo, por lo general, está enmarcado en una guerra digital casi continua y que tiene sus picos más intensos en momentos de crisis política.

La guerra digital tiene como principal objetivo anular a su oponente y para ello genera recursos que tienen que ver con la desinformación, el hostigamiento y la capacidad de dar de baja publicaciones y cuentas rivales. Otras actividades incluso están enmarcadas dentro de lo ilegal, como el espionaje.

Las páginas de Facebook en esta guerra digital han sido fundamentales, pero pocas son las que aún mantienen vigencia, algunas fueron desapareciendo y aparecieron otras, precisamente porque fueron objeto de censura a través de notificaciones, lo cual es parte de la guerra digital. Actualmente existe un gran número de páginas, de las cuales las siguientes

tienen la particularidad de generar los contenidos que son difundidos por otros perfiles y cuentas de usuarios que lo distribuyen en grupos.

Cuadro 2. Páginas de Facebook que son fuente de contenidos políticos para la guerra digital

Característica	Nombre	URL	Tipo
Meme	El Memero 2.0	https://www.facebook.com/pg/MemeroSolo2.0	Masista
Político	La Suchel	https://www.facebook.com/pg/La-Suchel-102465191252815	Masista
Periodismo	El Comunicador Digital	https://www.facebook.com/pg/ElComunicadorDigital/	Antimasista
Meme	Doblaje Paceño Los Simpson	https://www.facebook.com/doblajecolla/	Antimasista
Meme	Oruga Gritona Boliviana	https://www.facebook.com/Oruga-Gritona-Boliviana-101166424611054/	Antimasista
Universidad	Estudiantes por la Democracia UMSA	https://www.facebook.com/Estudiantes-por-la-Democracia-UMSA-109906583808297	Antimasista
Discurso	Bolivia Unida Por La Verdad	https://www.facebook.com/Bolivia-Unida-Por-La-Verdad-105030780960817/	Masista
Contenido	Chuñoman	https://www.facebook.com/Chuñoman-113531170287018/	Masista
Contenido	Ojitos Preciosos 2.0	https://www.facebook.com/OjitosPreciosos2.0	Antimasista

Fuente: Elaboración propia.

Hay usuarios que generan opinión en las redes sociales, gente partidaria principalmente, pero también hay usuarios que por su trayectoria se han convertido en referentes, tienen seguidores y responden a sus propios públicos. Aquí algunos de los perfiles que se identificaron figuran en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Perfiles de usuarios particulares que se han convertido en referentes

Sayuri Loza	Rafael Loayza	Beto Astorga
Jose Daniel Llorenti	Marcelo Arequipa	Andrés Gómez Vela
Carlos Macusaya	José Manuel Ormachea	Andrés Ortega
Quya Reina	Rolando Morales	Carlos Hugo Molina
Eynar Rosso	Anaya	Alejandro Canedo
Cristian Tejada	Gonzalo Chávez	Pedro Portugal
Williams José Bascopé Laruta	Lissi GS	Andrea Barrientos
	Eduardo Lohnhoff	

Fuente: Elaboración propia.

Seguimiento de discursos en Facebook

La construcción de los discursos políticos en Facebook ha pasado de reproducir esquemas lineales de propaganda, tipo *spot*, a perfilarse y convertirse en instrumentos de construcción y destrucción de relatos, información y desinformación. Un esquema de "guerra digital" que, en todo caso, no se alejaría de una de las cualidades más notorias de la cultura política boliviana, ya que, en tiempos electorales, no son precisamente las propuestas ni los programas los que suelen ser discutidos y puestos en la agenda pública, sino la apelación a emociones y el evidenciar cuán malo o peor candidato es el otro. De esta manera, se crece políticamente, a partir de los errores del oponente y no necesariamente de las virtudes de uno: acrecentar, evidenciar y hasta construir esos errores suele ser el trabajo en el que se ocupan los discursos políticos, ahora trasladados al ámbito digital de las redes sociales.

Ajustándose a este esquema, la construcción de discursos no es aleatoria, responde a una estrategia y una planificación. El despliegue de los discursos en Facebook suele construirse a partir de dos ámbitos: el *shock* y las ideas fuerza.

El shock: En la esfera política de Facebook hubo muchos eventos de alto impacto que han desencadenado la construcción de discursos, muchas veces complementados

de las ideas fuerza, en otras, dando lugar a éstas. Algunos ejemplos:

- El caso de tráfico de influencias denunciado por Carlos Valverde en contra de Evo Morales y el supuesto hijo producto de su relación con Gabriela Zapata –hechos que fueron denunciados desde la *fanpage* de Valverde el año 2016 en su programa *Todo por hoy*– fueron un escándalo que se posicionaría en la agenda pública y los medios de comunicación, solo a semanas del referéndum del 21 de febrero.
- La entrevista de Ximena Galarza al Ing. Edgar Villegas sobre el fraude electoral. Si bien esta entrevista se dio en un medio televisivo a las 23:00 h, esta entrevista ya se anunciaba un día antes por la mañana en varios grupos de Facebook.[20] Por otra parte, al momento de su emisión fue reproducida en videos grupales por distintos grupos masivos en Facebook.

Las ideas fuerza: Responden a la construcción de relatos en la opinión pública. En nuestra política local en Facebook podemos encontrar varias ideas fuerza que se han venido reiterando: la lucha por la democracia ("Democracia Sí, Dictadura No"), el fraude electoral ("El monumental fraude"), ("En Bolivia no hubo golpe de Estado, hubo fraude electoral"), el golpe de Estado ("La autoproclamada, la autonombrada"), etc.

---

20 https://www.facebook.com/leo.m.lf/videos/10221807021910958/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10162211443990447&set=a.10150263250270447&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2627657793953705&set=a.565253673527471&type=3
https://www.facebook.com/groups/517620165043198/permalink/1558784704260067/
https://www.facebook.com/groups/DEMOCRACIASIDICTADURANO/permalink/2362786967165088/

Como parte de las ideas fuerza, fruto de la crisis de octubre y noviembre, hay que considerar la construcción de relatos acerca de la ciudad de El Alto. En éstos se puede identificar varios antecedentes en la construcción de sentidos alrededor de la disputa política en Facebook. A continuación, desarrollaremos este ejemplo.

La ciudad de El Alto, conjuntamente con sus organizaciones sociales y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), fueron fundamentales en la historia política de Bolivia a raíz de los hechos de octubre del 2003 (conocidos como "Guerra del gas") que derivaron en la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y en la clausura de un ciclo de 20 años caracterizado como "democracia pactada". Sin embargo, en los conflictos de octubre y noviembre del 2019 la ciudad de El Alto asumió una actitud expectante, pese a que un año atrás una parte de su población se había movilizado por varios meses en contra el gobierno de MAS pidiendo justicia por la muerte del universitario Jonathan Quispe, incluso con la exigencia de la renuncia de Evo Morales.

En las protestas de octubre y noviembre de 2019, los movilizados exigían la participación de la ciudad de El Alto y su universidad, exigencias que se hacían por medio de pronunciamientos de rectores e instituciones movilizadas; en el ámbito virtual esto se exigía a través de memes y *posts* en diversos grupos y páginas.

En este sentido, el 30 de octubre se difundió una imagen que se hizo viral; se trataba de un cartel en los muros de la UPEA que desestimaba su participación en las protestas: "Cuando los Jailones y la UMSA nos pide ayuda nos llama UPEA, ah pero cuando nosotros pedimos ayuda nos llama CHUPEA. JÓDANSE! Bloqueen solitos".[21] Este cartel se colgó solo para sacar esa foto; como se diría, para el Facebook. Al día siguiente, esta imagen generó una cadena de reacciones

21 https://www.facebook.com/teamoelalto/photos/a.213283785752130/769710200109483/ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218106879397085

con descalificaciones y alusiones racistas.[22] Ese mismo día, los alrededores de la UMSA amanecieron *grafiteados* con alusiones racistas del tipo: "Indios fuera de la UMSA".[23]

No obstante, antes del suceso de la imagen de la UPEA, las movilizaciones ya habían acrecentado las grietas sociales, sobre todo racistas; muchas de ellas generadas y reactivadas tanto en las calles como también en las redes sociales.[24]

Evo Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, entre algunos festejos y silencios: ese mismo día efectivos policiales queman la wiphala.[25] Semanas atrás se habían visto distintos actos de agravio a este símbolo en varias ciudades,[26] sin medir las posibles consecuencias.[27] El 11 de noviembre, pobladores de la ciudad de El Alto salieron a las calles al grito de: "¡Ahora sí, guerra civil!",[28] acto que

---

22 https://www.facebook.com/324797547905669/photos/a.491967044522051/947146689004082/
https://www.facebook.com/AAnticomunista/photos/a.551421738719491/666559270539070/

23 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198827937809787
https://www.facebook.com/LosRascabuchesOnLine/photos/a.2101826299906539/2552513558171142/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157003494194751
https://www.facebook.com/zarate.willka/posts/10220962226669135
https://www.facebook.com/BoliviaLibreDignaYSoberana/photos/a.2884182184985617/3068023886601445/

24 https://www.facebook.com/CESsocioumsa/photos/a.655997954454258/2603115356409165/

25 https://www.facebook.com/eugenia.anara/videos/759635114499726/
https:// www.facebook.com/radiolider97/videos/423792431638522/UzpfSTIwMTgzMjQ0MDg0MzgzMjg6MjQzNzk1NDAxNjQ3NTM2Mw/

26 https://www.facebook.com/PrimeroEstaBolivia/videos/572813006584311/

27 https://www.facebook.com/MiguelitoLeonOficial/videos/528370321317562/

28 https://www.facebook.com/TendederoPolitico/videos/485830558942566/

ahondó más las tensiones, miedos y diferencias, ocasionando un flujo de desinformación inusual en las redes sociales, en especial en WhatsApp. Así se fue produciendo la construcción del otro, un enemigo del cual uno debería protegerse, dando lugar a que se erijan miles de barricadas y vigilias esa noche en la ciudad de La Paz: "Los delincuentes están bajando a hacer destrozos en la ciudad",[29] "hordas" y "terroristas".[30]

Fueron ocho días de conflicto, tensión y represión en los que la polarización en el país se hizo cada vez más evidente. Mientras sectores de El Alto mantenían sus medidas de protesta y pedían la renuncia de Áñez, otros grupos de La Paz, movilizados contra el gobierno de Evo Morales, exigían y aplaudían una intervención militar.[31] El 19 de noviembre se produjo la masacre de Senkata, registrándose 11 muertos y medio centenar de heridos de bala, sin militares o policías heridos.

Es a partir de este hecho que se da uno de los procesos de construcción de relatos, una postverdad, sobre un hecho trágico en la historia política de nuestro país, el cual no se puede entender sin los antecedentes mencionados.

Las primeras declaraciones del ministro de Defensa, Fernando López, ante las noticias de que había muertos en la operación militar en Senkata fueron las siguientes: "...de las FFAA no salió una sola bala".[32] Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo declaró: "Querían explotar la planta de Senkata". El 15 de noviembre, cuatro

---

29 https://www.facebook.com/355299598454258/videos/2312213595757725/

30 https://www.facebook.com/groups/FraudeElectoral2019/permalink/463968784251732/

31 https://www.facebook.com/yolandita.mamanimamani/videos/2705500636162280/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060551320627901&set=a.694475907235466&type=3

32 https://www.facebook.com/johnarandiaperiodista/posts/1011201685884933

días antes de los sucesos referidos, la presidenta Áñez advirtió: "Hemos recibido agresiones físicas… y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata".[33] El día de los hechos, después del operativo de las fuerzas del orden, cuentas, grupos y páginas de Facebook difundieron un mismo mensaje: "Si dinamitan la planta de Senkata puede arder 10 km a la redonda por la alta presurización del gas, ¡Terroristas!".[34] Poco después, aparecían videos ilustrativos sobre la posible explosión de la planta de almacenamiento de combustiles en los grupos masivos y páginas de difusión política en Facebook.[35]

En un momento de alto conflicto, como lo fue octubre y noviembre, los medios fueron acusados de parcializarse con los gobiernos, en primera instancia con el gobierno de Morales, y posteriormente con el gobierno transitorio de

---

33 https://erbol.com.bo/nacional/añez-denuncia-"grupos-subversivos-armados"-y-alerta-que-quieren-explotar-plantas-de

34 https://www.facebook.com/groups/211101572568085/permalink/1077516689259898/
https://www.facebook.com/HueleAmasista3/posts/123664119074934
https://www.facebook.com/groups/2077250582491171/permalink/2467291120153780/

35 https://www.facebook.com/100511344753321/videos/511073916157270/
https://www.facebook.com/CenNotiBolivia/photos/a.2425561537696585/
https://www.facebook.com/355299598454258/photos/a.357725878211630/447837559200461/
https://www.facebook.com/groups/noticiasdeboliviayelmundo/permalink/2349201978519175/
https://www.facebook.com/groups/yungas/permalink/2406334822797086/
https://www.facebook.com/groups/noticiasdeboliviayelmundo/permalink/2349308221841884/
https://www.facebook.com/groups/KunaMbareteMujerFuerte/permalink/689411291590419/

Áñez. Antes y después de la renuncia de Evo Morales, varios medios fueron agredidos por uno y otro bando, y cuestionados en su objetividad. La cobertura periodística de los hechos de Senkata se remitió, mayormente, a reproducir la versión del gobierno. A propósito, a continuación, citaremos tres ejemplos de un tipo de medio, el escrito:

- *La Razón* señaló que se quemaron los autos dentro de la planta de Yacimientos, cuando en las imágenes se observa que el vehículo quemado estaba afuera.[36]
- *Página Siete* informó que "afines a Evo intentan incendiar la planta de Senkata en El Alto",[37] afirmando que se había dinamitado el muro perimetral, cuando hay videos que muestran que no es cierto.[38]
- *El Deber* reprodujo las declaraciones del ministro López: "Sería una catástrofe de gran magnitud (…). El Ejército no disparó ni un solo proyectil",[39] aunque las evidencias de uso de armas de fuego eran claras en las calles y paredes de Senkata.[40]

Posteriormente, los calificativos de "terrorista", "hordas" y "salvajes" bajan de intensidad, pero no dejan tregua en la disputa política en los grupos y páginas de Facebook. Durante las siguientes semanas la presidenta usa el término "salvaje",

36 https://www.facebook.com/LaRazonBolivia/videos/2553964091353307/

37 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/19/afines-evo-intentan-incendiar-la-planta-de-senkata-en-el-alto-237881.html

38 https://www.facebook.com/roxanaalejandra.placanicaocchiuzzo/posts/2618031838240525

39 https://www.facebook.com/GrupoELDEBER/posts/10158067839274048

40 https://www.facebook.com/ivan.alanez.7/posts/2641413149235107

declarando, a principios de 2020, que el gobierno iba a impedir que "los violentos y (…) salvajes puedan volver al poder".[41] Pero es a partir de las vísperas al 6 de marzo, aniversario de El Alto, cuando la intensidad de las publicaciones, a través de una campaña sistemática, alude a prejuicios racistas sobre El Alto, con videos y memes en grupos masivos de Facebook de El Alto.[42]

Éste es uno de los varios ejemplos que se pueden encontrar en la construcción de discursos y relatos dentro la plataforma de Facebook, los cuales, muchas veces, están acompañados con hechos y acciones concretas, que pueden ser propiciadas por actores políticos como sucedió, por ejemplo, con el afiche que apareció en la carretera a Viacha: "No hay coronavirus. No existe. Despierte Bolivia. Mueran los vendepatrias. El coronavirus está en el Palacio y hay que fumigarlos".[43] Este hecho fue objeto de cobertura por parte del periodista Marco

---

41 https://eldeber.com.bo/161707_anez-pide-evitar-que-salvajes-vuelvan-al-poder-evo-cree-que-ratifica-su-racismo

42 https://www.facebook.com/BoliviaUnidaContraElMAS/photos/a.109446477215500/140663164093831/
https://www.facebook.com/groups/elalto/permalink/2943934925653932/
https://www.facebook.com/groups/443063435828054/permalink/1985574614910254/
https://www.facebook.com/groups/FraudeElectoral2019/permalink/565406437441299/
https://www.facebook.com/groups/443063435828054/permalink/1977223155745400/
https://www.facebook.com/groups/211101572568085/permalink/1188991714779061/

43 https://www.facebook.com/notes/ministerio-de-gobierno-bolivia/felcc-de-el-alto-tras-la-pista-de-autores-de-panfletos-que-aseguran-que-no-hay-c/2821921361194654/
https://www.facebook.com/detrasdelaverdadoficial/photos/a.239723386693750/531655947500491/
https://www.facebook.com/groups/KunaMbareteMujerFuerte/permalink/794357321095815/

Chuquimia,[44] quien buscó el afiche en varias zonas –e incluso en Senkata– y no encontró más letreros que los tres de la carretera a Viacha; es decir que, al igual que el letrero del 30 de octubre en la pared de la UPEA, la finalidad de este mensaje era viralizarse en las redes, lo cual se logró generando repercusión en medios de comunicación y reforzando los discursos y descalificativos que se han venido reiterando sobre la ciudad de El Alto.

WhatsApp

WhatsApp no es una red social, sino un servicio de mensajería. Sin embargo, es posible crear grupos de hasta 256 miembros, por lo que permite compartir mensajes e interactuar como en una red social pero restringida, reducida en tamaño y algo más controlada que las otras redes públicas (Facebook y Twitter). Se ha convertido, en todo caso, en el espacio social digital más frecuentado, superando incluso a Facebook. Tiene las siguientes características:

- Es barato. Frente a otras plataformas, WhatsApp usa una menor cantidad de datos e, incluso, su consumo es gratuito.
- La gratuidad viene por los paquetes que las empresas proveedoras de Internet ofertan como pagos WhatsApp *free*, lo que significa que una vez que se termina el crédito prepago contratado, se puede seguir usando la *app* sin tener crédito.
- Los grupos generan una sensación de confianza mayor a Facebook y Twitter por lo restringido del número de miembros.
- Las personas tienden a prestar mayor atención a los mensajes de WhatsApp que a los de otras plataformas.

---

44 https://eldeber.com.bo/171018_aparece-contracampana-sobre-el-coronavirus-en-el-alto

- Debido a su facilidad de uso y bajo coste, tiene más capacidad para llegar a poblaciones con baja conectividad.

Estas características dan lugar a algunos comportamientos nocivos en las dinámicas sociales de las y los internautas. Los servicios WhatsApp *free* impiden a usuarios y usuarias acceder a otros sitios dentro de la web que les permitan contrastar o verificar los mensajes que reciben por WhatsApp. Esto, sumado a que es una *app* usada por poblaciones menos conectadas y que tienen menores habilidades digitales, es un contexto ideal para la difusión e impacto de las noticias falsas.

Aún más, es posible contratar servicios de envío masivo automatizado de mensajes, lo que amplifica la capacidad de llegada de mensajes de publicidad, propaganda y noticias falsas de acuerdo a quien pueda pagar esos servicios. Por eso, WhatsApp ha limitado la cantidad de envíos masivos de un mensaje.

En Bolivia, éste es el servicio de mensajería más popular. Se usó, inicialmente, para mantenerse comunicado con amigos y parientes en comunicaciones bilaterales, y posteriormente, se han creado grupos sociales de colegios, de universidades, amigos, etc. Desde 2016, esta *app* ha sido útil para la organización social y política desde las plataformas ciudadanas del #21F, pasando por la crisis de escasez de agua en la ciudad de La Paz del 2016 y continuando con las protestas de la crisis política de finales de 2019. En todos los casos se han creado grupos de base microterritorial por barrios o rotondas en diversas ciudades.

La emergencia de nuevos actores en Bolivia –las denominadas "plataformas ciudadanas"– coincide, por otra parte, con un mayor uso de WhatsApp desde la política. Esta coincidencia no es fortuita: las "plataformas ciudadanas" se fortalecieron a través del uso de nuevas herramientas digitales que permiten una comunicación multimedia, directa, rápida, eficaz y de bajo coste. Estas herramientas permiten derribar

barreras de participación, promueven el debate a la vez que potencian la autoorganización, aunque se han mostrado también muy útiles para difundir noticias falsas y reforzar relatos políticos.

WhatsApp ha sido utilizado durante las elecciones en Bolivia, aunque no hay evidencias de cuál fue exactamente la forma de uso. Podemos acercarnos revisando estudios previos acerca de la capacidad de WhatsApp para influir en las campañas políticas, publicados por instituciones como Fundación Karisma, Tactical Tech, Coding Rights, ITS, en distintos países: Colombia, India, Kenia y Brasil, entre otros. A pesar de los elementos positivos, los estudios han demostrado que WhatsApp tiene una alta capacidad de distorsión de la esfera pública, con potenciales riesgos para la democracia. WhatsApp está siendo utilizado, en gran medida, para generar listas de contactos de votantes, propagar desinformación y promover posiciones reactivas.

Por otra parte, es difícil hacer investigación en grupos de WhatsApp debido a su carácter privado, pero un estudio inicial da algunas luces al respecto en Bolivia.[45] Este estudio analizó 43 grupos creados para el Día de la Democracia de 2018 y constató que el 96% de ellos fueron creados por 3 usuarios y el 100% eran administrados por 4 usuarios, los mismos 3 que los habían creado y uno más. Es decir, no surgieron a partir de la iniciativa ciudadana, sino a partir de una misma coordinación supra-barrial. Esto también se evidenció por el hecho de que los grupos, en general, tenían un mismo patrón para la creación de nombres, pues la mayoría recurría a la siguiente fórmula: *Número de distrito + nombre del barrio + #21f*. Por ejemplo: *Distrito 1 Centro #21F*. Entonces, los grupos no fueron creados aleatoriamente, sino con un grado de sincronización y ordenación por un grupo pequeño de

45 León, Cristian y Eliana Quiroz (2019): *Estudio del uso de WhatsApp para la auto-organización vecinal y la desinformación en La Paz en el marco del 21F y el 10 de Octubre* (inédito).

personas. De hecho, una de las administradoras, que alegaba ser parte de una plataforma ciudadana, publicó un audio donde explicaba que un grupo de ciudadanos trabajaron con mapas de las ciudades para dividirlas y crear grupos de WhatsApp, de acuerdo a criterios territoriales.

Este mismo estudio menciona que en los grupos barriales se registró la participación de, al menos, 692 usuarios diferentes. No obstante, 9 de éstos usuarios concentraron más del 20% de toda la conversación, incentivando, además, la coordinación de acciones y la movilización ciudadana.

Por el interés en el uso político de estas redes sociales, el actual gobierno de transición ha denunciado la compra de un *software* ruso para hacer escucha a actores políticos y conversaciones en redes sociales. Se ha mencionado a Carlos Mesa y a Evo Morales.[46]

Desinformación y *fake news* en la crisis política

Los fenómenos de desinformación en Internet, como la posverdad y las *fake news*, crean confusión en el sentido de realidad con contenidos de datos falsos, basado en la emocionalidad. Su finalidad es generar tendencias y, en el caso del proceso electoral, influir en el voto. En las elecciones de 2019 se han creado varios portales web de desinformación que sirven de respaldo de contenidos. Estos portales son redirigidos en las redes sociales, desde cuentas que están haciendo campaña electoral.

En estos portales se pueden percatar noticias con titulares estridentes como "¿Ximena Valdivia sacrificada en lugar de Carlos de Mesa? ¡La novela continúa!", o "Crece la polémica contra Evo por presunto delito de estupro". En algunos casos estos portales son de reciente creación o ya han venido haciendo un trabajo de desinformación hace un par de años. A continuación, detallamos algunos ejemplos.

---

46 https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/18/ende-el-software-ruso-de-bs-39-mm-era-para-espiar-mesa-otros-247044.html

Cuadro 4. Ejemplos de portales web dedicados a la desinformación y a las *fake news*

Nombre	Fecha de registro	Nombre del servidor	Información registrante	País y cuidad de registro	Característica
laresistencia.info	2017-07-12	NS1.BH-51.WEBHOSTBOX.NET	No existe	La Paz - Bolivia	Oficialista
eju.tv	2010-06-18	whois.name.com	No existe	No existe el dato	Opositor
primeralinea.info	2019-03-25	NS1721.WEBEMPRESA.EU	No existe	La Paz - Bolivia	Oficialista
sharebolivia.com	2017-07-30	ns-1044.awsdns-02.org	Existe	Seattle - EE.UU.	Opositor

Fuente: Elaboración propia, 2019.

El resultado de los procesos de desinformación durante la crisis política ha sido principalmente la polarización política social, a decir de Ojeda (2020b), quien entiende la polarización rebalsando de su espacio político institucional para impregnar a la sociedad en su conjunto. La velocidad de creación de materiales que acompañaron a las dos narrativas polarizantes ha sido vertiginosa, así como la respuesta de difusión que se ha obtenido, lo que permite entender que no son expresiones espontáneas sino producto de la organización de grupos operando en estos espacios digitales.

Hay denuncias de granjas de *bots* y *trolls* que operaron desde ambos lados. Por un lado, los guerreros digitales –que se supone trabajaban en la Dirección de Redes Sociales del ministerio de Comunicación y otras dependencias de Estado en apoyo a acciones de difusión de logros de gestión del gobierno de Evo Morales y difusión de mensajes contra el actual gobierno de transición– y, por otro, una migración de usuarios de Facebook a Twitter con la intención de afectar tendencias en esa red social con el nombre de #GeneraciónPitita que estarían mezclados con *bots* defendiendo a la presidenta Áñez y el reciente informe de Facebook que menciona la cancelación

de cuentas falsas en su plataforma que estaban a nombre de la empresa CLS Strategies, contratada por el gobierno de transición para emitir mensajes en esa plataforma.

Además, dos estudios han denunciado el uso de *bots* para generar tendencias en contra del golpe de Estado y para incrementar seguidores a favor de un líder cívico central en esta historia. Hay un estudio de Julián Macías Tovar, responsable de redes sociales del partido político Podemos de España, que da elementos para pensar que se utilizaron *bots* para crear tendencias contrarias a la idea de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Otro estudio de Rodrigo Urquiola, bioinformático, investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina menciona que parece que se ha incrementado seguidores *bots* para la cuenta del líder cívico y hoy candidato presidencial, Luis Fernando Camacho.

Otro caso que quiere afectar opinión pública por medios informáticos ocurrió el 21 de noviembre, cuando varios usuarios de la empresa estatal Entel comentaron en sus redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace (bit.ly/llamadaevo 12) que, según se pudo comprobar más tarde, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra, el cual había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes.

La comunidad técnica de nombre Hackmeeting realizó pruebas y no encontraron *malware* malicioso ni virus adjunto a ese enlace. Sin embargo, es un caso de *spam* que afectó a líneas de la empresa estatal Entel, lo que implica que se usaron bases de datos de usuarios de la misma para la difusión de una pieza que refuerza la narrativa del gobierno. Si bien se puede alegar que es información de interés público, es innegable que se trata del envío masivo de un mensaje no solicitado. Según las estadísticas de Dropbox que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5 pm, al menos 80 mil personas habrían accedido al mismo.

Éstos son elementos que inauguran un debate en Bolivia en torno a la libertad de expresión en espacios digitales, el acallamiento de disidencias como producto de la vigilancia estatal en línea, la necesidad de la protección de datos personales, los procesos de desinformación y sus efectos sobre la democracia, y las medidas que se pueden tomar para contrarrestarlos desde la verificación de noticias pero también la educación para usuarios y usuarias junto a la regulación de las plataformas digitales donde suceden estas interacciones: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y otras, además de motores de búsqueda como Google, y finalmente, las soluciones tecnológicas como el uso de inteligencia artificial para detectar y borrar discursos de odio y noticias falsas.

Todos estos son debates abiertos, actualmente impulsados por diversos actores empresariales, de la sociedad civil y de distintos gobiernos en todo el mundo. Para una revisión de algunas de estas iniciativas en América Latina, se sugiere acudir a los textos de la Asociación por los Derechos Civiles (2019) e Intervozes y Observacom *et al*. (2020).

Bibliografía

Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Coding Rights; Fundación Karisma; Hiperderecho; IPANDETEC; Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); TEDIC (2019). "Desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe. Contribución regional de organizaciones de la sociedad civil ligadas a los Derechos Humanos en el entorno digital". En: https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/Consulta-publica-desinformacion-en-contextos-electorales_contribucion-regional-AlSur.pdf

Calisaya, Esteban; Eliana Quiroz (2012). Reporte de cuentas twitter de periodistas bolivianos. En: https://docs.google.com/document/d/1IuVh4_qLUtd1W3hmbembHoPfkk9CGfnIdg38ly_22Cc/edit?usp=sharing

Fundación InternetBolivia.org (2020). "Documento de denuncias de abusos y violaciones de Derechos Humanos a través del uso de tecnologías durante la crisis política en Bolivia", octubre-noviembre 2019.

León, Cristian y Eliana Quiroz (2019). "Estudio del uso de Whatsapp para la auto-organización vecinal y la desinformación en La Paz en el marco del 21F y el 10 de Octubre" (inédito). En: https://docs.google.com/document/d/1HM5uyMEkUcPD4TNce9KycwtZZt8kQ5T2QFTMHb5sgWc/edit?usp=sharing

Intervozes, Observacom *et al.* (2020). "Aportes para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet. Una perspectiva latinoamericana para lograr procesos de moderación de contenidos compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos". En: https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2019/08/Libertad-de-Expresio%CC%81n-y-Grandes-Plataformas-de-Internet-Aportes-para-una-regulacio%CC%81n-democra%CC%81tica.pdf

Ojeda, Álex (2020a). "Cámaras de eco y desinformación: Efectos amplificadores de las redes digitales en la polarización social de 2019". En: Mayorga, Fernando (coord.) (2020). *Crisis y cambio político en Bolivia. Octubre y noviembre de 2019: La democracia en encrucijada*. La Paz: CESU, OXFAM. En: https://www.researchgate.net/publication/342276306_Camaras_de_eco_y_desinformacion_Efectos_amplificadores_de_las_redes_digitales_en_la_polarizacion_social_de_2019

Ojeda, Álex (2020b). "Convergencia entre desinformación política y social en el conflicto electoral de 2019 en Bolivia". En: *Temas Sociales* 46 - mayo de 2020, pp. 98-126. En: https://www.researchgate.net/publication/342276629_Convergencia_entre_desinformacion_politica_y_social_en_el_conflicto_electoral_de_2019_en_Bolivia

Tactical Tech (2018). *WhatsApp: The Widespread Use of WhatsApp in Political Campaigning in the Global South*. En: https://ourdataourselves.tacticaltech.org/posts/whatsapp/

Tactical Tech (2019). *Personal Data, political persuasion. Inside the influence industry. How it works.* Disponible en: https://cdn.ttc.io/s/tacticaltech.org/methods_guidebook_A4_spread_web_Ed2.pdf

Anexo 1

Cuadro 1. Cuentas de actores y actoras políticos en Twitter, mayo 2020

Evo	Morales	@evoespueblo	1.000.000	29
Carlos	Mesa	@carlosdmesag	609.100	381
Jeanine	Áñez	@JeanineAnez	304.100	478
Luis Fernando	Camacho	@ LuisFerCamachoV	191.500	56
Tata	Quispe	@TataQuispe	128.500	3.867
Arturo	Murillo	@ArturoMurilloS	115.300	1.443
Óscar	Ortiz	@OscarOrtizA	112.700	1.799
Carlos	Sánchez Berzaín	@ Csanchezberzain	49.100	8.226
Luis	Arce	@LuchoXBolivia	18.400	27
Fernando	López	@Ferlopezjulio1	14.200	1.562
Eva	Copa	@EvaCopa_Bol	7.775	187
Leonardo	Loza	@ LeonardoLoza18	989	14

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Cuentas de ciudadanos y ciudadanas influyentes en política en Twitter, mayo 2020

Nombre	Apellido	Twitter	Followers	Following
Gabriela	Montaño	@gabrielaSCZ	38.100	179
Carlos Hugo	Molina	@eldelagora	21.000	3.148
Yerko	Garafulic	@YerkoGarafulic	14.900	458
Jhanisse	Vaca Daza	@JhanisseVDaza	14.300	2.606
Roberto	Laserna	@roblaser	10.200	2.470
Irene	Trepp	@LuciaIreneTrepp	10.200	5.300
Roxana	Lizárraga	@ roxAhoracRoxana	9.620	525
María	Galindo	@ mujerescreando1	8.526	114
Viejitio	Piola	@asaoyvino	7.016	112

Continúa en la siguiente página

Nombre	Apellido	Twitter	Followers	Following
Carlos	Cordero	@ccorderc	5.731	288
Ricardo	Paz Ballivián	@ricardopazb	5.385	20
Canela	Crespo	@canela_cs	4.201	4.717
Ricardo	Aguilar	@RicardoAglrA	3.580	1.501
Andrés	Llorenti	@ SoyUnCocodriloS	2.993	605

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Cuentas de medios y periodistas influyentes en opinión pública en Twitter, mayo 2020

El Deber		@grupoeldeber	614.500	58
La Razón		@LaRazon_Bolivia	548.900	244
UNITEL		@unitelbolivia	504.400	14
Página Siete		@pagina_siete	484.900	490
ERBOL		@ErbolDigital	383.400	248
Carlos	Valverde	@CFValverde	335.900	817
Los Tiempos		@LosTiemposBol	334.500	285
Jhon	Arandia	@JohnArandia	264.700	2.225
El País		@elpaisbo	76.000	763
Andrés	Gómez	@AndrsGomezV	61.400	1.338
Raúl	Peñaranda	@raulpenaranda1	33.200	340
Mery	Vaca	@meryvaca	27.600	1.220
Radio Kawsachun Coca		@KawsachunCoca	4.669	115
María Silvia	Trigo	@MariaSTrigo	3.744	624
Detrás de la Verdad		@DVerdadBolivia	2.798	1.441

Fuente: Elaboración propia.

Las y los autores

Fernando Mayorga

Sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Coordinador del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Sus últimas publicaciones son *Mandato y contingencia. El estilo de gobierno de Evo Morales* (Fundación Friedrich Ebert, 2019) y *Antología de la ciencia política boliviana* (Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2019, ant.).

Maria Teresa Zegada Claure

Socióloga con Maestría en Ciencia Política (CESU-UMSS), doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (U-ARCIS), Chile. Miembro del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS, en la Carrera de Comunicación de la UCB y en el Programa de Postgrado en la UPB. Ha publicado diversos libros y artículos sobre democracia, movimientos sociales y partidos políticos.

Yuri F. Tórrez

Sociólogo y comunicador. Magíster en Ciencias Políticas y doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Docente universitario. Fue responsable del Área Política y Jurídica del CESU y coordinador del Área de Investigación del

Centro Cuarto Intermedio. En 2014 publicó, en coautoría, *Construcción simbólica del Estado Plurinacional* (PIEB).

Jonas Wolff

Miembro de la Junta Directiva y director del Departamento de Investigación "Conflictos intraestatales" del Peace Research Institute Frankfurt (PRIF). Es docente en las universidades de Kassel y Frankfurt, y miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), en Bogotá. Sus investigaciones se centran en procesos de transformación política, movimientos sociales y las políticas internacionales de promoción de la democracia, con enfoque regional en América Latina.

Fernando Molina

Periodista y ensayista. Autor de varios libros sobre temas bolivianos, entre ellos *De la polarización a la hegemonía. Las relaciones entre los medios y Evo Morales* (Libros Nómadas, 2016). Ha escrito numerosos artículos en medios de su país y el exterior. Colaborador del periódico *El País* (Madrid).

Susana Bejarano

Politóloga. Magíster en Política Pública Aplicada. Candidata a Master en Relaciones Internacionales e Integración. Becaria del Graduate Institute Geneva. Directora de programas políticos en televisión. Consejera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2016-2019).

Gabriela Reyes Rodas

Estudió Criminología y Sociología en la Universidad de Maryland (EE.UU.) y tiene una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia (EE.UU.). Fue asesora de tres ministros de Gobierno en Bolivia (2010-2019). Fue directora general ejecutiva del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas y asesora

de despacho del Ministerio de Gobierno en gestión, reforma policial y narcotráfico. Desde 2005, trabajó para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Actualmente es consultora internacional en narcotráfico y gestión policial.

Gustavo Fernández Saavedra

Abogado. Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Director de la Junta del Acuerdo de Cartagena, del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Director de Proyecto y consultor de PNUD, UNCTAD, OEA, CEPAL, ILPES, BID, CAF. Exministro de las carteras de Integración, Relaciones Exteriores y Presidencia. Candidato a la Vicepresidencia de la República. Embajador de Bolivia ante el Gobierno del Brasil, cónsul general de Bolivia en Chile, jefe de Misiones de Observación Electoral de la OEA en Nicaragua y El Salvador. Director del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Autor de numerosas publicaciones y artículos.

Eduardo Paz Gonzales

Doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología por el Colegio de México. Magíster en Ciencias del Desarrollo y licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Ha publicado artículos académicos en libros y revistas científicas de Bolivia, Chile, México, Argentina y España y ha sido catedrático de posgrado en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la UMSA y en la Universidad Amazónica de Pando (UAP). Ha ejercido la docencia en la Carrera de Sociología de la UMSA. Estudia temas de formación del Estado, clases sociales y movilidad social.

Eliana Quiroz

Directora ejecutiva de la Fundación InternetBolivia.org. Máster en Gestión Pública por la Universidad de Potsdam (Alemania) y candidata a Doctora por el CIDES-UMSA. Coautora del estudio *Bolivia digital, 15 miradas acerca de Internet y Sociedad en Bolivia*. Ha sido jefa de Gobierno Electrónico de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y oficial de contrataciones abiertas de Hivos Bolivia.

Wilmer Machaca

Estudió Sociología en la UMSA e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Salesiana de Bolivia (USB). Fue miembro del Movimiento Indianista Katarista (Minka), activista de la Plaza de los Héroes (2000-2005) y dirigente universitario (2008-2012). Publicó artículos en distintas revistas y periódicos como *Andamios, Pukara* y *Bolivian Express*, entre otros. Es ciberactivista en temas indígenas, miembro de la Fundación InternetBolivia, del Foro de Autonomías y Poder Local de la UMSA y del grupo JICHHA.

Alejandro Salazar Rodríguez

Pintor y dibujante. Ha trabajado haciendo ilustraciones y cartón editorial para varios medios impresos. Se han publicado varios libros con dibujos de su autoría y recibió varios premios por su obra.

Esta edición se terminó de imprimir
en diciembre de 2020, en los talleres
de Plural editores,
La Paz, Bolivia.

Con la premisa de que el diálogo plural y la deliberación informada son principios fundamentales en y para la democracia, tenemos el gusto de publicar este libro colectivo, construido a once voces, como un insumo para situar y analizar en el presente a los actores estratégicos en Bolivia. Nuestra pretensión, en clave exploratoria, es trazar una suerte de "nuevo mapa", bajo el supuesto de que los principales actores se reconfiguraron, unos más que otros, en la coyuntura crítica del proceso político boliviano durante el último año en el país. Confiamos en que este libro será una fuente importante de consulta y de discusión. Esperamos, por ello, que contribuya a la conversación pública.

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

ISBN: 978-9917-30-007-6